COMISIÓN DE DERECHOS HUMANOS DE LA CIUDAD DE MÉXICO

RECOMENDACIÓN 02/2026

NATALI CARMONA HERNÁNDEZ

SOBRE LAS VIOLACIONES A LOS DERECHOS DE ACCESO A LA VERDAD, JUSTICIA, BÚSQUEDA INMEDIATA Y ENTREGA DIGNA DE UNA MUJER DESAPARECIDA Y A LA INTEGRIDAD PERSONAL DE SUS FAMILIARES

EXPEDIENTE: CDHDF/IV/122/IZTP/19/D7001

AUTORIDAD RESPONSABLE:
FISCALÍA GENERAL DE JUSTICIA DE LA CIUDAD DE MÉXICO

4

ÍNDICE DE DERECHOS HUMANOS VIOLADOS

1. **Derecho a la igualdad y no discriminación y derecho de las mujeres a una vida libre de violencia**

2. **Derecho de acceso a la verdad y a la justicia respecto al deber de investigación con debida diligencia y perspectiva de género**
   - Omisiones en el inicio y seguimiento de la investigación de la desaparición de **Natali Carmona Hernández (mujer víctima directa 1)**.
   - Omisiones en las labores de coordinación y colaboración interestatal entre la FGJ CDMX y la FGE Puebla.
   - Omisión de incorporar la debida diligencia reforzada y la perspectiva de género durante la investigación de la desaparición de **Natali Carmona Hernández (mujer víctima directa 1)**.
3. **Derecho de toda persona desaparecida a ser buscada**
   - Omisiones relacionadas con la búsqueda inmediata, estratégica y coordinada ante la denuncia de desaparición de **Natali Carmona Hernández (mujer víctima directa 1)**.
   - Omisiones en el procesamiento de la zona de hallazgo.
   - Omisiones en la gestión forense, identificación y entrega.

4. **Derecho a la integridad psicológica de familiares de las personas desaparecidas frente al trato institucional recibido, vinculado con el derecho a la memoria de las personas fallecidas**

Víctimas:

Nombre	Parentesco
Natali Carmona Hernández (NCH) Mujer víctima directa 1 de violaciones a sus derechos a la igualdad y no discriminación y derecho de las mujeres a una vida libre de violencia y al derecho de toda persona desaparecida a ser buscada.	N/A
Aidee Hernández Ávila Mujer víctima directa 2 de violaciones al derecho de acceso a la verdad y a la justicia y deber de investigación con debida diligencia y perspectiva de género, derecho a la búsqueda y derecho a la integridad psicológica de las y los familiares de las personas desaparecidas frente al trato institucional recibido, vinculado con el derecho a la memoria de las personas fallecidas.	Mamá de NCH
Aurelio Carmona Cruz Víctima directa 3 de violaciones al derecho de acceso a la verdad y a la justicia y deber de investigación con debida diligencia y perspectiva de género, derecho a la búsqueda y derecho a la integridad psicológica de las y los familiares de las personas desaparecidas frente al trato institucional recibido, vinculado con el derecho a la memoria de las personas fallecidas.	Papá de NCH
Nancy Carmona Hernández Mujer víctima indirecta 1, en atención a las afectaciones derivadas de las acciones y omisiones de las autoridades ministeriales en la búsqueda e investigación de la desaparición de Natali Carmona Hernández (mujer víctima directa 1).	Hermana de NCH
Miguel Ángel Carmona Hernández Víctima indirecta 2, en atención a las afectaciones derivadas de las acciones y omisiones de las autoridades ministeriales en la búsqueda e investigación de la desaparición de Natali Carmona Hernández (mujer víctima directa 1).	Hermano de NCH
Shared Sánchez Carmona Mujer víctima indirecta 3, en atención a las afectaciones derivadas de las acciones y omisiones de las autoridades ministeriales en la búsqueda e investigación de la desaparición de Natali Carmona Hernández (mujer víctima directa 1).	Hija de NCH
Joshua Sánchez Carmona Víctima indirecta 4, en atención a las afectaciones derivadas de las acciones y omisiones de las autoridades ministeriales en la búsqueda e investigación de la desaparición de Natali Carmona Hernández (mujer víctima directa 1).	Hijo de NCH

ÍNDICE

I. GLOSARIO 6
II. PROEMIO Y AUTORIDADES RESPONSABLES 9
III. COMPETENCIA DE LA COMISIÓN DE DERECHOS HUMANOS DE LA CIUDAD DE MÉXICO PARA LA INVESTIGACIÓN DE HECHOS 10
IV. PROCEDIMIENTO DE INVESTIGACIÓN 11
V. EVIDENCIAS 13
VI. CONTEXTO 14
VI.1 LA DESAPARICIÓN DE PERSONAS EN MÉXICO Y SU IMPACTO DIFERENCIADO EN LAS MUJERES 15
VI.2 LA DESAPARICIÓN DE MUJERES EN LA CIUDAD DE MÉXICO Y SU RELACIÓN CON OTRAS FORMAS DE VIOLENCIA DE GÉNERO 20
VI.3 EVOLUCIÓN DE LA RESPUESTA NORMATIVA E INSTITUCIONAL FRENTE A LA DESAPARICIÓN DE PERSONAS 27
VII. RELATORÍA DE HECHOS 32
VII.1 DENUNCIAS E INICIO DE CARPETA DE INVESTIGACIÓN POR LOS HECHOS: 34
VII.2 DILIGENCIAS DE BÚSQUEDA FORENSE IN SITU REALIZADAS EN TERRENO DE PUEBLA 43
VII.3 DILIGENCIAS DE IDENTIFICACIÓN FORENSE, NOTIFICACIÓN Y RESTITUCIÓN DE NATALI CARMONA HERNÁNDEZ (MUJER VÍCTIMA DIRECTA 1) 46
VIII. FUNDAMENTACIÓN Y MOTIVACIÓN DE LOS DERECHOS HUMANOS VIOLADOS 50
VIII.1. DERECHO A LA IGUALDAD Y NO DISCRIMINACIÓN Y DERECHO DE LAS MUJERES A UNA VIDA LIBRE DE VIOLENCIA 51
1.1 FUNDAMENTACIÓN 51
1.2 MOTIVACIÓN RESPECTO AL DERECHO A LA IGUALDAD Y NO DISCRIMINACIÓN Y DERECHO DE LAS MUJERES A UNA VIDA LIBRE DE VIOLENCIA 57
VIII.2. DERECHOS DE ACCESO A LA VERDAD Y A LA JUSTICIA RESPECTO AL DEBER DE INVESTIGAR CON DEBIDA DILIGENCIA Y PERSPECTIVA DE GÉNERO 60
2.1. FUNDAMENTACIÓN 60
2.1.1 OBLIGACIONES EN MATERIA DE INVESTIGACIÓN Y BÚSQUEDA INMEDIATA ANTE LA DESAPARICIÓN DE PERSONAS 67
2.1.2 OBLIGACIONES EN MATERIA DE COOPERACIÓN Y COLABORACIÓN ENTRE INSTITUCIONES DEL ESTADO 71
2.1.3 OBLIGACIONES EN MATERIA DE LA DEBIDA DILIGENCIA REFORZADA EN LA CONDUCCIÓN DE LA INVESTIGACIÓN DE DESAPARICIÓN DE MUJERES 74
2.2 MOTIVACIÓN RESPECTO A LOS DERECHOS DE ACCESO A LA VERDAD Y A LA JUSTICIA Y DEBER DE INVESTIGACIÓN CON DEBIDA DILIGENCIA Y PERSPECTIVA DE GÉNERO 76

2.2.1. Omisiones en el inicio y seguimiento de la investigación de la desaparición de Natali Carmona Hernández (mujer víctima directa 1) 76

2.2.2. Omisiones en las labores de coordinación y colaboración interestatal entre la FGJ CDMX y la FGE Puebla 85

2.2.3. Omisión de incorporar la debida diligencia reforzada y la perspectiva de género durante la investigación de la desaparición de Natali Carmona Hernández (mujer víctima directa 1) 93

VIII.3. Derecho de toda persona desaparecida a ser buscada 97

3.1 Fundamentación 97

3.2 Motivación respecto al Derecho de toda persona desaparecida a ser buscada 109

3.2.1. Omisiones relacionadas con la búsqueda inmediata, estratégica y coordinada ante la denuncia de desaparición de Natali Carmona Hernández (mujer víctima directa 1) 109

3.2.2. Omisiones en el procesamiento de la zona de hallazgo 113

3.2.3. Omisiones en la gestión forense, identificación y entrega 115

VIII.4 El derecho a la integridad psicológica de los familiares de las personas desaparecidas frente al trato institucional recibido, vinculado con el derecho a la memoria de las personas fallecidas 120

4.1 Fundamentación 120

1.2 Motivación respecto al derecho a la integridad psicológica de las y los familiares y a la memoria de las personas fallecidas 127

IX. Posicionamiento de la Comisión sobre la violación de derechos humanos 133

X. Estándares sobre la reparación integral del daño 138

X.1 Fundamento jurídico sobre la obligación de reparar a las víctimas de violaciones a derechos humanos 138

X.2 Competencia para la emisión del Plan de Reparación Integral 140

X.3 Determinación de los Planes de Reparación Integral 141

XI. Recomendación 143

I. GLOSARIO

Búsqueda con enfoque diferencial:[1] Acciones de localización que utilizan la metodología que permite identificar situaciones particulares de vulnerabilidad y adaptar procedimientos, experiencias y conocimientos especiales que satisfagan sus necesidades particulares tomando en cuenta la existencia de grupos de población con características particulares o con mayor situación de vulnerabilidad en razón de su origen étnico o nacional, idioma o lengua, religión, edad, género, preferencia u orientación sexual, identidad de género, condición de discapacidad, condición social, económica, histórica y cultural, así como otras circunstancias diferenciadoras y que requieran de una atención especializada.

Desaparición cometida por particulares:[2] Consiste en la privación de la libertad de una persona, cometida por un particular con la finalidad de ocultar a la víctima o su suerte o paradero.

Grupos de atención prioritaria:[3] Personas que debido a la desigualdad estructural enfrentan discriminación, exclusión, maltrato, abuso, violencia y mayores obstáculos para el pleno ejercicio de sus derechos y libertades fundamentales.

Grupo Operativo:[4] Fuerzas operativas conformadas por Agentes del Ministerio Público o de la Policía de Investigación, las Coordinaciones territoriales de las Fiscalías Desconcentradas competentes, el Jefe de Sector o Subsecretario de Operación Policial de la Secretaría de Seguridad Pública que corresponda, así como el C5 y la Unidad Administrativa encargada de monitorear las distintas frecuencias operativas de radio, así como coordinar la atención inmediata de las emergencias y recopilar la información que se genere como resultado de la operación policial, en términos del presente Protocolo.

Identificación humana:[5] Conjunto de técnicas complementarias que permiten establecer la identidad de una persona, o afirmar con un alto grado de certeza que un

---

[1] Comité contra la Desaparición Forzada de las Naciones Unidas, *Principios rectores para la búsqueda de personas desaparecidas*, Doc. ONU CED/C/7 (8 de mayo de 2019), principio 2.1; Ley General en Materia de Desaparición Forzada de Personas, Desaparición Cometida por Particulares y del Sistema Nacional de Búsqueda de Personas, publicada en el *Diario Oficial de la Federación* el 17 de noviembre de 2017; última reforma publicada el 16 de julio de 2025, artículo 5, fracción III.

[2] Ley General en Materia de Desaparición Forzada de Personas, Desaparición Cometida por Particulares y del Sistema Nacional de Búsqueda de Personas, artículo 34.

[3] Constitución Política de la Ciudad de México, publicada en la *Gaceta Oficial de la Ciudad de México* el 5 de febrero de 2017, artículo 11.

[4] Acuerdo por el que se emite el Protocolo Alba para la Ciudad de México, publicado en la *Gaceta Oficial de la Ciudad de México* el 16 de noviembre de 2018.

[5] Protocolo Homologado para la Búsqueda de Personas Desaparecidas y No Localizadas, aprobado mediante Acuerdo SNBP/002/2020 del Sistema Nacional de Búsqueda de Personas, publicado en el *Diario Oficial de la Federación* el 6 de octubre de 2020, numeral 77.

cuerpo o resto humano perteneció a un individuo determinado. Incluyen procedimientos forenses especializados propios de la medicina legal, dactiloscopia, genética, odontología, arqueología y antropología física, pero también el reconocimiento facial y de señas particulares, la investigación documental, el cotejo de registros ante mortem y post mortem, la exhibición de documentos de identidad, el análisis de contextos de hallazgo de restos humanos, etc.

Impunidad:[6] La inexistencia, de hecho, o de derecho, de responsabilidad penal por parte de los autores de violaciones, así como de responsabilidad civil, administrativa o disciplinaria, porque escapan a toda investigación con miras a su inculpación, detención, procesamiento y, en caso de ser reconocidos culpables, condena a penas apropiadas, incluso a la indemnización del daño causado a sus víctimas. De acuerdo con el primer principio, la impunidad constituye una infracción de las obligaciones que tienen los Estados de investigar las violaciones, adoptar medidas apropiadas respecto de sus autores, especialmente en la esfera de la justicia, para que las personas sospechosas de responsabilidad penal sean procesadas, juzgadas y condenadas a penas apropiadas, de garantizar a las víctimas recursos eficaces y la reparación de los perjuicios sufridos de garantizar el derecho inalienable a conocer la verdad y de tomar todas las medidas necesarias para evitar la repetición de dichas violaciones.

Incorporación de una perspectiva de género:[7] Proceso de valoración de las implicaciones y desigualdades que enfrentan las mujeres, para asegurar que las preocupaciones y experiencias que atraviesan las mujeres y personas de la comunidad LGBTTTIQA+ sean parte integrante en la toma de decisiones y acciones en todas las esferas políticas, económicas y sociales; así como que se tomen acciones para erradicar la violencia, eliminar cualquier estereotipo basado en el género, y que no se perpetúe la desigualdad.



---

[6] Consejo Económico y Social de las Naciones Unidas, Comisión de Derechos Humanos, *Informe de Diane Orentlicher, experta independiente encargada de actualizar el conjunto de principios para la lucha contra la impunidad. Adición: Conjunto de principios actualizado para la protección y la promoción de los derechos humanos mediante la lucha contra la impunidad*, Doc. ONU E/CN.4/2005/102/Add.1, pp. 6–7 (8 de febrero de 2005).

[7] Consejo Económico y Social de las Naciones Unidas, *Coordinación de las políticas y actividades de los organismos especializados y otros órganos del sistema de las Naciones Unidas. Incorporación de la perspectiva de género en todas las políticas y programas del sistema de las Naciones Unidas*, Conclusiones convenidas 1997/2, *Informe del Consejo Económico y Social correspondiente al año 1997*, Doc. ONU A/52/3 (18 de septiembre de 1997); Comisión de la Condición Jurídica y Social de la Mujer, *Incorporación de una perspectiva de género en todas las políticas y programas del sistema de las Naciones Unidas*, Resolución 47/2, en *Informe sobre el 47º período de sesiones*, Doc. ONU E/2003/27-E/CN.6/2003/12, cap. I, secc. D, resolución 47/2 (2003); Suprema Corte de Justicia de la Nación, *Manual para juzgar con perspectiva de género en materia penal*, México, SCJN, 2021.

Persona desaparecida:[8] Persona cuyo paradero se desconoce y se presuma, a partir de cualquier indicio, que su ausencia se relaciona con la comisión de un delito en su contra.

Persona no localizada:[9] Persona cuya ubicación es desconocida y que de acuerdo con la información que se reporte a la autoridad, su ausencia no se relaciona con la probable comisión de algún delito.

Restitución digna[10]**:** La entrega de los cuerpos o restos mortales de personas desaparecidas a las y los familiares debe realizarse en condiciones dignas, de conformidad con las normas y costumbres culturales de las víctimas, respetando siempre que se trata de restos mortales de una persona y no de objetos. La restitución debe proveer también los medios y los procedimientos necesarios para una sepultura digna en consonancia con los deseos y las costumbres culturales de las familias y sus comunidades.

Restos óseos:[11] Elementos óseos que quedan de un cuerpo después de que este haya perdido todos los tejidos blandos como consecuencia de la descomposición.

[8] Ley General en Materia de Desaparición Forzada de Personas, Desaparición Cometida por Particulares y del Sistema Nacional de Búsqueda de Personas, artículo 4, fracción XVI.
[9] *Ibidem,* art. 4, fr. XVII
[10] Principios rectores para la búsqueda de personas desaparecidas, principio 2, párrafo 4.
[11] Oficina del Alto Comisionado de Naciones Unidas para los Derechos Humanos. Protocolo de Minnesota sobre la Investigación de Muertes Potencialmente Ilícitas. Nueva York, Ginebra, 2017, p. 59.

II. PROEMIO Y AUTORIDADES RESPONSABLES

En la Ciudad de México, a los **26 días del mes de octubre de 2026**, una vez concluida la investigación de los hechos que motivaron el expediente de queja citado al rubro, la Primera Visitaduría General de la Comisión de Derechos Humanos de la Ciudad de México, elaboró el proyecto de Recomendación que fue aprobado por la suscrita, con fundamento en los artículos 1 y 102, apartado B, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos (CPEUM o Constitución); 4, 46 apartado A y 48 de la Constitución Política de la Ciudad de México (CPCM); 3, 4, 5 fracciones II, III y IV, 12 fracción VIII, 64 fracción III, 66, 68, 69, 73 de la Ley Orgánica de la Comisión de Derechos Humanos de la Ciudad de México, 70, 113, 115, 120 fracción III, del 124 al 129 del Reglamento Interno de la Comisión de Derechos Humanos de la Ciudad de México, consolidándose mediante el presente instrumento, la **Recomendación 02/2026** que se dirige a las siguiente autoridad:[12]

Fiscalía General de Justicia de la Ciudad de México, Maestra Bertha María Alcalde Luján, con fundamento en los artículos 21 párrafo noveno y 122, apartado B, párrafo quinto de la CPEUM; 6 apartado H, y 44 apartados A y B, 46 apartado A inciso C de la Constitución Política de la Ciudad de México; 1, 2 y 7 fracción III, de la Ley Orgánica de la Procuraduría General de Justicia del Distrito Federal; 1 del Reglamento de la Ley Orgánica de la Procuraduría General de Justicia del Distrito Federal; y 1, 4,7 y 36 de la Ley Orgánica de la Fiscalía General de Justicia de la Ciudad de México.

Confidencialidad de datos personales de las personas víctimas y peticionarias

De conformidad con los artículos 6°, apartado A, fracción II, y 16, párrafo segundo, de la CPEUM; artículo 7°, inciso E de la CPCM; 2, 3 fracciones VIII, IX, X, XXV, XXVII y XXXI, 6 y 7 de la Ley General de Protección de Datos Personales en Posesión de Sujetos Obligados; 64, 115 y 119 de la Ley General de Transparencia y Acceso a la Información Pública; 42 de la Ley Constitucional de Derechos Humanos y sus Garantías de la Ciudad de México; 33 y 73 de la Ley Orgánica de la Comisión de Derechos Humanos de la Ciudad de México; 3, fracciones IX, X y XXXVII, 9 fracciones II y IV y 10 de la Ley de Protección de Datos Personales en Posesión de Sujetos Obligados de la Ciudad de México; 3, 22, fracción VIII, 24, 118, fracción V, 128, fracción I y 133 de la Ley de

[12] De conformidad en el artículo décimo cuarto transitorio, del decreto por el que se declaran reformadas y derogadas diversas disposiciones de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en materia de la reforma política de la Ciudad de México, publicado en el Diario Oficial de la Federación el 29 de enero de 2016; así como el acuerdo tercero del Acuerdo por el que se instruye a las unidades administrativas que integran la administración pública de la Ciudad de México a implementar las acciones necesarias para incorporar en la documentación oficial la denominación "Ciudad de México", en lugar de distrito federal, publicado en la Gaceta Oficial de la Ciudad de México el 2 de febrero de 2016, todas las referencias que en este instrumento recomendatorio se hagan al Distrito Federal, deberán entenderse hechas a la Ciudad de México, atendiendo a la temporalidad de los hechos motivo de la presente Recomendación.

Transparencia para el Acceso y Socialización de la Información de la Ciudad de México; y 126 fracción I del Reglamento Interno de la Comisión de Derechos Humanos de la Ciudad de México, en la presente Recomendación se informó a las personas **víctimas directas e indirectas** que sus datos se publicarán en términos de que manifestaron su deseo de que se hiciera público sus nombres.

III. COMPETENCIA DE LA COMISIÓN DE DERECHOS HUMANOS DE LA CIUDAD DE MÉXICO PARA LA INVESTIGACIÓN DE HECHOS

1. Los mecanismos ombudsperson como esta Comisión, al investigar y resolver quejas, actúan como garantías cuasi-jurisdiccionales de los derechos humanos. Su competencia está determinada en el artículo 102, apartado B, de la CPEUM, y a nivel local, en los artículos 46 y 48 de la CPCM, donde se establece la facultad de esta Comisión en la protección, promoción y garantía de los derechos humanos que ampara el orden jurídico mexicano, esta Constitución y las leyes relativas. Así, este organismo público forma parte del conjunto institucional de promoción y protección de los derechos humanos que el Estado mexicano está obligado a brindar a las personas que viven y transitan la Ciudad de México.

2. Con fundamento en el apartado B del artículo 102 de la CPEUM; 3, 4, 6, 11, 46 y 48 de la CPCM, así como los artículos 3, 5 fracciones II, III y IV de la Ley Orgánica de la Comisión de Derechos Humanos de la Ciudad de México,[13] y 28 del Reglamento Interno de la Comisión de Derechos Humanos de la Ciudad de México y de la resolución A/RES/48/134, de 20 de diciembre de 1993, de los denominados Principios de París,[14] este Organismo tiene competencia para emitir la presente recomendación bajo los siguientes supuestos:

3. En razón de la materia *–ratione materia–*, al tenerse acreditado que los hechos investigados constituyen violaciones a los derechos humanos a la igualdad y no discriminación y derecho de las mujeres a una vida libre de violencia, derecho al acceso a la verdad y justicia, al derecho de toda persona a ser buscada y derecho a la integridad personal y la memoria de las personas fallecidas, reconocidos en la Constitución Política de la Ciudad de México, la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y los tratados internacionales en los que el Estado Mexicano es parte.

---

[13] Normativa aplicable durante la tramitación del expediente CDHDF/IV/122/IZTP/19/D7001.

[14] Asamblea General de las Naciones Unidas, *Principios relativos al estatuto y funcionamiento de las instituciones nacionales de protección y promoción de los derechos humanos (Principios de París)*, Resolución 48/134, Doc. ONU A/RES/48/134, anexo, apartado A, párr. 3 b) (20 de diciembre de 1993), que establece entre las atribuciones de las instituciones nacionales de derechos humanos la promoción y protección de los derechos humanos.

4. En razón de la persona *–ratione personae–*, ya que los hechos violatorios se atribuyen a autoridades públicas de la Ciudad de México y personas servidoras públicas de la Ciudad de México adscritas a la Fiscalía General de Justicia de la Ciudad de México.

5. En razón del lugar *–ratione loci–*, toda vez que los hechos respecto de los que se emite pronunciamiento ocurrieron en el territorio de la Ciudad de México. Al respecto, la normativa aplicable a la CDHCM establece que este organismo es competente para conocer de posibles violaciones a derechos humanos cuando personas servidoras públicas de la Ciudad de México incurran en actos u omisiones que puedan constituir tales violaciones, aun cuando éstos tengan lugar fuera de la Ciudad de México, siempre que ocurran dentro del territorio nacional.[15]

6. En razón del tiempo *–ratione temporis–*, en virtud de que los hechos materia de la queja se remontan a enero de 2019 y, dada su naturaleza, algunos se sucedieron de forma continuada, por lo que se encuentran comprendidos en el ámbito de competencia temporal de esta Comisión, al haber ocurrido con posterioridad a la entrada en vigor de la Ley de la Comisión de Derechos Humanos del Distrito Federal en 1993.[16]. La queja fue presentada en septiembre de 2019, dentro del plazo señalado en los artículos 53 de la Ley Orgánica de la CDHCM y 99 de su Reglamento Interno, por lo que la investigación se inició conforme a derecho, sin que hubiera operado la caducidad, y concluye con la emisión de la presente Recomendación 02/2026. Las afectaciones derivadas de algunas de las violaciones a derechos humanos acreditadas continúan a la fecha.

IV. PROCEDIMIENTO DE INVESTIGACIÓN

7. Una vez que la Comisión calificó los hechos materia de esta Recomendación como presuntas violaciones a derechos humanos, se realizaron diversas acciones con el fin de investigar las circunstancias de contexto, tiempo, modo y lugar en las que ocurrieron tales hechos, así como la determinación de posibles omisiones, irregularidades o acciones que vulneraron los derechos humanos señalados en el índice de derechos humanos violados del presente documento en contra de tres víctimas directas y cuatro víctimas indirectas.

8. La tramitación del expediente de queja inició en la Cuarta Visitaduría General y, posteriormente, fue reasignado a la Primera Visitaduría General, donde se dio

[15] Reglamento Interno de la Comisión de Derechos Humanos de la Ciudad de México, publicado en la *Gaceta Oficial de la Ciudad de México* el 23 de octubre de 2019, artículo 100, fracción III.
[16] Ley de la Comisión de Derechos Humanos del Distrito Federal, publicada en el *Diario Oficial de la Federación* el 22 de junio de 1993.

continuidad a las acciones de investigación y al análisis de las evidencias recabadas, hasta su determinación, mediante la emisión del presente instrumento recomendatorio.

9. Para la documentación del citado expediente de queja, personal adscrito a esta Comisión de Derechos Humanos de la Ciudad de México llevó a cabo, entre otras acciones, **51 actuaciones** que constan dentro del expediente de queja iniciado a petición de **Aidee Hernández Ávila (mujer víctima directa 2)**, en el año 2019.

10. A lo largo de la investigación se mantuvo contacto constante con las víctimas directas, **Aidee Hernández Ávila (mujer víctima directa 2)** y **Aurelio Carmona Cruz (víctima directa 3),** madre y padre de **Natali Carmona Hernández (mujer víctima directa 1)**, a través de comunicación telefónica, por correo electrónico y presencial; asimismo, en distintas ocasiones se les dio vista de la información recabada durante la investigación y se les brindó la orientación jurídica correspondiente.

11. De igual modo, se formuló una solicitud de medidas precautorias a la Dirección General de Derechos Humanos de la Fiscalía General de Justicia de la Ciudad de México y seis solicitudes de información y colaboración; cinco solicitudes de información y de colaboración a la Comisión de Búsqueda de Personas de la Ciudad de México; tres solicitudes de colaboración a la Comisión Nacional de Búsqueda de Personas; una solicitud de colaboración a la Comisión de Víctimas de la Ciudad de México; una solicitud de colaboración a la Comisión de Derechos Humanos del Estado de Puebla; cuatro solicitudes de colaboración a la Fiscalía Especial en Investigación de los Delitos de Desaparición Forzada de la Fiscalía General de la República, y tres búsquedas de información en fuentes de información abierta.

12. En particular, se consultó la totalidad de la carpeta de investigación relacionada con la desaparición de **Natali Carmona Hernández (mujer víctima directa 1)**, iniciada en la FGJ CDMX, constante de cinco tomos y cuatro anexos en total,[17] así como el expediente del Consejo de Asuntos Internos de la FGJ CDMX correspondiente a un procedimiento disciplinario iniciado contra las personas servidoras públicas que tuvieron intervención en la indagatoria referida. Lo anterior con el objeto de verificar la actuación de las autoridades encargadas de garantizar el ejercicio de derechos de las víctimas durante el esclarecimiento de hechos y la localización de **Natali**

[17] El expediente consultado por esta Primera Visitaduría General estaba integrado de la siguiente manera: tomo I, que comprende la foja 01 a la 1093; tomo II, que comprende de la foja 01 a la 939; tomo III, que comprende de la foja 01 a la 806; tomo IV, que comprende de la foja 01 a la 681, y tomo V que comprende de la foja 01 a la 400, así como cuatro anexos.

Carmona Hernández (mujer víctima directa 1), así como de individualizar a las personas servidoras públicas que intervinieron en dichas acciones.

13. Asimismo, se dio vista a la Visitaduría Ministerial de la Fiscalía General de Justicia de la Ciudad de México; se revisaron las videograbaciones proporcionadas por la persona peticionaria; se solicitó a la Dirección de Atención Psicosocial de esta institución la realización de una nota psicosocial, y se consultaron las carpetas de investigación relacionadas con los hechos materia del expediente de queja y los expedientes radicados en la Unidad de Asuntos Internos de la Fiscalía General de Justicia y en la Comisión de Búsqueda de Personas, ambas de la Ciudad de México, relacionadas con el presente asunto.

14. Se solicitó información en vía de colaboración a la Comisión de Búsqueda de Personas de la Ciudad de México (teniendo acceso al expediente relacionado con la desaparición de **Natali Carmona Hernández, mujer víctima directa 1**)[18], la Comisión Ejecutiva de Atención a Víctimas de la Ciudad de México, la Comisión Nacional de Búsqueda, las cuales brindaron los informes respectivos, así como a la Fiscalía General de la República.

15. Finalmente, de la investigación realizada con motivo del expediente de queja que conforma el presente instrumento, esta Comisión acreditó que las víctimas directas son: **Natali Carmona Hernández (mujer víctima directa 1), Aidee Hernández Ávila (mujer víctima directa 2), Aurelio Carmona Cruz (víctima directa 3)** y las víctimas indirectas son **Nancy Carmona Hernández (mujer víctima indirecta 1), Miguel Ángel Carmona Hernández (víctima indirecta 2), Shared Sánchez Carmona (mujer víctima indirecta 3) y Joshua Sánchez Carmona (víctima indirecta 4).**

V. Evidencias

16. Durante el proceso de investigación, la Comisión recabó las evidencias que dan sustento a la presente Recomendación y que se encuentran detalladas en el **Anexo** que forma parte integrante de esta, constante de **122** evidencias relevantes para constatar las violaciones a derechos humanos, acreditadas en el presente instrumento recomendatorio.

17. De acuerdo con la Ley Orgánica y el Reglamento Interno de este Organismo, los elementos y pruebas que devienen de la investigación y que integran el Anexo correspondiente se valoraron en conjunto de conformidad con la lógica, legalidad,

[18] Constante de 902 hojas no foliadas en donde se constató información registrada desde el 28 de enero de 2019 hasta el 01 de septiembre de 2022.

la experiencia y la sana crítica con la finalidad de producir convicción respecto de los hechos reclamados como constitutivos de violaciones a derechos humanos[19] en perjuicio de las víctimas directas e indirectas de la presente Recomendación.

VI. Contexto

18. Las violaciones a derechos humanos acreditadas en el presente instrumento recomendatorio ocurrieron, entre 2019 y 2022, en la Ciudad de México, aunque algunas actuaciones de las autoridades de la ciudad se desarrollaron en el estado de Puebla, en un contexto relevante para comprender las circunstancias en que se produjeron y la actuación de las autoridades involucradas. Para su análisis, se recurre al contexto como herramienta analítica[20] que permite valorar uno o varios hechos, independientemente de sus características, a partir de las condiciones más amplias en que se producen,[21] así como identificar los factores y relaciones que indicen en su desarrollo.

19. Precisamente, el análisis de contexto permite considerar una multiplicidad de *"factores significativos"*, que se ubican alrededor de un "evento focal" y que permiten su comprensión de una manera más amplia, de acuerdo con las condiciones sociales, políticas, económicas y jurídicas en las cuales se manifestó.[22] De manera más concreta, el análisis de contexto nos permite identificar los efectos diferenciadores en las violaciones analizadas,[23] además que, en los casos de desapariciones de mujeres como el presente, constituye un eje fundamental para la búsqueda de personas.[24]

20. Los organismos públicos de protección de derechos humanos tienen la obligación de brindar atención a casos particulares a través de estudios que permitan entender

---

[19] Ley Orgánica de la Comisión de Derechos Humanos de la Ciudad de México, publicada en la Gaceta Oficial de la Ciudad de México el 12 de julio de 2019, artículos 62 y 63; Reglamento Interno de la Comisión de Derechos Humanos de la Ciudad de México, publicado en la *Gaceta Oficial de la Ciudad de México* el 23 de octubre de 2019, artículos 105 y 108.

[20] Sandra Serrano (coord.), *Situar, vincular y enmarcar. Breviario de herramientas de análisis de contexto para la búsqueda de personas desaparecidas y la investigación de desapariciones*, México, DragonLab, S. C./Observatorio sobre Desaparición e Impunidad en México (ODIM), 2021.

[21] Verónica Hinestroza y Sandra Serrano (coords.), *Violaciones, derechos humanos y contexto: herramientas propuestas para documentar e investigar*, México, Facultad Latinoamericana de Ciencias Sociales, sede México, 2017, p. 33.

[22] *Ibidem*, p. 37.

[23] Suprema Corte de Justicia de la Nación, *Protocolo para juzgar casos de desaparición de personas*, México, SCJN, 2025; Suprema Corte de Justicia de la Nación, *Protocolo para juzgar con perspectiva de género*, México, SCJN, 2020; *"PERSPECTIVA DE INTERSECCIONALIDAD. LOS ÓRGANOS JURISDICCIONALES DEBEN APLICARLA EN LOS CASOS DONDE CONVERGEN DISTINTAS CATEGORÍAS QUE COLOCAN A UNA PERSONA EN SITUACIÓN DE VULNERABILIDAD, EJERCIENDO DE OFICIO SUS FACULTADES PROBATORIAS,"* Tribunales Colegiados de Circuito en Tesis aislada, Tesis: I.24o.A.34 A (11a.), Gaceta del *Semanario Judicial de la Federación*, libro 7, marzo de 2026, Tomo III, Volumen 1, página 1023. Reg. Digital: 2031929.

[24] Principios rectores para la búsqueda de personas desaparecidas, principio 8, párrafo 6.

las dinámicas estructurales que les rodean, identificar patrones, conductas u omisiones que generen impactos diferenciados en perjuicio de grupos en situación de vulnerabilidad y, como consecuencia, ordenar la reparación integral a favor de las víctimas en particular y solicitar la generación de garantías de no repetición en aras de prevenir nuevas violaciones a derechos humanos a futuro.[25]

21. De este modo, en esta sección se presenta el contexto de la desaparición de personas en México, con especial atención a la desaparición de mujeres y su relación con otras formas de violencia de género; las particularidades que este fenómeno presenta en la Ciudad de México; y la evolución de la respuesta normativa e institucional frente a la desaparición de personas. Este marco permitirá situar el caso de **Natali Carmona Hernández (mujer víctima directa 1)** y comprender las circunstancias sociales, normativas e institucionales en las que se inscribe y, posteriormente, identificar y analizar, a partir de los hechos investigados, los elementos y dinámicas institucionales relevantes para comprender las violaciones a derechos humanos acreditadas en el presente instrumento recomendatorio.

VI.1 La desaparición de personas en México y su impacto diferenciado en las mujeres

22. La desaparición de personas en México constituye una problemática persistente, de alcance nacional y con profundas implicaciones estructurales. Durante las últimas décadas, la acumulación sostenida de casos, la persistencia de altos niveles de impunidad y las dificultades para garantizar búsquedas e investigaciones efectivas han configurado una problemática de alcance nacional. Su permanencia en el tiempo ha sido documentada de manera reiterada por mecanismos internacionales y nacionales de protección de derechos humanos, organizaciones de la sociedad civil, víctimas y colectivos de víctimas, que desde hace más de una década han advertido sobre la magnitud de la situación de las desapariciones en México y las deficiencias estructurales para enfrentarlas.

23. Desde el año 2011, tras su visita a México, el Grupo de Trabajo sobre las Desapariciones Forzadas o Involuntarias de Naciones Unidas advirtió sobre el incremento de las desapariciones en distintas regiones del país, en un contexto de violencia vinculada con el crimen organizado, y documentó diversos obstáculos en materia de prevención, búsqueda e investigación. Entre ellos, señaló la ausencia de una política integral de búsqueda y de mecanismos adecuados de coordinación e intercambio de información entre autoridades; retrasos, omisiones y falta de

[25] Comisión de Derechos Humanos de la Ciudad de México, *Papel de los organismos públicos de derechos humanos (OPDH) en la aplicación del Protocolo Homologado para la Búsqueda de Personas Desaparecidas y No Localizadas. Guía técnica*, México, CDHCM, 2024.

debida diligencia en las investigaciones; así como casos en los que las familias, ante la falta de actuación de las autoridades, asumían por cuenta propia tareas de búsqueda y aportación de elementos para las investigaciones. El Grupo de Trabajo también advirtió que la impunidad constituía un patrón crónico y presente en los casos de desaparición y que, frente a la magnitud del problema, resultaba necesario adoptar una política integral que comprendiera la prevención, búsqueda, investigación, sanción y reparación.[26]

24. Ocho años después, en 2019, el Comité contra la Desaparición Forzada (CED) advirtió que se mantenía una situación de desapariciones generalizadas en gran parte del territorio nacional, en la que persistían la impunidad y la revictimización. Entre los principales problemas identificados señaló la falta de datos confiables sobre las desapariciones forzadas, el escaso número de condenas, el alto número de cuerpos sin identificar y de fosas clandestinas sin atención adecuada, así como obstáculos para la participación efectiva de las víctimas en los mecanismos institucionales de búsqueda e investigación y para el acceso a la verdad, la justicia y la reparación integral.[27]

25. En mayo de 2022, el CED publicó el informe relativo a la visita que realizó a México en noviembre de 2021.[28] A partir de la información recabada, el Comité reiteró que persistía una situación generalizada de desapariciones en gran parte del territorio nacional, frente a la cual imperaban una impunidad casi absoluta y la revictimización. El diagnóstico mostró también la dimensión de la crisis forense, con más de 52,000 personas fallecidas sin identificar, y la limitada judicialización de los casos: de acuerdo con la información proporcionada por el Estado, al 26 de noviembre de 2021 únicamente entre el 2 % y el 6 % de los casos de desaparición habían sido judicializados y se habían emitido 36 sentencias a nivel nacional.[29] El Comité identificó, además, una *"inversión de responsabilidades"*, derivada de prácticas mediante las cuales las familias se veían obligadas a asumir tareas de búsqueda e investigación que correspondían a las autoridades, exponiéndose incluso a riesgos para realizar dichas labores.[30]

---

[26] Consejo de Derechos Humanos de las Naciones Unidas, Grupo de Trabajo sobre las Desapariciones Forzadas o Involuntarias, *Informe del Grupo de Trabajo sobre las Desapariciones Forzadas o Involuntarias. Adición. Misión a México*, Doc. ONU A/HRC/19/58/Add.2, párrs. 7, 9, 12, 32–40, 45–53, 73–84 y 95–107 (20 de diciembre de 2011).

[27] Comité contra la Desaparición Forzada de las Naciones Unidas, *Observaciones finales sobre la información complementaria presentada por México con arreglo al artículo 29, párrafo 4, de la Convención*, Doc. ONU CED/C/MEX/OAI/1, párr. 3 (6 de septiembre de 2019).

[28] Comité contra la Desaparición Forzada de las Naciones Unidas, *Informe del Comité contra la Desaparición Forzada sobre su visita a México en virtud del artículo 33 de la Convención. Información sobre la visita y hallazgos*, Doc. ONU CED/C/MEX/VR/1, párrs. 1–4 (18 de mayo de 2022).

[29] *Ibidem*, párrs. 24-29 y 32 y 35.

[30] Comité contra la Desaparición Forzada de las Naciones Unidas, *Informe del Comité contra la Desaparición Forzada sobre su visita a México en virtud del artículo 33 de la Convención. Información sobre la visita y hallazgos*, *op. cit.*, párrs. 51-56.

26. Para septiembre de 2021 se encontraban registradas 91,534 personas desaparecidas, de las cuales 22,591 eran mujeres, adolescentes y niñas.[31] La desaparición de mujeres requiere un análisis que considere además de su dimensión cuantitativa, las condiciones particulares y los contextos en los que ocurre. Su incidencia y sus características varían según el momento y el territorio, pues las dinámicas de las desapariciones, las personas responsables, las víctimas y sus causas no son homogéneas en el país. En algunas zonas, la desaparición de mujeres es menos visible, mientras que en otras ellas constituyen las principales víctimas, por lo que su análisis requiere atender a los contextos específicos en los que ocurren.[32]

27. El propio CED ha advertido un incremento visible y sostenido en las desapariciones de niñas a partir de los 12 años, adolescentes y mujeres, y ha identificado casos vinculados con la sustracción de niñas y niños, el ocultamiento de violencia sexual y feminicidios, el reclutamiento, las represalias, la trata y la explotación sexual.[33] Estos patrones muestran la relación que puede existir entre la desaparición de mujeres, adolescentes y niñas y otras formas de violencia de género, así como la necesidad de que su búsqueda e investigación incorporen una perspectiva de género.

28. Esta relación debe comprenderse, además, en el contexto de violencia y discriminación que enfrentan las mujeres en México. En 2012, el Comité para la Eliminación de la Discriminación contra la Mujer (CEDAW) advirtió que la estrategia de seguridad pública adoptada para combatir la delincuencia organizada, junto con la persistencia de la impunidad y la corrupción, había contribuido a intensificar patrones preexistentes de discriminación y violencia contra las mujeres. El Comité señaló que mujeres y niñas enfrentaban niveles crecientes y distintas formas de violencia por razones de género, entre ellas desapariciones forzadas, tortura y feminicidios, cometidas tanto por agentes estatales como no estatales. En 2018, el Comité reiteró su preocupación por los efectos que los altos niveles de inseguridad,

---

[31] Volga de Pina y Sandra Serrano, "El secuestro, la privación de la libertad y la desaparición", en Estefanía Vela Barba (coord.), *Manual para juzgar con perspectiva de género en materia penal*, Suprema Corte de Justicia de la Nación, México, 2021, p. 818.

[32] Karina Ansolabehere *et al.*, *Nombrarlas para encontrarlas. Contexto, dinámicas y respuestas en torno a la desaparición de mujeres en el centro de México*, México, Observatorio sobre Desaparición e Impunidad en México/ Facultad Latinoamericana de Ciencias Sociales, sede México, 2021.

[33] Comité contra la Desaparición Forzada de las Naciones Unidas, *Informe del Comité contra la Desaparición Forzada sobre su visita a México en virtud del artículo 33 de la Convención. Información sobre la visita y hallazgos*,18 de mayo de 2022, *doc. cit.*, párr. 14.

violencia y delincuencia organizada continuaban teniendo sobre los derechos de las mujeres y las niñas.[34]

29. En ese contexto, distintos mecanismos internacionales han señalado que la desaparición de mujeres y niñas debe ser analizada en relación con otras formas de violencia por razones de género. En 2018, el Comité de Expertas del MESECVI reconoció la desaparición de mujeres y niñas como una forma de violencia contra las mujeres y destacó su conexión con el feminicidio, la trata de personas y la violencia sexual.[35] Ese mismo año, el CEDAW, retomando su Recomendación General No. 35, por la que se actualiza la Recomendación General No. 19, recomendó a México adoptar medidas urgentes para prevenir las muertes violentas, los asesinatos y las desapariciones forzadas de mujeres, atendiendo sus causas, entre ellas la violencia armada, la delincuencia organizada, el tráfico de estupefacientes, los estereotipos discriminatorios, la pobreza y la marginación, así como investigar, enjuiciar y sancionar a las personas responsables.[36]

30. Más recientemente, la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) documentó la persistencia de desapariciones de mujeres vinculadas con distintas formas de violencia de género y señaló la existencia de casos en los que la desaparición antecede al feminicidio.[37] Frente a ello, destacó la obligación de conducir las investigaciones con enfoque de género, incorporar análisis de contexto y aplicar los protocolos diferenciados correspondientes, de manera que se consideren las características y los riesgos específicos de las violencias que enfrentan las mujeres.[38]

31. La perspectiva de género permite identificar que las razones de género pueden estar presentes tanto en las causas como en las consecuencias de una desaparición. En el primer caso, pueden formar parte del motivo por el cual una mujer es privada de la libertad o desaparecida, por ejemplo, cuando los hechos se relacionan con violencia ejercida por parejas o personas cercanas, violencia o explotación sexual, trata, feminicidio u otras formas de violencia dirigidas

---

[34] Comité para la Eliminación de la Discriminación contra la Mujer de las Naciones Unidas, *Observaciones finales sobre los informes periódicos séptimo y octavo combinados de México*, Doc. ONU CEDAW/C/MEX/CO/7-8, párrs. 11–12 (7 de agosto de 2012); Comité para la Eliminación de la Discriminación contra la Mujer de las Naciones Unidas, *Observaciones finales sobre el noveno informe periódico de México*, Doc. ONU CEDAW/C/MEX/CO/9, párrs. 9–10 (25 de julio de 2018).

[35] Mecanismo de Seguimiento de la Convención de Belém do Pará (MESECVI), Comité de Expertas, Recomendación General núm. 2, *Mujeres y niñas desaparecidas en el hemisferio de acuerdo con los artículos 7.b y 8 de la Convención de Belém do Pará*, OEA/Ser.L/II.7.10, MESECVI/CEVI/doc.250/18, 5 de diciembre de 2018.

[36] Comité para la Eliminación de la Discriminación contra la Mujer de las Naciones Unidas, *Observaciones finales sobre el noveno informe periódico de México*, *doc. cit.*, párr. 24

[37] Comisión Interamericana de Derechos Humanos, *Informe sobre desapariciones en México*, OEA/Ser.L/V/II, Doc. 1/26, 9 de febrero de 2026, párrs. 68–74.

[38] *Ibidem*, párr. 69.

específicamente contra las mujeres. En otros casos, aun cuando la desaparición no tenga como origen una razón de género, esta puede colocar a las mujeres frente a riesgos y afectaciones particulares o desproporcionadas durante la privación de la libertad, entre ellas la violencia sexual, la explotación y otras formas de violencia de género.[39]

32. Esta distinción resulta relevante para la búsqueda y la investigación, pues exige identificar desde las primeras actuaciones si existen razones de género relacionadas con la desaparición y considerar las distintas formas de violencia a las que puede encontrarse expuesta la víctima. La presencia de estos factores genera deberes reforzados de debida diligencia y exige evitar que las desapariciones de mujeres sean minimizadas o desvinculadas del contexto de violencia en el que pueden producirse.[40]

33. Las particularidades que pueden presentar las desapariciones de mujeres no solo deben orientar las hipótesis de búsqueda e investigación, sino también la forma en que las autoridades organizan y coordinan su actuación. Esto resulta especialmente relevante cuando los hechos o las posibles líneas de búsqueda involucran a más de una entidad federativa, como es el presente caso. En 2024, la CIDH advirtió la persistencia de deficiencias en la coordinación de las acciones de búsqueda entre autoridades de distintas entidades federativas, que generaban demoras en la implementación de acciones inmediatas, y señaló la necesidad de fortalecer los mecanismos regionales de búsqueda.[41] En 2026, reiteró la necesidad de garantizar la coordinación entre las autoridades encargadas de la búsqueda y la investigación y destacó la utilidad de considerar contextos subregionales para responder a las dinámicas específicas que presentan las desapariciones en distintas zonas del país.[42]

34. Esta exigencia de coordinación también se encuentra prevista en los Principios rectores para la búsqueda de personas desaparecidas del CED, conforme a los cuales la búsqueda debe desarrollarse mediante la cooperación y colaboración de todas las instancias estatales competentes y traducirse en medidas que permitan hacerla efectiva.[43] La coordinación adquiere particular importancia en casos en los que las hipótesis sobre el paradero de una persona, las circunstancias de su desaparición o los delitos posiblemente relacionados trascienden los límites de una

---

[39] Volga de Pina y Sandra Serrano, "El secuestro, la privación de la libertad y la desaparición", *op. cit.*, pp. 821-825.
[40] *Ibidem*, pp. 823-825.
[41] Comisión Interamericana de Derechos Humanos, *Informe Anual 2024. Capítulo V. Seguimiento de recomendaciones formuladas por la CIDH en sus informes de país o temáticos. México*, 2024, párr. 59.
[42] Comisión Interamericana de Derechos Humanos, *Informe sobre desapariciones en México*, *doc. cit.*, párrs. 410 y 434.
[43] Principios rectores para la búsqueda de personas desaparecidas, principio 3, párr. 4.

entidad federativa, pues la distribución territorial de competencias no debe obstaculizar la ejecución inmediata y continua de las acciones de búsqueda.

35. Las dificultades para articular la respuesta estatal también se relacionan con la insuficiencia de recursos materiales y personal especializado, así como dificultades en el intercambio de información entre fiscalías y comisiones de búsqueda.[44] Este pronunciamiento se suma a los continuos llamados de organismos internacionales y nacionales de derechos humanos dirigidos a fortalecer una respuesta institucional capaz de articular las distintas competencias y recursos necesarios para hacer frente a las desapariciones.

36. A partir de lo anterior, el análisis de la desaparición de mujeres en México exige considerar los contextos sociales, institucionales y de violencia de género en los que ocurre. Su comprensión requiere considerar las dinámicas de violencia de género que pueden incidir en sus causas, riesgos y consecuencias, así como las capacidades y deficiencias de la respuesta institucional para garantizar una búsqueda inmediata y una investigación diligente y coordinada. Situar, vincular y enmarcar las desapariciones dentro de estos contextos permite identificar los factores que intervienen en cada caso y orientar la actuación estatal a partir de las características particulares de la desaparición y de los riesgos que enfrenta la víctima.[45]

VI.2 LA DESAPARICIÓN DE MUJERES EN LA CIUDAD DE MÉXICO Y SU RELACIÓN CON OTRAS FORMAS DE VIOLENCIA DE GÉNERO

37. En la Ciudad de México, la desaparición de mujeres presenta características particulares respecto del panorama nacional. De acuerdo con la información pública del Registro Nacional de Personas Desaparecidas y No Localizadas (RNPDNO), durante 2019, año en que ocurrió la desaparición que dio origen al presente instrumento recomendatorio, se registraron 8,260 personas desaparecidas en el país, de las cuales 17.22% eran mujeres. En la Ciudad de México se registraron ese mismo año 489 personas desaparecidas, 112 de ellas mujeres, equivalentes al 22.9% del total de desapariciones en la capital, proporción superior a la registrada a nivel nacional.[46]

---

[44] Comisión Interamericana de Derechos Humanos, *Informe sobre desapariciones en México, doc. cit.*, párrs. 327 y 440.

[45] Karina Ansolabehere *et al.*, *Nombrarlas para encontrarlas. Contexto, dinámicas y respuestas en torno a la desaparición de mujeres en el centro de México, op, cit.*, pp. 29-34.

[46] Cifras obtenidas a partir de la información estadística disponible en el Registro Nacional de Personas Desaparecidas y No Localizadas (RNPDNO), versión pública. Consulta realizada el 12 de junio de 2026. Disponible en: https://versionpublicarnpdno.segob.gob.mx/Dashboard/Sociodemografico

38. Esta diferencia ya había sido advertida por esta Comisión. En la Recomendación 02/2020 se señaló que, mientras a nivel nacional los hombres representaban 74.5% de las personas desaparecidas, en la Ciudad de México constituían 58.7%, lo que mostraba una menor distancia entre la proporción de hombres y mujeres desaparecidas en la capital.[47] La edad constituye también un elemento relevante: información de Locatel retomada por esta Comisión indicaba que 57% de las mujeres registradas como "extraviadas" tenían entre 10 y 29 años. Asimismo, datos analizados por la Comisión de Búsqueda de Personas de la Ciudad de México mostraban una concentración de las desapariciones de mujeres entre los 15 y 24 años, mientras que en los hombres el mayor número de registros se ubicaba entre los 25 y 34 años.[48]

39. La distribución territorial de las desapariciones tampoco es homogénea. En 2019, Iztapalapa registró 60 personas desaparecidas, de las cuales 15 son mujeres,[49] y se ubicó como la alcaldía con el mayor número de registros en la Ciudad de México. La relevancia de Iztapalapa aparece también en estudios especializados sobre la región centro del país, que la identifican entre los territorios de la Ciudad de México con mayor presencia de desapariciones de mujeres.[50] Estos datos muestran la importancia de analizar las desapariciones atendiendo de manera conjunta al género, la edad y el territorio, en lugar de considerar únicamente las cifras agregadas de la ciudad.

---

[47] Comisión de Derechos Humanos de la Ciudad de México, Recomendación 02/2020, Falta de debida diligencia en la búsqueda de personas desaparecidas con perspectiva de género y enfoque diferenciado, párr. 34. La información retomada por la CDHCM en dicho párrafo proviene de la Comisión de Búsqueda de Personas de la Ciudad de México, Documento de información general de la desaparición en la Ciudad de México, 23 de agosto de 2019.

[48] Comisión de Búsqueda de Personas de la Ciudad de México, Documento de información general de la desaparición en la Ciudad de México, 23 de agosto de 2019, p. 9. Consultada el 12 de junio de 2026, disponible en: https://comisiondebusqueda.cdmx.gob.mx/storage/app/uploads/public/5eb/c90/081/5ebc90081c283631268028.pdf, Véase también Comisión de Búsqueda de Personas de la Ciudad de México, Ficha síntesis. Situación de reportes de desaparición en la alcaldía Iztapalapa (Ciudad de México), 6 de mayo de 2020, p. 10, respecto de la proporción de reportes según asignación sexo-genérica en las alcaldías de la Ciudad de México durante el periodo comprendido entre marzo de 2017 y octubre de 2019, con base en información de Locatel. Consultada el 12 de junio de 2026., disponible en: https://comisiondebusqueda.cdmx.gob.mx/storage/app/uploads/public/5f9/8da/32b/5f98da32b7f88596255263.pdf,

[49] Cifras obtenidas a partir de los datos estadísticos del Registro Nacional de Personas Desaparecidas y No Localizadas (RNPDNO). Durante 2019, en la alcaldía Iztapalapa se registraron 509 personas desaparecidas o no localizadas, de las cuales 223 eran mujeres, equivalentes al 43.81% del total. De las 509 personas registradas, 449 fueron localizadas, mientras que 60 continuaban desaparecidas o no localizadas, de las cuales 15 son mujeres. Disponible en: https://versionpublicarnpdno.segob.gob.mx/Dashboard/Sociodemografico, consultada el 12 de junio de 2026.

[50] Comisión de Búsqueda de Personas de la Ciudad de México, Ficha síntesis. Situación de reportes de desaparición en la alcaldía Iztapalapa (Ciudad de México), 6 de mayo de 2020, p. 10; véase también Instituto Mexicano de Derechos Humanos y Democracia, A. C., Diagnóstico de mujeres desaparecidas, septiembre de 2022, pp. 68 y 82. Disponible en: https://www.imdhd.org/wp-content/uploads/2022/10/IMDHD-DiagnosticoMujeres_2022_Digital-baja.pdf, consultada el 5 de octubre de 2026.

40. En efecto, la desaparición de mujeres adquiere características distintas según el espacio y el contexto en el que ocurre. El análisis de las desapariciones en la región centro del país ha mostrado que las dinámicas, las características de las víctimas y las posibles causas varían territorialmente, por lo que comprender estos casos requiere reconstruir las relaciones entre la desaparición y las distintas violencias presentes en cada lugar.[51] Desde esta perspectiva, la desaparición no debe analizarse como un acontecimiento aislado, sino a partir de las circunstancias que la preceden y rodean, las características y relaciones de la víctima, sus desplazamientos y las dinámicas de violencia y criminalidad presentes en el territorio.

41. En el caso que dio origen a la presente Recomendación, el análisis de contexto realizado por la Comisión de Búsqueda de Personas de la Ciudad de México identificó elementos relevantes en ese sentido. Entre 2016 y 2019, Iztapalapa ocupó el primer lugar en la Ciudad de México en registros de feminicidio, homicidio, narcomenudeo y violación; el tercero en trata de personas y el quinto en secuestro. En el polígono correspondiente a las colonias aledañas al lugar donde **Natali Carmona Hernández (mujer víctima directa 1)** fue vista por última vez se registraron, además, un aumento en delitos como feminicidio y homicidio en el 2019.[52] La concurrencia de estas distintas manifestaciones de violencia constituía información relevante para la formulación y contraste de hipótesis sobre su desaparición y para orientar las acciones de búsqueda e investigación.

42. En este sentido, la desaparición de mujeres no puede desvincularse de los contextos de violencia y discriminación en los que ocurre. En el caso González y otras ("Campo Algodonero") vs. México, la Corte Interamericana analizó la desaparición y posterior muerte de mujeres en un contexto de violencia de género y advirtió que determinadas formas de violencia contra las mujeres pueden encontrarse relacionadas entre sí y responder a patrones de discriminación. La Corte señaló también que los estereotipos de género pueden influir en la respuesta institucional frente a las desapariciones, al propiciar que se reste importancia a los hechos o se atribuya a las propias víctimas responsabilidad por lo ocurrido.[53] Este

---

[51] Karina Ansolabehere *et al.*, *Nombrarlas para encontrarlas. Contexto, dinámicas y respuestas en torno a la desaparición de mujeres en el centro de México*, *op. cit.*, pp. 29-34.

[52] Véase Anexo, evidencia 122.Comisión de Búsqueda de Personas de la Ciudad de México, *Análisis de contexto sobre el caso de la víctima directa* **Natali Carmona Hernández (mujer víctima directa 1)**, que obra en el expediente de la CBP CDMX., en donde se refiere: *"[d]e acuerdo con los datos analizados, Iztapalapa suele identificarse como un punto problemático de incidencia de diversos delitos, pero esto se debe en buena medida a su amplio territorio y concentración poblacional; cuando se analizan las tasas de incidencia, esta alcaldía suele presentar una tendencia media respecto al resto de la capital. Sin embargo, el año 2019 sí presenta en esta demarcación, y en el polígono específico de análisis, un aumento en delitos como feminicidio y homicidio, lo que podría revelar dinámicas de mayor violencia".*

[53] Corte IDH, Caso González y otras ("Campo Algodonero") vs. México. Excepción Preliminar, Fondo, Reparaciones y Costas. Sentencia de 16 de noviembre de 2009. Serie C No. 205, párrs. 394-402.

precedente resulta relevante para el análisis contextual de la desaparición de mujeres, pues permite considerar las violencias que pueden anteceder, acompañar o suceder a una desaparición, así como la forma en que ese contexto incide en la respuesta de las autoridades.

43. Durante el periodo en que se desarrollaron los hechos materia de esta Recomendación, la propia Ciudad de México reconoció la existencia de una situación de violencia contra las mujeres que requería medidas extraordinarias. A pesar de que el 25 de noviembre de 2019 se publicó la Declaratoria de Alerta por Violencia contra las mujeres en la Ciudad de México[54], algunas investigadoras han realizado análisis retrospectivos sobre el movimiento feminista que señalan claramente que, ante un aumento de casos y recurrencia de delitos contra las mujeres, por lo menos entre 2015 y 2019 aumentó la presión social para visibilizar esta problemática y demandar políticas públicas de atención a los casos y las causas[55]. A lo largo del 2019, distintos actores sociales organizados, especialmente organizaciones de la sociedad civil con perspectiva feminista o que realizaban acompañamiento a casos, solicitaron que dicha declaratoria se activara. Incluso con pronunciamientos públicos que aludían a una primera solicitud para la emisión de la declaratoria desde 2017.[56]

44. La Declaratoria emitida en noviembre de 2019, dispuso acciones de emergencia dirigidas a garantizar la seguridad y los derechos de las mujeres, niñas y adolescentes que habitaban o transitaban en la Ciudad, así como a visibilizar la violencia de género y transmitir un mensaje de cero tolerancia.[57] Su emisión constituye un elemento relevante para comprender el contexto en el que ocurrieron los hechos, pues implicó el reconocimiento institucional de una situación de violencia que colocaba en riesgo la vida, la integridad y la libertad de las mujeres y que, por su gravedad y persistencia, requería una respuesta urgente, reforzada y coordinada de las autoridades.

45. Este contexto de violencia coexistía, además, con deficiencias en la respuesta institucional frente a la desaparición de mujeres que habían sido identificadas desde antes de los hechos materia de esta Recomendación. En el informe elaborado para atender la solicitud de Alerta de Violencia de Género contra las Mujeres en la

---

[54] Decreto por el que se emite la Declaratoria de Alerta por Violencia contra las Mujeres en la Ciudad de México, publicado en la Gaceta Oficial de la Ciudad de México el 25 de noviembre de 2019.
[55] Lucía Álvarez Enríquez "El movimiento feminista en México en el siglo XXI: juventud, radicalidad y violencia" en Revista mexicana de ciencias políticas y sociales, Vol. 65, núm., 240, Ciudad de México, sept-dic 2020. Disponible en: https://www.scielo.org.mx/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S0185-19182020000300147
[56] Gloria Leticia Díaz, "ONG piden a Sheinbaum emitir Declaratoria de Alerta de Violencia de Género en la CDMX" en: PROCESO, 19 de agosto de 2019. Disponible en: https://www.proceso.com.mx/nacional/cdmx/2019/8/19/ong-piden-sheinbaum-emitir-declaratoria-de-alerta-de-violencia-de-genero-en-la-cdmx-229657.html
[57] *Ibidem*, puntos PRIMERO y CUARTO.

Ciudad de México se documentó que los casos de desaparición de mujeres eran registrados por la entonces Procuraduría General de Justicia, a través del Centro de Apoyo de Personas Extraviadas y Ausentes (CAPEA), como "extravíos" o "ausencias voluntarias", sin considerar adecuadamente el contexto de violencia contra las mujeres. También se identificaron prácticas consistentes en desatender información relevante proporcionada por familiares, retrasar las primeras actuaciones, carecer de planes de investigación dirigidos a localizar a las víctimas y brindar respuestas que generaban revictimización.[58] Estos hallazgos permiten advertir que, antes del periodo analizado, ya se habían documentado obstáculos en la forma en que las autoridades de la Ciudad de México recibían y atendían los reportes de desaparición de mujeres, a los que se sumaba la tendencia a investigar los feminicidios íntimos como homicidios dolosos o incluso como supuestos suicidios, invisibilizando así las razones de género.[59]

46. Estas prácticas resultaban especialmente relevantes porque las primeras actuaciones condicionan la posibilidad de identificar oportunamente los riesgos que enfrenta una mujer desaparecida y desarrollar hipótesis sobre su paradero. En su Recomendación 02/2020, esta Comisión documentó graves deficiencias en el cumplimiento de las obligaciones de realizar investigaciones efectivas y búsquedas inmediatas, y señaló la necesidad de incorporar la perspectiva de género, considerar los antecedentes de violencia contra las mujeres en sus entornos familiares y sociales y documentar de manera exhaustiva el contexto de criminalidad relacionado con la desaparición.[60]

47. El análisis realizado por esta Comisión sobre expedientes de desaparición ocurridos entre 2017 y 2024 muestra que varios de estos problemas han persistido.[61] Entre los principales hallazgos se identificaron deficiencias desde las primeras actuaciones, particularmente en la obtención y ampliación de información durante la entrevista inicial, así como casos en los que las omisiones existentes solo fueron atendidas después de ser advertidas por las propias familias.[62] Asimismo, en el 69.2% de los expedientes analizados no se desplegaron acciones

---

[58] Grupo de Trabajo conformado para atender la Solicitud de Alerta de Violencia de Género en la Ciudad de México, *Informe del Grupo de Trabajo conformado para atender la Solicitud de Alerta de Violencia de Género contra las Mujeres en la Ciudad de México*, AVGM/07/2017, p. 71. Disponible en: http://www.gob.mx/cms/uploads/attachment/file/311908/Informe_SAVGM_CDMX_VF.pdf Consultado el 5 de octubre de 2026

[59] Observatorio Ciudadano Nacional del Feminicidio, *Informe de Implementación del Tipo Penal de Feminicidio en México 2014-2017*, p. 219.

[60] Véase Comisión de Derechos Humanos de la Ciudad de México. Recomendación 02/2020, *doc. cit.*, párr. 433, y Comisión de Derechos Humanos de la Ciudad de México, *Búsqueda de personas desaparecidas en la Ciudad de México. Estándares, hallazgos y pautas operativas para fortalecer la búsqueda de personas*, 2025, pp. 6 y 113.

[61] Comisión de Derechos Humanos de la Ciudad de México, *Búsqueda de personas desaparecidas en la Ciudad de México. Estándares, hallazgos y pautas operativas para fortalecer la búsqueda de personas*, 2025, pp. 6 y 113.

[62] *Ibidem*, pp. 74-75.

de búsqueda inmediata,[63] y se documentaron omisiones en el rastreo oportuno de elementos fundamentales para la localización de las víctimas, como la información relacionada con sus teléfonos celulares.[64]

48. Estas deficiencias adquieren especial relevancia en los casos de mujeres, niñas y adolescentes, quienes durante una desaparición pueden encontrarse expuestas de manera diferenciada a actos de tortura, malos tratos y otras formas de violencia, particularmente violencia de género, incluida aquella relacionada con sus derechos reproductivos y su papel como madres. Por ello, la búsqueda e investigación deben considerar tanto estas formas de violencia como las desigualdades de género que pueden incrementar el riesgo de desaparición.[65] En los expedientes analizados por esta Comisión también se identificaron deficiencias en la incorporación de un enfoque diferenciado: de los nueve casos relacionados con la desaparición de mujeres, niñas y adolescentes, únicamente en uno (11.1%) se documentó la activación oportuna del Protocolo Alba; en seis (66.7%) no se aplicó, y en los dos restantes no fue posible determinar su aplicación debido a la falta de documentación. En aquellos en los que no se aplicó el Protocolo, tampoco se identificaron diligencias orientadas por el género y el contexto de la desaparición, lo que limitó la construcción de hipótesis diferenciadas de búsqueda.[66] El análisis identificó, además, situaciones graves y revictimizantes en los procesos de restitución de las personas localizadas a sus familiares, que profundizaron el carácter adverso de los procesos institucionales.[67]

49. Otro de los retos se relaciona con la dimensión territorial de las desapariciones. De las 16 alcaldías de la Ciudad de México, once colindan con otra entidad federativa, por lo que las hipótesis sobre el paradero de una persona, su desplazamiento o la posible comisión de delitos relacionados con su desaparición pueden requerir actuaciones fuera de la ciudad. Esta característica exige mecanismos efectivos de coordinación e intercambio de información entre las autoridades de las entidades involucradas, de manera que la distribución territorial de competencias no produzca demoras ni fragmente las acciones de búsqueda e investigación.

---

[63] *Ibidem*, p. 80.
[64] Comisión de Derechos Humanos de la Ciudad de México, *Búsqueda de personas desaparecidas en la Ciudad de México. Estándares, hallazgos y pautas operativas para fortalecer la búsqueda de personas*, *doc. cit.*, p. 81.
[65] Fundación para el Debido Proceso, *Ser mujer y desaparecer. Estándares de género de la Corte Interamericana de Derechos Humanos en casos sobre desaparición forzada*, 2021, pp. 4–5. Disponible en:https://dplf.org/ser-mujer-y-desparecer-estandares-de-genero-de-la-corte-interamericana-de-derechos-humanos-en-casos-sobre-desaparicion-forzada/. Consultada el 05 de octubre de 2026.
[66] Comisión de Derechos Humanos de la Ciudad de México, *Búsqueda de personas desaparecidas en la Ciudad de México. Estándares, hallazgos y pautas operativas para fortalecer la búsqueda de personas*, *doc. cit.*, p. 114.
[67] *Ibidem*, p. 133.

50. Las dificultades de coordinación tampoco constituyen un problema aislado. Esta Comisión ha advertido que en los procesos de búsqueda e investigación "existen vacíos de información, a lo que se suma la falta de coordinación entre las autoridades, lo que imposibilita desarrollar una política criminal o un plan de persecución penal eficiente".[68] Entre 2020 y junio de 2026, este Organismo emitió cinco recomendaciones en materia de búsqueda de personas desaparecidas, en las que documentó deficiencias relacionadas con la falta de debida diligencia, incluidas investigaciones de desapariciones de mujeres y adolescentes en las que no se incorporaron adecuadamente la perspectiva de género y el enfoque diferenciado.[69] En estos casos también se identificaron deficiencias para considerar el contexto de violencia estructural que enfrentan las mujeres y utilizarlo para analizar las relaciones desiguales de poder presentes en sus ámbitos familiar, social y laboral, lo que derivó incluso en el descarte de hipótesis sin una investigación previa suficiente.[70]

51. La persistencia de estas deficiencias ha incidido también en el papel asumido por las familias. Frente a la falta de respuestas oportunas, las labores de búsqueda han recaído en buena medida en familiares de las personas desaparecidas. En particular, las mujeres (madres, hijas, hermanas, abuelas, amigas, esposas, vecinas y conocidas) han asumido un papel central en estas tareas y en la exigencia de verdad y justicia.[71] Su participación no sustituye las obligaciones estatales de búsqueda e investigación ni puede traducirse en el traslado a las familias de las tareas que corresponden a las autoridades.

52. En conjunto, la información disponible muestra que la desaparición de mujeres en la Ciudad de México debe analizarse considerando las características de las víctimas, las violencias que pueden anteceder o relacionarse con la desaparición, las dinámicas presentes en el territorio y la posibilidad de que los hechos trasciendan los límites de la ciudad. Estos elementos resultan relevantes para formular y contrastar hipótesis de búsqueda e investigación. Al mismo tiempo, el contexto descrito de la fecha de los hechos, muestra la persistencia de obstáculos

---

[68] Comisión de Derechos Humanos de la Ciudad de México, Recomendación 02/2020, *doc. cit.*, párr. 78.
[69] Comisión de Derechos Humanos de la Ciudad de México, Recomendaciones: 02/2020, *doc. cit.* 09/2023, Violaciones a los derechos a la verdad y a la vida por la falta de deber de cuidado y deficiencias en la búsqueda de una persona desaparecida; 08/2025, Deficiencias en la búsqueda de un adolescente desaparecido que configuraron una desaparición administrativa; 09/2025, Omisiones en la investigación de la desaparición y posterior tratamiento del cuerpo de una persona con discapacidad que propició una desaparición administrativa, y 10/2025, Falta de debida diligencia y perspectiva de género en la búsqueda de una mujer desaparecida.
[70] Comisión de Derechos Humanos de la Ciudad de México, Recomendaciones: 02/2020, *doc. cit.*, párr. 479.
[71] Centro de Derechos Humanos Miguel Agustín Pro Juárez, *Nos llaman las locas de las palas. El papel de las mujeres en la búsqueda de sus familiares desaparecidos*, México, Centro Prodh, 2020.
Disponible en: https://centroprodh.org.mx/wp-content/uploads/2020/05/LasLocasDeLasPalas.pdf. Consultada el 5 de octubre de 2026. Véase también Comisión de Derechos Humanos de la Ciudad de México, Recomendación 02/2020, *doc. cit.*, párr. 63.

institucionales, relacionados con la actuación inmediata, la incorporación de la perspectiva de género, el seguimiento de líneas de búsqueda e investigación y la coordinación entre autoridades, cuya consideración resulta necesaria para comprender las obligaciones que correspondían a las autoridades en el caso materia del presente instrumento recomendatorio.

53. Frente a la persistencia de prácticas institucionales fragmentadas, esta Comisión ha enfatizado la necesidad de implementar planes de búsqueda e investigación, mecanismos efectivos de seguimiento, coordinación e intercambio de información entre las autoridades y áreas involucradas, así como acciones inmediatas y exhaustivas que atiendan las circunstancias particulares de cada desaparición y que, tratándose de mujeres, incorporen desde el primer momento la perspectiva de género y el estándar de debida diligencia reforzada.[72] Estas exigencias permiten comprender, a su vez, la relevancia de los cambios normativos e institucionales que han buscado transformar la respuesta del Estado frente a la desaparición de personas y que se abordan en el apartado siguiente.

VI.3 Evolución de la respuesta normativa e institucional frente a la desaparición de personas

54. La evolución normativa e institucional en materia de desaparición de personas resulta particularmente relevante para el presente caso, pues durante el periodo en que se desarrollaron los hechos materia de esta Recomendación, entre 2019 y 2022, se produjeron diversas transformaciones del sistema de búsqueda e investigación. Este proceso supuso la incorporación progresiva de nuevas instituciones, normas, protocolos especializados y mecanismos de coordinación que desarrollaron y precisaron obligaciones previamente existentes en materia de derechos humanos, búsqueda e investigación de personas desaparecidas y violencia contra las mujeres. En consecuencia, resulta necesario identificar los distintos momentos de esta evolución y el marco normativo e institucional vigente en cada uno de ellos, considerando tanto las obligaciones que ya resultaban exigibles al inicio de los hechos como aquellas que se incorporaron o desarrollaron durante ese periodo.

55. Al inicio de los hechos ya existía un marco de obligaciones relacionado con la prevención e investigación de la violencia contra las mujeres. La Ley General de Acceso de las Mujeres a una Vida Libre de Violencia, publicada en 2007, estableció

---

[72] Comisión de Derechos Humanos de la Ciudad de México, Recomendación 10/2025, *doc. cit.*, párr. 41, en la que este Organismo señaló: *"En casos de mujeres desaparecidas, la debida diligencia reforzada que considere el enfoque de género y diferenciado implica generar líneas de investigación bajo esta perspectiva que garanticen la exhaustividad de la búsqueda destinada a proteger el derecho a la vida y a la integridad de las víctimas".*

las bases para la coordinación entre los distintos órdenes de gobierno para prevenir, atender, sancionar y erradicar la violencia contra las mujeres.[73] En el ámbito local, desde 2008 la Ciudad de México contaba con su propia Ley de Acceso de las Mujeres a una Vida Libre de Violencia.[74] A este marco se sumaron los estándares establecidos por la Corte Interamericana de Derechos Humanos en el caso González y otras ("Campo Algodonero") vs. México, particularmente respecto de la actuación frente a la desaparición de mujeres en contextos de violencia de género y la necesidad de una respuesta pronta y efectiva desde las primeras horas.[75]

56. Estas obligaciones se desarrollaron también mediante instrumentos específicos para orientar la actuación de las autoridades frente a la desaparición de mujeres. En 2011, la Conferencia Nacional de Procuración de Justicia aprobó los "Lineamientos Generales para la estandarización de las investigaciones de los delitos relacionados con desapariciones de mujeres, violación de mujeres y homicidio de mujeres por razones de género", a partir de los cuales las procuradurías y fiscalías debían formular sus propios protocolos.[76] En la Ciudad de México, este proceso se concretó en 2012 con la emisión del Protocolo para la Búsqueda Inmediata de Personas en Situación de Extravío o Ausencia, en especial de Mujeres, Niñas, Niños y Adolescentes, de observancia obligatoria para el personal de la entonces Procuraduría General de Justicia que intervenía en estos casos.[77] Así, antes del inicio de los hechos en 2019 ya existían instrumentos específicos que establecían pautas para la actuación de las autoridades frente a la desaparición de mujeres.

57. Posteriormente, la entrada en vigor de la Ley General en Materia de Desaparición Forzada de Personas, Desaparición Cometida por Particulares y del Sistema Nacional de Búsqueda de Personas (LGMDFPyDP), publicada el 17 de noviembre de 2017, transformó la organización institucional para enfrentar la desaparición de personas en México. La Ley creó el Sistema Nacional de Búsqueda de Personas, distribuyó competencias entre las autoridades encargadas de la búsqueda e

---

[73] Ley General de Acceso de las Mujeres a una Vida Libre de Violencias, publicada en el *Diario Oficial de la Federación* el 1 de febrero de 2007; última reforma publicada el 15 de enero de 2026.
[74] Ley de Acceso de las Mujeres a una Vida Libre de Violencia del Distrito Federal, publicada en la *Gaceta Oficial del Distrito Federal* el 29 de enero de 2008, artículos 1º y 2º.
[75] Corte IDH, Caso González y otras ("Campo Algodonero") vs. México. Excepción Preliminar, Fondo, Reparaciones y Costas. Sentencia de 16 de noviembre de 2009. Serie C No. 205, párrs. 283-285.
[76] Conferencia Nacional de Procuración de Justicia, Acuerdo CNPJ/XXVI/11/2011, *"Investigación de ilícitos cometidos contra mujeres"*, mediante el cual se aprobaron los Lineamientos Generales para la Estandarización de las Investigaciones de los Delitos Relacionados con Desapariciones de Mujeres, Violación de Mujeres y Homicidio de Mujeres por Razones de Género, en la XXVI Asamblea Plenaria, celebrada en Acapulco, Guerrero, los días 24 y 25 de noviembre de 2011.
[77] Acuerdo A/015/2012 del Procurador General de Justicia del Distrito Federal, por el que se emite el Protocolo para la búsqueda inmediata de personas en situación de extravío o ausencia, en especial de mujeres, niñas, niños y adolescentes, publicado en la Gaceta Oficial del Distrito Federal el 4 de octubre de 2012.

investigación y estableció mecanismos de coordinación, así como obligaciones para la generación, intercambio y sistematización de información necesaria para ambas funciones.

58. Este proceso implicó la creación y puesta en funcionamiento de instituciones especializadas. En el ámbito federal, la Comisión Nacional de Búsqueda inició funciones en 2018. En la Ciudad de México, el 17 de mayo de 2019 se publicó el Acuerdo por el que se creó la Comisión de Búsqueda de Personas de la Ciudad de México.[78] Conforme al Protocolo Homologado para la Búsqueda de Personas Desaparecidas y No Localizadas, a partir de octubre de 2020, la Comisión Nacional ejecuta y coordina acciones de búsqueda en todo el territorio nacional,[79] mientras que las comisiones locales coordinan dichas acciones en sus respectivas entidades federativas.[80]

59. La especialización alcanzó también a las autoridades encargadas de investigar los delitos de desaparición. Desde agosto de 2018, la Ciudad de México contaba con la Fiscalía Especializada en la Búsqueda, Localización e Investigación de Personas Desaparecidas, creada para fortalecer las acciones de búsqueda y localización y la investigación de los delitos de desaparición forzada y desaparición cometida por particulares.[81] En 2020 se modificó su denominación para quedar como Fiscalía de Investigación y Persecución de los Delitos en Materia de Desaparición Forzada de Personas y la Desaparición Cometida por Particulares y Búsqueda de Personas Desaparecidas.[82]

60. En materia de investigación, al inicio de los hechos se encontraba vigente el Protocolo Homologado de Investigación para los delitos de desaparición forzada de personas y desaparición cometida por particulares (PHI), aprobado por la Conferencia Nacional de Procuración de Justicia en julio de 2018 y actualizado en noviembre del mismo año.[83] El PHI estableció criterios comunes para la actuación

---

[78] Acuerdo por el que se crea la Comisión de Búsqueda de Personas de la Ciudad de México, publicado en la *Gaceta Oficial de la Ciudad de México* el 17 de mayo de 2019. Véase también de Volga de Pina Ravest, *Comisiones estatales de búsqueda*, serie *Respuestas estatales frente a la desaparición y mecanismos de superación de la impunidad*, México, Observatorio sobre Desaparición e Impunidad en México, 2020, p. 8.

[79] Protocolo Homologado para la Búsqueda de Personas Desaparecidas y No Localizadas, numeral 93.

[80] *Ibidem*, numeral 96.

[81] Acuerdo A/012/2018 del Procurador General de Justicia en la Ciudad de México, por el que se crea la Fiscalía Especializada en la Búsqueda, Localización e Investigación de Personas Desaparecidas, publicado en la *Gaceta Oficial de la Ciudad de México* el 29 de agosto de 2018.

[82] Acuerdo FGJCDMX/18/2020, por el que se modifica la denominación de la Fiscalía Especializada en la Búsqueda, Localización e Investigación de Personas Desaparecidas, publicado en la *Gaceta Oficial de la Ciudad de México* el 22 de abril de 2020.

[83] Protocolo Homologado de Investigación para los delitos de desaparición forzada de personas y desaparición cometida por particulares, aprobado por la Conferencia Nacional de Procuración de Justicia el 13 de julio de 2018 y actualizado el 22 de noviembre del mismo año. Los extractos de los acuerdos de aprobación y actualización fueron publicados en el *Diario Oficial de la Federación* el 16 de julio y 7 de diciembre de 2018, respectivamente.

de las fiscalías y procuradurías del país e incorporó, entre otros, los principios de debida diligencia, efectividad y exhaustividad, enfoque diferencial y especializado, perspectiva de género, presunción de vida y no revictimización, así como directrices para la coordinación entre las autoridades que intervenían en la investigación.

61. El PHI contemplaba, además, actuaciones específicas para la investigación de la desaparición de mujeres. Entre ellas, establecía la necesidad de considerar antecedentes de violencia de género y de violencia familiar, sexual o laboral; investigar la posible relación de la desaparición con otros delitos, como la trata de personas; y desarrollar diligencias atendiendo a las circunstancias particulares de la víctima.[84] Estas previsiones desarrollaron obligaciones y estándares sobre investigación con perspectiva de género que ya resultaban exigibles al momento de los hechos.

62. También se encontraba vigente al inicio de los hechos el Protocolo Alba para la Ciudad de México, publicado el 16 de noviembre de 2018, como mecanismo de reacción y coordinación interinstitucional inmediata para la búsqueda y localización de mujeres, niñas y adolescentes reportadas como no localizadas o desaparecidas, dirigido a proteger su vida, libertad e integridad.[85] El instrumento retomó expresamente la sentencia de Campo Algodonero, los lineamientos nacionales para la investigación de desapariciones de mujeres y el antecedente del protocolo local de búsqueda inmediata de 2012.[86]

63. Ya durante el periodo de los hechos, el 31 de diciembre de 2019 se publicó la Ley de Búsqueda de Personas de la Ciudad de México, mediante la cual se abrogó la Ley para Prevenir, Eliminar y Sancionar la Desaparición Forzada de Personas y la Desaparición por Particulares en la Ciudad de México, publicada en noviembre de 2017.[87] La nueva legislación desarrolló el Sistema de Búsqueda de Personas de la Ciudad de México y precisó la distribución de competencias y los mecanismos de coordinación entre las autoridades locales en esta materia.

---

[84] Protocolo Homologado de Investigación para los delitos de desaparición forzada de personas y desaparición cometida por particulares, pp. 94-95.

[85] Acuerdo por el que se emite el Protocolo Alba para la Ciudad de México, publicado en la *Gaceta Oficial de la Ciudad de México* el 16 de noviembre de 2018.

[86] *Ibidem*, considerandos. Véanse también Corte IDH, Caso González y otras ("Campo Algodonero") vs. México. Excepción Preliminar, Fondo, Reparaciones y Costas. Sentencia de 16 de noviembre de 2009. Serie C No. 205; Conferencia Nacional de Procuración de Justicia, Acuerdo CNPJ/XXVI/11/2011, *doc. cit.*; y Acuerdo A/015/2012 del Procurador General de Justicia del Distrito Federal, *doc. cit.*

[87] Ley de Búsqueda de Personas de la Ciudad de México, publicada en la *Gaceta Oficial de la Ciudad de México* el 31 de diciembre de 2019, artículo segundo Transitorio. Mediante dicho Decreto se abrogó la Ley para Prevenir, Eliminar y Sancionar la Desaparición Forzada de Personas y la Desaparición por Particulares en la Ciudad de México, publicada en la *Gaceta Oficial de la Ciudad de México* el 7 de noviembre de 2017.

64. Posteriormente, el Sistema Nacional de Búsqueda aprobó el Protocolo Homologado para la Búsqueda de Personas Desaparecidas y No Localizadas (PHB), publicado en el Diario Oficial de la Federación el 6 de octubre de 2020.[88] Este instrumento desarrolló los distintos tipos de búsqueda, precisó las autoridades responsables y estableció procedimientos para la coordinación, ejecución y seguimiento de las acciones dirigidas a localizar a las personas desaparecidas. Su emisión durante el periodo de los hechos desarrolló las obligaciones de búsqueda y coordinación que ya se encontraban previstas en la LGMDFPyDP y en otros instrumentos aplicables.

65. Al momento de la desaparición de **Natali Carmona Hernández (mujer víctima directa 1)** existían, además, otras disposiciones que permitían y exigían la colaboración entre autoridades cuando una búsqueda o investigación trascendiera el territorio de una entidad federativa. El Código Nacional de Procedimientos Penales contemplaba mecanismos de colaboración procesal entre el Ministerio Público, la policía y autoridades federales y de otras entidades federativas.[89] Por su parte, la LGMDFPyDP establecía obligaciones de coordinación e intercambio de información y preveía mecanismos de colaboración para el cumplimiento de sus fines.[90]

66. Estas obligaciones también se encontraban previstas en la normativa local vigente al inicio de los hechos. La entonces Ley para Prevenir, Eliminar y Sancionar la Desaparición Forzada de Personas y la Desaparición por Particulares en la Ciudad de México establecía que la autoridad ministerial debía intercambiar y compartir información sobre personas desaparecidas con las fiscalías de otras entidades federativas y demás autoridades competentes, con el propósito de hacer más eficiente su búsqueda y localización.[91] De esta manera, la actuación coordinada entre autoridades no surgió con la posterior expedición de la Ley de Búsqueda de Personas de la Ciudad de México ni con el PHB de 2020, sino que constituía una obligación aplicable desde el inicio del periodo analizado.

67. La evolución normativa e institucional descrita permite advertir que, entre 2019 y 2022, las obligaciones de las autoridades en materia de desaparición no surgieron de manera simultánea ni dependieron de la expedición de un único instrumento. Al inicio de los hechos ya existían deberes de búsqueda, investigación, coordinación

---

[88] Acuerdo SNBP/002/2020, *doc. cit.*

[89] Código Nacional de Procedimientos Penales, publicado en el *Diario Oficial de la Federación* el 5 de marzo de 2014; última reforma publicada el 28 de noviembre de 2025, artículo 74.

[90] Ley General en Materia de Desaparición Forzada de Personas, Desaparición Cometida por Particulares y del Sistema Nacional de Búsqueda de Personas, artículos 162 y 163, conforme al texto publicado en 2017 y vigente al momento de los hechos, en 2019.

[91] Ley para Prevenir, Eliminar y Sancionar la Desaparición Forzada de Personas y la Desaparición por Particulares en la Ciudad de México, artículo 33.

y actuación con perspectiva de género, cuyo contenido fue posteriormente desarrollado y precisado mediante nuevas normas, protocolos e instituciones. Sin embargo, este desarrollo normativo no se tradujo necesariamente en una actuación institucional efectiva. En 2022, el Comité contra la Desaparición Forzada señaló que persistían deficiencias en los procesos de búsqueda e investigación, así como dificultades de coordinación entre las instituciones involucradas.[92] Este contexto resulta relevante para analizar la actuación de las autoridades en el presente caso conforme a las obligaciones que les eran exigibles en cada momento. Así, pese al desarrollo del marco normativo e institucional, persistieron problemas en la forma en que las autoridades llevaban a la práctica las obligaciones de búsqueda, investigación y coordinación.

VII. RELATORÍA DE HECHOS

68. El 27 de enero de 2019, aproximadamente a las 14:30 horas, **Natali Carmona Hernández (mujer víctima directa 1)** salió de su domicilio ubicado en la alcaldía Iztapalapa rumbo al estado de Puebla junto a **P1 (pareja de Natali Carmona Hernández),** en ese entonces su pareja.[93]

69. De acuerdo con sus familiares, **Natali Carmona Hernández (mujer víctima directa 1)** y **P1 (pareja de Natali Carmona Hernández)** abordaron el vehículo de la hermana de **P1**, en un viaje que se tenía previsto sería de ida y vuelta. Además, refieren que **Natali Carmona Hernández (mujer víctima directa 1)** dejó su teléfono celular en casa[94] y avisó a su madre, **Aidee Hernández Ávila (mujer víctima directa 2),** que regresaría ese mismo día para preparar la cena para su hijo e hija.[95] Ese fue el último día que su familia tuvo conocimiento de su paradero.

70. **Natali Carmona Hernández (mujer víctima directa 1)** tenía en ese momento 31 años, residía junto con su hija e hijo en el domicilio de su madre y padre, inmueble que se encontraba dividido para el uso y habitación de los distintos hijo e hija de la familia y que, como ya se indicó, se encuentra ubicado en la Alcaldía Iztapalapa de la Ciudad de México.[96]

---

[92] Comité contra la Desaparición Forzada de las Naciones Unidas, *Informe del Comité contra la Desaparición Forzada sobre su visita a México en virtud del artículo 33 de la Convención. Observaciones y recomendaciones*, Doc. ONU CED/C/MEX/VR/1. *Información sobre la visita y hallazgos.* (18 de mayo de 2022).

[93] Véase Anexo, evidencia 6. Entrevista ministerial rendida a las 20:47 horas del 29 de enero de 2019, por **Miguel Ángel Carmona Hernández (víctima indirecta 2)**, en calidad de denunciante, ante la Agente del Ministerio Público adscrita a la FIPEDE.

[94] Véase Anexo, evidencia 6.

[95] Véase Anexo, evidencia 7. Entrevista ministerial rendida a las 15:00 horas del 30 de enero de 2019, por **Aidee Hernández Ávila (mujer víctima directa 2)**, ante el Agente del Ministerio Público adscrito a la FIPEDE.

[96] Véase Anexo, evidencia 7.

71. La familia de **Natali Carmona Hernández (mujer víctima directa 1)**, está compuesta por su madre: **Aidee Hernández Ávila (mujer víctima directa 2),** su padre: **Aurelio Carmona Cruz (víctima directa 3)**; su hermana: **mujer víctima indirecta 1** y su hermano **víctima indirecta 2**; así como por su hija: **mujer víctima indirecta 3** y su hijo **víctima indirecta 4.**[97] Previo a su desaparición, **Natali Carmona Hernández (mujer víctima directa 1)** se dedicaba al cuidado de su hija e hijo. Su familia la recuerda como una mujer muy alegre, amorosa y feliz, en sus propias palabras, la describen en los siguientes términos:

> **Natali Carmona Hernández** nació el 23 de junio de 1987 en la Ciudad de México. Es la hija menor del matrimonio de **Aidee Hernández Ávila** y **Aurelio Carmona Cruz,** ambos originarios de la Alcaldía Iztapalapa. Desde pequeña, **Natali Carmona Hernández** destacó como estudiante y aprendió a leer a temprana edad. Su madre y padre la recuerdan como una gran estudiante, que siempre obtuvo buenas calificaciones y fue parte de la escolta escolar. Durante su último año de secundaria, Natali Carmona Hernández conoció a quien entonces sería su pareja y quedó embarazada por primera vez, circunstancia que marcó una pausa en su trayectoria educativa, porque ya no pudo continuar con sus estudios. Su madre y su padre recuerdan que le hubiera gustado continuar su formación y cursar una carrera universitaria. Su interés por la educación se vio reflejado en la crianza de su hija e hijo. Su familia la recuerda como una madre comprometida con su formación, que procuraba que asistieran siempre a la escuela y les motivaba a obtener las mejores calificaciones.
>
> **Natali Carmona Hernández** también cuidada mucho su imagen personal. Su familia y las personas que la conocían recuerdan que no había momento del día en que no se le viera impecable, que le gustaba vestir con vestidos o ropa formal y, especialmente, usar zapatos de tacón. Tenía una amplia colección de zapatos para cualquier momento y ocasión, algunos de los cuales nunca llegó a estrenar.
>
> A **Natali Carmona Hernández** le gustaba la música de Romeo Santos y el futbol. Era aficionada del Club América por influencia de su hermano Miguel Ángel. Su amor por el futbol la llevó a practicarlo y jugar en equipos femeniles de su comunidad, destacándose como delantera. Sus familiares la recuerdan usando una banda para el cabello al igual que Salvador Cabañas, uno de sus más grandes ídolos de la infancia.
>
> **Natali Carmona Hernández** era una mujer de dualidades. Con su familia, era una hija, hermana y madre atenta y comprometida con el cuidado de sus seres queridos, procurando que nunca les faltara nada. Fuera de ese círculo, se mostraba reservada. En ella convivían su buen gusto para vestir, sus vestidos

[97] Nancy Carmona Hernández, Shared Sánchez Carmona, Miguel Ángel Carmona Hernández y Joshua Sánchez Carmona.

y zapatos de tacón, con su pasión por el fútbol, las camisetas, los tachones y las barridas en la cancha.[98]

72. A continuación, se refieren los hechos que tuvieron lugar después de la desaparición de **Natali Carmona Hernández (mujer víctima directa 1)**, relacionados con el actuar de las autoridades en los siguientes momentos: a) las denuncias presentadas y el inicio de carpetas de investigación por los hechos; b) las diligencias de búsqueda en campo realizadas; y c) la identificación forense, notificación y restitución de su cuerpo.

VII.1 Denuncias e inicio de carpeta de investigación por los hechos:

73. El 29 de enero de 2019, a las 10:03 horas, **P2 (hermana de P1, pareja de Natali Carmona Hernández),** presentó denuncia ante la Agencia Investigadora IZP-8, de la entonces Procuraduría General de Justicia de la Ciudad de México (en adelante PGJ CDMX), con la que se dio inicio a una carpeta de investigación. Dicha denuncia se inició por el *"delito de extravío de persona"* respecto de **Natali Carmona Hernández (mujer víctima directa 1)** y **P1.**[99]

74. **P2** refirió que el 27 de enero de 2019, aproximadamente a las 13:45 horas, **Natali Carmona Hernández (mujer víctima directa 1)** y **P1 (pareja de Natali Carmona Hernández)** salieron de su domicilio a bordo del vehículo de su hermana, color gris plata, con destino a San Martín Texmelucan, Puebla, para visitar a un amigo de **P1**, de quien únicamente conocía su nombre (en lo sucesivo **P3, amigo de P1, pareja de Natali Carmona Hernández**). Solo refirió que sus familiares lo visitaban esporádicamente y regresaban el mismo día a la Ciudad de México.[100]

75. Señaló que la última comunicación que tuvo con **P1 (pareja de Natali Carmona Hernández)** ocurrió ese mismo día a las 14:00 horas, cuando éste envió un mensaje a su hijo indicándole que regresaría pronto. Asimismo, precisó que la última conexión registrada en una aplicación de mensajería instantánea fue a las 14:17 horas. Desde entonces, desconocieron su paradero, así como el de **Natali Carmona Hernández (mujer víctima directa 1)**.

76. **P2 (hermana de P1, pareja de Natali Carmona Hernández)** hizo del conocimiento del agente del ministerio público que también realizaron el reporte de la

---

[98] Véase Anexo, evidencia 119. Acta circunstanciada de 7 de septiembre de 2026, suscrita por un Subdirector de Área de la Primera Visitaduría General Comisión de Derechos Humanos de la Ciudad de México.
[99] Véase Anexo, evidencia 2. Entrevista ministerial rendida por **P2 (hermana de P1, pareja de Natali Carmona Hernández)** a las 10:03 horas del 29 de enero de 2019, en calidad de denunciante, ante la Agencia Investigadora IZP-8 de la PGJ de la Ciudad de México.
[100] Véase Anexo, evidencia 2.

desaparición de **Natali Carmona Hernández (mujer víctima directa 1)** y de **P1** a través de Locatel, el día 28 de enero de 2019, así como al número de emergencia 911, el día 29 de enero de 2019.[101]

77. El mismo 29 de enero de 2019, a las 20:47 horas, **Miguel Ángel Carmona Hernández (víctima indirecta 2),** hermano de Natali Carmona Hernández, presentó denuncia ante la Fiscalía Especializada en la Búsqueda, Localización e Investigación de Personas Desaparecidas (en lo sucesivo FIPEDE), de la entonces PGJ CDMX, con lo que se inició la carpeta de investigación por persona "*extraviada o ausente*".[102]

78. El 29 de enero de 2019, de acuerdo con lo que consta en la carpeta de investigación de FIPEDE se desahogaron diligencias tales como el alta de **Natali Carmona Hernández (mujer víctima directa 1)** en el Sistema de Monitoreo de Localización de Personas (MONIPOL),[103] así como la emisión y difusión de un fotovolante[104]. También se solicitó la intervención de policía de investigación adscrita a FIPEDE para realizar diversos actos de investigación, tales como el resguardo de videograbaciones de las cámaras de videovigilancia de la Ciudad de México y constituirse en el domicilio donde fue vista por última vez **Natali Carmona Hernández (mujer víctima directa 1)**, realizar recorridos en calles aledañas con fotovolante en mano y entrevistas e investigaciones con personas que pudieran aportar información útil para su localización.[105] Posteriormente se realizó la consulta de videograbaciones del sistema de videovigilancia de la Ciudad de México[106] y se emitió el informe policial de investigación en donde, de manera general, se indicó haberse atendido el requerimiento ministerial, sin que se obtuvieran datos de prueba adicionales que robustecieran la investigación.[107]

79. El 30 de enero de 2019, **Aidee Hernández Ávila (mujer víctima directa 2),** compareció en la FIPEDE de la PGJ CDMX, a fin de aportar información sobre las diferentes gestiones que habían realizado en la búsqueda de su hija **Natali Carmona Hernández (mujer víctima directa 1).** Indicó que ya habían dado aviso a Locatel, así como a CAPUFE e informó que de la información con que contaban

---

[101] Véase Anexo, evidencia 1. Reporte de persona extraviada del 28 de enero de 2019 a las 09:46 horas.

[102] Véase Anexo, evidencia 6.

[103] Véase Anexo, evidencia 3. Registro de investigación, de fecha 29 de enero de 2019, a las 21:34 horas, suscrito por la Agente del Ministerio Público adscrito a la FIPEDE.

[104] Véase Anexo, evidencia 4. Registro de actos de investigación de fecha 29 de enero de 2019, a las 22:21 horas (constancia de entrega de foto-volante).

[105] Véase Anexo, evidencia 5. Informe de Policía de Investigación del 29 de enero de 2019.

[106] Véase Anexo, evidencia 10. Entrevista ministerial rendida por **Aidee Hernández Ávila (mujer víctima directa 2)**, el 5 de febrero de 2019, a las 14:00 horas, quien refiere que ya acudió a las instalaciones del C-5, en compañía de policía de investigación, con el propósito de revisar las videograbaciones correspondientes al 27 de enero del 2019.

[107] Véase Anexo, evidencia 8. Informe de Policía de Investigación del 30 de enero de 2019.

hasta ese momento, al parecer habían salido con dirección a Puebla. Además, proporcionó los ID de cámaras cercanas al domicilio del que salió **Natali Carmona Hernández (mujer víctima directa 1)** y brindó información de contexto respecto de la relación sentimental que tenía en ese momento con **P1 (pareja de Natali Carmona Hernández)** y la relación sentimental que había tenido anteriormente, así como datos del vehículo en que viajaban.[108]

80. Ese mismo día, se giraron diversos oficios de solicitud de colaboración a instituciones de salud, procuración de justicia, seguridad ciudadana de la Ciudad de México y otras autoridades para la búsqueda de **Natali Carmona Hernández (mujer víctima directa 1)** y **P1 (pareja de Natali Carmona Hernández)**. Consta en la carpeta de investigación que los acuses de recibo de cada oficio, que se identificaron en la carpeta, son de fechas posteriores a las 72 horas de haberse presentado la denuncia, salvo el oficio dirigido a la Coordinación General del Centro de Comando, Control, Cómputo, Comunicaciones y Contacto Ciudadano de la Ciudad de México.[109]

81. El 7 de febrero de 2019, en entrevista ministerial rendida por **Aidee Hernández Ávila (mujer víctima directa 2)** a las 11:00 horas, quedó asentada su solicitud para recabarle perfil genético, con el propósito de apoyar a las acciones de búsqueda y localización de su hija desaparecida, autorizando que le fueran tomadas muestras biológicas suficientes con la finalidad de determinar su perfil genético y realizar las confrontas necesarias.[110] Este dictamen fue entregado hasta 15 de marzo de 2019, a las 17:00 horas, cuando fue registrado por el agente del ministerio público adscrito a la FIPEDE.[111]

82. El 8 de febrero, a las 17:00 horas, el agente del Ministerio Público adscrito a la FIPEDE emitió un acuerdo mediante el cual ordenó la acumulación de la carpeta iniciada en la Agencia Investigadora IZP-8, de la entonces PGJ CDMX a la diversa iniciada por la desaparición de **Natali Carmona Hernández (mujer víctima directa 1)** en FIPEDE, al considerar que ambas indagatorias guardaban una relación directa por referirse a los mismos hechos y a las mismas personas involucradas.[112]

---

[108] Véase Anexo, evidencia 7.

[109] Véase Anexo, evidencia 115. Acta circunstanciada de 19 de febrero de 2024, suscrita por un Visitador Adjunto de la CDHCM.

[110] Véase Anexo, evidencia 12. Entrevista ministerial rendida a las 11:00 horas del 7 de febrero de 2019, por **Aidee Hernández Ávila (mujer víctima directa 2)**, ante el Agente del Ministerio Público adscrito a la FIPEDE.

[111] Véase Anexo, evidencia 34. Acta de determinación de 15 de marzo de 2019, a las 17:00 horas, suscrita por el Agente del Ministerio Público adscrito a la FIPEDE.

[112] Véase Anexo, evidencia 15. Acuerdo ministerial de acumulación de carpetas de investigación.

Hallazgo del cuerpo de P1, pareja de Natali Carmona Hernández (mujer víctima directa 1), en Puebla

83. El día 10 de febrero de 2019, a las 14:00 horas, personal adscrito a la Fiscalía de Investigación Metropolitana de la Fiscalía General de Justicia del Estado de Puebla Fiscalía General del Estado de Puebla (en adelante FGE Puebla) localizaron un cuerpo sin vida en un terreno junto al fraccionamiento Real de Segovia y Bulevar Aeropuerto de Huejotzingo, con registro de coordenadas del hallazgo, el cual posteriormente se supo que correspondía a **P1 (pareja de Natali Carmona Hernández)**.[113] El 12 de febrero de 2019, el agente del ministerio público, adscrito a FIPEDE, registró como acto de investigación una llamada telefónica, realizada por **P2 (hermana de la pareja de Natali Carmona Hernández)**, quien le informó que, a través de redes sociales, le había sido compartida una noticia relacionada con el hallazgo de dos cadáveres en estado de descomposición en el municipio de San Martín Texmelucan, Puebla, lo cual hizo del conocimiento de la autoridad ministerial para que se verificara su posible relación con los hechos investigados.[114]

84. Derivado del registro anterior, entre el 12 y 13 de febrero de 2019,[115] el agente del ministerio público adscrito a la FIPEDE asentó que realizó cuatro llamadas telefónicas al agente del ministerio público en Puebla, sin que pudiese establecer enlace correspondiente. Posteriormente, registró una llamada telefónica con **P2 (hermana de P1, pareja de Natali Carmona Hernández)**, en la que le sugería a la familia acudir por su cuenta al Instituto de Ciencias Forenses del Estado de Puebla para dar la media filiación de **P1 (pareja de Natali Carmona Hernández)** y que con ella se realizaría la confronta con los cadáveres localizados.[116]

85. El 13 de febrero del 2019, a las 14:35, se registró la llamada telefónica de **Aidee Hernández Ávila (mujer víctima directa 2)**, durante la cual el agente ministerial adscrito a la FIPEDE le sugirió acudir por su cuenta al Instituto de Ciencias Forenses del Estado de Puebla, debido a que, hasta ese momento, no había logrado establecer comunicación con la FGE Puebla. **Aidee Hernández Ávila (mujer víctima directa 2)** agregó que ya habían reportado la desaparición de su

---

[113] Véase Anexo, evidencia 17. Oficio en el que consta el acta de inspección del lugar y levantamiento de cadáver, elaborado por el agente del ministerio público, adscrito a la Fiscalía de Investigación Metropolitana de la Fiscalía General del Estado de Puebla.

[114] Véase Anexo, evidencias 18 y 19. La evidencia (18) corresponde al registro de actos de investigación ministerial del 12 de febrero de 2019, suscrito por el Agente del Ministerio Público adscrito a la FIPEDE, y la evidencia (19) corresponde a la impresión de un mensaje de correo electrónico.

[115] Véanse Anexo, evidencias 20 y 21. La evidencia (20) corresponde al registro de acto de investigación ministerial de las 17:45 horas del 12 de febrero del año 2019, suscrito por el Agente del Ministerio Público adscrito a FIPEDE, y la evidencia (21) corresponde al registro de acto de investigación ministerial de las 11:30 horas del 13 de febrero del año 2019, suscrito por el Agente del Ministerio Público adscrito a la FIPEDE.

[116] Véase Anexo, evidencia 22. Registro de acto de investigación ministerial de las 13:10 horas del 13 de febrero del año 2019, suscrito por el Agente del Ministerio Público adscrito a la FIPEDE.

hija en el estado de Puebla y que constantemente llamaban al Locatel de dicha entidad, pero que habían obtenido resultados negativos hasta ese momento.[117]

86. El 15 de febrero de 2019, **P2 (hermana de P1, pareja de Natali Carmona Hernández)** informó al agente del Ministerio Público adscrito a la FIPEDE, que ya había sido localizado el cuerpo de su hermano **P1 (pareja de Natali Carmona Hernández)** el 10 de febrero 2019, en el Instituto de Ciencias Forenses del Estado de Puebla y que ninguno de los cadáveres localizados el pasado 10 de febrero de 2019 correspondía a las características de **Natali Carmona Hernández, (mujer víctima directa 1).**[118]

87. Ese mismo día, 15 de febrero de 2019, el agente del ministerio público adscrito a la FIPEDE, giró los primeros oficios de colaboración al Estado de Puebla, en específico, al Instituto de Ciencias Forenses de la FGE Puebla, en donde solicitó que se realizara la confronta nominal y por media filiación de **Natali Carmona Hernández, (mujer víctima directa 1)** y de **P1 (pareja de Natali Carmona Hernández).**[119]

88. Posteriormente, a las 20:00 horas, se registró como acto de investigación una llamada telefónica de **Aidee Hernández Ávila (mujer víctima directa 2)**, quien informó al agente ministerial de FIPEDE sobre la localización de **P1 (pareja de Natali Carmona Hernández)**. También señaló que familiares de este último habían proporcionado la media filiación de **Natali Carmona Hernández (mujer víctima directa 1)**, sin que se hubiera localizado a alguna persona que correspondiera con sus características. El agente del ministerio público adscrito a la FIPEDE asentó que nuevamente sugirió a las y los familiares de **Natali Carmona Hernández (mujer víctima directa 1)**[120] que acudieran a Puebla en cuanto les fuera posible para que hicieran otra búsqueda en sus archivos y que llevaran la identificación

---

[117] Véase Anexo, evidencia 23. Registro de acto de investigación ministerial de las 14:35 horas del 13 de febrero del año 2019, suscrito por el Agente del Ministerio Público adscrito a la FIPEDE.

[118] Véase Anexo, evidencia 24. Registro de acto de investigación ministerial de las 19:45 horas del 15 de febrero de 2019, suscrito por el Agente del Ministerio Público adscrito a FIPEDE de la PGJ CDMX.

[119] Véase Anexo, evidencia 26. Oficio de 15 de febrero de 2019 suscrito por Agente del Ministerio Público adscrito a la FIPEDE de la PGJ CDMX (hoy FGJ CDMX), dirigido a la FGE Puebla.

[120] Cabe destacar que, previamente, el 13 de febrero de 2019, el agente del Ministerio Público ya había indicado a los familiares de la persona desaparecida que acudieran por su propia cuenta al Instituto de Ciencias Forenses del Estado de Puebla, sin que se advirtiera la adopción de medidas de apoyo, acompañamiento o coordinación institucional para facilitar dicha diligencia. Ello, bajo el argumento de que hasta ese momento no había logrado establecer comunicación con la Fiscalía General del Estado de Puebla. En esa misma comunicación, la familiar informó que la desaparición ya había sido reportada en dicha entidad y que, pese a las consultas permanentes realizadas a Locatel Puebla, no habían obtenido información sobre su paradero.

oficial de **Natali Carmona Hernández (mujer víctima directa 1)** que tienen en su poder.[121]

89. Mediante solicitud de acto de investigación, presentada el 20 de febrero de 2019 a las 16:48 horas,[122] el Subprocurador de Averiguaciones Previas Centrales de la entonces PGJ CDMX solicitó al Juez de Control en turno, adscrito al Centro Nacional de Justicia Especializado en Control de Técnicas de Investigación, Arraigo e Intervención de Comunicaciones, con residencia en la Ciudad de México, los datos conservados del objetivo telefónico vinculado a **P1 (pareja de Natali Carmona Hernández)**, resolviéndose la entrega de los mismos mediante resolución judicial emitida ese mismo día.[123]

90. El 28 de febrero de 2019, la entonces PGJ CDMX, en oficio suscrito por el titular de FIPEDE, el Subprocurador de Averiguaciones Previas Centrales y el Agente del Ministerio Público encargado de la agencia, giró una segunda solicitud de colaboración dirigida a la Fiscalía General de Justicia en el Estado de Puebla, en la que solicitó el inicio de la carpeta de investigación para la búsqueda y localización de **Natali Carmona Hernández (mujer víctima directa 1)**; la difusión de foto-volantes en medios masivos de comunicación; la realización de búsquedas nominales en agencias del Ministerio Público, servicios médicos forenses, instituciones de salud y albergues del estado de Puebla; la solicitud de información sobre el vehículo color gris plata en el que viajaban **Natali Carmona Hernández (mujer víctima directa 1)** y su pareja; así como la práctica de una inspección ocular en terrenos de cultivo ubicados en Huejotzingo, Puebla, con apoyo de binomios caninos especializados y personal pericial, con el propósito de localizar indicios que permitieran establecer su paradero.[124]

91. El 12 de abril de 2019, a las 18:00 horas, el agente ministerial adscrito a la FIPEDE determinó que se realizaron todas las diligencias necesarias tendientes a la búsqueda y localización de **Natali Carmona Hernández (mujer víctima directa 1)**, determinando la remisión íntegra de la carpeta de investigación a la FGE Puebla, toda vez que existen indicios suficientes para considerar que la desaparición de

---

[121] Véase Anexo, evidencia 25. Registro de acto de investigación ministerial de las 20:00 horas del 15 de febrero de 2019, suscrito por el Agente del Ministerio Público adscrito a FIPEDE de la PGJ CDMX.

[122] Véase Anexo, evidencia 27. Oficio de 18 de febrero de 2019 suscrito por el Subprocurador de Averiguaciones Previas Centrales de la PGJ.

[123] Véase Anexo, evidencia 28. Resolución judicial del 20 de febrero de 2019, emitida por la Jueza Tercera de Control adscrita al Centro Nacional de Justicia Especializado en Control de Técnicas de Investigación, Arraigo e Intervención de Comunicaciones, en la Ciudad de México.

[124] Véase Anexo, evidencia 31. Oficio de colaboración interestatal del 28 de febrero de 2019, suscrito por el Subprocurador de Averiguaciones Previas Centrales, el Fiscal Especial en Búsqueda, Localización e Investigación de Personas Desaparecidas y el Encargado de agencia, todos adscritos a la de la PGJ CDMX, dirigido al Encargado de Despacho, adscrito a la FGE Puebla.

Natali Carmona Hernández (mujer víctima directa 1) y **P1 (pareja de Natali Carmona Hernández)** ocurrieron en dicha entidad federativa.[125]

92. El 19 de septiembre de 2019, a las 9:37 horas, a través de correo electrónico, **Aidee Hernández Ávila (mujer víctima directa 2)** presentó una queja ante esta Comisión derivado de la ausencia de seriedad, exhaustividad y oportunidad de la FIPEDE en realizar acciones de búsqueda para localizar a **Natali Carmona Hernández (mujer víctima directa 1)**. Además, señaló que el remitir la carpeta de investigación al estado de Puebla era un acto que considerada infundado.[126]

Actuaciones de la FIPEDE, en el marco de la colaboración solicitada por la FGE Puebla para la localización de Natali Carmona Hernández (mujer víctima directa 1)

93. El 2 de diciembre de 2019, diez meses después del hallazgo del cuerpo de **P1 (pareja de Natali Carmona Hernández)** y siete meses después de haber remitido la carpeta de investigación al estado de Puebla, la FIPEDE acordó el inicio de la colaboración con la FGE Puebla, solicitada por dicha Fiscalía el 15 de noviembre de 2019, con el objeto de realizar diversas diligencias dirigidas a la localización de **Natali Carmona Hernández (Mujer Víctima Directa 1)**, relacionadas con la carpeta de investigación iniciada en FIPEDE.[127]

94. En el acuerdo se tuvo por iniciada la colaboración en la investigación y persecución del delito de desaparición cometida por particulares, a efecto de realizar las diligencias solicitadas en relación con la no localización de Natali Carmona Hernández, de 31 años de edad. De acuerdo con la información verificada por esta Comisión, las diligencias realizadas entre el 2 de diciembre y el 23 de abril de 2021 se practicaron en vía de colaboración con la FGE Puebla, hasta que se abrió nuevamente una carpeta de investigación en FIPEDE por la desaparición de **Natali Carmona Hernández (mujer víctima directa 1)** en febrero de 2021, como se desarrolla más adelante.[128]

95. Durante el mes de diciembre de 2019, la FIPEDE emprendió diversos actos de investigación solicitados por la FGE Puebla, consistentes en entrevistas ministeriales a familiares de **P1 (pareja de Natali Carmona Hernández)** y a **Aidee**

---

[125] Véase Anexo, evidencia 38. Acuerdo ministerial de incompetencia y declinatoria territorial a favor de la FGE Puebla de las 18:00 horas del 12 de abril de 2019, suscrito por el Agente del Ministerio Público adscrito a FIPEDE de la FGJ CDMX, que obra en la carpeta de investigación.

[126] Véase Anexo, evidencia 39. Constancia de correo electrónico del 19 de septiembre de 2019 enviado a esta Comisión, a las 09:37 horas, el cual costa en el expediente CDHDF/IV/122/IZTP/19/D7001.

[127] Véase Anexo, evidencia 47. Acuerdo ministerial de las 19:36 horas del 2 de diciembre de 2019, suscrito por el Agente del Ministerio Público, adscrito a la FIPEDE de la PGJ CDMX, que obra en la carpeta de investigación, mediante el cual se tiene por recibido el oficio de 27 de noviembre de 2019, proveniente de la Fiscalía de Asuntos Jurídicos y Derechos Humanos de la FGE Puebla.

[128] Véase Anexo, evidencia 47.

Hernández Ávila (mujer víctima directa 2), búsquedas nominales en diversas instituciones de salud, entre otras. Del oficio de colaboración de la FGE Puebla se advierte, como última solicitud, la realización de *"toda diligencia que se estime pertinente para el esclarecimiento de los presentes hechos".*[129]

96. El 4 de junio de 2020 se rindió informe de análisis de contexto por parte de la Coordinación General de Investigación de Delitos de Género y Atención a Víctimas de la FGJ CDMX, en el cual se sugirieron diversos actos de investigación,[130] tales como la ampliación de entrevistas a familiares de **Natali Carmona Hernández (mujer víctima directa 1)** y de su pareja, para identificar números telefónicos, cuentas de redes sociales y otros medios de comunicación utilizados; el análisis de dicha información por parte de la Policía Cibernética y, de ser posible, el rastreo de su ubicación; la elaboración de un dictamen en Trabajo Social para identificar sus relaciones familiares; la continuación de la búsqueda del vehículo en el que presuntamente viajaban; la realización de entrevistas a personas de interés mediante mecanismos de colaboración con las autoridades del estado de Puebla; la obtención y análisis de datos conservados de números telefónicos, así como entrevistas a sus titulares; la solicitud de información bancaria, previa autorización judicial, y la obtención del perfil genético de su padre para su confronta con las bases de datos correspondientes.

97. El 2 de septiembre de 2020, el titular de la Fiscalía Especializada en Desaparición de la FGE Puebla remitió a la FGJ CDMX la carpeta de investigación iniciada por la desaparición de **Natali Carmona Hernández (mujer víctima directa 1)**, *"toda vez que de los hechos que se desprenden de la misma son materia de su competencia, lo anterior a fin de que se determine conforme a derecho".*[131] Sin que se emitiera un acuerdo de apertura de carpeta de investigación por parte de la FGJ CDMX.

98. El 5 de octubre de 2020 se llevó a cabo una mesa de trabajo con diversas autoridades, entre ellas la titular de la Fiscalía General de Justicia de la Ciudad de México, el titular de FIPEDE, CBP CDMX, CEAVI CDMX, así como **Aidee**

[129] Véase Anexo, evidencia 46. Oficio del 15 de noviembre de 2019, suscrito por la Agente de Ministerio Público adscrito a la Fiscalía Especializada para la Investigación y Persecución de Delitos de Desaparición Forzada de Personas y Desaparición Cometida por Particulares de la FGE Puebla, dirigido al Encargado del Despacho de la Fiscalía de Asuntos Jurídicos y Derechos Humanos.

[130] Véase Anexo, evidencia 58. Informe de análisis de contexto de la Coordinación General de Investigación de Delitos de Género y Atención a Víctimas y limitación de diligencias de 4 de junio de 2020.

[131] Véase Anexo, evidencia 64. Oficio del 2 de septiembre de 2020, suscrito por el titular de la Fiscalía Especializada en Desaparición de FGE Puebla, dirigido a la entonces titular de la FGJ CDMX.

Hernández Ávila (mujer víctima directa 2) en la que se expusieron actos de investigación próximos a realizarse.[132]

99. Mediante oficio de 30 de noviembre de 2020,[133] la Unidad de Asuntos Internos, en atención a una solicitud formulada por la Dirección General de Derechos Humanos de la FGJ CDMX, informó a esta Comisión sobre las acciones realizadas con motivo del estudio técnico-jurídico de la integración de las carpetas de investigación relacionadas a la desaparición de **Natali Carmona Hernández (mujer víctima directa 1)**, cuyo objeto consistía en determinar la existencia de posibles irregularidades en su integración. El 20 de septiembre de 2021, la Unidad de Asuntos Internos determinó procedente el inicio del procedimiento disciplinario en contra de tres agentes ministeriales de la FIPEDE, por la existencia de irregularidades en la búsqueda e investigación de la desaparición de **Natali Carmona Hernández (mujer víctima directa 1)**, en el marco del trámite de la carpeta de investigación iniciada.[134]

100. En octubre de 2022, el Consejo de Asuntos Internos de la FGJ CDMX, en el marco de un procedimiento disciplinario, determinó la responsabilidad administrativa de tres personas servidoras públicas que intervinieron en la carpeta de investigación iniciada con motivo de la desaparición de **Natali Carmona Hernández (mujer víctima directa 1)**, a quienes impuso una amonestación por diversas omisiones en

---

[132] Véase Anexo, evidencia 67. Minuta de Reunión interinstitucional, de 5 de octubre de 2020, coordinada entre **Aidee Hernández Ávila (mujer víctima directa 2)**, y autoridades de la FGJ CDMX, FIPEDE, CBP CDMX y la CEAVI CDMX, la cual obra en el expediente de la CBP CDMX. Se acordaron los siguientes puntos: (1) instruir a la Policía de Investigación para identificar y establecer la ubicación **de P3 (amigo de P1, pareja de Natalia Carmona Hernández)** y otras personas de interés para la investigación; (2) elaborar el *modus vivendi* de la presunta pareja de **P3 (amigo de P1, pareja de Natalia Carmona Hernández) y P2 (hermana de la pareja de Natali Carmona Hernández)**; (3) realizar investigación de gabinete respecto de tres personas de interés identificadas en la carpeta de investigación, incluyendo el análisis de su movilidad en los estados de Puebla y Tlaxcala; (4) proponer el acompañamiento de la Comisión de Búsqueda a la denunciante en futuras jornadas de búsqueda; (5) solicitar la colaboración de las autoridades de los estados de México y Puebla para dar seguimiento a la posible localización del vehículo; (6) practicar diligencias periciales y de investigación sobre dicho vehículo; (7) acudir nuevamente al domicilio de la esposa de **P1 (pareja de Natalia Carmona Hernández)**, para realizar mayores actos de investigación; (8) obtener la respuesta de BBVA Seguros; (9) coordinarse con la Fiscalía del Estado de Puebla para el análisis jurídico y la consulta de la carpeta de investigación relacionada con el homicidio de **P1 (pareja de Natalia Carmona Hernández)**; (10) analizar e investigar los indicios incorporados a la carpeta relativos a un posible hallazgo en el estado de Veracruz; (11) mantener la investigación respecto de la presunta pareja de **P3 (amigo de P1, pareja de Natalia Carmona Hernández)**, verificando sus llamadas telefónicas y el domicilio; (12) analizar la línea telefónica de **Natali Carmona Hernández (mujer víctima directa 1)**; (13) investigar los indicios obtenidos de Facebook relacionados con posibles fosas y bodegas, y (14) realizar un análisis jurídico sobre la viabilidad de exhumar el cuerpo de **P1 (pareja de Natalia Carmona Hernández)** para confirmar su identidad mediante estudios genéticos.

[133] Véase Anexo, evidencia 70. Oficio de 30 de noviembre de 2020, suscrito por el Agente del Ministerio Público, adscrito en la Fiscalía de Supervisión, de la Unidad de Asuntos Internos de la FGJ CDMX, en respuesta a requerimiento de información de la CDHCM.

[134] Véase Anexo, evidencia 82. Acuerdo de Conclusión de Investigación de las 17:20 horas del 20 de septiembre de 2021 suscrito por la Agente del Ministerio Público adscrita a la Unidad de Asuntos Internos de la FGJ CDMX.

la conducción de la investigación, entre las que destaca la declinación de competencia a favor de las autoridades del estado de Puebla.[135]

Segunda denuncia de hechos, realizada ante FIPEDE

101. El 23 de marzo de 2021, **Aidee Hernández Ávila (mujer víctima directa 2)** manifestó a esta Comisión que tenía conocimiento de que, aproximadamente un mes antes, se habría iniciado una carpeta de investigación en FIPEDE. También agregó que, después de dos años, le dieron acceso a la consulta de las carpetas de investigación referidas. **Aidee Hernández Ávila (mujer víctima directa 2)** señaló que, a pesar de que están realizando algunas gestiones, considera que hay omisiones en la integración de la carpeta.[136]

102. Así pudo corroborarse que, efectivamente, el **23** de febrero de 2021, FIPEDE dio inicio a diversa carpeta de investigación por el delito de desaparición cometida por particulares, cometido en contra de **Natali Carmona Hernández (mujer víctima directa 1)**, derivado de la denuncia presentada por **Aidee Hernández Ávila (mujer víctima directa 2)**.[137]

103. El 21 de septiembre de 2021, la Agencia de Género de la Unidad de Asuntos Internos de la FGJ CDMX emitió una serie de 12 recomendaciones estratégicas para impulsar la carpeta de investigación iniciada por el delito desaparición cometida por particulares en agravio de **Natali Carmona Hernández (mujer víctima directa 1)**.[138]

VII.2 Diligencias de búsqueda forense in situ realizadas en terreno de Puebla

104. Entre el 15 de abril de 2020 y marzo de 2022, personal de FIPEDE, CBP CDMX, FGE Puebla y otras autoridades emprendieron cuatro acciones de búsqueda en el terreno de cultivo ubicado en Boulevard Aeropuerto, Huejotzingo, Estado de Puebla, en el lugar donde se encontró el cuerpo de **P1 (pareja de Natali Carmona Hernández)**, con la finalidad de localizar a **Natali Carmona Hernández (mujer víctima directa 1)**. A continuación, se realiza un resumen de las diligencias.

---

[135] Véase Anexo, evidencia 118. Resolución administrativa, emitida el 04 de octubre de 2022, en el procedimiento disciplinario del Consejo de Asuntos Internos de FGJ-CDMX, mediante la cual se determina la responsabilidad administrativa de tres servidores públicos adscritos a la institución.

[136] Véase Anexo, evidencia 73. Acta circunstanciada de comparecencia del 23 de marzo de 2021, recabada por persona visitadora adjunta, a la peticionaria **Aidee Hernández Ávila (mujer víctima directa 2)**.

[137] Véase Anexo, evidencia 72. Acuerdo ministerial de inicio de investigación de 23 de febrero de 2021 suscrito por Agente del Ministerio Público adscrito a FIPEDE de la FGJ CDMX, a través del cual se ordena el inicio formal de la carpeta de investigación por desaparición cometida por particulares en agravio de **Natali Carmona Hernández (mujer víctima directa 1)**.

[138] Véase Anexo, evidencia 83.

105. El 15 de abril de 2020[139] se llevó a cabo la primera diligencia de búsqueda forense en un terreno de cultivo de 10,000 metros cuadrados (50 por 200 metros) ubicado al noreste del municipio de Huejotzingo, Puebla, en coordenadas similares a las del terreno donde se encontró el cuerpo de **P1 (pareja de Natali Carmona Hernández)**. En las labores participaron la CBP CDMX, la CBP de Puebla, la Fiscalía Especializada del Estado de Puebla, FIPEDE, Policía Municipal de Huejotzingo, PDI adscrita a FIPEDE[140] y una perita en antropología forense de Servicios Periciales de la CDMX. Como equipo y metodología, se emplearon binomios caninos, recorridos de superficie en transectos (plotless method) de 3 metros, varilla T para evaluar compactación y profundidad del suelo, y observación del entorno.[141] En el informe emitido por la CBP CDMX se señaló, entre otras observaciones, que el binomio canino que acudió a la diligencia no estaba entrenado para detectar tejido óseo sino únicamente tejido blando en putrefacción, así como que la FGE Puebla determinó que no era factible el uso de Georradar.[142]

106. El resultado de la diligencia fue negativo, ya que no fue posible localizar indicios relacionados con **Natali Carmona Hernández (mujer víctima directa 1)**, concluyendo la diligencia a las 13:30 horas.[143]

107. El 3 de julio de 2020 se desarrolló la segunda diligencia de búsqueda[144] en un predio con una superficie examinada de 300 metros cuadrados, en el municipio de Huejotzingo, Puebla, aproximadamente a 1 kilómetro de distancia[145] del lugar de hallazgo de **P1 (pareja de Natali Carmona Hernández)**. En este operativo participaron elementos de PDI adscritos a FIPEDE, una perita en antropología forense de Servicios Periciales de la CDMX y la AMP adscrita a la FGE Puebla[146] Los resultados fueron negativos, ya que el binomio no detectó indicios biológicos y

---

[139] Véase Anexo, evidencia 52. Informe de acciones de búsqueda del 15 de abril de 2020, emitido por personas servidoras públicas de la CBP CDMX.

[140] Véase Anexo, evidencia 54. Oficio del 23 de abril de 2020, suscrito por policía de investigación policía de investigación de la CDMX.

[141] Véase Anexo, evidencia 53. Dictamen del del 23 de abril de 2020, suscrito por la perita en antropología forense adscrita a servicios periciales de la CDMX y comisionada de FIPEDE.

[142] Véase Anexo, evidencia 52.

[143] Anexo, evidencias 52 y 54.

[144] Véase Anexo, evidencia 59, 60 y 61. La evidencia (59) corresponde al oficio de 2 de julio de 2020, suscrito por el Agente del Ministerio Público adscrito a la FIPEDE, dirigido a la Fiscalía Especializada de Desaparición de Puebla, el cual consta en la carpeta de investigación; la evidencia (60) corresponde al oficio del 10 de julio de 2020, suscrito por Policía de Investigación de la FGJ CDMX, dirigido al Agente del Ministerio Público, adscrito a FIPEDE de la FGJ CDMX, el cual consta en la carpeta de investigación, y la evidencia (61) corresponde al informe en antropología forense, suscrito por la especialista en Antropología Forense, adscrita a servicios periciales de la CDMX y comisionada de FIPEDE del 14 de julio de 2020.

[145] Véase Anexo, evidencias 17 y 61.

[146] Véase Anexo, evidencia 60.

las herramientas no registraron alteraciones antropogénicas en el subsuelo, concluyendo las acciones aproximadamente a las 12:00 horas.[147]

108. El 15 de febrero de 2022 se llevó a cabo la tercera diligencia de búsqueda en el terreno de cultivo correspondiente a la parcela 881 en Santa Ana Xalmimilulco, municipio de Huejotzingo, Puebla. En esta diligencia participaron CBP CDMX, en coordinación con FIPEDE y autoridades del estado de Puebla. La metodología implementada incluyó técnicas de fijación con coordenadas, medición de la zona, excavación de pozos de sondeo, extracción de tierra y tamizado. Como resultado de la prospección geofísica realizada una vez que se georreferenció el sitio del hallazgo de **P1 (pareja de Natali Carmona Hernández),**[148] a las 15:00 horas y a de 0.40 metros del tercer pozo, en el cuarto punto de interés, se localizaron pedazos de tela, guantes *"aparentemente de la primer intervención de personal de la Fiscalía General del Estado"*[149] y un fragmento óseo aparentemente humano; posteriormente, a las 15:23 horas se halló un fragmento de húmero y, a las 17:28 horas, a una profundidad de 0.60 metros, se descubrieron más restos óseos correspondientes al arco costal en posición decúbito dorsal. Consta del Dictamen de la perita en antropología forense que el hallazgo se realizó a metros de distancia de donde se localizó a **P1 (pareja de Natali Carmona Hernández)** sin vida[150].

109. Por su parte, el informe de la CBP CDMX refiere que en esta ocasión sí se utilizó georradar, lo que permitió detectar anomalías en el área, determinando así la zona de excavación. Se destacó que "*el punto de mayor interés en la búsqueda fue el lugar del hallazgo del occiso con el nombre de "[...]" pareja de la desaparecida* [**Natali Carmona Hernández (mujer víctima directa 1)**]*".*[151]

110. Ante la zona de hallazgo, FIPEDE intervino para solicitar la participación de personal pericial del Instituto de Ciencias Forenses de Puebla, para el embalaje correspondiente, concluyendo las acciones a las 19:30 horas con resultados positivos.[152]

---

[147] Anexo, evidencia 61.

[148] Véase Anexo, evidencia 86. Tarjeta informativa del 15 de febrero de 2022, la cual consta dentro del expediente de la CBP CDMX.

[149] Véase Anexo, evidencia 88. Reporte de acciones búsqueda de 18 de febrero de 2022, suscrito por la Directora de Acciones de Búsqueda adscrita a la Comisión de Búsqueda de Personas del Estado de Puebla.

[150] Véase Anexo, evidencia 87. Informe de diligencia de búsqueda en campo y antropología forense de 18 de febrero de 2022 realizada en Huejotzingo, Puebla, suscrito por la Experta en Antropología Forense adscrita a la Coordinación General de Investigación Forense y Servicios Periciales FGJ CDMX.

[151] Véase Anexo, evidencia 86.

[152] Véase Anexo, evidencia 88.

111. En respuesta al requerimiento formulado por esta Comisión, la FGJ CDMX informó mediante oficio de fecha 16 de marzo de 2022[153] que, derivado de la inspección ministerial realizada el 15 de febrero del mismo año en el municipio de Huejotzingo, Puebla, personal ministerial y pericial adscritos a la FGJ CDMX recabó muestras directas de los restos óseos hallados en el sitio.[154] Asimismo, la autoridad ministerial confirmó que el análisis genético practicado a dichas muestras por la perita en genética forense arrojó una compatibilidad del parentesco biológico 99.9999%[155] con el perfil genético de **Aidee Hernández Ávila (mujer víctima directa 2)**.[156]

112. En fechas 14, 15 y 16 de marzo de 2022, la CBP CDMX participó, junto a autoridades de Puebla y personal de la Guardia Nacional, en la búsqueda de los restos óseos faltantes de **Natali Carmona Hernández (mujer víctima directa 1)**, en el mismo lugar de hallazgo de los restos óseos ocurrido en febrero de 2022.[157]

113. El 14 de marzo de 2022, se localizaron 18 fragmentos de tela y 5 aretes; el día 15 de marzo de 2022, se localizaron estructuras óseas y el día 16 de marzo de 2022, se localizaron restos óseos adicionales. Nuevamente se recuperaron fragmentos de tela y un arete, así como dos fragmentos de hueso largo.[158] Esta Comisión no tiene información relacionada con la identificación forense de los restos óseos localizados en esta cuarta intervención.

VII.3 Diligencias de identificación forense, notificación y restitución de Natali Carmona Hernández (Mujer Víctima Directa 1)

[153] Véase Anexo, evidencia 104. Oficio de 16 de marzo de 2022, suscrito por el Agente del Ministerio Público adscrito a la a FIPEDE de la FGJ CDMX, dirigido a la Subdirectora de enlace de la Dirección General de Derechos Humanos de la FGJ CDMX.

[154] Véanse Anexo, evidencias 90, 91, 92, 93 y 94. La evidencia (90) corresponde al oficio de colaboración interestatal de 18 de febrero de 2022, suscrito por el Agente del Ministerio Público de la FIPEDE, mediante el cual se solicita a la FGE Puebla que autorice a la perita en genética forense a recabar el perfil genético de los restos óseos hallados. Las evidencias (91), (92), (93) y (94) corresponden a los informes periciales de toma de muestras biológicas de dichos restos para la obtención de perfiles genéticos y futuras confrontas, suscritos por la perita en genética forense de la FGJ CDMX.

[155] Véanse Anexo, evidencias 99 y 104. La evidencia (99) corresponde al oficio del 02 de marzo de 2022 suscrito por el Agente del Ministerio Público Encargado de la Agencia "D", de la FIPEDE, dirigido al titular de la FGE Puebla.

[156] Véase Anexo, evidencia 97. Dictamen en genética forense de confronta de perfiles genéticos del 24 de febrero de 2022, emitido por la Coordinación General de Investigación Forense y Servicios Periciales y suscrito por la especialista de la FGJ CDMX.

[157] Véase Anexo, evidencia 105. Informe sobre el caso de **Natali Carmona Hernández (mujer víctima directa 1)**, registrado en el expediente de la CBP CDMX.

[158] Véase Anexo, evidencia 105. El informe de CBP CDMX concluye lo siguiente: *"Es necesario añadir en este punto que, de acuerdo con los hallazgos recuperados, no se tiene ninguna certeza de que las extremidades superiores faltantes hayan estado en la fosa, puesto que en el área de cribado no se encontró ningún fragmento óseo que pudiera dar cuenta de ello".*

114. El 18 de febrero de 2022, la FGJ CDMX solicitó a la FGE PUEBLA, al menos en dos ocasiones, que se permitiera al personal pericial asignado la entrada a Puebla para recabar el perfil genético de los restos óseos hallados durante las jornadas de búsqueda de 15 de febrero de 2022.[159]

115. El 19 de febrero de 2022, la perita en materia de genética forense adscrita a la FGJ CDMX informó que se realizó la recolección de muestras de la osamenta desconocida, las cuales remitió al laboratorio de Genética Forense de la FGJ CDMX para su análisis. En los informes consta una nota donde se señala que las muestras fueron recabadas por órdenes del agente del ministerio público de la FGJ CDMX en donde se le indicó a la perita en materia de genética forense, que realizara la toma de muestras sin que aun haya intervenido el área de antropología forense.[160]

116. El 22 de febrero de 2022, el representante adjunto en México de la Alta Comisionada de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos, envió un oficio al Fiscal General del Estado de Puebla, con copia a la Fiscal General de Justicia de la Ciudad de México, en donde se asentó que con motivo del hallazgo de los restos mortales de una persona aún por identificar, se alentó a que dichos restos fueran tratados con respeto y dignidad y, conforme a lo establecido en la LGMDFPyDP, se llevaran a cabo sin demora todas las acciones que sean necesarias para su plena identificación científica siguiendo los más altos estándares y con la plena participación de la familia.[161]

117. En fecha 24 de febrero de 2022, la perita en genética forense adscrita a la FGJ CDMX emitió un informe a través del cual señaló que se obtuvo un resultado positivo o concordante en el estudio de confronta de los indicios A (clavícula derecha), A.2 (metatarsiano), con el material genético obtenido de **Aidee Hernández Ávila (mujer víctima directa 2)**.[162]

118. El 25 de febrero de 2022, la FGJ CDMX notificó a la familia que, de acuerdo con las pruebas periciales practicadas, se obtuvo que la osamenta localizada por personal de la CBP CDMX correspondió a **Natali Carmona Hernández (mujer víctima directa 1)**, respecto de lo cual **Aidee Hernández Ávila (mujer víctima directa 2)**

---

[159] Véase Anexo, evidencia 89. Oficio FGJCDMX/CGIDGAV/COL/00088/2022-02, de 18 de febrero de 2022, suscrito por la Coordinadora General de Investigación de Delitos de Género y Atención a Víctimas de la FGJ CDMX,

[160] Véanse Anexo, evidencias 91, 92, 93 y 94. Informes periciales de toma de muestra biológica en restos óseos para la obtención de perfil genético y futuras.

[161] Véase Anexo, evidencia 95. Escrito de número OACNUDH/REP021/2022, de 21 de febrero de 2022, suscrito por el Representante Adjunto en México de la Alta Comisionada de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos, el cual consta en el expediente de colaboración institucional FGE Puebla y FGE CDMX, anexo a la carpeta de investigación.

[162] Véanse Anexo, evidencias 97 y 104.

solicitó se permitiera a la familia tener una revisión ocular de dicha osamenta previo al traslado a la Ciudad de México, para tener certeza de que se encontraba completa.[163]

119. Los días 1 y 2 de marzo de 2022, la FIPEDE solicitó a la FGE Puebla la entrega de los restos óseos en posesión de dicha institución a favor de **Aidee Hernández Ávila (mujer víctima directa 2),** toda vez que se ha comunicado a la familia los resultados de concordancia en genética forense practicados por FGJ CDMX. En ambos oficios se solicitó que se anexaran los dictámenes en genética y antropología practicados emitidos por FGE Puebla.[164] En el segundo se solicitó, además, que se permitiera el acceso de dos agentes de policía de investigación de la FGJ CDMX al estado de Puebla.[165]

120. Consta en el expediente de colaboración entre la FGE Puebla y la FIPEDE que los días 3 y 7 de marzo de 2022, se practicaron los dictámenes en genética y antropología forenses solicitados a inicios de dicho mes, que arrojaron resultados positivos en la identificación de rasgos y genética de **Natali Carmona Hernández (mujer víctima directa 1)**.[166]

121. El 11 de marzo de 2022, el Servicio Médico Forense del estado de Puebla presentó a las y los familiares de **Natali Carmona Hernández (mujer víctima directa 1)**, los resultados de los análisis en materia de identificación forense obtenidos de la osamenta recuperada el día 15 de febrero de 2022, siendo positivos. En las imágenes presentadas por los especialistas se alcanzan a visibilizar ausencias importantes de elementos óseos.[167]

122. En fecha 18 de abril de 2022, **Aidee Hernández Ávila (mujer víctima directa 2)** acudió a las instalaciones de la FGE Puebla para solicitar información respecto a la restitución de restos de **Natali Carmona Hernández (mujer víctima directa 1)**, por

---

[163] Véase Anexo, evidencia 100. Tarjeta informativa de 2 de marzo de 2022 que obra en el expediente de la CBP CDMX.

[164] Véanse Anexo, evidencias 98 y 99. La evidencia (98) corresponde al oficio del 1 de marzo de 2022, suscrito por el Agente del Ministerio Público Encargado de la Agencia "D" de la FIPEDE, dirigido al titular de la Fiscalía General de Justicia de Puebla, el cual obra en la carpeta de investigación, la evidencia (99) corresponde al oficio, del 2 de marzo de 2022, suscrito por el Agente del Ministerio Público Encargado de la Agencia "D" de la FIPEDE, dirigido al titular de la Fiscalía General de Justicia de Puebla, el cual obra en la carpeta de investigación

[165] Anexo, evidencia 99.

[166] Véase Anexo, Evidencia 101. Dictamen pericial en genética forense de confronta de perfiles genéticos de 03 de marzo de 2022, suscrito por el Perito en Genética Forense, adscrito al Instituto de Ciencias Forenses de la FGE Puebla.

[167] Véase Anexo, Evidencia 103. Informe de 11 de marzo de 2022, registrado en la CBPCDMX, que obra en el expediente de la CBP CDMX.

lo que, hasta la madrugada del día siguiente, le hicieron del conocimiento que se haría entrega de los restos.[168]

123. El 21 de abril de 2022, de acuerdo con el testimonio de la familia (y retomado en medios de comunicación)[169] se realizó la restitución de los restos de **Natali Carmona Hernández (mujer víctima directa 1)** que se encontraban en posesión de la FGE Puebla a su familia, la cual se realizó en la Ciudad de México.[170] Ese mismo día, la familia decidió llevar a cabo una ceremonia religiosa en su memoria; sin embargo, fueron informados por un agente del ministerio público de la FIPEDE, que él y otros funcionarios de la misma institución quería reunirse con la familia. Conforme fue informado a esta Comisión por la familia y sus representantes, al llegar a la ceremonia, en el Panteón Civil de San Lorenzo Tezonco en la Ciudad de México, el personal de la FGJ CDMX se acercó primero con **Aurelio Carmona Cruz (víctima directa 3)**, para referirle que tenían que hacerle entrega de algunos restos, Los cuales se encontraban en sobres de color cartón y contenían, de acuerdo con sus etiquetas, un fragmento de mandíbula izquierda y una clavícula derecha.[171]

124. El personal de la FGJ CDMX le consulto a la familia si pudieran recibirlos y meterlos al ataúd de **Natali Carmona Hernández (mujer víctima directa 1),** señalándole que, en caso de no aceptarlos, los restos les serían entregados posteriormente, incinerados[172]. La familia manifestó su inconformidad. Personal de los servicios funerarios, que proveyó la propia FGJ CDMX por requerimiento realizado por la familia dos días antes[173], ingresaron los restos de **Natali Carmona Hernández (mujer víctima directa 1)** en el ataúd, ante medios de comunicación.[174]

125. El 5 de julio de 2022 se sostuvo una reunión entre personal de la FGJ CDMX, CBP CDMX y CEAVI con **Aidee Hernández Ávila (mujer víctima directa 2),** donde se acordó que la carpeta de Investigación se enviaría a la FGR el jueves 7 de julio del

---

[168] Véase Anexo, Evidencia 114. Escrito presentado el 18 de diciembre de 2023 ante esta Comisión, vía correo electrónico.

[169] La Octava, El cuerpo de Natali fue hallado en el mismo lugar que Fiscalía de Puebla y CDMX revisaron tres veces, México, 2022, YouTube, https://www.youtube.com/watch?v=XVZLuUgDrsg, consultada el 6 de octubre de 2026.

[170] Véanse Anexo, evidencias 108 y 117, correspondientes, respectivamente, al acta circunstanciada del 12 de mayo de 2022, suscrita por un visitador adjunto de la CDHCM, y al peritaje u opinión técnica rendida por la antropóloga Haydee Moreno Mejía, integrante del Equipo Mexicano de Antropología Forense, A. C., remitido a la CDHCM el 17 de julio de 2024.

[171] Véase Anexo evidencia 116. Acta circunstanciada de 21 de febrero de 2024, suscrita por un visitador adjunto de la CDHCM.

[172] Véanse Anexo evidencias 108 y 114.

[173] Véase Anexo, evidencia 107. Oficio de informe de servicios funerarios y atención a víctimas (Oficio 602/1735/04-2022), de 25 de abril de 2022, suscrito por la Directora del Centro de Apoyo Socio jurídico a Víctimas del Delito Violento, adscrita a FGJ CDMX.

[174] Véase Anexo, evidencias 110, 116 y 117. La evidencia (110) corresponde a la Nota psicosocial de 2 de junio de 2022, suscrita por personal de la Dirección de Atención Psicosocial de la CDHCM.

2022.[175] La FIPEDE remitió a la Fiscalía Especializada en Investigación de los Delitos de Desaparición Forzada perteneciente a la Fiscalía General de la República la carpeta de investigación y sus acumuladas a través de acuerdo del 28 de julio de 2022, precisando que existen datos de prueba suficientes que apuntan a la intervención de delincuencia organizada en la desaparición de **Natali Carmona Hernández (mujer víctima directa 1)**.[176]

VIII. FUNDAMENTACIÓN Y MOTIVACIÓN DE LOS DERECHOS HUMANOS VIOLADOS

126. Para el análisis de las violaciones a derechos humanos materia del presente instrumento recomendatorio, se parte del principio pro persona,[177] en relación con el principio de máxima protección reconocido en la LGMDFPyDP,[178] conforme al parámetro de regularidad constitucional. Para ello, se atenderá al contenido de las normas nacionales e internacionales aplicables, así como a la interpretación que de éstas han realizado los tribunales constitucionales y los organismos internacionales competentes, según corresponda.[179]

127. Cobra especial relevancia destacar que el análisis de las violaciones del presente instrumento recomendatorio se realiza conforme a la normativa vigente al momento de los hechos,[180] sin dejar de advertir que dicha normativa y las instituciones existentes al momento del reporte de la desaparición tuvieron posteriormente un amplio desarrollo y fue objeto de diversas reformas.

---

[175] Véase Anexo, Evidencia 112. Minuta de acuerdos del 5 de julio de 2022 que obra en el expediente de búsqueda de la CBP CDMX.

[176] Véase Anexo, Evidencia 111. Acuerdo ministerial de incompetencia de 28 de junio de 2022, suscrito por el Agente del Ministerio Público adscrito a FIPEDE de la FGJ CDMX.

[177] "PRINCIPIO PRO PERSONA. REQUISITOS MÍNIMOS PARA QUE SE ATIENDA EL FONDO DE LA SOLICITUD DE SU APLICACIÓN, O LA IMPUGNACIÓN DE SU OMISIÓN POR LA AUTORIDAD RESPONSABLE," Primera Sala, Tesis: 1a. CCCXXVII/2014 (10a.), *Gaceta del Semanario Judicial de la Federación*, Décima Época, tomo I, octubre de 2014. Reg. digital 2007561.

[178] Ley General en Materia de Desaparición Forzada de Personas, Desaparición Cometida por particulares, artículo 5, fracción VIII, en la cual se establece que: *"Las acciones, medidas y procedimientos establecidos en esta Ley son diseñados, implementados y evaluados aplicando los principios siguientes: Máxima protección: la obligación de adoptar y aplicar las medidas que proporcionen la protección más amplia para garantizar el trato digno, la seguridad, protección, bienestar físico y psicológico e intimidad de las Víctimas a que se refiere esta Ley".*

[179] "PARÁMETRO DE REGULARIDAD CONSTITUCIONAL. SE EXTIENDE A LA INTERPRETACIÓN DE LA NORMA NACIONAL O INTERNACIONAL," Primera Sala, Tesis: 1a. CCCXLIV/2015 (10a.), *Gaceta del Semanario Judicial de la Federación*, Décima Época, Libro 24, tomo I, noviembre de 2015, p. 986. Reg. digital 2010426.

[180] Es decir, desde la desaparición de Mujer Víctima Directa, ocurrida el 27 de enero de 2019, hasta la restitución de sus restos a su familia y su inhumación, el 21 de abril de 2022, así como la subsecuente remisión de la carpeta de investigación a la Fiscalía General de la República.

VIII.1. Derecho a la igualdad y no discriminación y Derecho de las mujeres a una vida libre de violencia

1.1 Fundamentación

128. En el presente caso, esta Comisión analizará el derecho a la igualdad y no discriminación, así como el derecho de las mujeres a una vida libre de violencia como derechos cuya vulneración tiene entidad propia, sin perjuicio de su estrecha relación con los demás derechos examinados en este instrumento. Las condiciones de desigualdad, discriminación y violencia que enfrentan las mujeres inciden en la forma en que las autoridades deben garantizar sus demás derechos, por lo que los estándares desarrollados en este apartado serán considerados también, de manera transversal, en el análisis de las violaciones vinculadas con la búsqueda, el acceso a la verdad y la justicia y la integridad personal.

129. El derecho a la igualdad y la no discriminación,[181] reconocido en la normativa internacional[182] y nacional,[183] constituye uno de los cimientos de los sistemas de protección de derechos humanos, por lo que su contenido e interpretación deben ser incorporados en todas las leyes, políticas y prácticas de las autoridades estatales.[184] Desde su dimensión sustantiva, este derecho exige reconocer que la aplicación de un trato idéntico no necesariamente garantiza condiciones de igualdad y que, frente a grupos que históricamente han enfrentado exclusión o desventajas, puede resultar necesaria la implementación de medidas diferenciadas para evitar que dichas condiciones se profundicen. Para ello, resulta necesario considerar el contexto social de las personas afectadas, así como las condiciones históricas o estructurales de subordinación y desventaja del grupo al que pertenecen.[185]

---

[181] Comisión de Derechos Humanos de la Ciudad de México, *Catálogo para la calificación de violaciones a derechos humanos. Edición 2025*, México, CDHCM, 2025, p. 61, en el cual se establece que: "*Los derechos a la igualdad y a la no discriminación son conceptos complementarios. El primero tiene una connotación positiva, ya que trata de garantizar que todas las personas sean iguales en el goce y ejercicio de los derechos; mientras que el segundo tiene un sentido negativo debido a que supone la necesidad de que las personas no sean sujetas a distinciones arbitrarias e injustas*".

[182] Organización de los Estados Americanos, Convención Americana sobre Derechos Humanos, San José, Costa Rica, 1969, artículos 1º y 24.

[183] Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, publicada en el *Diario Oficial de la Federación* el 5 de febrero de 1917, artículos 1º y 4º; Constitución Política de la Ciudad de México, publicada en la *Gaceta Oficial de la Ciudad de México* el 5 de febrero de 2017, artículo 4, apartado C; Ley Constitucional de Derechos Humanos y sus Garantías de la Ciudad de México, publicada en la *Gaceta Oficial de la Ciudad de México* el 8 de febrero de 2019, artículo 69.

[184] CDHCM, Recomendación 2/2020, *doc. cit.*, párr. 374

[185] Víctor Abramovich, "Responsabilidad estatal por violencia de género: comentarios sobre el caso 'Campo Algodonero' en la Corte Interamericana de Derechos Humanos", *Anuario de Derechos Humanos*, núm. 6, 2010, p. 170.

130. Esta dimensión sustantiva adquiere especial relevancia respecto de las mujeres, pues como ha señalado el Comité CEDAW, la violencia contra las mujeres constituye *"una forma de discriminación que inhibe gravemente la capacidad de la mujer de gozar de derechos y libertades en pie de igualdad con el hombre";*[186] por lo que constituye una forma de discriminación hacia las mujeres, que tiene sus raíces en las relaciones históricas de desigualdad. En ese sentido, la violencia contra las mujeres comprende cualquier acción u omisión o el conjunto de estas, basadas en su género, que les cause o pretenda causarles daño o sufrimiento psicológico, físico, patrimonial, económico, sexual o la muerte tanto en el ámbito privado como en el público.[187]

131. Fortalecer el acceso a condiciones de igualdad sustantiva requiere que todas las autoridades estatales incorporen herramientas que les permitan identificar y atender las condiciones de discriminación y dinámicas de poder que afectan de forma diferenciada a las mujeres. Así, la perspectiva de género constituye una herramienta analítica crucial para explicar, comprender y hacer frente a las singulares desventajas y obstáculos que enfrentan las mujeres en el ejercicio de sus derechos humanos y para esbozar posibles soluciones a esos problemas.[188] Esta herramienta analítica debe complementarse con un enfoque interseccional a partir del cual, las autoridades estatales puedan identificar las diferentes dimensiones de exclusión que confluyen en una mujer,[189] es decir, las distintas condiciones de desigualdad, discriminación o vulnerabilidad agravada que pueden confluir en una mujer y modificar los riesgos que enfrenta.

132. La obligación de realizar un análisis diferenciado se encuentra estrechamente vinculada con el derecho de las mujeres a una vida libre de violencia, pues la violencia y la discriminación por razones de género pueden afectar el ejercicio de otros derechos humanos.[190] Por lo tanto, garantizar este derecho exige identificar y atender las condiciones de desigualdad y violencia que enfrentan las mujeres y posibilitar así el efectivo ejercicio de sus demás derechos humanos, en tanto dichas

---

[186] Comité para la Eliminación de la Discriminación contra la Mujer de las Naciones Unidas, Recomendación General núm. 19, *La violencia contra la mujer*, 11º período de sesiones, párr. 1 (1992).
[187] Ley General de Acceso de las Mujeres a una Vida Libre de Violencias, publicada en el *Diario Oficial de la Federación* el 1 de febrero de 2007; última reforma publicada el 15 de enero de 2026, artículo 5, fracción IV.
[188] Grupo de Trabajo sobre las Desapariciones Forzadas o Involuntarias de las Naciones Unidas, *Observación general sobre las mujeres afectadas por las desapariciones forzadas*, Doc. ONU A/HRC/WGEID/98/2 (14 de febrero de 2013).
[189] Oficina del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos y ONU Mujeres, *Modelo de protocolo latinoamericano de investigación de las muertes violentas de mujeres por razones de género (femicidio/feminicidio)*, 2014, párrs. 119 y 121. Disponible en: https://www.ohchr.org/Documents/Issues/Women/WRGS/ProtocoloLatinoamericanoDeInvestigacion.pdf.Consultado el 5 de octubre de 2026.
[190] Comité para la Eliminación de la Discriminación contra la Mujer de las Naciones Unidas, Recomendación General núm. 35, *Sobre la violencia por razón de género contra la mujer, por la que se actualiza la Recomendación General núm. 19*, Doc. ONU CEDAW/C/GC/35, párr. 14 (26 de julio de 2017).

condiciones pueden impedir, limitar o anular su goce y ejercicio en condiciones de igualdad respecto de los hombres.[191]

133. Para garantizar el derecho de las mujeres a una vida libre de violencia, la Constitución Política de la Ciudad de México obliga a sus autoridades locales a brindar atención integral a las víctimas del delito.[192]. Esta obligación debe cumplirse considerando que las mujeres constituyen un grupo de atención prioritaria y, por ello, requiere la adopción de medidas dirigidas a eliminar progresivamente las barreras que impiden el pleno ejercicio de sus derechos.[193] Entre estas medidas se encuentra el deber de actuar con debida diligencia para prevenir, investigar, sancionar y reparar las violaciones a los derechos humanos que afectan a las mujeres, tomando en cuenta su situación y condiciones de vulnerabilidad.[194]

134. Para comprender el alcance de los criterios previamente expuestos, resulta pertinente desarrollar el contenido del deber de debida diligencia reforzada aplicable a la actuación estatal frente a casos de violencia contra las mujeres, particularmente ante su desaparición y posterior muerte violenta. Este estándar fue desarrollado por la Corte IDH en el caso González y otras ("Campo Algodonero") vs. México, en el que se estableció que la respuesta de las autoridades estatales ante estos hechos debe considerar el contexto de discriminación y violencia de género en el que ocurren, sin analizarlos como acontecimientos aislados. En consecuencia, a partir de las obligaciones, previstas en la Convención de Belém do Pará,[195] corresponde a las autoridades estatales monitorear y evaluar el contexto de violencia contra las mujeres, identificando los factores de riesgo existentes y adoptando aquellas medidas pertinentes para prevenir su materialización.[196]

135. En ese sentido, la Corte IDH distinguió entre las obligaciones estatales existentes antes de la desaparición y aquellas que se actualizan una vez que las autoridades tienen conocimiento de ésta. Así, aun cuando un contexto general de violencia contra las mujeres no supone por sí mismo una responsabilidad estatal frente a cualquier hecho, una vez reportada una desaparición, su valoración, junto con las circunstancias particulares de la mujer desaparecida y la información disponible

---

[191] Corte IDH, Caso Velásquez Paiz y otros Vs. Guatemala. Excepciones Preliminares, Fondo, Reparaciones y Costas. Sentencia de 19 de noviembre de 2015, Serie C No. 307, párr. 175; Caso Rosendo Cantú y Otra vs. México, Excepción Preliminar, Fondo, Reparaciones y Costas, Sentencia del 31 de agosto de 2010, Serie C No. 216 párr. 120; Organización de Estados Americanos, Convención Interamericana para Prevenir, Sancionar y Erradicar la Violencia contra la Mujer (Convención Belém Do Pará), Belém do Pará, Brasil, 1994, art. 5º.

[192] Constitución Política de la Ciudad de México, artículo 11, apartado J.

[193] *Ibidem*, artículo 11, apartado B, numeral .1.

[194] *Ibidem*, articulo 11, apartado B, numeral4.

[195] Convención Belém Do Pará, artículo 7.b el cual obliga al Estado *a "actuar con la debida diligencia para prevenir, investigar y sancionar la violencia contra la mujer".*

[196] Víctor Abramovich, "Responsabilidad estatal por violencia de género: comentarios sobre el caso 'Campo Algodonero' en la Corte Interamericana de Derechos Humanos" *op. cit., p. 178.*

sobre su entorno, permite identificar los riesgos que puede enfrentar y determinar las medidas de búsqueda e investigación que razonablemente deben adoptar las autoridades para proteger su vida e integridad.[197]

136. Lo anterior implica que las obligaciones genéricas que tienen los Estados para garantizar los derechos de todas las personas, incluyendo el acceso a la verdad y la justicia, adquieren un carácter reforzado cuando existen elementos que indican la posible presencia de violencia contra las mujeres, conforme a las obligaciones previstas en la Convención Belém do Pará. En los casos de desaparición de mujeres, este deber se proyecta tanto sobre las acciones dirigidas a determinar su paradero como sobre la investigación de los hechos y exige una actuación inmediata, exhaustiva y con perspectiva de género y:

> La Corte considera que ante tal contexto surge un deber de debida diligencia estricta frente a denuncias de desaparición de mujeres, respecto a su búsqueda durante las primeras horas y los primeros días. Esta obligación de medio, **al ser más estricta, exige la realización exhaustiva de actividades de búsqueda. En particular, es imprescindible la actuación pronta e inmediata de las autoridades policiales**, fiscales y judiciales ordenando medidas oportunas y necesarias dirigidas a la determinación del paradero de las víctimas o el lugar donde puedan encontrarse privadas de libertad. Deben existir procedimientos adecuados para las denuncias y que éstas conlleven una investigación efectiva desde las primeras horas. Las autoridades deben presumir que la persona desaparecida está privada de libertad y sigue con vida hasta que se ponga fin a la incertidumbre sobre la suerte que ha corrido [...] los funcionarios responsables de recibir las denuncias tengan la capacidad y la sensibilidad para entender la gravedad del fenómeno de la violencia contra la mujer y la voluntad para actuar de inmediato.[198]
> [Resaltado propio]

137. Cabe resaltar que dicha obligación reforzada no está asociada únicamente a casos de desaparición forzada, sino que exige una actuación diligente, inmediata y exhaustiva ante la desaparición de una mujer, atendiendo tanto al contexto general en el que ocurre, como a las circunstancias particulares y los riesgos asociados a la violencia de género que puedan estar presentes. La actuación de la autoridad, debe estar encaminada tanto a poner fin a la desaparición, como, en su caso, a investigar y sancionar los hechos. En consecuencia, la posible existencia de componentes de violencia de género no puede descartarse sin que previamente se

---

[197] Corte IDH, Caso González y otras ("Campo Algodonero") vs. México. Excepción Preliminar, Fondo, Reparaciones y Costas. Sentencia de 16 de noviembre de 2009. Serie C No. 205, párrs. 282 y 283.
[198] Corte IDH, Caso González y otras ("Campo Algodonero") vs. México. Excepción Preliminar, Fondo, Reparaciones y Costas. Sentencia de 16 de noviembre de 2009. Serie C No. 205, párrs 258, 283 y 285.

hayan realizado las diligencias necesarias para identificar y valorar los riesgos, circunstancias y posibles violencias relacionadas con la desaparición.

138. En línea con este criterio, la SCJN, en el Amparo en Revisión 1284/2015 reconoció que la actuación acuciosa de las autoridades durante las primeras etapas de la investigación resulta medular,[199] destacando que, en un contexto de violencia contra las mujeres, deben investigarse de oficio las eventuales connotaciones discriminatorias por razón de género que pudo haber sufrido una mujer víctima del delito.[200] Por ello, resulta exigible que las autoridades ministeriales ajusten sus actuaciones al deber de debida diligencia reforzada derivado del marco de protección del derecho de las mujeres a una vida libre de violencia, ya que el incumplimiento de esta obligación afecta de manera desfavorable los resultados de la investigación y compromete los derechos de las víctimas a la verdad, la justicia y la reparación.[201]

139. Adicionalmente, en el Amparo en Revisión 556/2013, la Primera Sala de la SCJN reconoció que se deben investigar, de oficio, *"las posibles connotaciones discriminatorias por razón de género en un acto de violencia perpetrado contra una mujer cuando dicho acto se enmarca en un contexto de violencia contra la mujer que se da en una región determinada"*.[202]

140. En el instrumento recomendatorio 02/2020, este Organismo destacó que, en la investigación de delitos cometidos contra mujeres, las autoridades ministeriales deben incorporar un enfoque de género y explorar todas las líneas de investigación razonablemente posibles, particularmente aquellas dirigidas a determinar si los hechos pueden estar relacionados con alguna forma de violencia de género. Esta obligación subsiste aun cuando, en un primer momento, existan elementos que sugieran una explicación distinta o vinculada con otros posibles motivos.[203]

141. En consonancia con estos estándares, en la Ciudad de México, el 16 de noviembre de 2018, se publicó el Protocolo Alba, como parte de las medidas adoptadas para dar cumplimiento a la sentencia emitida por la Corte IDH en el caso González y otras ("Campo Algodonero") vs. México.[204] Este mecanismo establece estrategias y acciones de coordinación entre autoridades para la búsqueda inmediata y localización de mujeres, niñas y adolescentes no localizadas o desaparecidas. En

[199] Suprema Corte de Justicia de la Nación, Primera Sala, Amparo en Revisión 1284/2015 resuelto en sesión de 13 de noviembre de 2019, Ministro Ponente Alfredo Gutiérrez Ortiz Mena, párr. 115.
[200] Suprema Corte de Justicia de la Nación, Primera Sala, Amparo en Revisión 1284/2015, *doc. cit.* párrs. 83-84.
[201] *Ibidem*, párr. 62.
[202] Suprema Corte de Justicia de la Nación, Primera Sala, Amparo en Revisión 554/2013, resuelto en sesión del 25 de marzo de 2015, párr. 134
[203] Comisión de Derechos Humanos de la Ciudad de México, Recomendación 02/2020, *doc. cit.* párr. 433.
[204] Protocolo Alba para la Ciudad de México, considerandos.

el mismo sentido, la LGMDFPyDP[205] y la Ley de Búsqueda de la Ciudad de México[206] obligan a las autoridades ministeriales a conducir las acciones de investigación y búsqueda desde el enfoque diferenciado y la perspectiva de género.

142. Para el análisis de las violaciones a derechos humanos acreditadas en el presente instrumento, resultan particularmente relevantes algunas de las acciones previstas en el Protocolo Alba, vigente al momento del reporte de la desaparición. Entre ellas se encuentran la búsqueda material inmediata en los lugares de interés, referidos por la persona denunciante,[207] la obtención y análisis de información relacionada con la telefonía móvil de la víctima,[208] así como la recopilación de información sobre su entorno y los posibles contextos de violencia de género y delitos vinculados que pudo haber sufrido la víctima.[209]

143. Adicionalmente, de conformidad con el Protocolo Homologado de Investigación para los Delitos de Desaparición Forzada y Desaparición Cometida por Particulares (PHI), vigente al momento de la desaparición de **Natali Carmona Hernández (mujer víctima directa 1)**. Esta herramienta establece parámetros mínimos para la conducción de la investigación de la desaparición de personas, entre ellos, la necesidad de actuar de forma exhaustiva y diligente desde que se tiene conocimiento de la desaparición[210] el establecimiento de un plan de investigación[211]

---

[205] Ley General en Materia de Desaparición Forzada de Personas, Desaparición Cometida por Particulares y del Sistema Nacional de Búsqueda de Personas, artículo 5º, fracción XI, el cual establece: "*Perspectiva de género: en todas las diligencias que se realicen para la búsqueda de la Persona Desaparecida o No Localizada, así como para investigar y juzgar los delitos previstos en esta Ley, se deberá garantizar su realización libre de prejuicios, estereotipos y de cualquier otro elemento que, por cuestiones de sexo, género, identidad u orientación sexual de las personas, propicien situaciones de desventaja, discriminación, violencia o se impida la igualdad*".

[206] Ley de Búsqueda de la Ciudad de México, artículo 5°, el cual establece: "*Las acciones, medidas y procedimientos establecidos en esta Ley y su reglamento serán diseñados, implementados y evaluados aplicando los principios de debida diligencia, efectividad y exhaustividad, enfoque diferencial y especializado, enfoque humanitario, gratuidad, igualdad y no discriminación, interés superior de la niñez, máxima protección, no revictimización, participación conjunta, perspectiva de género, presunción de vida, verdad y búsqueda permanente conforme al artículo 5 de la Ley General y de los Principios Rectores para la Búsqueda de Personas Desaparecidas*".

[207] Protocolo Alba para la Ciudad de México, numeral 1.2.13, en el que se establece: "*Solicitar sin demora, por cualquier medio, la intervención de la Célula de Búsqueda que corresponda, para efectos de que inicien la búsqueda y localización material inmediata de la víctima directa*".

[208] *Ibidem*, Fase 1, numeral 1.2.6, en el que se establece: "*Solicitar, en caso de que la víctima directa cuente con servicio de telefonía móvil, que la persona denunciante o titular del mismo, mantenga en servicio la línea telefónica*".

[209] Véase Protocolo Alba para la Ciudad de México, Anexo 2, *Informe de análisis de los datos recabados durante la Fase Uno*.

[210] Al respecto, el Protocolo Homologado de Investigación para los Delitos de Desaparición Forzada y Desaparición Cometida por Particulares, en sus páginas 38 y 39, establece lo siguiente: "*La/el AMP y Policía deben reconocer a las víctimas y testigos como titulares y sujetos de derechos a los que debe respetarse y protegerse, en todo momento, su dignidad como personas; incluso a no ser objeto de violencia, arbitrariedades, discriminación y recibir por parte de todo el personal sustantivo un trato sensible e igual; con ello se garantizará el acceso pleno a sus derechos humanos con un enfoque diferenciado y especializado atento al caso concreto. Además, se reconoce como parte de los Derechos Humanos que le asisten a la víctima directa o indirecta, la facultad de designar un(a) Asesor(a) Jurídico(a) público o privado, para la representación de sus derechos en cualquier momento del procedimiento de investigación, en términos de lo previsto en el artículo 110 del CNPP*".

[211] *Ibidem*, p. 60.

y la incorporación de los enfoques diferenciados que correspondan.[212] En particular, también exige la aplicación de perspectiva de género, que implica analizar si la condición de género de la víctima guarda relación con el móvil de la desaparición, así como las posibles situaciones de violencia presentes en su entorno, elementos que deben ser considerados en la construcción y desarrollo de las hipótesis y líneas de investigación.[213]

144. De los estándares expuestos se desprende que, ante la desaparición de una mujer, garantizar sus derechos a la igualdad y a una vida libre de violencia exige una respuesta estatal diferenciada, que considere tanto el contexto general de violencia y discriminación contra las mujeres como las circunstancias particulares y los factores de riesgo presentes en el caso. Esta obligación debe reflejarse desde las primeras actuaciones de búsqueda e investigación, mediante la identificación de posibles situaciones de violencia de género y su incorporación en las hipótesis, líneas de investigación y diligencias necesarias para determinar el paradero de la mujer desaparecida y esclarecer los hechos.

1.2 Motivación respecto al Derecho a la igualdad y no discriminación y derecho de las mujeres a una vida libre de violencia

145. Esta Comisión tiene por acreditado que, a partir de la presentación de la denuncia por la desaparición de **Natali Carmona Hernández (mujer víctima directa 1)**, la respuesta de las autoridades ministeriales de la Ciudad de México no incorporó el análisis diferenciado que exigían las circunstancias del caso ni se ajustó al deber de debida diligencia reforzada aplicable a la desaparición de mujeres. Las acciones de búsqueda e investigación desplegadas no fueron oportunas ni suficientes para identificar y atender los riesgos que enfrentaba la víctima, considerando tanto el contexto general de violencia y desaparición de mujeres, que era conocido por las autoridades, como sus circunstancias particulares, a fin de adoptar las medidas necesarias para proteger su vida e integridad personal y/o determinar su paradero. Asimismo, desde las primeras horas posteriores al reporte no se recabó información suficiente para identificar posibles situaciones de violencia de género ni para

[212] Al respecto, el Protocolo Homologado de Investigación para los Delitos de Desaparición Forzada y Desaparición Cometida por Particulares, en su página 94, establece la obligación de realizar un análisis dirigido a determinar si la condición de género de la víctima guarda relación con el móvil de la desaparición. Para ello, contempla como diligencias básicas la realización de entrevistas a familiares, pareja sentimental, compañeras o compañeros de trabajo y personas pertenecientes a sus círculos de amistades más cercanos.

[213] Protocolo Homologado de Investigación para los Delitos de Desaparición Forzada y Desaparición Cometida por Particulares, sección B, "Investigación específica y diferenciada por sujeto pasivo", numeral 2, *"Investigación específica y diferenciada cuando el sujeto pasivo sea una mujer o mujer embarazada"*, apartado "Acciones por realizar", en el que se prevé el *"[a]nálisis para determinar si la condición de género de la víctima tiene relación con el móvil de la desaparición"*; y apartado *"Diligencias básicas"*, que contempla *"[e]ntrevistas a familiares, pareja sentimental, compañero o compañera de trabajo y círculos de amistades más cercanas"*, p. 94

incorporarlas oportunamente en las hipótesis y líneas de búsqueda e investigación.[214]

146. Estas deficiencias adquieren una dimensión específica respecto de los derechos de **Natali Carmona Hernández (mujer víctima directa 1)** a la igualdad y no discriminación y a una vida libre de violencia. La obligación de brindar una respuesta diferenciada no suponía presumir que su desaparición obedecía necesariamente a razones de género, sino asegurar que esta posibilidad fuera indagada oportunamente y que los riesgos particulares identificados fueran incorporados a las acciones de búsqueda e investigación. Al no hacerlo, la actuación ministerial prescindió de elementos que debían ser considerados para garantizar sus derechos en condiciones de igualdad y determinar si se encontraba expuesta a alguna forma de violencia de género.

147. Esta respuesta diferenciada debía considerar, por un lado, el contexto general de violencia y desaparición de mujeres, particularmente de mujeres jóvenes, desarrollado en el presente instrumento y conocido por las autoridades, incluidos los datos e informes oficiales que advertían un incremento de las desapariciones de mujeres en la Ciudad de México y, de manera particular, en Iztapalapa. Por otro lado, debía atender las características y contexto individual o subjetivo de **Natali Carmona Hernández (mujer víctima directa 1)**, su entorno, relaciones y vínculos, así como los factores de riesgo que podían derivar de éstos, a fin de orientar las acciones inmediatas de búsqueda e investigación. Para ello, resultaba necesario recabar oportunamente información de las personas vinculadas con ella y analizar los datos provenientes de su teléfono y línea telefónica, entre otras diligencias, de manera que la información obtenida permitiera construir y desarrollar hipótesis de búsqueda e investigación acordes con los riesgos identificados y determinar si existían posibles componentes de violencia de género.[215]

148. Las omisiones concretas en las acciones de búsqueda e investigación serán desarrolladas en los apartados subsecuentes, relativos a los derechos a al acceso a la verdad y la justicia, a la búsqueda y a la integridad personal de sus familiares. No obstante, su análisis resulta también relevante para acreditar las violaciones a los derechos a la igualdad y no discriminación y a una vida libre de violencia, en tanto permiten advertir que la actuación de las autoridades no incorporó de manera transversal la respuesta diferenciada y la debida diligencia reforzada que exigía la desaparición de **Natali Carmona Hernández (mujer víctima directa 1),** ni consideró adecuadamente los riesgos asociados a su entorno, la posible incidencia

[214] Véanse Anexo, evidencias 2, 6, 7 y 118.
[215] Véase Anexo, evidencias 83 y 96.

de componentes de violencia de género y los impactos diferenciados que podían derivar de su desaparición.

149. A ello se suma que, en el análisis de contexto practicado por la FGJ CDMX[216] más de un año después de la desaparición, no se incorporó un análisis dirigido a identificar posibles componentes de violencia de género ni a valorar, desde esta perspectiva, los riesgos asociados al entorno y circunstancias particulares de **Natali Carmona Hernández (mujer víctima directa 1)**, a pesar de que en la carpeta de investigación ya existía información relevante para profundizar en esas líneas, por ejemplo la referencia a que viajaban a una zona en el estado de Puebla en donde se registró el hallazgo de fosas clandestinas, un antecedente de violencia de familiar, el hallazgo del cadáver de **P1 (pareja de Natali Carmona Hernández),** entre otras.[217]

150. Por lo expuesto, este Organismo acreditó que la falta de una respuesta diferenciada en las acciones de búsqueda e investigación de **Natali Carmona Hernández (mujer víctima directa 1)**, que atendiera al contexto general de violencia y desaparición de mujeres, valorara los riesgos asociados a su entorno y circunstancias particulares e indagara oportunamente la posible incidencia de componentes de violencia de género y sus impactos diferenciados, implicó el incumplimiento del deber de debida diligencia reforzada previsto en el artículo 7.b de la Convención de Belém do Pará y vulneró sus derechos a la igualdad y no discriminación y a una vida libre de violencia.

151. Las omisiones concretas que sustentan estas violaciones se desarrollarán de manera pormenorizada en los apartados subsecuentes, al analizar el derecho de **Natali Carmona Hernández (mujer víctima directa 1)** a la búsqueda, los derechos de sus familiares al acceso a la verdad y a la justicia, así como las afectaciones al derecho a la integridad personal de estos últimos. En dichos apartados se retomarán los estándares desarrollados en el presente acápite para determinar cómo la falta de una respuesta diferenciada y de debida diligencia reforzada incidió también en la garantía de esos derechos.

[216] Véase Anexo, evidencia 58.
[217] Véanse Anexo, evidencias 2, 6, 7, 18, 19 y 24.

VIII.2. Derechos de acceso a la verdad y a la justicia respecto al deber de investigar con debida diligencia y perspectiva de género

2.1. Fundamentación

152. El derecho de acceso a la justicia es el derecho que permite a las personas acudir a tribunales o instancias independientes e imparciales a plantear una pretensión o defenderse de ella, con el fin de que a través de un proceso en el que se respeten ciertas formalidades, se decida sobre la pretensión o la defensa, y, en su caso, se ejecute esa decisión.[218] Para salvaguardarlo, las autoridades deben garantizar tres etapas: (i) la posibilidad de las personas de acudir a dichas instancias y ser atendidas; (ii) las garantías del debido proceso; y (iii) la efectiva ejecución o cumplimiento de la decisión adoptada por autoridades jurisdiccionales o no jurisdiccionales.[219] En relación con los procedimientos en materia penal, el acceso a la justicia comprende la posibilidad real, oportuna, efectiva, segura y no discriminatoria de recurrir a las autoridades para obtener protección, verdad, reparación integral y garantías de no repetición.[220]

153. La Corte IDH ha desarrollado amplia jurisprudencia sobre la interpretación conjunta de los artículos 8 y 25 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos, lo que le ha permitido dotar de contenido al derecho de acceso a la justicia. En particular, la jurisprudencia de la Corte IDH ha encontrado violaciones a estos derechos a través de la identificación de retrasos injustificados en la búsqueda de justicia y verdad, la ausencia de respuestas inmediatas de las autoridades ante la denuncia o el conocimiento del hecho, el impacto en las investigaciones derivado de la fragmentación de responsabilidades, así como los impactos de la falta de articulación y coordinación entre autoridades responsables,[221] entre otras. Asimismo, ha establecido que el deber de investigar debe ser asumido por el Estado como un deber jurídico propio y desarrollarse de manera seria, imparcial y efectiva

---

[218] Comisión de Derechos Humanos de la Ciudad de México, Recomendación 02/2020, *doc. cit.*, párr. 536; "DERECHO DE ACCESO EFECTIVO A LA JUSTICIA. ETAPAS Y DERECHOS QUE LE CORRESPONDEN," Primera Sala, Tesis: 1a./J. 103/2017 (10a.), *Gaceta del Semanario Judicial de la Federación*, Décima Época, Libro 48, tomo I, noviembre de 2017, p. 151. Reg. digital 2015591.

[219] "DERECHO DE ACCESO EFECTIVO A LA JUSTICIA. ETAPAS Y DERECHOS QUE LE CORRESPONDEN," Primera Sala, Tesis: 1a./J. 103/2017 (10a.), *Gaceta del Semanario Judicial de la Federación*, Décima Época, Libro 48, tomo I, noviembre de 2017, p. 151. Reg. digital 2015591.

[220] Comisión Económica para América Latina y el Caribe y Entidad de las Naciones Unidas para la Igualdad de Género y el Empoderamiento de las Mujeres. (2026). *Acceso a la justicia para mujeres y niñas en América Latina y el Caribe* (LC/TS.2026/12). p. 8: Véase; Corte IDH. Caso Rodríguez Vera y otros (Desaparecidos del Palacio de Justicia) Vs. Colombia. Excepciones Preliminares, Fondo, Reparaciones y Costas. Sentencia de 14 de noviembre de 2014. Serie C No. 287, párr. 435; Caso Chavarría Morales y otros Vs. Nicaragua. Fondo y Reparaciones. Sentencia de 4 de diciembre de 2025. Serie C No. 588, párr. 113-114.

[221] Corte IDH. Caso Alvarado Espinoza y otros Vs. México. Fondo, Reparaciones y Costas. Sentencia de 28 de noviembre de 2018. Serie C No. 370, párrs. 212 y 215; Caso Flores Bedregal y otras Vs. Bolivia. Excepciones Preliminares, Fondo, Reparaciones y Costas. Sentencia de 17 de octubre de 2022. Serie C No. 467, párrs. 104-106.

y que, cuando se investigan hechos de violencia contra las mujeres ocurridos en un contexto general de violencia de género, este deber tiene alcances adicionales, derivados de la obligación de actuar con debida diligencia reforzada.[222]

154. En consonancia con lo anterior, el marco normativo mexicano reconoce expresamente los derechos de las víctimas vinculados con el derecho a la verdad y la justicia. Por ejemplo, la Ley Constitucional de Derechos Humanos y sus Garantías de la Ciudad de México contempla en su artículo 86 los derechos de asistencia, protección, atención, verdad, justicia, reparación integral y debida diligencia,[223] reconocimiento que coincide con lo previsto en la Ley de Víctimas de la Ciudad de México, la LGMDFPyDP,[224] la Ley General de Víctimas y el Código Nacional de Procedimientos Penales.

155. Así, el derecho de acceso a la justicia, en materia penal, comprende el desarrollo de actuaciones dirigidas a la búsqueda de la verdad y el esclarecimiento de los hechos, la identificación de personas responsables y, en su caso, la reparación del daño. Además, busca garantizar condiciones para la participación de las víctimas en la investigación y brindarles atención integral en relación con los hechos victimizantes desde el inicio de la investigación.

---

[222] Corte IDH. Caso González y otras ("Campo Algodonero") Vs. México. Excepción Preliminar, Fondo, Reparaciones y Costas. Sentencia de 16 de noviembre de 2009. Serie C No. 205, párrs. 289 y 290.

[223] Ley Constitucional de Derechos Humanos y sus Garantías de la Ciudad de México, publicada en la *Gaceta Oficial de la Ciudad de México* el 8 de febrero de 2019; última reforma publicada el 7 de junio de 2019, artículo 86, que establece: *"En la Ciudad se reconocen y protegen los derechos de las personas, grupos, comunidades u organizaciones sociales que hubieran sido afectadas en sus derechos, intereses o bienes jurídicos individuales o colectivos como resultado de la comisión de un delito o la violación de derechos humanos. Los derechos de las víctimas del delito y de violaciones a derechos humanos son: asistencia, protección, atención, verdad, justicia, reparación integral, debida diligencia y los señalados en las demás leyes aplicables. Las autoridades de la Ciudad deberán actuar, en su relación con las víctimas, conforme a los principios de asesoría jurídica adecuada, buena fe, complementariedad, confidencialidad, consentimiento informado, cultura jurídica, debida diligencia, debido proceso, desvictimización, dignidad, gratuidad, principio pro víctima, interés superior de la niñez, máxima protección, no criminalización, no victimización secundaria, participación conjunta y las demás leyes señaladas en las leyes aplicables. Asimismo, brindarán atención inmediata en materias de salud, educación y asistencia social. Además, deberán implementar medidas de ayuda inmediata, asistencia, atención, inclusión y reparación integral, las cuales deben proporcionarse con enfoque transversal de género y diferencial, de conformidad con lo dispuesto en esta ley y demás disposiciones legales aplicables".*

[224] Ley General en Materia de Desaparición Forzada de Personas, Desaparición Cometida por Particulares y del Sistema Nacional de Búsqueda de Personas, artículos 137, fracción II, y 138, fracciones I, III y V, que establecen: *"Artículo 137. Las Víctimas directas de los delitos de desaparición forzada de personas y desaparición cometida por particulares tendrán, además de los derechos a la verdad, memoria, el acceso a la justicia, la reparación del daño y las garantías de no repetición y aquellos contenidos en otros ordenamientos legales, los siguientes: [...] II. A que las autoridades inicien las acciones de búsqueda y localización de manera inmediata, bajo los principios de esta Ley; Artículo 138. Los Familiares de las Víctimas de los delitos de desaparición forzada de personas y desaparición por particulares tendrán, además de los derechos contenidos en otros ordenamientos legales, los siguientes derechos: I. Participar dando acompañamiento y ser informados de manera oportuna de aquellas acciones de búsqueda que las autoridades competentes realicen tendientes a la localización de la Persona Desaparecida; [...] III. Acceder, directamente o mediante sus representantes, a los expedientes que sean abiertos en materia de búsqueda o investigación; [...] V. Acceder a las medidas de ayuda, asistencia y atención, particularmente aquellas que faciliten su participación en acciones de búsqueda, incluidas medidas de apoyo psicosocial".*

156. Por otro lado, **el derecho a la verdad** se ha desarrollado en el ámbito interamericano a partir de su vinculación con el deber de investigar las violaciones a derechos humanos y con los derechos de acceso a la justicia y a la información.[225] La Corte IDH, ha reconocido su autonomía y naturaleza amplia,[226] al mismo tiempo que ha señalado que se encuentra intrínsecamente vinculado al derecho de acceso a la justicia, pues una investigación efectiva debe permitir a las víctimas conocer lo sucedido y esclarecer las circunstancias en que ocurrieron los hechos.

157. A través de la sentencia del caso González Méndez y otros vs México, la Corte IDH precisó que el derecho a la verdad, desde una dimensión individual, comprende el derecho de las víctimas a recibir información de las diligencias y los resultados obtenidos durante la investigación, la cual incluye conocer las hipótesis de investigación, paradero de la persona o resultados científicos o forenses en procesos de identificación.[227]

158. En los casos de desaparición de mujeres, la investigación adquiere una especial relevancia mientras se desconoce su suerte o paradero. En el caso González y otras ("Campo Algodonero") vs. México, la Corte IDH estableció que, una vez que las autoridades tienen conocimiento de la desaparición, deben actuar de manera pronta e inmediata y desarrollar una investigación efectiva desde las primeras horas, presumiendo que la mujer desaparecida continúa con vida hasta que se ponga fin a la incertidumbre sobre su suerte. Estas obligaciones están dirigidas a determinar su paradero y esclarecer lo ocurrido y, al mismo tiempo, permiten a sus familiares acceder a la verdad sobre su suerte y las circunstancias de la desaparición.[228]

159. De esta manera, los derechos de acceso a la justicia y a la verdad se interrelacionan en dos aspectos fundamentales: en primer lugar, la investigación diligente, exhaustiva e imparcial debe tener por objetivo el esclarecimiento de los hechos, la identificación de las personas responsables y, en caso de desapariciones de personas, la determinación de su suerte, destino o paradero, así como la reparación del daño; en segundo lugar, dicha investigación debe garantizar la participación de

---

[225] Corte IDH. Caso González Méndez y otros Vs. México. Excepción Preliminar, Fondo, Reparaciones y Costas. Sentencia de 22 de agosto de 2024. Serie C No. 532., par. 193; Caso Zambrano, Rodríguez y otros Vs. Argentina. Fondo, Reparaciones y Costas. Sentencia de 28 de agosto de 2025. Serie C No. 564., párr. 135.

[226] Corte IDH. Caso González Méndez y otros Vs. México. Excepción Preliminar, Fondo, Reparaciones y Costas. Sentencia de 22 de agosto de 2024. Serie C No. 532., párr. 192; Caso Cuéllar Sandoval y otros Vs. El Salvador. Fondo, Reparaciones y Costas. Sentencia de 18 de marzo de 2024. Serie C No. 521., párr. 92.

[227] Corte IDH. Caso González Méndez y otros Vs. México. Excepción Preliminar, Fondo, Reparaciones y Costas. Sentencia de 22 de agosto de 2024. Serie C No. 532. Párr. 194; Corte IDH. Caso Cuéllar Sandoval y otros Vs. El Salvador. Fondo, Reparaciones y Costas. Sentencia de 18 de marzo de 2024. Serie C No. 521., párr. 93

[228] Corte IDH, Caso González y otras ("Campo Algodonero") Vs. México. Excepción Preliminar, Fondo, Reparaciones y Costas. Sentencia de 16 de noviembre de 2009. Serie C No. 205, párrs. 283 y 290.

las víctimas y su acceso continuo a la información sobre las diligencias realizadas, sus avances y resultados.

160. Por lo anterior, las autoridades tienen la obligación de garantizar que las víctimas puedan participar activamente en las labores de investigación, sean informadas de los avances y retrocesos en las diligencias y que puedan aportar información y proponer líneas de investigación.

161. Ahora bien, en determinados casos, como son las investigaciones seguidas por desaparición de personas, los derechos de acceso a la verdad y a la justicia exigen acciones adicionales para asegurar que las investigaciones y actuaciones de las autoridades atiendan a la gravedad de los hechos y estén orientadas a una efectiva búsqueda y al esclarecimiento de lo ocurrido. Lo anterior se conoce como *debida diligencia* y conforme a la LGMDFPyDP, conlleva que en toda investigación y proceso se garantice su desarrollo de manera autónoma, independiente, inmediata, imparcial, eficaz y oportuna, con exhaustividad, respeto a los derechos humanos y el máximo nivel de profesionalismo.[229]

162. Por lo tanto, para garantizar los derechos de acceso a la verdad y a la justicia en casos de desaparición, las autoridades están obligadas a conducir las investigaciones con *debida diligencia*, como un componente fundamental de las garantías judiciales que surgen de la interpretación de los instrumentos del Sistema Internacional de Protección de Derechos Humanos.[230]

163. La *debida diligencia* debe analizarse a través de los siguientes componentes o principios:[231]

Componente	Definición

[229] Ley General en Materia de Desaparición Forzada de Personas, Desaparición Cometida por Particulares y del Sistema Nacional de Búsqueda de Persona, artículo 5º.

[230] Destacan, entre otras disposiciones, el artículo 10 de la Declaración Universal de los Derechos Humanos, que reconoce el derecho de toda persona, en condiciones de plena igualdad, a ser oída públicamente y con justicia por un tribunal independiente e imparcial para la determinación de sus derechos y obligaciones; el artículo 14.1 del Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos, que reconoce el derecho de toda persona a ser oída públicamente y con las debidas garantías por un tribunal competente, independiente e imparcial establecido por la ley; así como los artículos 8.1 y 25 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos, que reconocen, respectivamente, el derecho de toda persona a ser oída, con las debidas garantías y dentro de un plazo razonable, por un juez o tribunal competente, independiente e imparcial, y el derecho a contar con un recurso sencillo, rápido y efectivo ante los jueces o tribunales competentes frente a actos que vulneren sus derechos fundamentales.

[231] Comisión de Derechos Humanos de la Ciudad de México, Recomendación 08/2025, *doc. cit.*, párrs. 116-118; CDHCM, Recomendación 09/2025, *doc. cit.*, párrs. 103-105; Recomendación 10/2025, *doc. cit.*, párrs. 118-120.

Oficiosidad	Consiste en que, ante hechos que presumiblemente pueden ser clasificados como una grave violación de derechos humanos, las autoridades deben iniciar una investigación de oficio, seria y efectiva.[232]
Oportunidad	Obliga a iniciar de manera inmediata las investigaciones de los hechos, e incluye realizar oportuna y debidamente actuaciones iniciales fundamentales para la recolección de datos de prueba y la identificación de testigos.[233] También implica que la investigación tiene que llevarse a cabo dentro de un *plazo razonable* y de manera *propositiva*, es decir, que las mismas no recaigan en el impulso procesal de las víctimas y de sus familiares.[234]
Inmediatez	Cuando haya motivos razonables para sospechar que una persona ha sido sometida a desaparición, es imprescindible la actuación pronta e inmediata de las autoridades policiales, fiscales y judiciales ordenando medidas oportunas y necesarias dirigidas a la determinación del paradero de la víctima.[235]
Profesionalidad y especialización	Implica que las investigaciones tienen que realizarse por profesionales competentes y a través de los procedimientos apropiados.[236] También, se destaca que la entonces Primera Sala precisó en el amparo en revisión 51/2020 que las labores de búsqueda de personas requieren no solo del personal competente para realizarlas, sino de la disponibilidad de las herramientas y su uso adecuado.[237]
Independencia e imparcialidad en la investigación	Constituyen exigencias del debido proceso, pues, sin su cumplimiento, el Estado no podrá ejercer posteriormente, de manera efectiva y eficiente, su facultad acusatoria, ni los tribunales estarán en condiciones de sustanciar adecuadamente el proceso judicial correspondiente a este tipo de violaciones.[238]
Exhaustividad	Se enfoca a que se hayan realizado todas las actuaciones para esclarecer los hechos del caso, así como la persecución y detención de la persona responsable.[239] Al respecto, la Corte IDH ha establecido que *"el deber de debida diligencia estricta ante la desaparición de mujeres exige la realización exhaustiva de actividades de búsqueda".*[240]

[232] Corte IDH. Caso González y otras ("Campo Algodonero") vs. México. Sentencia (excepción preliminar, fondo, reparaciones y costas) 16 de noviembre de 2009, párr. 290.
[233] Corte IDH. Caso Hermanos Landaeta Mejías y otros Vs. Venezuela. Excepciones Preliminares, Fondo, Reparaciones y Costas. Sentencia de 27 de agosto de 2014. Serie C No. 281, párr. 257.
[234] Corte IDH, Caso Defensor de Derechos Humanos y otros Vs. Guatemala. Excepciones Preliminares, Fondo, Reparaciones y Costas. Sentencia de 28 de agosto de 2014. Serie C No. 283, párr. 200.
[235] Corte IDH. Caso Silva Reyes y otros Vs. Nicaragua. Fondo, Reparaciones y Costas. Sentencia de 2 de septiembre de 2025. Serie C No. 566., Párrafo 81.
[236] Corte IDH. Caso de la Masacre de Pueblo Bello Vs. Colombia. Sentencia de 31 de enero de 2006. Serie C No. 140, párr. 177.
[237] Suprema Corte de Justicia de la Nación, Primera Sala, *Amparo en revisión 51/2020*, 10 de agosto de 2022, ponente: Ana Margarita Ríos Farjat, párr. 97.
[238] Corte IDH. Caso Tavares Pereira y otros Vs. Brasil. Excepciones Preliminares, Fondo, Reparaciones y Costas. Sentencia de 16 de noviembre de 2023. Serie C No. 507., párr.147.
[239] Corte IDH. Caso Hermanos Landaeta Mejías y Otros vs. Venezuela. Excepciones Preliminares, Fondo, Reparaciones y Costas. Sentencia de 27 de agosto de 2014. Serie C No. 281, párr. 236.
[240] Corte IDH. Caso López Soto y otros Vs. Venezuela. Fondo, Reparaciones y Costas. Sentencia de 26 de septiembre de 2018. Serie C No. 362., párr. 142.

Participación de las víctimas y sus familiares	Implica, como mínimo, que no existan impedimentos irrazonables, innecesarios o faltos de proporcionalidad para su participación en los procesos de investigación.[241]
Enfoque diferencial y especializado:	Las autoridades deben tener en cuenta la existencia de grupos de población con características particulares o con mayor situación de vulnerabilidad en razón de su origen étnico o nacional, idioma o lengua, religión, edad, género, preferencia u orientación sexual, identidad de género, condición de discapacidad, condición social, económica, histórica y cultural, así como otras circunstancias diferenciadoras y que requieran de una atención especializada que responda a las particularidades y grado de vulnerabilidad de las Víctimas. De igual manera, tratándose de las acciones, mecanismos y procedimientos para la búsqueda, localización y desarrollo de las investigaciones, las autoridades deberán tomar en cuenta las características, contexto y circunstancias de la comisión de los delitos materia de esta Ley.[242]
Presunción de vida	En las acciones, mecanismos y procedimientos para la búsqueda, localización y desarrollo de las investigaciones, las autoridades deben presumir que la Persona Desaparecida o No Localizada está con vida.[243]
Perspectiva de género	En todas las diligencias que se realicen para la búsqueda de la Persona Desaparecida o No Localizada, así como para investigar y juzgar los delitos previstos en esta Ley, se deberá garantizar su realización libre de prejuicios, estereotipos y de cualquier otro elemento que, por cuestiones de sexo, género, identidad u orientación sexual de las personas, propicien situaciones de desventaja, discriminación, violencia o se impida la igualdad.[244]

164. En línea con los componentes generales de la debida diligencia aplicables a los casos de desaparición de personas, las autoridades ministeriales deben: a) allegarse de toda la información disponible desde el primer contacto con la familia de la víctima directa con la finalidad de planificar las diligencias de búsqueda inmediata; b) establecer planes integrales y estratégicos para la búsqueda, considerando la participación de las familias desde su creación; c) incorporar análisis de contexto que permitan la comprensión de la desaparición en el marco general de las situaciones sociales, institucionales y de seguridad en las que sucedió; y d) emprender, sin dilación, la articulación y comunicación interinstitucional necesaria y acorde con las líneas lógicas de búsqueda y esclarecimiento de los hechos. Tratándose de la desaparición de mujeres, estas obligaciones deben reforzarse ante la posibilidad de que se actualice un hecho

[241] Corte IDH. Caso Heliodoro Portugal Vs. Panamá. Excepciones Preliminares, Fondo, Reparaciones y Costas. Sentencia de 12 de agosto de 2008. Serie C No. 186, párr. 247.
[242] Ley General en Materia de Desaparición Forzada de Personas, Desaparición Cometida por particulares, artículo 5, fracción III.
[243] Ley General en Materia de Desaparición Forzada de Personas, Desaparición Cometida por particulares, artículo 5, fracción XII.
[244] Ley General en Materia de Desaparición Forzada de Personas, Desaparición Cometida por particulares, artículo 5, fracción XI.

constitutivo de violencia de género o violencia feminicida, garantizando la perspectiva de género en cada etapa de la investigación.[245]

165. A través del amparo en revisión 51/2020, la Primera Sala de la SCJN tuvo la oportunidad de analizar las obligaciones constitucionales en torno al derecho de toda persona a ser buscada en un caso de posible desaparición forzada. En la sentencia de este asunto, la Primera Sala enfatizó que una investigación eficaz *"requiere el desarrollo de vías racionales de investigación; un análisis detenido de los hechos, y una amplia obtención de pruebas, incluidas opiniones de personas expertas en los distintos componentes, antecedentes y consecuencias de la desaparición, así como en los elementos necesarios y eficientes para la búsqueda".*[246]

166. Sumado a la debida diligencia con la que se debe conducir toda investigación o proceso relacionado con la desaparición de personas, en los casos de desaparición de mujeres, este deber adquiere alcances adicionales y exige una actuación reforzada, considerando la situación de vulnerabilidad y los contextos de desigualdad y violencia que pueden afectar de manera diferenciada a las mujeres, partiendo de que en estos contextos, el acceso a la justicia constituye la primera línea de defensa de los derechos humanos de las víctimas de violencia de género.[247]

167. Como estableció la Corte IDH en el caso González y otras ("Campo Algodonero") vs. México, una vez que las autoridades tienen conocimiento de la desaparición de una mujer surge un deber de debida diligencia estricta, que exige una actuación pronta e inmediata y la realización exhaustiva de actividades de búsqueda. Esta obligación requiere, además, que las autoridades investiguen oportunamente la posible existencia de componentes de violencia de género, sin que ello implique presumir que toda desaparición de una mujer obedece necesariamente a esa

---

[245] Corte IDH, Caso *Véliz Franco y otros vs. Guatemala*. Excepciones Preliminares, Fondo, Reparaciones y Costas. Sentencia de 19 de mayo de 2014. Serie C No. 277, párrs. 147 y 186–187; Corte IDH, Caso *González y otras ("Campo Algodonero") vs. México*. Excepción Preliminar, Fondo, Reparaciones y Costas. Sentencia de 16 de noviembre de 2009. Serie C No. 205, párrs. 289–293; Corte IDH, Caso *García Andrade y otros vs. México*. Excepción Preliminar, Fondo, Reparaciones y Costas. Sentencia de 22 de agosto de 2025. Serie C No. 563, párrs. 102–109; Principios rectores para la búsqueda de personas desaparecidas, principio 4, párr. 1, en el que se establece: "La búsqueda debe tener un enfoque diferencial. *"La búsqueda de personas en situación de vulnerabilidad requiere procedimientos, experiencias y conocimientos especiales que satisfagan sus necesidades particulares. El enfoque diferencial también debe ser tenido en cuenta en la atención a quienes participan en la búsqueda, como familiares y otras personas allegadas a la persona desaparecida. Igualmente, debe ser tenido en cuenta en los procedimientos de identificación y entrega de las personas encontradas".*

[246] Suprema Corte de Justicia de la Nación, Primera Sala, *Amparo en revisión 51/2020*, 10 de agosto de 2022, ponente: Ana Margarita Ríos Farjat, párr. 97.

[247] Mecanismo de Seguimiento de la Convención de Belém do Pará (MESECVI), Comité de Expertas, Declaración sobre la violencia contra las mujeres, niñas y adolescentes y sus derechos sexuales y reproductivos, Undécima Reunión del Comité de Expertas, Montevideo, Uruguay, 18 y 19 de septiembre de 2014.

causa.[248] Esta Comisión se ha pronunciado en anteriores ocasiones en relación con el cumplimiento de la debida diligencia por parte de autoridades ministeriales en la Ciudad de México en casos de desapariciones de mujeres.[249]

168. A partir de lo anterior, a continuación, se desarrolla el contenido de algunas de las obligaciones y deberes específicos que tienen las autoridades para asegurar los derechos de acceso a la verdad y a la justicia, mediante una investigación con debida diligencia y perspectiva de género, así como una adecuada coordinación con otras instancias y la participación de las familias. Estos estándares servirán de base para analizar las violaciones acreditadas en el presente caso.

2.1.1 Obligaciones en materia de investigación y búsqueda inmediata ante la desaparición de personas

169. Los Principios Rectores para la Búsqueda de Personas Desaparecidas del Comité CED establecen que debe existir una interrelación entre la investigación penal y las acciones de búsqueda, es decir, las autoridades deben dirigir y emprender diligencias tanto para la localización de la persona como para el esclarecimiento de los hechos y la identificación de los responsables, de manera integral y con la misma efectividad.[250] Para ello, cuando la búsqueda y la investigación penal se encuentran a cargo de autoridades distintas, deben existir mecanismos de articulación, coordinación e intercambio de información que aseguren una retroalimentación regular y sin demora entre los avances y resultados obtenidos en ambos procesos. Esta distribución de competencias debe permitir que las actuaciones sean complementarias, sin que la existencia de autoridades o mecanismos especializados de búsqueda pueda constituir un obstáculo para el desarrollo de la investigación penal ni sustituirla.[251]

---

[248] Corte IDH. Caso González y otras ("Campo Algodonero") Vs. México. Excepción Preliminar, Fondo, Reparaciones y Costas. Sentencia de 16 de noviembre de 2009. Serie C No. 205, párrs. 283 y 293.

[249] Comisión de Derechos Humanos de la Ciudad de México, Recomendaciones 08/2025 *doc. cit.*, 09/2025 *doc. cit.* y 10/2025 *doc. cit.*

[250] Principios rectores para la búsqueda de personas desaparecidas, principio 13, párr. 1, en el que se establece: *"La búsqueda de la persona desaparecida y la investigación penal de los responsables de la desaparición deben reforzarse mutuamente. El proceso de búsqueda integral de las personas desaparecidas debe iniciarse y llevarse a cabo con la misma efectividad que la investigación criminal".*

[251] Principios rectores para la búsqueda de personas desaparecidas, principio 13, párr. 2, el cual establece: *"Cuando la búsqueda es realizada por autoridades no judiciales independientes de las que integran el sistema de justicia, se deben establecer mecanismos y procedimientos de articulación, coordinación e intercambio de información entre ellas y las que llevan la investigación criminal, de manera que se garantice la retroalimentación, regular y sin demora, entre los avances y resultados obtenidos por ambas entidades. Las competencias de ambas instituciones deben estar claramente definidas en la ley, para evitar que se sobrepongan e interfieran entre sí y para asegurar que puedan ser complementarias. La existencia de mecanismos y procedimientos de búsqueda a cargo de entidades administrativas, no judiciales o de otra índole, no puede ser invocada como obstáculo para la realización de investigaciones penales o para la sustitución de estas".*

170. En cuanto a la planificación de la búsqueda, si bien la LGMDFPyDP atribuye a las Comisiones de Búsqueda directamente la labor de coordinación de las acciones de búsqueda, ello no sustituye ni desplaza las obligaciones que corresponden a las autoridades ministeriales en el ámbito de sus competencias. Éstas tienen entre sus obligaciones recibir las denuncias por la probable comisión de los delitos contemplados en la LGMDFPyDP, así como emprender las acciones de investigación que correspondan e implementar el Protocolo Homologado de Investigación desde el momento en que tengan conocimiento de la desaparición de una persona. Además, la propia LGMDFPyDP establece que las Fiscalías Especializadas deben coordinarse y dar impulso permanente a la búsqueda de las personas desaparecidas, por lo que las funciones de investigación y búsqueda deben desarrollarse de manera articulada y complementaria.[252]

171. En cuanto a las acciones de búsqueda inmediata en el caso de mujeres desaparecidas, el Protocolo Alba establece una serie de acciones dentro de la *Fase Uno* de su activación, la cual consiste, en la elaboración e implementación de un Plan de investigación, la realización de una entrevista exhaustiva a las y los familiares o a quien denuncie la desaparición, a fin de obtener información que permita construir el perfil victimal de la mujer, niña o adolescente desaparecida,[253] la obtención del número telefónico de la víctima para solicitar, conservar y analizar datos reservados, la obtención del consentimiento de las familias para la toma de muestras genéticas y huellas dactilares, la notificación a la Comisión de Atención a Víctimas sobre el inicio de la investigación, la elaboración y difusión del foto-volante respectivo y la coordinación del Grupo Operativo[254] o de grupos de trabajo interinstitucionales,[255] para realizar acciones de búsqueda, entre otras.

---

[252] Ley General en Materia de Desaparición Forzada de Personas, Desaparición Cometida por Particulares y del Sistema Nacional de Búsqueda de Personas, texto vigente al momento de la desaparición, artículo 68, primer párrafo, que establece: *"[l]a Procuraduría y las Procuradurías Locales deben contar con Fiscalías Especializadas para la investigación y persecución de los delitos de desaparición forzada de personas y desaparición cometida por particulares, las que deberán coordinarse y dar impulso permanente a la búsqueda de Personas Desaparecidas".*

[253] Protocolo Alba para la Ciudad de México, apartado 1.2, *De las acciones de búsqueda coordinadas por el Ministerio Público*, numeral 1.2.4, en el que se establece: *"Recabar la entrevista inicial de la persona o personas que reporten la no localización o desaparición de las víctimas directas, y coordinar las acciones de búsqueda; para tal fin, se allegará entre otros datos, de su media filiación, señas particulares, vestimenta, particularidades de la persona, enfermedades, deficiencia de carácter físico, sensorial, cognitivo, intelectual y psicosocial, profesión, trabajo, origen, entorno social, familiar, relacional, laboral, financiero, lugares que acostumbraba visitar, si cuenta con línea telefónica y dispositivo de comunicación, fotografías, entre otras; atendiendo a las particularidades del hecho, de conformidad con el Anexo 1".*

[254] Protocolo Alba para la Ciudad de México, en el que se define al "Grupo Operativo" como las *"fuerzas operativas conformadas por Agentes del Ministerio Público o de la Policía de Investigación, las Coordinaciones territoriales de las Fiscalías Desconcentradas competentes, el Jefe de Sector o Subsecretario de Operación Policial de la Secretaría de Seguridad Pública que corresponda, así como el C5 y la Unidad Administrativa encargada de monitorear las distintas frecuencias operativas de radio, así como coordinar la atención inmediata de las emergencias y recopilar la información que se genere como resultado de la operación policial, en términos del presente Protocolo".*
recopilar la información que se genere como resultado de la operación policial, en términos del presente Protocolo.

[255] Ley General en Materia de Desaparición Forzada de Personas, Desaparición Cometida por Particulares y del Sistema Nacional de Búsqueda de Personas, artículo 70, fracción X, que establece: *"[c]onformar grupos de trabajo interinstitucionales y multidisciplinarios para la coordinación de la investigación de hechos probablemente constitutivos*

172. Una vez agotada la búsqueda inmediata y al no obtener resultados positivos, el Protocolo Alba permite la activación de la *Fase Dos*, la cual consiste en la búsqueda a través de la colaboración de servicios forenses para remitir la información genética y realizar su confronta con las bases de datos de otras autoridades ministeriales de diferentes órdenes de gobierno[256] y la búsqueda nominal en diversas instituciones de gobierno.[257]

173. Además, el PHI precisa que, para la investigación de los delitos contemplados en la LGMDFPyDP, las autoridades ministeriales deben elaborar un plan de investigación, definido como una:

> [H]erramienta de planeación, coordinación, dirección y control de la investigación, con el propósito de orientar las acciones de investigación encaminadas a reunir los indicios y datos de prueba necesarios para el esclarecimiento de los hechos que son del conocimiento de la/del AMP, y a acreditar los elementos de un hecho que la ley señale como delito y comprobar que existe la probabilidad de que una persona lo cometió o participó en su comisión.[258]

174. El PHI enfatiza que, aunque no exista un formato o estandarización del plan de investigación, este debe incorporar, entre otros elementos, la síntesis de los hechos, identificación de actores involucrados, antecedentes, formulación de hipótesis y definición de objetivos, relación de datos de prueba y agenda de investigación. La base para la construcción de cualquier plan de investigación son los datos o información recabados durante las primeras entrevistas practicadas en la investigación, de las cuales deben desprenderse hipótesis sobre el paradero de la persona y sobre cómo ocurrieron los hechos.[259] El PHI prevé una serie de acciones a realizar para cada etapa de la investigación, incluyendo los enfoques

---

de los delitos materia de esta Ley, cuando de la información con la que cuente la autoridad se desprenda que pudieron ocurrir en dos o más Entidades Federativas".

[256] Protocolo Alba para la Ciudad de México, numerales 2.1.2 y 2.1.3, que establecen: *"2.1.2 Dar intervención a los servicios periciales, para que realicen la recolección de muestras señaladas en la Fase Uno, para posterior análisis, extracción de perfil y confronta, siempre que se cuente con el consentimiento. Una vez recabado el dictamen de las muestras analizadas, éste se mandará a la PGR, a la Policía Federal y, en su caso, a las Fiscalías Estatales, para efectos de su registro y confronta con los datos que obren en sus bancos o bases de datos genéticos. 2.1.3 Solicitar a la PGR el registro y búsqueda de la persona en sus bases de datos y plataformas, así como colaboración en la activación de las alertas internacionales que se estimen necesarias, requiriendo a dicha institución se inicie la carpeta o expediente de búsqueda según las atribuciones que le correspondan, manteniendo un canal de comunicación abierto para evitar duplicidad de acciones".*

[257] Protocolo Alba para la Ciudad de México, numeral 2.1.4, que establece: *"Remitir a los enlaces de las diversas instituciones públicas federales, estatales y municipales, incluyendo centros penitenciarios, centros de detención, educativos, hospitales, juzgados cívicos, clínicas o centros de salud, de rehabilitación, psiquiátricos, entre otros, el foto-volante e información de identificación de la víctima directa, para su búsqueda física en instalaciones y en bases de datos, según corresponda".*

[258] Protocolo Homologado de Investigación para los delitos de Desaparición Forzada y Desaparición cometida por particulares, p. 60.

[259] *Ibidem*, 61-62

diferenciados que se deben adoptar cuando la víctima directa pertenece a un grupo de atención prioritaria.

175. Por otro lado, en cuanto al derecho de las víctimas indirectas a participar en la investigación, el Código Nacional de Procedimientos Penales reconoce como uno de los derechos de las víctimas del delito, el acceso a la justicia y establece la obligación de las y los operadores de justicia -agentes del ministerio público y órganos jurisdiccionales- de facilitarlo y ajustar su actuar, entre otros principios, a la debida diligencia.[260] Al respecto, los Principios Rectores para la Búsqueda,[261] la LGMDFPyDP[262] y la normativa de la Ciudad de México[263] les confiere el derecho, a las familias de personas desaparecidas, a conocer las circunstancias en que ocurrieron los hechos, así como a recibir información sobre el desarrollo y los resultados de las investigaciones y la búsqueda, lo que supone garantizar condiciones efectivas para su participación y seguimiento de las actuaciones encaminadas a determinar la suerte y el paradero de la persona desaparecida.

176. En este sentido, la Corte IDH ha establecido que la participación de las y los familiares de las víctimas en la investigación *"deberá tener como finalidad el acceso a la justicia y el conocimiento de la verdad de lo ocurrido. Asimismo, corresponde a las autoridades informar a los familiares, de manera oportuna y adecuada, sobre los avances y hallazgos que se vayan produciendo en el marco de las investigaciones"*.[264] En el caso González y otras ("Campo Algodonero") vs. México, la Corte reiteró la importancia de garantizar a las y los familiares información sobre los avances de la investigación y acceso a los expedientes.[265]

---

[260] Código Nacional de Procedimientos Penales, artículo 109 I y 11 que establecen: *"En los procedimientos previstos en este Código, la víctima u ofendido tendrán los siguientes derechos: I. A ser informado de los derechos que en su favor le reconoce la Constitución; II. A que el Ministerio Público y sus auxiliares, así como el Órgano jurisdiccional le faciliten el acceso a la justicia y les presten los servicios que constitucionalmente tienen encomendados con legalidad, honradez"*.

[261] Principios Rectores para la búsqueda de personas desaparecidas, principio 5.

[262] Ley General en Materia de Desaparición Forzada de Personas, Desaparición Cometida por Particulares y del Sistema Nacional de Búsqueda de Personas, artículo 5, fracción X, el cual reconoce: *"Participación conjunta: las autoridades de los distintos órdenes de gobierno, en sus respectivos ámbitos de competencia, permitirán la participación directa de los Familiares, en los términos previstos en esta Ley y demás disposiciones aplicables, en las tareas de búsqueda, incluido el diseño, implementación y evaluación de las acciones en casos particulares, como en políticas públicas y prácticas institucionales"*.

[263] Ley de Búsqueda de Personas de la Ciudad de México, artículo 2, fracción VI, el cual contempla: *"Establecer la forma de participación de los Familiares, sus asesores jurídicos, las instancias de la sociedad civil organizada y del sector privado y demás víctimas indirectas en el diseño, implementación, monitoreo y evaluación de las acciones de búsqueda e identificación de Personas Desaparecidas; así como garantizar la coadyuvancia en las etapas de la investigación, de manera que puedan verter sus opiniones, recibir información, aportar indicios o evidencias"*. Si bien esta Ley se publicó en diciembre de 2019, a partir de fecha se encontraba vigente y aplicable al momento en que ocurrieron las búsquedas de Natali Carmona entre 2020 y 2022.

[264] Corte IDH. Caso Silva Reyes y otros Vs. Nicaragua. Fondo, Reparaciones y Costas. Sentencia de 2 de septiembre de 2025. Serie C No. 566., párr. 126.

[265] Corte IDH. Caso González y otras ("Campo Algodonero") Vs. México. Excepción Preliminar, Fondo, Reparaciones y Costas. Sentencia de 16 de noviembre de 2009. Serie C No. 205, párr. 455, inciso ii).

177. En suma, el deber de debida diligencia reforzada, en relación con las obligaciones de máxima protección y de garantizar la participación efectiva de las y los familiares de mujeres desaparecidas en las labores de búsqueda e investigación, impone a la autoridad ministerial deberes específicos de mantener una comunicación continua, brindar información oportuna y suficiente sobre las actuaciones realizadas y sus resultados, escuchar y valorar la información y las propuestas formuladas por las familias, y generar condiciones para su participación efectiva en la búsqueda y la investigación. Esta participación no se agota en mantener informadas a las familias, sino que exige asegurar que puedan dar seguimiento a las actuaciones, aportar información y plantear diligencias o líneas de investigación que contribuyan al esclarecimiento de los hechos y a determinar la suerte o paradero de la persona desaparecida.

2.1.2 Obligaciones en materia de cooperación y colaboración entre instituciones del Estado

178. Esta Comisión enfatiza que la desaparición de personas en México es un fenómeno complejo que como ha sido ampliamente desarrollado por Tribunales internacionales, implica múltiples afectaciones a derechos humanos y que, por su naturaleza permanente o continua,[266] debe ser analizado considerando la totalidad de los hechos denunciados y su contexto, lo que necesariamente implica atender a su complejidad y posible prolongación en diversos territorios del país. En particular la desaparición de personas documentadas en la zona centro de México (comprendida por la Ciudad de México, Puebla, Tlaxcala, Morelos y el Estado de México), evidencian cómo existen dinámicas delictivas y de violencia que cruzan las delimitaciones de una o más entidades federativas.[267]

179. En este contexto, la Comisión destaca la necesidad de garantizar la cooperación y colaboración entre instituciones del Estado, considerando las diferentes entidades federativas que pudieran tener responsabilidad en la investigación y búsqueda. Ello en el marco de la política integral sobre la desaparición de personas.[268]

180. En cuanto al papel de las Fiscalías, debe destacarse que las y los agentes del Ministerio Público tienen la obligación de conducir la investigación en coordinación

---

[266] Corte IDH. Caso Alvarado Espinoza y otros Vs. México. Fondo, Reparaciones y Costas. Sentencia de 28 de noviembre de 2018. Serie C No. 370, párrs165; Corte IDH. Caso Zambrano Vélez y otros Vs. Ecuador. Fondo, Reparaciones y Costas. Sentencia de 4 de julio de 2007. Serie C No. 166. párr. 103; Caso Gudiel Álvarez y otros (Diario Militar) Vs. Guatemala. Interpretación de la Sentencia de Fondo, Reparaciones y Costas. Sentencia de 19 de agosto de 2013. Serie C No. 262, párr. 192; Caso González Méndez y otros Vs. México. Excepción Preliminar, Fondo, Reparaciones y Costas. Sentencia de 22 de agosto de 2024. Serie C No. 532, párr. 143.

[267] Karina Ansolabehere *et al.*, *Nombrarlas para encontrarlas. Contexto, dinámicas y respuestas en torno a la desaparición de mujeres en el centro de México*, *op. cit.*

[268] *Ibidem,* pp 74-76; Suprema Corte de Justicia de la Nación, Primera Sala, Amparo en revisión 51/2020 párr. 105.

con las policías y los servicios periciales, ordenando las diligencias pertinentes y útiles para la demostración, o no, de la existencia del delito y la responsabilidad de los partícipes.[269] Asimismo, las Fiscalías tienen el deber de actuar con objetividad y bajo la debida diligencia.[270] El desglose de estas obligaciones se encuentra en el artículo 131 del Código Nacional de Procedimientos Penales, el cual reitera las obligaciones de conducción de la investigación, la coordinación e instrucciones de recolección de evidencia a cargo de la policía, así como la solicitud de autorización de técnicas de investigación.[271]

181. En México, desde 2012 la Conferencia Nacional de Procuración de Justicia (CNPJ) emitió un Convenio de Colaboración interinstitucional,[272] el cual establece los mecanismos de diálogo entre la Fiscalía General de la República y las fiscalías de las entidades federativas, dirigidos a facilitar la práctica de diligencias fuera y dentro del ámbito territorial de la autoridad investigadora, el intercambio oportuno de información a través de tecnología de punta y la articulación de actuaciones ministeriales, evitando que la distribución territorial de competencias constituya un obstáculo para el desarrollo exhaustivo, continuo y eficaz de la investigación.

182. Por su parte, la fracción X del artículo 70 de la LGMDFPyDP[273] establece la posibilidad de conformar grupos de trabajo interinstitucionales y multidisciplinarios

---

[269] Código Nacional de Procedimientos Penales, artículo 127, el cual establece: *"Competencia del Ministerio Público Compete al Ministerio Público conducir la investigación, coordinar a las Policías y a los servicios periciales durante la investigación, resolver sobre el ejercicio de la acción penal en la forma establecida por la ley y, en su caso, ordenar las diligencias pertinentes y útiles para demostrar, o no, la existencia del delito y la responsabilidad de quien lo cometió o participó en su comisión".*

[270] *Ibidem*, artículo 129, el cual establece: *"Deber de objetividad y debida diligencia La investigación debe ser objetiva y referirse tanto a los elementos de cargo como de descargo y conducida con la debida diligencia, a efecto de garantizar el respeto de los derechos de las partes y el debido proceso".*

[271] *Ibidem*, artículo 131, el cual establece: *"Obligaciones del Ministerio Público Para los efectos del presente Código, el Ministerio Público tendrá las siguientes obligaciones: I. Vigilar que en toda investigación de los delitos se cumpla estrictamente con los derechos humanos reconocidos en la Constitución y en los Tratados; […]; III. Ejercer la conducción y el mando de la investigación de los delitos, para lo cual deberá coordinar a las Policías y a los peritos durante la misma; […]; V. Iniciar la investigación correspondiente cuando así proceda y, en su caso, ordenar la recolección de indicios y medios de prueba que deberán servir para sus respectivas resoluciones y las del Órgano jurisdiccional, así como recabar los elementos necesarios que determinen el daño causado por el delito y la cuantificación del mismo para los efectos de su reparación. Cuando se trate del delito de feminicidio se deberán aplicar los protocolos previstos para tales efectos; […]; IX. Requerir informes o documentación a otras autoridades y a particulares, así como solicitar la práctica de peritajes y diligencias para la obtención de otros medios de prueba; X. Solicitar al Órgano jurisdiccional la autorización de actos de investigación y demás actuaciones que sean necesarias dentro de la misma".*

[272] Convenio de Colaboración que celebran la Procuraduría General de la República, la Procuraduría General de Justicia Militar y las Procuradurías y Fiscalías Generales de Justicia de las entidades federativas, publicado en el *Diario Oficial de la Federación* el 23 de noviembre de 2012.

[273] Ley General en Materia de Desaparición Forzada de Personas, Desaparición Cometida por Particulares y del Sistema Nacional de Búsqueda de Personas, artículo 70, fracción X, el cual establece: *"Las Fiscalías Especializadas, en el ámbito de sus competencias, tienen las atribuciones siguientes: […] X. Conformar grupos de trabajo interinstitucionales y multidisciplinarios para la coordinación de la investigación de hechos probablemente constitutivos de los delitos materia de esta Ley, cuando de la información con la que cuente la autoridad se desprenda que pudieron ocurrir en dos o más Entidades Federativas o se trata de una persona extranjera en situación de migración, independientemente de su situación migratoria".*

para la coordinación de la investigación cuando exista información de que la desaparición ocurrió en dos o más entidades federativas. Adicionalmente, el Protocolo Homologado de Investigación para los delitos de Desaparición Forzada y Desaparición cometida por particulares (PHI), vigente desde 2018, señala que el desarrollo de una investigación efectiva requiere la consideración de emprender acciones en otros estados a través del Convenio anteriormente citado.[274]

183. Así, las Fiscalías Especializadas en materia de desaparición tienen la posibilidad de establecer acuerdos y convenios de colaboración con diversas autoridades para realizar acciones de investigación fuera de su ámbito de competencia territorial o para compartir información para el desarrollo de la investigación con otras instituciones de búsqueda o de procuración de justicia de otros estados. Para la implementación de estas acciones, el PHI señala que las autoridades deben permitir la comunicación a través de métodos y medios que permitan agilizar la colaboración sin sacrificar la necesidad de mantener formalidades básicas o mínimas.

184. A lo anterior se suma lo resuelto por la SCJN en el sentido de reconocer, como componente del derecho a ser buscado, la obligación de las autoridades de coordinarse, estableciendo que:

> [L]a búsqueda de personas debe involucrar a todas las autoridades competentes y que éstas **deben coordinarse y colaborar entre ellas para lograr procesos de búsqueda eficientes**, los cuales son competencia tanto de las autoridades de búsqueda como de las autoridades indagatorias, y, en general, de las instituciones del Estado mexicano. La política pública sobre búsqueda, entonces, debe promover la cooperación y colaboración de todas las instancias del Estado.[275]

185. Como es posible advertir, el marco normativo en materia de desaparición contempla la necesidad de que las autoridades ministeriales emprendan actos de investigación y búsqueda de manera coordinada, con la finalidad de maximizar el cumplimiento de las obligaciones de imparcialidad, debida diligencia y exhaustividad que requieren las investigaciones de graves violaciones a derechos humanos.

186. En los casos de desaparición, la existencia de indicios de que los hechos pudieron desarrollarse o continuar en otra entidad federativa no puede ser entendida únicamente como una cuestión de incompetencia territorial que releve a la autoridad que inició la investigación de continuar realizando las diligencias

---

[274] Protocolo Homologado de Investigación para los delitos de Desaparición Forzada y Desaparición cometida por particulares, p 10.
[275] Suprema Corte de Justicia de la Nación, Primera Sala, Amparo en revisión 51/2020.

necesarias. Por el contrario, atendiendo a la naturaleza continua de la desaparición y a la obligación de impulsar permanentemente la búsqueda, la posible intervención de autoridades de distintas entidades exige activar los mecanismos de coordinación, colaboración e intercambio de información previstos en el marco normativo, así como preservar la continuidad de las acciones de investigación y búsqueda. Lo anterior adquiere especial relevancia cuando parte de los hechos comenzó a ejecutarse en el territorio de la autoridad que conoció inicialmente del caso o existen diligencias que ésta se encuentra en posibilidad de realizar, sin perjuicio de que, cuando corresponda, se determine la competencia de otra autoridad y se remitan las actuaciones respectivas.[276]

2.1.3 Obligaciones en materia de la debida diligencia reforzada en la conducción de la investigación de desaparición de mujeres

187. Esta Comisión reitera que en los casos que involucren a mujeres, la investigación no sólo debe desarrollarse con determinación e imparcialidad,[277] sino que las autoridades también tienen el deber de investigar con una debida diligencia reforzada,[278] incorporando la perspectiva de género, que permita considerar los contextos de violencia y discriminación que pueden afectar a las mujeres,[279] derivados, entre otros factores, de las relaciones de poder históricamente desiguales entre mujeres y hombres y que trascienden todos los sectores de la sociedad,[280] con la intención de prevenir, investigar y sancionar la violencia contra la mujer.[281]

188. En particular, ante la desaparición de una mujer, las autoridades deben desarrollar líneas de investigación que atiendan al contexto y a sus circunstancias particulares, a través de personal capacitado y manteniendo informados a sus familiares sobre

---

[276] Ley General en Materia de Desaparición Forzada de Personas, Desaparición Cometida por Particulares y del Sistema Nacional de Búsqueda de Personas, artículos 68 y 70, fracciones X, XII, XVI y XXIV; Protocolo Homologado de Investigación para los Delitos de Desaparición Forzada y Desaparición Cometida por Particulares, apartados relativos a colaboración interinstitucional, determinación de competencia y desarrollo de la investigación.
[277] Corte IDH, Caso González y otras ("Campo Algodonero") vs. México. Excepción Preliminar, Fondo, Reparaciones y Costas. Sentencia de 16 de noviembre de 2009. Serie C No. 205, párr. 293.
[278] *Ibidem*, párrs. 258 y 284; Corte IDH. Caso Fernández Ortega y otros Vs. México. Excepción Preliminar, Fondo, Reparaciones y Costas. Sentencia de 30 de agosto de 2010. Serie C No. 215, párr. 194; Comité para la Eliminación de la Discriminación contra la Mujer de las Naciones Unidas, Recomendación General núm. 28, *Relativa a las obligaciones básicas de los Estados partes de conformidad con el artículo 2 de la Convención sobre la Eliminación de Todas las Formas de Discriminación contra la Mujer*, Doc. ONU CEDAW/C/GC/28, párr. 19 (16 de diciembre de 2010). ONU, Comité CEDAW, Recomendación general N.º 28 relativa al artículo 2 de la Convención sobre la eliminación de todas las formas de discriminación contra la mujer, 16 de diciembre de 2010, párr. 19.
[279] Corte IDH, Caso González y otras ("Campo Algodonero") vs. México. Excepción Preliminar, Fondo, Reparaciones y Costas. Sentencia de 16 de noviembre de 2009. Serie C No. 205, párr. 293.
[280] Corte IDH. Caso Fernández Ortega y otros Vs. México. Excepción Preliminar, Fondo, Reparaciones y Costas. Sentencia de 30 de agosto de 2010. Serie C No. 215, párr. 118; Caso Rosendo Cantú y Otra vs. México, Excepción Preliminar, Fondo, Reparaciones y Costas, Sentencia del 31 de agosto de 2010, Serie C No. 216 párr. párr. 108.
[281] Convención Belém Do Pará artículo 7, inciso b.

los avances de la investigación.[282] Asimismo, deben actuar de manera pronta e inmediata, recabando sin demora la denuncia, las entrevistas de posibles testigos y demás evidencias necesarias para orientar las primeras acciones de búsqueda e investigación.[283]

189. Esta obligación de *debida diligencia reforzada* opera también bajo las obligaciones de prevención y desde la *evitabilidad* del riesgo, siendo entendida como "*la implementación de políticas generales de protección, la implementación de estrategias para superar la desigualdad de poder y la discriminación de las mujeres, y la efectividad de los mecanismos de tutela judicial, entre otros*".[284]. Es importante recordar que, en relación con la investigación de muertes violentas de mujeres, la Primera Sala de la SCJN ha desarrollado criterios que resultan relevantes para identificar algunos de los elementos que exige este análisis:

i) Verificar si la víctima se encontró en una situación de violencia o vulnerabilidad por cuestiones de género.

ii) Agotar todas las líneas de investigación incluso si a primera vista parecería no existir la presencia de algún delito.

iii) Analizar los hechos para confirmar o descartar que el motivo está o no relacionado con razones de género.[285]

190. En ese sentido, es importante destacar que el cumplimiento de estos elementos necesariamente se relaciona con la existencia de una planificación de la investigación y de la búsqueda, las cuales deben basarse en la información recabada de familiares y testigos, *"considerando los factores de riesgo y situaciones de vulnerabilidad que afecten a las mujeres"*.[286] Asimismo, es importante destacar que el marco de actuación ministerial vigente al momento de la desaparición de **Natali Carmona Hernández (mujer víctima directa 1)** es coincidente con las obligaciones de debida diligencia reforzada reconocidas a nivel constitucional e internacional.[287]

---

[282] Corte IDH. Caso González y otras ("Campo Algodonero") Vs. México. Excepción Preliminar, Fondo, Reparaciones y Costas. Sentencia de 16 de noviembre de 2009. Serie C No. 205, párr. 455.

[283] Comité para la Eliminación de la Discriminación contra la Mujer de las Naciones Unidas, *Ramón Jaimes vs. México*, Comunicación núm. 153/2020, Dictamen aprobado en virtud del artículo 7, párr. 3, del Protocolo Facultativo, Doc. ONU CEDAW/C/83/D/153/2020, párrs. 7.5–7.6 (22 de noviembre de 2022).

[284] Víctor Abramovich, "Responsabilidad estatal por violencia de género: comentarios sobre el caso 'Campo Algodonero' en la Corte Interamericana de Derechos Humanos" *op. cit.*, p. 178.

[285]"FEMINICIDIO. LAS AUTORIDADES ENCARGADAS DE LA INVESTIGACIÓN DE MUERTES VIOLENTAS DE MUJERES TIENEN LA OBLIGACIÓN DE REALIZAR LAS DILIGENCIAS CORRESPONDIENTES CON BASE EN UNA PERSPECTIVA DE GÉNERO," Primera Sala, Tesis: 1a. CLXI/2015 (10a.), *Gaceta del Semanario Judicial de la Federación*, Décima Época, Libro 18, tomo I, mayo de 2015, p. 439. Reg. digital 2009087.

[286] Protocolo Alba para la Ciudad de México, apartado *Principios generales de observancia obligatoria*, inciso ñ), *"Perspectiva de género"*, en el que se establece: *"La autoridad deberá realizar su investigación libre de prejuicios, razonamientos o estereotipos discriminatorios por razones de identidad, expresión u orientación de género, debiendo tomar en consideración los factores de riesgo y situaciones de vulnerabilidad que afecten a las mujeres"*.

[287] Protocolo Homologado de Investigación para los Delitos de Desaparición Forzada de Personas y Desaparición Cometida por Particulares, apartado *Políticas de operación*, numeral 12, p. 26, en el que se establece: *"La/el AMP debe en cualquier caso en que se involucre a personas de un grupo en estado de vulnerabilidad, conducirse bajo los*

191. La omisión de investigar con perspectiva de género por la autoridad competente conlleva el riesgo de omitir líneas de investigación tendientes a descartar o confirmar si la persona desaparecida ha sido víctima de algún delito por razones de género y, con ello, generar una afectación irreparable a los derechos de vida e integridad de las víctimas.[288] Asimismo, puede impedir la identificación de factores de riesgo y circunstancias relevantes para orientar adecuadamente la búsqueda y la investigación. La omisión de atender los casos de desaparición de mujeres desde esta perspectiva conlleva también el incumplimiento del deber de conducir la investigación con debida diligencia reforzada en razón de género y puede incidir en la garantía de los derechos de acceso a la verdad y a la justicia, en relación con los derechos a la igualdad y no discriminación y a una vida libre de violencia, desarrollados *supra*.

2.2 Motivación respecto a los Derechos de acceso a la verdad y a la justicia y deber de investigación con debida diligencia y perspectiva de género

192. Partiendo de los estándares desarrollados sobre los derechos de acceso a la verdad y a la justicia y el deber de conducir la investigación con debida diligencia reforzada y perspectiva de género en casos de desaparición de mujeres, esta Comisión analizará la actuación de la FGJ CDMX en la investigación de la desaparición de **Natali Carmona Hernández (mujer víctima directa 1)**, a partir de tres aspectos: ***(i)*** las omisiones en el inicio y seguimiento de la investigación por parte de las autoridades locales; ***(ii)*** las omisiones documentadas en las labores de coordinación interestatal entre la FGJ CDMX y la FGE Puebla; y ***(iii)*** la omisión de incorporar la debida diligencia reforzada y la perspectiva de género durante la investigación de la desaparición.

2.2.1. Omisiones en el inicio y seguimiento de la investigación de la desaparición de Natali Carmona Hernández (mujer víctima directa 1)

193. Este Organismo acreditó que la FGJ CDMX vulneró los derechos de acceso a la verdad y a la justicia de **Aidee Hernández Ávila (mujer víctima directa 2)** y **Aurelio Carmona Cruz (víctima directa 3),** madre y padre de **Natali Carmona Hernández (mujer víctima directa 1)**, en relación con su obligación de conducir una investigación con debida diligencia reforzada aplicable a la investigación de su desaparición, al no haber desplegado, desde las primeras horas posteriores al

---

principios que rigen el enfoque diferenciado y especializado para el caso en concreto, evitando en todo momento la descalificación, la invisibilización de una vulnerabilidad específica, el maltrato, el desprecio o la estigmatización, la minimización del daño o cualquier otra que discrimine o menoscabe los derechos de las personas. Aplicando los protocolos vigentes y pertinentes que garanticen los principios de debida diligencia y justicia pronta e integral".

[288] CDHCM, Recomendación 02/2020, *op. cit.* párr. 372.

conocimiento de los hechos, actuaciones exhaustivas y oportunas para recabar y preservar información relevante, establecer líneas lógicas de investigación y orientar las acciones necesarias para su búsqueda y localización. Estas omisiones resultan particularmente relevantes porque, como lo reconoce el PHI, las horas inmediatas a la desaparición de una persona son vitales para la recopilación de información, incluyendo la que derive de entrevistas, que permita emprender diligencias oportunas e inmediatas para la investigación de los hechos y la búsqueda.[289] A partir de la información recabada inicialmente, corresponde a la persona agente del ministerio público plantear una hipótesis inicial sobre lo sucedido, que permita orientar y dar continuidad a la investigación.[290]

194. En lo que interesa, esta Comisión analizará el incumplimiento de las diligencias que debieron implementarse una vez que la agencia del ministerio público tuvo conocimiento de la desaparición[291], la recolección de entrevistas iniciales exhaustivas,[292] las acciones de búsqueda y localización inmediata,[293] la solicitud de

---

[289] Protocolo Homologado de Investigación para los Delitos de Desaparición Forzada de Personas y Desaparición Cometida por Particulares, pp. 38 y 42, *en el que se establece: "La/el AMP y Policía deben estar capacitados y profesionalmente certificados en la materia para recabar las entrevistas de víctimas y testigos; con la finalidad de generar los insumos necesarios y fundamentales que den sustento y fortaleza a las demás acciones y diligencias que motiven la investigación […] La/el AMP después de la entrevista, evalúa la información disponible y valora si el hecho descrito por el denunciante constituye un hecho señalado como alguno de los delitos previstos por la Ley General. Para esto se considerará la narrativa del hecho disponible, la calidad específica de las personas involucradas, así como su competencia para investigar el mismo de forma inmediata y diligente (optimizando el tiempo, debido a que las primeras horas posteriores al evento aportan el mayor número de datos de pruebas). […] Una vez analizada la información, la/el AMP se encontrará en capacidad de generar una primera versión sobre los hechos y conforme a ello establecerá la hipótesis inicial del caso; así mismo instruirá la práctica de las primeras acciones urgentes e inmediatas de la investigación. […] La/el AMP deberá realizar las diligencias urgentes en atención a las particularidades del caso, ya sea que la CI se inicie con o sin detenido, o si es que se logra la localización de la persona desaparecida, ya sea con vida o fallecida".*

[290] *Ibidem*, p. 40, numerales 16 y 17, en los que se establece: *"16. A partir de la información disponible al momento, la/el AMP plantea la hipótesis principal (inicial) de conocimiento de los hechos para determinar el planteamiento de una investigación preliminar. 17. Así mismo, la/el AMP solicita la práctica de acciones urgentes e inmediatas para la investigación y posible cruce de información con las comisiones respecto a las acciones y diligencias de búsqueda. En atención a los principios de inmediatez, efectividad, exhaustividad, debida diligencia y demás a que se refiere el artículo 5 de la Ley General, la/el AMP realizará una valoración de acuerdo a la calidad de los sujetos involucrados y ordena las acciones urgentes e inmediatas para la investigación de los delitos de Desaparición Forzada de Personas y Desaparición cometida por Particulares; para ello debemos tener en consideración que los elementos facticos, probatorios y jurídicos son fundamentales para generar estas acciones urgentes e inmediatas, cuyo fin esencial será la localización de la víctima con vida, generar información de calidad pertinente, idónea y eficaz para posteriormente definir estrategias de investigación".*

[291] Protocolo Alba para la Ciudad de México, numeral *"1.1 Del inicio de la investigación"*, que establece: *"LOCATEL y el Consejo Ciudadano, al tener conocimiento de la no localización o desaparición de la víctima directa, realizarán su registro y consultarán en su base de datos coincidencias, informando del resultado a la persona que realice el reporte y, de ser procedente, la canalizará al Agente del Ministerio Público, para que instruyan a la Célula de Búsqueda correspondiente".*

[292] *Ibidem*, numeral 1.2.4, que establece: *"Recabar la entrevista inicial de la persona o personas que reporten la no localización o desaparición de las víctimas directas, y coordinar las acciones de búsqueda; […] trabajo, origen, entorno social, familiar, relacional, laboral, financiero, lugares que acostumbraba visitar, si cuenta con línea telefónica y dispositivo de comunicación, fotografías, entre otras; atendiendo a las particularidades del hecho, de conformidad con el Anexo 1".*

[293] *Ibidem*, numeral 1.2.13, en el que se establece: *"Solicitar sin demora, por cualquier medio, la intervención de la Célula de Búsqueda que corresponda, para efectos de que inicien la búsqueda y localización material inmediata de la víctima directa".*

acceso a la información de empresas de telefonía móvil,[294] solicitud y resguardo de videograbaciones de C5[295], la localización de testigos,[296] el patrullaje para la identificación de las posibles rutas[297] entre otras.

195. Consta que el día 28 de enero de 2019 se realizó el reporte por la desaparición de **Natali Carmona Hernández (mujer víctima directa 1)** ante Locatel,[298] y, posteriormente, el 29 de enero de 2019, uno diverso a través del 911.[299] De acuerdo con el Protocolo Alba, los reportes de desaparición o no localización realizados a través de los servicios de emergencia deben ser comunicados de manera inmediata a las autoridades competentes, entre ellas la SSC CDMX, el C5 y la FGJ CDMX, para la activación de la búsqueda.[300] La inexistencia de diligencias derivadas de estos reportes de Locatel y del 911 evidencian la falta de coordinación interinstitucional, lo que afectó el inicio de la carpeta de investigación y las diligencias de búsqueda y localización inmediata. Esta omisión resulta particularmente relevante en el caso de **Natali Carmona Hernández (mujer víctima directa 1),** pues implicó la pérdida de horas cruciales para su búsqueda y localización.

196. También, de acuerdo con la resolución del Consejo de Asuntos Internos de la FGJ CDMX, se acreditó una omisión inicial en la búsqueda y recolección oportuna de indicios por parte de la policía de investigación, en línea con lo establecido en el

---

[294] *Ibidem*, numeral 1.2.18, en el que se establece: *"Solicitar, a la autoridad jurisdiccional la autorización para acceder a la información que detente la empresa de telefonía móvil, entre la que se encuentran sábanas de llamadas con georreferenciación y su interpretación, registro de llamadas y mensajes entrantes y salientes, de los 180 días anteriores al suceso, hasta el momento de la solicitud".*

[295] *Ibidem*, numeral 1.2.16, en el que se establece: *"Solicitar al C5 la visualización de las videograbaciones y, en su caso, la obtención y su resguardo, así como los particulares que tengan conectados sus equipos y sistemas tecnológicos privados al sistema que instale la Secretaría".*

[296] *Ibidem*, numeral 1.4.2, en el que se establece: *"Localizar a posibles testigos de los hechos, así como personas cercanas a la víctima directa, familiares, amistades, con las que tiene relación laboral, sentimental o académica entre otras, datos de posibles vehículos participantes, personas armadas y si contaba con algún aparato o dispositivo que permita su localización".*

[297] *Ibidem*, numeral 1.4.3, en el que se establece: *"Realizar patrullajes dinámicos pie a tierra y móvil de manera exhaustiva, en avenidas, calles, colonias, carreteras, y efectuar la búsqueda en tiendas, centros comerciales, gasolineras, hoteles, moteles y otros"*

[298] Anexo, evidencia 1. El reporte señala que se dio información de la FIPEDE y se identifica un *"folio CAPEA".*

[299] Anexo, evidencia 2.

[300] Ley General en Materia de Desaparición Forzada de Personas, Desaparición Cometida por Particulares y del Sistema Nacional de Búsqueda de Personas, artículo 80, en el cual se establece: *"Cualquier persona puede solicitar la búsqueda de una Persona Desaparecida o No Localizada mediante: I. Noticia; II. Reporte, o III. Denuncia. La Noticia, el Reporte o la Denuncia pueden realizarse en forma anónima. Tratándose de Denuncia, no será necesaria su ratificación. Tanto la búsqueda como la investigación se llevarán a cabo sin dilación. Artículo 81. El Reporte puede realizarse las veinticuatro horas del día, todos los días del año, a través de cualquiera de los siguientes medios: I. Telefónico, a través del número único nacional habilitado para tal efecto".* Protocolo Alba para la Ciudad de México, Fase Uno, *Activación del Protocolo Alba, acciones de búsqueda urgente*, apartado 1.1, *Del inicio de la investigación*, en el que se establece: *"A través del Servicio de Atención de Llamadas de Emergencia 911, quienes elaborarán el reporte de la no localización o desaparición de la víctima directa, dando intervención sin dilación alguna a la Secretaría de Seguridad Pública y al C5, para que se instruya a la Célula de Búsqueda que corresponda, informando al agente del Ministerio Público respectivo".*

Protocolo Alba.[301] Ello, en virtud de que consta que el agente del ministerio público no instruyó oportunamente a la policía de investigación para realización de la inspección del último domicilio en el que habitaron **Natali Carmona Hernández (mujer víctima directa 1)** y su pareja. Esta diligencia fue practicada hasta el 14 de enero de 2020, casi un año después del reporte de desaparición, lo que, conforme a dicha resolución, implicó el incumplimiento del principio de inmediatez que debe regir los actos de investigación, ante el riesgo de que el transcurso del tiempo propicie la alteración, pérdida o desaparición de posibles indicios.[302]

197. Estas irregularidades no solo son de orden administrativo, en términos del régimen disciplinario cuya determinación no sustituye el análisis de las violaciones a derechos humanos atribuibles a la autoridad responsable,[303] sino que también constituyen omisiones del agente del ministerio público que incidieron directamente en el derecho de acceso a la justicia y verdad de la familia de **Natali Carmona Hernández (mujer víctima directa 1)**. La falta de oficiosidad, exhaustividad y oportunidad en la práctica de estas diligencias obstaculizó las labores de identificación de testigos o personas partícipes en la desaparición y en la búsqueda de **Natali Carmona Hernández (mujer víctima directa 1)**.

198. La autoridad responsable tampoco fue exhaustiva en la realización de las entrevistas de las y los familiares de **Natali Carmona Hernández (mujer víctima directa 1)** y de su pareja, así como en el resguardo y preservación de información relevante para la investigación durante las primeras 72 horas de tener conocimiento de la desaparición. Por ejemplo:

- En las entrevistas realizadas a los familiares que presentaron denuncia por los hechos, dan datos generales alrededor de la desaparición de **Natali Carmona Hernández (mujer víctima directa 1)** y **P1 (pareja de Natali Carmona Hernández),**[304] sin embargo, carecen de información relevante que debió requerirse por el ministerio público, como los números telefónicos de **Natali Carmona Hernández (mujer víctima directa 1)**, su pareja y del hijo de este (que recibió un mensaje de su padre el día de los hechos). Gran parte de esta información se obtuvo a través de testimonios obtenidos

[301] Protocolo Alba para la Ciudad de México, numeral 1.2.14, en el que se establece: *"Ordenar a los elementos de la policía de investigación de la adscripción, que realicen actos de investigación de campo y gabinete, tales como, entrevistas a familiares, amistades, personas con las que tenga relación laboral, sentimental o académica; búsqueda en hoteles, moteles, centros comerciales, juzgados de justicia cívica, centros penitenciarios, hospitales, Instituto de Ciencias Forenses, etc.; y, búsqueda en bases de datos".*

[302] Véase Anexo, evidencia 118.

[303] Reglamento del Régimen Disciplinario del Personal Sustantivo de la Fiscalía General de Justicia de la Ciudad de México, publicado mediante Aviso FGJCDMX/31/2020 en la *Gaceta Oficial de la Ciudad de México* el 17 de septiembre de 2020, artículo 2, que establece: *"La responsabilidad disciplinaria prevista en el presente ordenamiento, será independiente de las que correspondan por responsabilidad administrativa, civil, patrimonial, laboral o penal en que pudiera incurrir el personal ministerial, policial y pericial de la Fiscalía General de Justicia de la Ciudad de México".*

[304] Véanse Anexo, evidencias 2, 6 y 7.

después del 30 de enero de 2019, después de las primeras entrevistas recabadas a las denunciantes, situación que comprometió la exhaustividad del primer contacto con las familias de **Natali Carmona Hernández (mujer víctima directa 1)**.[305]

- El número telefónico de **Natali Carmona Hernández (mujer víctima directa 1)** fue solicitado por la FIPEDE hasta septiembre de 2020,[306] pese a que desde febrero de 2019 dicha autoridad tuvo conocimiento de que la hija de **Natali Carmona Hernández (mujer víctima directa 1)** tenía en su posesión el equipo telefónico de su madre.[307]
- Pese a que **P2 (hermana de la pareja de Natali Carmona Hernández)** dio el nombre de la persona a la que supuestamente visitaban **Natali Carmona Hernández (mujer víctima directa 1)** y **P1 (pareja de Natali Carmona Hernández),**[308] la búsqueda nominal de esta persona, identificada como **P3 (amigo de P1, pareja de Natalia Carmona Hernández)** se dio hasta 2020, un año después.[309]

199. Esta falta de actuación oportuna y su impacto en la pérdida de líneas de investigación, fue considerada por el Consejo de Asuntos Internos de la FGJ CDMX como una irregularidad,[310] y se destacó como parte de las recomendaciones del análisis de contexto emitido en junio de 2020.[311]

200. En sentido similar, FIPEDE solicitó la autorización judicial para la entrega de datos conservados del número telefónico de **P1 (pareja de Natali Carmona Hernández)**,

---

[305] Al respecto, el *Protocolo Homologado de Investigación para los Delitos de Desaparición Forzada y Desaparición Cometida por Particulares*, en sus páginas 38 y 39, establece lo siguiente: *"La/el AMP y Policía deben reconocer a las víctimas y testigos como titulares y sujetos de derechos a los que debe respetarse y protegerse, en todo momento, su dignidad como personas; incluso a no ser objeto de violencia, arbitrariedades, discriminación y recibir por parte de todo el personal sustantivo un trato sensible e igual; con ello se garantizará el acceso pleno a sus derechos humanos con un enfoque diferenciado y especializado atento al caso concreto. Además, se reconoce como parte de los Derechos Humanos que le asisten a la víctima directa o indirecta, la facultad de designar un(a) Asesor(a) Jurídico(a) público o privado, para la representación de sus derechos en cualquier momento del procedimiento de investigación, en términos de lo previsto en el artículo 110 del CNPP".*

[306] Véase Anexo, evidencia 66. Entrevista practicada a **Mujer Víctima Directa 2**, de fecha 7 de septiembre de 2020, a las 12:55 horas, realizada ante el Agente del Ministerio Público adscrito a la FIPEDE.

[307] Véase Anexo, evidencia 29. Entrevista Ministerial rendida a las 11:00 horas del 25 de febrero de 2019.

[308] Véase Anexo, evidencia 2.

[309] Véase Anexo, evidencias 46 y 67.

[310] Véase Anexo, evidencia 118. En donde se establece que: *"[P]or lo que el servidor público incoado al omitir informarles a las víctimas indirectas sobre la importancia de dicho teléfono celular ocasionando que la menor [...] lo usara y perdiera,* ***ocasionando la perdida de nuevas líneas de investigación relativas a llamadas de voz entrantes y salientes, registro de mensajes, posible actividad de georreferenciación o geolocalización****. En ese sentido el servidor público incoado incumplió con lo establecido en el artículo 131 fracciones IV y IX del Código Nacional de Procedimientos Penales, que establecen que es obligación del Ministerio Público: IV. Ordenar o supervisar, según sea el caso, la aplicación y ejecución de las medidas necesarias para impedir que se pierdan, destruyan o alteren los indicios, una vez que tenga noticia del mismo, así como cerciorarse de que se han seguido las reglas y protocolos para su preservación y procesamiento; IX.- Requerir informes o documentación a otras autoridades y a particulares, así como solicitar la práctica de peritajes y diligencias para la obtención de otros medios de prueba"*

[311] Véase Anexo, evidencia 58.

aproximadamente 21 días después de que se tuvo conocimiento de la desaparición.[312] Es importante destacar que allegarse de los datos conservados del número telefónico y del equipo de telefonía celular, así como realizar la inspección del último domicilio de **Natali Carmona Hernández (mujer víctima directa 1)**, constituían diligencias indispensables para conocer sus hábitos y dinámicas de relación, aspectos que posteriormente cobrarán especial relevancia en el presente instrumento recomendatorio, particularmente en el análisis de la debida diligencia reforzada en la investigación de su desaparición. Es decir, la autoridad señalada como responsable actuó en contravención de los principios de exhaustividad y oportunidad de la debida diligencia en relación con los numerales 1.2.4 y 1.5.4 del Protocolo Alba[313] y del PHI.[314]

201. Por otra parte, esta Comisión acreditó que existió una dilación en la realización de entrevistas relevantes para la investigación. Por ejemplo, la entrevista practicada por la FIPEDE a **Aidee Hernández Ávila (mujer víctima directa 2)** se realizó el día 30 de enero de 2019 a las 15:00 horas, es decir, transcurridas más de 72 horas de la desaparición de **Natali Carmona Hernández (mujer víctima directa 1)**, sin que dicha en entrevista se recabara toda la información necesaria para las acciones inmediatas en la investigación[315] mientras que la entrevista a **Shared Sánchez Carmona (mujer víctima indirecta 3)** se realizó el 26 de marzo de 2019,[316] a casi dos meses de haberse denunciado la desaparición. De ambas entrevistas se desprende información relevante para el esclarecimiento de los hechos, como antecedentes de posible violencia familiar de **Natali Carmona Hernández (mujer víctima directa 1)**, idas previas al estado de Puebla, o la localización de diversas cámaras de seguridad y vigilancia ubicadas en las inmediaciones de su domicilio[317] (que también tuvieron deficiente seguimiento), mostrando la relevancia de haberlas tenido que realizar de manera inmediata, lo que no ocurrió, o se realizó de forma deficiente.[318]

---

[312] Véase Anexo, evidencia 27.

[313] Protocolo Alba para la Ciudad de México, numeral 1.5.4, en el que se establece: *"Aplicar métodos y elementos tecnológicos a su disposición para el análisis estratégico de información que permita guiar la investigación".*

[314] En ese sentido, el Protocolo Homologado de Investigación para los Delitos de Desaparición Forzada de Personas y Desaparición Cometida por Particulares, pp. 40-41, establece, como parte del plan de investigación: *"Ordenar la recolección y resguardo de los datos relativos a todas y cada una de las comunicaciones (llamadas entrantes salientes-transferencias, mensajes entrantes y salientes, conexión a datos con su correspondiente geo referenciación y datos de IMEI, tipo de plan de pago; si el número ha sido reasignado, la sabana de llamadas, si mantiene activa la línea, pagos o saldos, fechas de activación, etc.), telefónicas a las que tuvo acceso la víctima, familiares, amistades o testigos relacionados al hecho motivo de la investigación".*

[315] Véase Anexo, evidencia 7.

[316] Véase Anexo, Evidencia 35. Entrevista ministerial del 26 de marzo de 2019, a las 13:55 horas, recabada por el Agente del Ministerio Público adscrito a la FIPEDE de la PGJ.

[317] Véanse Anexo, evidencias 7 y 35.

[318] Véase Anexo, Evidencia 118. Por ejemplo, si bien consta de la carpeta de investigación que el 6 de marzo de 2019 se remite un informe de investigación policial a través del cual se realiza la toma fotográfica derivada de la observación de dos cámaras de vigilancia que captaron el vehículo donde viajaba **Natali Carmona Hernández (mujer víctima directa 1)** y su pareja, esta diligencia tuvo un seguimiento deficiente, pues se limitó a reportar entrevistas y recorridos

202. Así, resulta evidente que existió información que no fue adecuadamente procesada dentro de las primeras 72 horas de la desaparición de **Natali Carmona Hernández (mujer víctima directa 1)**. Asimismo, hubo información que no fue adecuadamente resguardada o solicitada. Estas situaciones, en su conjunto, tuvieron repercusiones en los derechos de acceso a la verdad y justicia, en detrimento del desarrollo posterior de la investigación y en las posibilidades de reconstruir oportunamente las circunstancias de la desaparición y el posible destino de las víctimas.

Diligencias posteriores a las 72 horas

203. Para asegurar la debida diligencia en las investigaciones por desaparición de personas, además de las acciones inmediatas, las autoridades ministeriales deben conducir sus actuaciones a través de un plan de investigación[319] que permita identificar las líneas lógicas de investigación y, en la medida de lo posible, contemplar la participación de las víctimas. Sin embargo, del análisis de evidencias recabadas por esta Comisión, no se identificó un plan de investigación o instrumento similar ni, por consiguiente, líneas de investigación claras que hubieran sido agotadas de manera exhaustiva. Estas deficiencias se prolongaron durante el seguimiento de la investigación, pues como ya se señaló, diversos actos de investigación fueron planteados de manera tardía, pese a estar sustentados en información disponible desde los primeros momentos posteriores al reporte de desaparición.

204. Un año y cuatro meses después del reporte de desaparición, después de la declinación de competencia de FGJ CDMX, el 4 de junio de 2020, la Coordinación General de Investigación de Delitos de Género y Atención a Víctimas de la FGJ CDMX realizó una serie de recomendaciones a la FIPEDE para la investigación de los hechos y localización de **Natali Carmona Hernández (mujer víctima directa 1),**[320] de las cuales, en lo que interesa, se proponía profundizar y agotar diversas líneas de investigación mediante entrevistas a familiares y personas relacionadas con las víctimas, así como el análisis de información telefónica, redes sociales y datos bancarios; continuar con la localización del vehículo utilizado por las víctimas y fortalecer la colaboración con la FGE Puebla para realizar diligencias relacionadas con personas y números telefónicos de interés.

---

con resultados negativos, sin acompañar evidencia suficiente de las diligencias realizadas. La falta de seguimiento y exhaustividad relacionado con las cámaras, también fueron acreditadas como una irregularidad por el Consejo de Asuntos Internos de la FGJ CDMX en su resolución de procedimiento disciplinario.

[319] Protocolo Homologado de Investigación para los delitos de Desaparición Forzada y Desaparición cometida por particulares, p. 60.

[320] Véase Anexo, evidencia 58.

205. Respecto del cumplimiento de las diligencias solicitadas, esta Comisión identificó que, si bien se realizaron las entrevistas sugeridas, pese a reiterarse la existencia de un número telefónico de **Natali Carmona Hernández (mujer víctima directa 1)**, no se solicitaron sus datos conservados ni se requirió el equipo telefónico de manera inmediata.[321] Tampoco existe evidencia de la realización del dictamen en trabajo social solicitado. En cuanto a los datos conservados solicitados a concesionarios de telefonía, se realizaron dos requerimientos previos al análisis de contexto pero, ante la falta de respuesta, no se gestionó autorización judicial para formular una nueva solicitud.[322]

206. Por otro lado, esta Comisión advirtió que, durante la mesa de trabajo celebrada el 5 de octubre de 2020 entre la FGJ CDMX y **Aidee Hernández Ávila (mujer víctima directa 2)** se acordaron actos de investigación, incluyendo el rastreo del vehículo en el que se transportaron de Ciudad de México a Puebla, así como analizar la línea telefónica de **Natali Carmona Hernández (mujer víctima directa 1).**[323] Estas diligencias debieron valorarse y, en su caso, practicadas oportunamente y no hasta el 5 de octubre de 2020, más de 20 meses después del reporte de desaparición.

207. Ambos ejemplos permiten evidenciar una notoria dilación en el seguimiento de las líneas de investigación y la ausencia de un plan que guiara la investigación y fuera conocido por la familia, pues desde los primeros momentos posteriores a la denuncia de la desaparición se advertía la necesidad de practicar diligencias como las que, posteriormente, fueron planteadas en los acuerdos de la mesa de trabajo y en las recomendaciones formuladas por la Coordinación General de Investigación de Delitos de Género y Atención a Víctimas de la FGJ CDMX. Además, como se desarrollará más adelante, las actuaciones paralelas entre entidades generaron falta de claridad en el impulso de la investigación al no realizarse bajo esquemas adecuados de coordinación.

208. La omisión de actuar con debida diligencia y exhaustividad en las primeras actuaciones en la investigación de la desaparición de **Natali Carmona Hernández (mujer víctima directa 1)** se vio agravada por la ausencia de perspectiva de género, al no incorporarse un análisis diferenciado de los riesgos y circunstancias del caso en particular en momentos iniciales, lo que tuvo efectos en la orientación de las acciones de búsqueda y en el desarrollo de líneas de investigación dirigidas al esclarecimiento de los hechos. Sobre este punto se ahondará más adelante.

---

[321] Véase Anexo, evidencia 82.
[322] Véase Anexo, Evidencia 55. Oficio emitido el 28 de abril de 2020, suscrito por el Fiscal Especializado en la Búsqueda, Localización e Investigación de Personas Desaparecidas de la FGJ CDMX dirigido al representante legal de una empresa de telecomunicaciones.
[323] Véase Anexo, evidencia 67.

209. Además, mediante resolución administrativa del Consejo de Asuntos Internos se acreditó que el agente del Ministerio Público de la FGJ CDMX omitió reconocer oportunamente la calidad de víctimas indirectas a las y los familiares **de Natali Carmona Hernández (mujer víctima directa 1)**, pese a su relación inmediata con ella y a su participación en las actuaciones desarrolladas desde los primeros momentos de la investigación. Dicho reconocimiento se formalizó de manera posterior en noviembre de 2020,[324] lo que impidió garantizar oportunamente a sus familiares los derechos que les correspondían en su calidad de víctimas indirectas, particularmente aquellos vinculados con la asistencia, protección, atención y acompañamiento en las labores de investigación y búsqueda, en términos de los artículos 2 y 4 de la Ley General de Víctimas.[325]

210. Estos hechos, en particular, también se vinculan con las violaciones a la integridad psicológica de los familiares de **Natali Carmona Hernández (mujer víctima directa 1)**, como se desarrolla de manera pormenorizada *infra*, atendiendo a que la desaparición de una persona puede implicar una afectación a la integridad psicológica de sus familiares directos cuando las investigaciones resultan ineficaces y conducen a los familiares a involucrarse directamente en el impulso de acciones encaminadas a lograr una investigación eficaz.[326]

211. Finalmente, esta Comisión destaca que la investigación de **Natali Carmona Hernández (mujer víctima directa 1)** se inició como carpeta por ***persona extraviada o no localizada***, hasta febrero de 2021, cuando **Aidee Hernández Ávila (mujer víctima directa 2)** solicitó la apertura de la investigación por el delito de desaparición por particulares en contra de quien resulte responsable.[327] Esta situación no es menor, ya que al no tener conocimiento del paradero de **Natali Carmona Hernández (mujer víctima directa 1)**, la FIPEDE debió reclasificar el delito por el cual se seguía la investigación a desaparición y conducir la investigación bajo dicha hipótesis. Lo anterior se agrava cuando pese al hallazgo del cuerpo sin vida de **P1 (pareja de Natali Carmona Hernández)** en un terreno del que se refirió su uso como fosa clandestina, FIPEDE no reclasificó a desaparición por particulares el delito por el que investigaba los hechos.

212. Por lo anterior, este Organismo acreditó que la FGJ CDMX no planificó, de manera estratégica, exhaustiva y mediante un Plan de investigación, las diligencias a seguir para esclarecer la desaparición de **Natali Carmona Hernández (mujer víctima**

---

[324] Véase Anexo, evidencia 69.
[325] Véase Anexo, evidencia 118.
[326] Comisión de Derechos Humanos de la Ciudad de México, Recomendación 10/2025, *doc. cit.*, párrs. 102-104; Corte IDH. Caso Osorio Rivera y Familiares Vs. Perú. Excepciones Preliminares, Fondo, Reparaciones y Costas. Sentencia de 26 de noviembre de 2013. Serie C No. 274, párr. 231
[327] Véase Anexo, evidencia 72.

directa 1), incumpliendo con los componentes de oficiosidad, oportunidad, inmediatez y exhaustividad que, en el caso de mujeres desaparecidas, implicaba un doble cuidado y obligación de actuar bajo el deber de debida diligencia reforzada, en incumplimiento de los numerales 1.2.1, 2.1.1 del Protocolo Alba para la Ciudad de México y apartados aplicables del PHI.

2.2.2. Omisiones en las labores de coordinación y colaboración interestatal entre la FGJ CDMX y la FGE Puebla

213. La desaparición de personas constituye una violación a derechos humanos cuyas dinámicas deben analizarse a partir del contexto en el que se desarrollan y de su posible extensión territorial. En la zona centro de México, integrada por la Ciudad de México, Puebla, Tlaxcala, Morelos y el Estado de México,[328] estas dinámicas pueden trascender los límites de una sola entidad federativa, lo que exige una respuesta estatal coordinada e interinstitucional.[329]

214. Al respecto, es importante recordar que tanto el PHI como el Convenio de colaboración entre autoridades ministeriales dan cuenta de la posibilidad de solicitar permisos entre fiscalías para la realización de actos de investigación en estados distintos al lugar donde se investigan los hechos y flexibiliza la posibilidad de recibir los oficios de solicitud de colaboración por cualquier vía que permita la comunicación inmediata de la solicitud.[330] Aunado a lo anterior, el artículo 70 fracción X de la LGMDFPyDP establece las atribuciones de las Fiscalías especializadas para conformar grupos de trabajo interinstitucionales y

---

[328] Karina Ansolabehere *et al.*, *Nombrarlas para encontrarlas. Contexto, dinámicas y respuestas en torno a la desaparición de mujeres en el centro de México*, *op. cit.* Véase Anexo, evidencia 122.

[329] *Ibidem*, pp. 74-76; Suprema Corte de Justicia de la Nación, Primera Sala, *Amparo en revisión 51/2020*, 10 de agosto de 2022, ponente: Ana Margarita Ríos Farjat, párr. 105.

[330] Convenio de Colaboración que celebran la Procuraduría General de la República, la Procuraduría General de Justicia Militar y las Procuradurías y Fiscalías Generales de Justicia de las entidades federativas, publicado en el *Diario Oficial de la Federación* el 23 de noviembre de 2012, cláusula Décima, "En materia de investigación de delitos", apartado B, que establece: *"Las 'PROCURADURÍAS' se comprometen a lo siguiente: Para efectos de investigación o en cumplimiento de una orden ministerial o judicial, la policía podrá internarse en el territorio de otra entidad federativa, con un oficio de colaboración suscrito por su Procurador o Fiscal General de Justicia o por los Subprocuradores o Titulares de las áreas de Averiguaciones Previas o de Control de Procesos o Titulares de las Unidades o Coordinaciones Especializadas en Investigación de Delitos, según corresponda, previo acuerdo del citado Procurador o Fiscal, acompañado de una copia certificada del mandamiento ministerial o judicial que sustente la colaboración salvo los casos de flagrancia o caso urgente en los que bastará una copia simple, sin perjuicio de que antes de autorizar el traslado del asegurado a la diversa entidad federativa se exhiba la copia certificada y, en su caso, la certificación ministerial de que está vigente dicho mandamiento. […] Dicho oficio de colaboración que podrá ser expedido mediante firma autógrafa, digital o electrónica, tendrá plena validez y reconocimiento por las 'Procuradurías' y deberá ser entregado materialmente o por vía electrónica, digital o por cualquier otro medio tecnológico, al agente del Ministerio Público más cercano al lugar de las actuaciones a realizar, quien deberá recibirlo y sin demora recabará la autorización del Procurador, Fiscal o del servidor público en quien se haya delegado la facultad, a efecto de permitir las actuaciones en los términos que bajo su responsabilidad sean procedentes, conforme a la normatividad aplicable de la entidad requerida, incluyendo el traslado de personas o iniciar las diligencias correspondientes".*

multidisciplinarios para la coordinación de la investigación cuando concurra la competencia de varios estados.[331]

215. En el caso particular, esta Comisión advierte que la FGJ CDMX no emprendió una coordinación interestatal pronta ni exhaustiva en relación con la investigación de la desaparición de **Natali Carmona Hernández (mujer víctima directa 1)**.

216. En primer lugar, destaca que el 13 de febrero de 2019, ante la falta de comunicación con la FGE Puebla, el agente de FGJ CDMX a cargo de la carpeta de investigación, sugirió a **Aidee Hernández Ávila (mujer víctima directa 2)** que acudiera por sus propios medios al Instituto de Ciencias Forenses del Estado de Puebla, a fin de solicitar la búsqueda de su hija **Natali Carmona Hernández (mujer víctima directa 1)**, sin agotar de forma exhaustiva la colaboración interinstitucional que evitara la carga procesal en la familia.[332] Esta práctica se reiteró el 15 de febrero de 2019, con posterioridad a la localización de **P1 (pareja de Natali Carmona Hernández)**, al encomendarse nuevamente a su familia la realización de gestiones vinculadas con la búsqueda sin el acompañamiento de la FGJ CDMX.[333]

217. Posteriormente, el 12 de abril del 2019 la FGJ CDMX, remitió la totalidad de las actuaciones a la Fiscalía General del Estado de Puebla, argumentando su incompetencia sin tener datos suficientes para establecer si la desaparición de **Natali Carmona Hernández (mujer víctima directa 1)** efectivamente tuvo verificativo exclusivamente en el estado de Puebla.[334] Dicha determinación inobservó la naturaleza permanente o continua de la desaparición ni consideró que ésta pudo haber comenzado a ejecutarse en la Ciudad de México. En estas circunstancias, la posible intervención de autoridades de otra entidad exigía fortalecer la coordinación y colaboración interestatal, así como garantizar la continuidad de las acciones de investigación y búsqueda. Lo que no ocurrió.

218. Como se refirió en el apartado de hechos del presente instrumento recomendatorio, desde las primeras entrevistas realizadas a las y los familiares, éstos refirieron que **Natali Carmona Hernández (mujer víctima directa 1)** y su pareja aparentemente se dirigían a Puebla el día de su desaparición,[335] exponiendo desde el inicio una línea de investigación vinculada al traslado entre CDMX y dicho estado. Dicha hipótesis se reforzó ante el descubrimiento de cadáveres en estado de descomposición en un predio en Puebla, que derivó en la localización e

---

[331] Ley General en Materia de Desaparición Forzada de Personas, Desaparición Cometida por Particulares y del Sistema Nacional de Búsqueda de Personas, artículo 70, fracción X.
[332] Véase Anexo, evidencia 23.
[333] Véase Anexo, evidencia 25.
[334] Véanse Anexo, evidencias 38 y 118.
[335] Véanse Anexo, evidencias 2, 6 y 7.

identificación de **P1 (pareja de Natali Carmona Hernández)**.[336] Además, desde febrero de 2019, se tenía información de medios de comunicación que vinculaban el lugar del hallazgo como una fosa clandestina, lo que se reforzó en 2021, cuando la FGJ CDMX informó que realizó requerimientos de información sobre registros de feminicidios y fosas clandestinas en el Estado de Puebla.[337]

219. Sin embargo, a pesar de que, cuando la FGJ CDMX tenía bajo su mando y conducción la carpeta de investigación en 2019, existía una línea de investigación sólida que apuntaba hacia dicho predio, el agente del ministerio público de FIPEDE se limitó a pedir información por llamada telefónica a la FGE Puebla para obtener copia de la carpeta de investigación por el homicidio de **P1 (pareja de Natali Carmona Hernández)**[338] y por oficio para la localización de **Natali Carmona Hernández (mujer víctima directa 1),**[339] en donde solicitó en vías de colaboración, diversas diligencias a las cuales no le dio seguimiento, ya que declinó competencia a la FGE Puebla.[340]

220. Para este Organismo, no pasa desapercibido que se realizó una búsqueda nominal de **Natali Carmona Hernández (mujer víctima directa 1)** en instituciones de Puebla, sin embargo, estas solicitudes de información no sustituían la obligación de emprender actos de investigación para la identificación de testigos o para allegarse de información delictiva de la zona donde ocurrió el hallazgo, lo cual se dejó a cargo de la familia de **Natali Carmona Hernández (mujer víctima directa 1)**.[341]

221. Ahora bien, las solicitudes de colaboración para la entrada de agentes de policía de investigación de FGJ CDMX al estado de Puebla, datan de agosto de 2020,[342] es decir, a un año y seis meses aproximadamente después de haberse tenido conocimiento del hallazgo de la pareja **Natali Carmona Hernández (mujer víctima directa 1)** en terrenos de cultivo en Huejotzingo, Puebla. Dichas diligencias pudieron haberse solicitado previamente en vía de colaboración, priorizando la búsqueda; e incluso, pudieron impulsarse desde las primeras etapas de la investigación, cuando la FGJ CDMX tenía el mando y conducción de la carpeta de investigación, mediante los mecanismos de colaboración interinstitucional, como el

[336] Véanse Anexo, evidencias 17, 18 y 19.
[337] Véanse Anexo, evidencias 19, 78 y 84. La evidencia (78) se refiere al oficio de 25 de agosto de 2021suscrito Agente del Ministerio Público adscrito a FIPEDE, y la evidencia (84) se refiere al informe de policía de investigación de 25 de noviembre de 2021.
[338] Véase Anexo, evidencia 20. Registro de acto de investigación ministerial de las 11:30 horas del 13 de febrero del año 2019, suscrito por el Agente del Ministerio Público adscrito a FIPEDE de la FGJ CDMX.
[339] Véase, Anexo, evidencia 31.
[340] Véanse, Anexo, evidencias 38 y 43. La evidencia (43) se refiere al oficio número 200.211/11315/09-2019 de 04 de octubre de 2019, suscrito por el Agente del Ministerio Público adscrito a FIPEDE.
[341] Véanse Anexo, evidencias 23 y 25.
[342] Véase Anexo, evidencia 62. Oficio de colaboración interestatal del 13 de agosto de 2020, suscrito por la, Coordinadora General de Investigación de Delitos de Género y Atención a Víctimas de la FGJ CDMX.

establecido en el artículo 70, fracción X de la LGMDFPyDP,[343] que hubiese permitido desarrollar acciones de búsqueda, más allá de la práctica de entrevistas y otras diligencias de investigación sobre las cuáles no existió certeza sobre sus alcances y objetivos.

222. Esta Comisión considera que, desde el momento en que se tuvo conocimiento de la existencia de fosas clandestinas, así como del hallazgo de la pareja de **Natali Carmona Hernández (mujer víctima directa 1)** en los terrenos de cultivo, la conclusión lógica para la FGJ CDMX era emprender acciones exhaustivas y oportunas de colaboración con las autoridades en Puebla para la investigación por la desaparición de **Natali Carmona Hernández (mujer víctima directa 1)**.

223. Sin embargo, esta Comisión constató que en abril de 2019 la FIPEDE determinó declinar competencia a favor de la FGE Puebla, al considerar que la desaparición se habría suscitado en esa entidad.[344] Esta determinación se adoptó sin contar con elementos suficientes para establecer que los hechos hubieran ocurrido exclusivamente en Puebla, pese a que **Natali Carmona Hernández (mujer víctima directa 1)** residía en la Ciudad de México, su último contacto había ocurrido en la Ciudad de México, su familia también residía en esta Ciudad y, además, existían elementos de la investigación que apuntaban a que parte de los hechos pudo haberse desarrollado en esta Ciudad. Asimismo, la declinatoria no contempló mecanismos de seguimiento, coordinación y colaboración que permitieran a la FIPEDE, en el marco de sus competencias, mantener la continuidad o seguimiento de las acciones de investigación que en algunos supuestos ya había emprendido, y que posteriormente, dado que en 2021 reabrió la carpeta de investigación, retomó.

224. Esta determinación resultó inadecuada y afectó la continuidad de la investigación, pues, en términos de lo determinado por el propio Consejo de Asuntos Internos en este caso, durante siete meses dejaron de realizarse actos de investigación en la Ciudad de México con lo cual el agente ministerial de FGJ CDMX *"fracturó la investigación dado que ese tiempo que corrió y [...] pudo ser preponderante para la localización de la citada víctima, lo anterior es así dado que [...] en 2019, la [FGE Puebla] [...] [le] requirió mediante colaboración que se continuara con la investigación"*.[345]

---

[343] Ley General en Materia de Desaparición Forzada de Personas, Desaparición Cometida por Particulares y del Sistema Nacional de Búsqueda de Personas, artículo 70, fracción X, el cual establece: *"Las Fiscalías Especializadas, en el ámbito de sus competencias, tienen las atribuciones siguientes: [...] X. Conformar grupos de trabajo interinstitucionales y multidisciplinarios para la coordinación de la investigación de hechos probablemente constitutivos de los delitos materia de esta Ley, cuando de la información con la que cuente la autoridad se desprenda que pudieron ocurrir en dos o más Entidades Federativas o se trata de una persona extranjera en situación de migración, independientemente de su situación migratoria"*.

[344] Véase Anexo, evidencias 38 y 43.

[345] Véase Anexo, evidencia 118.

225. Además, si bien la FGJ CDMX refiere que se le explicó a la peticionaria la motivación de dicha determinación,[346] esta manifestó constantemente no entender las razones y no estar conforme.[347] Precisamente, el presente expediente de queja inició con la referencia de **Aidee Hernández Ávila (mujer víctima directa 2)** de la falta de información que justificara la declinación de competencia al Estado de Puebla, así como de la desestimación de información proporcionada en la carpeta de investigación.[348] Estas problemáticas se reiteraron en diversas actas circunstanciadas recabadas por esta Comisión.[349]

226. Con posterioridad, el 15 de noviembre de 2019, la FGE PUEBLA solicitó la colaboración de la FGJ CDMX para la realización de diversos actos de investigación, que debieron realizarse desde los primeros momentos posteriores a la denuncia de desaparición, y radicaban en el ámbito la competencia territorial de la CDMX, tales como ampliar entrevistas a las familias, así como la información disponible sobre el entorno social, laboral vínculos personales y antecedentes de **P1 (pareja de Natali Carmona Hernández)**, con el propósito de identificar personas de interés y obtener datos relevantes para el desarrollo y agotamiento de líneas de investigación relacionadas con la desaparición de **Natali Carmona Hernández (mujer víctima directa 1)**. Esta solicitud se dejó abierta, es decir, dejando a la posibilidad de que FIPEDE explorara otras diligencias indispensables para el caso.[350]

227. En materia de colaboración y cooperación entre las autoridades ministeriales de Puebla y la Ciudad de México, el Consejo de Asuntos Internos también acreditó diversas irregularidades, entre las cuales se advierte que "resultaba necesario que FIPEDE continuará ejerciendo mayores actos de investigación a efecto de esclarecer o bien contar con los datos suficientes para considerar que la investigación era competencia de otra entidad federativa". También se acreditó la omisión de la FGJ CDMX de realizar las gestiones necesarias, solicitadas por FGE Puebla, para obtener el domicilio y recabar la entrevista de un testigo que había sido identificado como relevante para la investigación,[351] así como la omisión de

[346] Véase Anexo, evidencia, 43.
[347] Véase Anexo, evidencias 39, 41 y 42. Se refiere a: (41) acta circunstanciada de la entrevista recabada a **Aideé Hernández Ávila (mujer víctima directa 2)** el 23 de septiembre de 2019; y (42) acta circunstanciada de la entrevista recabada a **Aideé Hernández Ávila (mujer víctima directa 2)** el 27 de septiembre de 2019.
[348] Véase, Anexo, evidencia 39.
[349] Anexo, evidencias 41, 42, 45, 63 y 73. Se refiere a (45) acta circunstanciada recabada a **Aidee Hernández Ávila (mujer víctima directa 2)** el 15 de octubre de 2019; (63) acta circunstanciada recabada a **Aidee Hernández Ávila (mujer víctima directa 2)** 28 de agosto de 2020; (73) acta circunstanciada recabada a **Aidee Hernández Ávila (mujer víctima directa 2)** 23 de marzo de 2021.
[350] Véanse, Anexo, evidencias 46 y 47.
[351] Véase Anexo, evidencia 118.

atención a la solicitud de colaboración formulada por FGE Puebla para verificar la existencia o no de antecedentes de determinadas personas.[352] Así, aun cuando la carpeta de investigación aparentemente se encontraba bajo la conducción de la FGE Puebla, las omisiones del personal de la FGJ CDMX en la atención de las solicitudes de colaboración incidieron negativamente en el acceso a la justicia de **Natali Carmona Hernández (mujer víctima directa 1)**.

228. Posteriormente, en septiembre de 2020, la FGE Puebla determinó remitir por oficio la carpeta de investigación relacionada a la desaparición de **Natalia Carmona Hernández (mujer víctima directa 1)** a la FGJ CDMX, señalando que "*los hechos que se desprenden de la misma son materia de su competencia, lo anterior a fin de que se determine conforme a derecho*".[353] Sin embargo, no obra en las constancias revisadas por esta Comisión que FGJ CDMX diera respuesta a dicho oficio, iniciara carpeta de investigación o se justificara lo contrario, lo que aumentó la falta de certeza respecto a la conducción de la investigación. No es menor señalar que es hasta la comparecencia de **Aidee Hernández Ávila (mujer víctima directa 2)** de febrero de 2021 que la FIPEDE emite un acuerdo ministerial para *"iniciar"* la carpeta de investigación por el delito de desaparición por particulares en perjuicio de **Natali Carmona Hernández (mujer víctima directa 1).**[354]

229. La ausencia de colaboración eficaz tampoco consideró el contexto delictivo que vinculaba a ambas entidades, pese a que posteriormente, en el propio acuerdo de remisión de la carpeta de investigación a la Fiscalía General de la República, la FIPEDE señaló que la desaparición de **Natali Carmona Hernández (mujer víctima directa 1)** se encontraba vinculada con *"la participación de una banda criminal que opera en la Ciudad de México y en el Estado de Puebla, resultando que a sus víctimas las ejecutan y las entierran para desaparecerlas"*.[355]

230. Derivado de la investigación realizada por este organismo, se encuentra acreditado que la FIPEDE no desplegó mecanismos efectivos y oportunos de coordinación interestatal con la FGE Puebla para la búsqueda e investigación de la desaparición de **Natali Carmona Hernández (mujer víctima directa 1)**, pese a contar, desde las primeras entrevistas, con información que indicaba que ella y su pareja se dirigían a esa entidad federativa. Posteriormente, ante el hallazgo de la pareja de **Natali Carmona Hernández (mujer víctima directa 1)** en Puebla, se limitó a remitir la carpeta de investigación a dicha entidad, sin considerar la naturaleza continuada del delito de desaparición que inició en Ciudad de México y sin atender las líneas

[352] Véase Anexo, evidencia 118.
[353] Véase Anexo, evidencia 64.
[354] Véase Anexo, evidencia 72.
[355] Véase Anexo, evidencia 111.

que vinculaban a posibles personas responsables o testigos en Ciudad de México, así como las diligencias que tenía pendientes. Posteriormente, en el trámite del expediente de colaboración, la FGJ CDMX tampoco dio oportuno seguimiento a las solicitudes de colaboración solicitadas por la FGE Puebla[356].

231. A ello se suma que, mientras la carpeta de investigación se encontraba, según lo referido por FGJ CDMX bajo la conducción de la FGE Puebla, la FGJ CDMX continuó realizando actuaciones, algunas de dichas diligencias sin que mediara una solicitud de colaboración de la FGE Puebla. Esta conducta es contradictoria: la FGJ CDMX se declaró incompetente para conocer de los hechos y, aun así, siguió actuando en la investigación. Esta Comisión reconoce que la realización de dichas actuaciones, enmarcadas en el expediente de colaboración, podrían reflejar la disposición de la FGJ CDMX para participar en las acciones de búsqueda e investigación. Sin embargo, dicha situación generó incertidumbre en la justificación de las diligencias practicadas y el alcance de la intervención, pues como no respondían a una solicitud de la autoridad a cargo ni a una estrategia común ni plan de investigación, no había certeza sobre su justificación ni sobre si atendían a acciones prioritarias para la búsqueda. Dos autoridades intervenían en el mismo caso sin una definición clara de cuál conducía la investigación y cuál respondía por ella, y sin atender mecanismos de colaboración como grupos de trabajo. Esta falta de claridad generó zozobra en la familia de **Natali Carmona Hernández (mujer víctima directa 1),** que no sabía con certeza qué autoridad era responsable de buscarla. Además, la FGJ CDMX pudo realizar esas diligencias de forma oportuna cuando aún conducía la investigación, pero no lo hizo. La inadecuada declinación de competencia interrumpió esa continuidad, y las actuaciones posteriores al abrir nueva carpeta, no remediaron ese efecto.

232. No pasa desapercibido para esta Comisión que, luego de la declinación de competencia al estado de Puebla y la apertura de expediente colaboración en FGJCDMX, la autoridad responsable implementó diversas acciones como la eventual inscripción de algunos familiares de **Natali Carmona Hernández (mujer víctima directa 1)** al Registro de Víctimas de la Ciudad de México,[357] así como el ofrecimiento de recompensa a quien o quienes proporcionen información veraz y

---

[356] Véase Anexo, evidencia 118.

[357] Véanse Anexo, evidencias 69 y 113. La evidencia (69) se refiere al acuerdo ministerial del 24 de noviembre de 2020, que obra en la carpeta de investigación; la evidencia (113) se refiere al oficio de 21 de junio de 2023, suscrito por el Director de la Unidad de Atención Inmediata y Primer Contacto de la Comisión Ejecutiva de Atención a Víctimas de la Ciudad de México, en el que consta la inscripción en el Registro de Víctimas de la Ciudad de México de **Aidee Hernández Ávila (mujer víctima directa 2)**; **Aurelio Carmona Cruz (víctima directa 3)**; **Nancy Carmona Hernández (mujer víctima indirecta 1)**; **Shared Sánchez Carmona (mujer víctima indirecta 3)**, y **Joshua Sánchez Carmona (víctima indirecta 4)**. De acuerdo con dicho oficio, no consta la inscripción de **Miguel Ángel Carmona Hernández (víctima indirecta 2)**.

útil para su localización.[358] Sin embargo, estas acciones no lograron subsanar las falencias iniciales que presentaba la carpeta de investigación, derivado de que, desde el primer momento en que se tuvo conocimiento de los hechos, no se adoptaron las medidas necesarias conforme al deber de debida diligencia reforzada aplicable a los casos de desaparición de mujeres. Tampoco lograron subsanar la falta de continuidad generada durante el periodo en que la carpeta fue remitida al estado de Puebla, ni incidir en el seguimiento lógico y exhaustivo de las posibles líneas de investigación.

233. Como se desarrolló *supra*, la posible vinculación de los hechos con otra entidad federativa exigía que no se declinara competencia a FGE Puebla, hasta en tanto no existieran datos suficientes para sustentar dicha situación.[359] Lo procedente era garantizara la coordinación entre las autoridades involucradas y la continuidad de las acciones de investigación y búsqueda, por ejemplo, mediante la conformación de grupos de trabajo, con la participación de las fiscalías de ambas entidades federativas, en términos de lo establecido en la LGMDFPyDP.[360] Posteriormente, en el período en que FGE Puebla condujo la investigación, las actuaciones de la FGJ CDMX derivaron de la solicitud de colaboración formulada en noviembre de 2019,[361] en donde la Fiscalía requirente expuso que los actos de investigación eran enunciativos y no limitativos, por lo que también podían practicarse otras diligencias que se estimaran pertinentes para el esclarecimiento de los hechos. Dicha situación permitía establecer un mecanismo de coordinación que, de haberse definido con mayor claridad en cuanto a las atribuciones que correspondían a la FGJ CDMX y los objetivos de sus actuaciones, habría brindado mayor certeza sobre el seguimiento de la investigación.

234. En consecuencia, la inicial falta de una coordinación efectiva entre las autoridades involucradas y la posterior declinación de competencia, así como las acciones realizadas después de declinar competencia, que se ejecutaron sin considerar un mecanismo de coordinación en términos de la legislación aplicable[362] y un enfoque

---

[358] Acuerdo FGJCDMX/08/2021, por el que se ofrece recompensa a quien o a quienes proporcionen información veraz y útil, que coadyuve eficaz, eficiente, efectiva y oportunamente a la localización de Natali Carmona Hernández, así como la identificación, localización, aprehensión y puesta a disposición de la persona o personas responsables de la desaparición de la misma, publicado en la *Gaceta Oficial de la Ciudad de México* el 25 de febrero de 2021.

[359] Véanse Anexo, evidencias 38 y 118.

[360] Ley General en Materia de Desaparición Forzada de Personas, Desaparición Cometida por Particulares y del Sistema Nacional de Búsqueda de Personas, artículo 70, fracción X, que establece: *"La Fiscalía Especializada de la Procuraduría tiene, en el ámbito de su competencia, las atribuciones siguientes: Conformar grupos de trabajo interinstitucionales y multidisciplinarios para la coordinación de la investigación de hechos probablemente constitutivos de los delitos materia de esta Ley, cuando de la información con la que cuente la autoridad se desprenda que pudieron ocurrir en dos o más Entidades Federativas"*.

[361] Véase Anexo, evidencia 47

[362] Ley General en Materia de Desaparición Forzada de Personas, Desaparición Cometida por Particulares y del Sistema Nacional de Búsqueda de Personas, artículo 70, fracción X.

centrado en la búsqueda, afectó la continuidad y eficacia de la investigación y, con ello, los derechos de acceso a la verdad y a la justicia de **Aidee Hernández Ávila (mujer víctima directa 2)** y **Aurelio Carmona Cruz (víctima directa 3),** madre y padre de **Natali Carmona Hernández (mujer víctima directa 1)**.

2.2.3. Omisión de incorporar la debida diligencia reforzada y la perspectiva de género durante la investigación de la desaparición de Natali Carmona Hernández (mujer víctima directa 1)

235. Derivado de la investigación, se encuentra acreditado que la FGJ CDMX no adoptó un enfoque diferenciado, en cumplimiento al deber de debida diligencia reforzada, que requería la investigación de la desaparición de **Natali Carmona Hernández (mujer víctima directa 1)**. En particular, es importante recordar que la perspectiva de género aplicada a las investigaciones de desapariciones de mujeres tiene por objetivo permitir a las autoridades analizar e incorporar a las líneas de investigación las dinámicas de asimetría y violencia prexistentes en la vida de **Natali Carmona Hernández (mujer víctima directa 1)** que impactaron de manera directa o indirecta en su desaparición.[363]

236. Debe recordarse que la omisión de investigar con perspectiva de género por la autoridad competente conlleva el riesgo de omitir líneas de investigación tendientes a descartar o confirmar si la persona desaparecida ha sido víctima de algún delito por razones de género y generar con ello una afectación irreparable a los derechos de vida e integridad de las víctimas.[364]

237. Es importante destacar que, del análisis de las constancias de la carpeta de investigación, se advierte que la FIPEDE no fue exhaustiva en la identificación y desarrollo, desde las etapas tempranas de la investigación, de líneas relacionadas con la posibilidad de que la desaparición de **Natali Carmona Hernández (mujer víctima directa 1)** estuviera vinculada con posible violencia familiar u otras formas de violencia de género. En particular, existía información derivada de entrevistas[365] sobre sus relaciones personales, antecedentes, el *modus vivendi* de su pareja y otras circunstancias de su entorno que resultaban relevantes para formular y agotar líneas de investigación dirigidas a identificar o descartar la existencia de violencia de género, posibles relaciones asimétricas de poder o su eventual vinculación con la desaparición.

---

[363] Comisión de Derechos Humanos de la Ciudad de México, Recomendación 10/2025, *doc. cit.*, párrs. 102-104
[364] Comisión de Derechos Humanos de la Ciudad de México, Recomendación 02/2020, *doc. cit.* párr. 372.
[365] Véanse, Anexo, evidencias 2, 7, 42, 81. La evidencia (81) corresponde a entrevista de fecha 30 de julio de 2021 practicada a **Aidee Hernández Ávila (mujer víctima directa 2).**

238. La omisión de considerar, como línea de investigación, la posible violencia por razones de género que pudo haber sufrido **Natali Carmona Hernández (mujer víctima directa 1)**, aun después de que la FGJ CDMX tuvo conocimiento de antecedentes de violencia familiar, de la localización del cadáver de **P1 (pareja de Natali Carmona Hernández)** y del hallazgo de otros cadáveres en la misma zona,[366] constituye un incumplimiento del enfoque diferenciado que debe regir la investigación de la desaparición de mujeres. En particular, tales elementos exigían profundizar en líneas lógicas de investigación orientadas a conocer las dinámicas de pareja y a recabar, de manera exhaustiva, información detallada sobre el *modus vivendi* de **P1 (pareja de Natali Carmona Hernández)**, con el propósito de identificar o descartar posibles contextos de violencia de género vinculados con la desaparición

239. Esto se agrava al considerar el contexto descrito *supra* de desaparición de mujeres jóvenes en la Ciudad de México y, en particular, en la Alcaldía en la que residían **Natali Carmona Hernández (mujer víctima directa 1)** y **P1 (pareja de Natali Carmona Hernández)** que, sumado a los elementos concretos del caso, ameritaban indagar el posible riesgo en el que se encontraba **Natali Carmona Hernández (mujer víctima directa 1)** por el contexto y vínculos asociados a su pareja. Ello, detonaba la obligación de las autoridades de llevar a cabo una investigación y búsqueda reforzada hasta descartar la existencia de elementos de violencia de género asociados a la desaparición.

240. En ese sentido, las disposiciones del PHI y el Protocolo Alba para la atención de casos de mujeres desaparecidas,[367] concatenadas con las obligaciones transversales para atender de manera diferenciada la violencia extrema en contra de las mujeres, constatan que las actuaciones de la FIPEDE no fueron oportunas, suficientes ni exhaustivas. La actuación de la autoridad bajo el estándar desarrollado *supra* de debida diligencia reforzada en razón de género era necesaria.

---

[366] Véanse Anexo, evidencias 7, 19 y 24.

[367] Protocolo Homologado de Investigación para los Delitos de Desaparición Forzada de Personas y Desaparición Cometida por Particulares, sección B, *"Investigación específica y diferenciada por sujeto pasivo"*, numeral 2, *"Investigación específica y diferenciada cuando el sujeto pasivo sea una mujer o mujer embarazada"*, apartado "Acciones por realizar", en el que se prevé el *"[a]nálisis para determinar si la condición de género de la víctima tiene relación con el móvil de la desaparición"*; y apartado *"Diligencias básicas"*, que contempla *"[e]ntrevistas a familiares, pareja sentimental, compañero o compañera de trabajo y círculos de amistades más cercanas"*, p. 94; Protocolo Alba para la Ciudad de México, *"1.2 De las acciones de búsqueda coordinadas por el Ministerio Público"*, numeral 1.2.4, que establece: *"Recabar la entrevista inicial de la persona o personas que reporten la no localización o desaparición de las víctimas directas, y coordinar las acciones de búsqueda; para tal fin, se allegará entre otros datos, de su media filiación, señas particulares, vestimenta, particularidades de la persona, enfermedades, deficiencia de carácter físico, sensorial, cognitivo intelectual y psicosocial, profesión, trabajo, origen, entorno social, familiar, relacional, laboral, financiero, lugares que acostumbraba visitar, si cuenta con línea telefónica y dispositivo de comunicación, fotografías, entre otras; atendiendo a las particularidades del hecho, de conformidad con el Anexo 1"*.

241. También se advierte que el análisis de contexto de junio de 2020, practicado por la FGJ CDMX,[368] resultó deficiente al no incorporar elementos suficientes para comprender las circunstancias en las que ocurrió la desaparición de **Natali Carmona Hernández (mujer víctima directa 1)**, identificar factores relevantes de su entorno y orientar, a partir de ellos, las hipótesis y líneas de investigación y búsqueda.[369]

242. En 2021, aproximadamente a 3 años después del inicio de la carpeta de investigación, y teniendo nuevamente la conducción de la carpeta de investigación, FGJ CDMX solicitó a la CBP CDMX realizar un nuevo análisis de contexto,[370] en el que se incorporaron los elementos que no fueron considerados en el realizado en junio de 2020. Dicho lo anterior, debe recordarse que los análisis de contexto deben ser herramientas que permitan orientar las posibles líneas de investigación y búsqueda, así como generar, descartar o fortalecer las hipótesis previamente establecidas por los AMP.[371] Por lo que deben realizarse oportunamente, desde etapas de la investigación en las que sus resultados puedan ser utilizados para definir y orientar las diligencias por practicar.

243. Adicionalmente, la FGJ CDMX, cuando nuevamente tuvo la conducción de la carpeta de investigación a partir de febrero de 2021, tampoco cumplió con el deber de debida diligencia reforzada después de tener conocimiento de indicios que apuntaban al posible uso de los terrenos de cultivo donde fue localizado el cadáver de la pareja de **Natali Carmona Hernández (mujer víctima directa 1)** como fosa clandestina y que incluso habían sido encontrados cuerpos de mujeres sin vida en

---

[368] Véase Anexo, evidencia 58.

[369] De acuerdo al Protocolo Homologado de Investigación para los Delitos de Desaparición Forzada de Personas y Desaparición Cometida por Particulares, vigente para el momento de los hechos, en su página 81, establece que: "*El análisis de contexto es una herramienta de estudio y análisis de las circunstancias en las que ocurren las violaciones graves a derechos humanos. Su desarrollo y uso proviene del Sistema Universal de Derechos Humanos y de la CIDH, en los que se ha utilizado para explicar la situación en la que se inscribió o que propició el que se llevaran a cabo violaciones graves a los derechos humanos perpetradas por aparatos Estatales o en situaciones de guerra o conflicto (tales como el Tribunal Penal Internacional para la ex Yugoslavia, el Tribunal Penal Internacional para Ruanda, y la Corte Penal Internacional)*".

[370] Véase, Anexo, evidencia 122.

[371] De acuerdo al Protocolo Homologado de Investigación para los Delitos de Desaparición Forzada de Personas y Desaparición Cometida por Particulares, vigente para el momento de los hechos, en su página 83 establece que: "*Por medio del uso de esta herramienta, quien investiga (Policía y la/el AMP) pueden orientar la investigación con base en un antecedente respecto al "contexto" o las circunstancias en las que se desarrollaron los hechos. Cabe señalar, que este tipo de análisis únicamente es un elemento orientador para que quien investiga, en tanto no representa un medio de prueba sobre el que se pueda formular una responsabilidad penal por un delito respecto de un hecho concreto, ya que es muy difícil establecer un nexo causal con el autor material del hecho. No hay que olvidar que una correlación entre eventos que ocurrieron en un mismo espacio y momento definido no necesariamente implica causalidad en la forma que sucedió. Es labor de quien investiga la de establecer la forma en la que se sucedieron los hechos, así como establecer el orden en qué ocurrieron, los motivos y razones que los originaron, y los efectos que tuvieron sobre la persona que resintió el delito. Este tipo de análisis provee una narrativa sobre la que se desarrollan los hechos a investigarse, que sirve de apoyo a quien investiga para la definición de hipótesis de investigación, así como para definición de acciones y diligencias por realizarse*".

las parcelas en donde operaba una banda criminal.[372] Pese a que esta información fue puesta en conocimiento de las autoridades ministeriales de la Ciudad de México, no se tradujo en diligencias eficaces. Si bien la FGJ CDMX solicitó información sobre los feminicidios registrados en la zona,[373] no se advierte la realización de mayores actos de investigación dirigidos a identificar y entrevistar a posibles testigos; recabar información sobre las características y dinámicas delictivas de la zona, posteriormente corroboradas con motivo del hallazgo;[374] o indagar la posible comisión de delitos asociados con formas de violencia de género que pudieran guardar relación con la desaparición de **Natali Carmona Hernández (mujer víctima directa 1)**.

244. En consecuencia, esta Comisión acreditó que la autoridad responsable vulneró los derechos de **Aidee Hernández Ávila (mujer víctima directa 2)** y **Aurelio Carmona Cruz (víctima directa 3),** madre y padre de **Natali Carmona Hernández (mujer víctima directa 1)** al acceso a la verdad y a la justicia, al no conducir la investigación de su desaparición con exhaustividad y debida diligencia reforzada. Estas omisiones incidieron también en los derechos de **Natali Carmona Hernández (mujer víctima directa 1)** a la igualdad y no discriminación y a una vida libre de violencia, en tanto la investigación no incorporó oportunamente una perspectiva de género que permitiera identificar y valorar posibles situaciones de violencia de género y orientar, a partir de ellas, las líneas de investigación correspondientes.

245. En ese sentido, la omisión de atender los riesgos de violencia de género identificados incumple la diligencia reforzada y afecta las posibilidades de una búsqueda orientada a proteger la vida e integridad, en los términos acreditados en este caso. Particularmente, ante el incumplimiento de la obligación de prevención de la violencia por razón de género que pudo haber sufrido **Natali Carmona Hernández (mujer víctima directa 1)**. Las acciones de búsqueda no deben limitarse al cumplimiento formal de las obligaciones y protocolos aplicables, sino estar orientadas a la localización de la persona desaparecida y a la protección de su vida e integridad, así como a la identificación oportuna de riesgos de que pueda ser víctima de otros delitos, incluidas distintas formas de violencia de género, como la trata de personas o la tortura. La falta de una respuesta diligente y efectiva frente a estos hechos puede, además, contribuir a generar condiciones de impunidad y tolerancia frente a la violencia contra las mujeres.

---

[372] Véanse Anexo, evidencias 19, 52 y 85.
[373] Véase Anexo, evidencia 78. Oficio de 25 de agosto de 2021suscrito por el Agente del Ministerio Público adscrito a FIPEDE.
[374] Véanse Anexo, evidencias 85, 96, 111 y 122.

VIII.3. Derecho de toda persona desaparecida a ser buscada

3.1 Fundamentación

246. Esta Comisión reconoce que el derecho de toda persona desaparecida a ser buscada impone a todas las autoridades, en el ámbito de sus respectivas competencias, la obligación de desplegar, con todos los recursos y medios institucionales disponibles y de manera coordinada, todas las acciones necesarias para determinar la suerte o paradero de la persona desaparecida, comprendiendo la localización, identificación y preservación digna de sus restos hasta su entrega a sus seres queridos.[375]

247. La SCJN ha precisado que la ratificación de la Convención Internacional para la Protección de Todas las Personas contra las Desapariciones Forzadas[376] la Convención Interamericana sobre desaparición forzada de personas,[377] trae como consecuencia implícita la configuración de un amplio *parámetro de regularidad constitucional* que reconoce el derecho de toda persona a ser buscada,[378] generando la obligación ineludible de las autoridades para que la búsqueda se realice sin dilación, incluso de oficio, y desarrollarse de manera imparcial, dignificante, diligente, exhaustiva y continua, con enfoque diferencial, sin estigmatizaciones y garantizando la participación de las víctimas, bajo la presunción de que la persona se encuentra con vida, salvo evidencia en contrario.[379]

---

[375] Véase Comisión de Derechos Humanos de la Ciudad de México, *Catálogo para la calificación de violaciones a derechos humanos. Edición 2025*, México, CDHCM, 2025, *op. cit.*, p. 127, "43. Derecho a ser buscada o derecho a la búsqueda", en el que se establece que este derecho implica que *"todas las autoridades empleen todos los recursos y medios institucionales disponibles y, en completa coordinación, ejecuten de oficio y sin dilación de forma imparcial, dignificante, diligente, exhaustiva, continua, sin estigmatizaciones y permitiendo la participación sin reservas de su familia, todas las acciones necesarias para determinar la suerte"*.

[376] Organización de las Naciones Unidas, *Convención Internacional para la Protección de Todas las Personas contra las Desapariciones Forzadas*, 2006, ratificada por el Estado mexicano el 18 de marzo de 2008, artículos 3 y 24.

[377] En la sentencia dictada en el amparo en revisión 1077/2019, la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación definió, de manera enunciativa y no limitativa, que el parámetro aplicable comprendía los artículos 1, 4, 14, 16 y 22 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 1 y 2 de la Convención Internacional para la Protección de Todas las Personas contra las Desapariciones Forzadas; III de la Convención Interamericana sobre Desaparición Forzada de Personas; 3, 4, 5, 7, 8 y 25 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos, así como la interpretación de este instrumento desarrollada en la jurisprudencia de la Corte Interamericana de Derechos Humanos; 6, 7, 9, 10, 14 y 16 del Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos, atendiendo a su aplicación e interpretación por el Comité de Derechos Humanos; y la Declaración sobre la Protección de Todas las Personas contra las Desapariciones Forzadas, aprobada por la Asamblea General de las Naciones Unidas mediante resolución 47/133, de 18 de diciembre de 1992.

[378] *Ibidem.*

[379] "DESAPARICIÓN FORZADA DE PERSONAS. LA BÚSQUEDA INMEDIATA, ACUCIOSA Y DILIGENTE DE LAS PERSONAS DESAPARECIDAS ES UNA OBLIGACIÓN INELUDIBLE A CARGO DEL ESTADO QUE DEBE EMPRENDERSE SIN OBSTÁCULOS INJUSTIFICADOS Y CON TODA LA FUERZA INSTITUCIONAL DISPONIBLE, COMO CONSECUENCIA DEL DERECHO DE LAS PERSONAS DESAPARECIDAS A SER BUSCADAS" Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, jurisprudencia 1a./J. 36/2021 (11a.), *Gaceta del Semanario Judicial de la Federación*, Undécima Época, Libro 3, tomo II, noviembre de 2021, p. 1200. Reg. digital 2023815.

248. En este sentido, el Comité CED ha señalado que también puede configurarse una violación a la Convención, frente a desapariciones cometidas por particulares, cuando las autoridades no adoptan, con la debida diligencia, las medidas necesarias para la búsqueda e investigación de los hechos. Por tanto, aun cuando la desaparición no sea inicialmente atribuible al Estado, sus omisiones en materia de búsqueda, investigación y prevención pueden generar responsabilidad internacional conforme a la Convención.[380]

249. Tanto la normativa nacional[381] como la de la Ciudad de México vigente al momento de los hechos reportados de desaparición,[382] así como aquella aplicable durante las actuaciones subsecuentes de búsqueda e investigación,[383] reconocen el derecho de toda persona desaparecida a ser buscada hasta determinar su suerte o paradero, así como los derechos de las víctimas a la verdad, protección, asistencia y reparación integral.

250. Las Fiscalías Especializadas, además de investigar, deben coordinar sus actuaciones e impulsar permanentemente la búsqueda de las personas desaparecidas, en colaboración con las Comisiones de Búsqueda y las familias,[384] para lo cual deben contar con recursos suficientes y personal especializado y multidisciplinario, de acuerdo al texto vigente de la LGMDFPyDP al momento del reporte de desaparición. [385]

---

[380] Comité contra la Desaparición Forzada de las Naciones Unidas, *Informe del Comité contra la Desaparición Forzada sobre su visita a México en virtud del artículo 33 de la Convención. Observaciones y recomendaciones*, Doc. ONU CED/C/MEX/VR/1. *Información sobre la visita y hallazgos.* (18 de mayo de 2022).

[381] Ley General en Materia de Desaparición Forzada de Personas, Desaparición Cometida por Particulares y del Sistema Nacional de Búsqueda de Personas, artículo 2, fracción V, en la que se establece: *"Garantizar la protección integral de los derechos de las Personas Desaparecidas hasta que se conozca su suerte o paradero; así como la atención, la asistencia, la protección y, en su caso, la reparación integral y las garantías de no repetición, en términos de esta Ley y la legislación aplicable"*.

[382] Al momento de los hechos de desaparición materia de análisis en el presente instrumento recomendatorio, se encontraba vigente la Ley para Prevenir, Eliminar y Sancionar la Desaparición Forzada de Personas y la Desaparición por Particulares en la Ciudad de México, publicada en la Gaceta Oficial de la Ciudad de México el 7 de noviembre de 2017, cuyo artículo 2, fracción III, establecía como uno de sus objetos: *"Realizar acciones encaminadas al descubrimiento de la verdad ocurrida con las personas desaparecidas, así como la pronta localización de su paradero"*.

[383] Con posterioridad al reporte de desaparición, fue abrogada la Ley para Prevenir, Eliminar y Sancionar la Desaparición Forzada de Personas y la Desaparición por Particulares en la Ciudad de México y, en su lugar, se expidió la Ley de Búsqueda de Personas de la Ciudad de México, publicada en la *Gaceta Oficial de la Ciudad de México* el 31 de diciembre de 2019. En lo que interesa, esta Ley en su artículo 53 contempla que: *"La búsqueda tendrá por objeto realizar todas las acciones y diligencias tendientes para dar con la suerte o el paradero de la persona hasta su localización, incluidas aquellas para identificar plenamente sus restos en caso de que estos hayan sido localizados.*

[384] Instituto Mexicano de Derechos Humanos y Democracia (IMDHD), *Guía Básica sobre la Ley General en Materia de Desaparición de Personas*, 4 de abril de 2018, pp. 31-32, disponible en: https://www.imdhd.org/publicaciones/guias/ley-general-en-materia-de-desaparicion-de-personas-2/, consultada el 5 de octubre de 2026.

[385] Ley General en Materia de Desaparición Forzada de Personas, Desaparición Cometida por Particulares y del Sistema Nacional de Búsqueda de Personas, artículo 68.

251. En ese contexto, al momento de los hechos reportados de desaparición, en la Ciudad de México se encontraba en funciones la Fiscalía Especializada en la Búsqueda, Localización e Investigación de Personas Desaparecidas,[386] como instancia especializada para la atención e investigación de denuncias relacionadas con la ausencia, extravío o desaparición de personas. Su intervención está orientada a proporcionar atención especializada y desarrollar acciones de búsqueda y localización mediante una investigación sistemática e integral, con la participación de una estructura orgánica con áreas sustantivas, de apoyo psicosocial y administrativo, que le permitan atender las solicitudes de búsqueda y localización.[387]

252. A la luz de lo expuesto, se advierte que la garantía del derecho a la búsqueda descansa en un andamiaje normativo e institucional que exige la intervención coordinada de diversas autoridades,[388] en donde siempre tienen que interrelacionarse las acciones de búsqueda con la investigación penal.[389] Estas acciones de coordinación adquieren especial relevancia, desde las labores de coordinación, cuando existan elementos que permitían considerar que los hechos investigados pudieron haber ocurrido en dos o más entidades federativas.[390]

253. En este marco, resulta particularmente relevante que la investigación penal y las acciones de búsqueda se desarrollen de manera simultánea y paralela, bajo una coordinación permanente entre las autoridades responsables.

254. El derecho a la búsqueda se encuentra intrínsecamente relacionado con el estándar de debida diligencia, en tanto las autoridades deben de emprender las acciones de búsqueda garantizando el cumplimiento de los principios de debida diligencia, efectividad y exhaustividad, enfoque diferencial y especializado, enfoque humanitario, gratuidad, igualdad y no discriminación, interés superior de la niñez, máxima protección, no revictimización, participación conjunta, perspectiva de género, presunción de vida, verdad y búsqueda permanente.[391]

---

[386] Acuerdo A/012/2018 del Procurador General de Justicia en la Ciudad de México.
[387] *Ibidem.*
[388] Véanse, por ejemplo, el Protocolo Homologado para la Búsqueda de Personas Desaparecidas y la Investigación del Delito de Desaparición Forzada; *el* Protocolo Homologado de Investigación para los Delitos de Desaparición Forzada de Personas y Desaparición Cometida por Particulares; *el* Protocolo Alba para la Ciudad de México; *y el* Protocolo Homologado para la Búsqueda de Personas Desaparecidas y No Localizadas, publicado en el *Diario Oficial de la Federación* el 6 de octubre de 2020.
[389] Principios Rectores para la Búsqueda de Personas Desaparecidas, principios 13.
[390] Ley General en Materia de Desaparición Forzada de Personas, Desaparición Cometida por Particulares y del Sistema Nacional de Búsqueda de Personas, artículo 70, fracción X.
[391] Reconocidos en la Ley de Búsqueda de Personas de la Ciudad de México, artículo 5º, conforme al artículo 5 de la Ley General y de los Principios Rectores para la Búsqueda de Personas Desaparecidas. Para mayor referencia sobre el análisis de estos principios véase: Comisión de Derechos Humanos de la Ciudad de México, Recomendaciones 08/2025, *doc. cit.*, párrs. 116-118; 09/2025, *doc. cit.*, párrs. 103-105; 10/2025, párr. *doc. cit.*, 118-120, y sentencia

255. Los Principios Rectores para la Búsqueda de Personas Desaparecidas del Comité CED señalan los aspectos específicos que deben observarse en todas las acciones de búsqueda de personas desaparecidas, que en lo que interesa destacan: "*deben realizarse bajo presunción de vida, respetando la dignidad de la víctima y sus familiares y desde un enfoque diferenciado; deben respetar el derecho a la participación de familiares; deben realizarse sin dilación; tienen un carácter permanente; deben realizarse bajo una estrategia integral; deben usar la información de manera apropiada*; y d*eben interrelacionarse con la investigación penal*".[392]

256. Estos principios han sido interpretados por parte del Comité CED, que en el caso Berrospe Medina, concluyó que el Estado Mexicano debe contar con una estrategia integral para la búsqueda de personas, la cual debe contar con un plan de acción y cronograma de acciones exhaustivo, considerando toda la información disponible e incorporando el contexto en el cual sucedió la desaparición. Dicha planificación debe realizarse bajo los principios de la "*debida diligencia, además de determinar las acciones a realizar de manera integrada, eficiente y coordinada, y que su implementación cuente con los medios y procedimientos necesarios y adecuados para localizar a la persona desaparecida e investigar a los responsables*".[393]

257. Todos estos elementos se orientan a materializar la finalidad última del derecho a la búsqueda, entendido como la obligación de realizar y agotar todas las acciones y diligencias necesarias para determinar la suerte o el paradero de la persona hasta su localización, incluidas aquellas dirigidas a la plena identificación de sus restos, en caso de que sean localizados. En este sentido, se enfatiza que los mecanismos de búsqueda deben agotarse hasta que exista certeza sobre la suerte o el paradero de la persona y de ser posible, su cuerpos o restos óseos sean entregados a su familia.[394]

258. Además, la participación de las familias durante la búsqueda es un derecho fundamental en casos de desaparición de personas. El artículo 138 de la LGMDFPyDP y el 81 de la Ley de Búsqueda de la CDMX contemplan los derechos

---

emitida en el Amparo en Revisión 51/2020, resuelto por la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, párr. 97.

[392] Principios Rectores para la Búsqueda de Personas Desaparecidas, principios 12, 13 y 15, en los que se establece, respectivamente, que la búsqueda debe realizarse con la participación de la persona desaparecida y de sus familiares; llevarse a cabo de manera coordinada, mediante una coordinación efectiva entre todas las instituciones y órganos competentes; y desarrollarse de forma independiente e imparcial.

[393] Comité contra la Desaparición Forzada, *Berrospe Medina c. México*, comunicación núm. 4/2021, CED/C/24/D/4/2021, dictamen de 24 de marzo de 2023, párr. 7.5.

[394] Ley de Búsqueda de Personas de la Ciudad de México, artículo 53.

de participación pasiva (ser informadas de las acciones de búsqueda)[395] y activa (proponer actos de búsqueda y ser escuchados en sus opiniones),[396] en seguimiento a los Principios Rectores del Comité CED. Asimismo, el Protocolo Alba contempla que las familias sean informadas de manera proactiva ante el cierre de cada una de las fases que el instrumento contempla.[397]

259. Los estándares, citados en este apartado, son desarrollados operativamente por el Protocolo Alba (vigentes desde el reporte de desaparición) y el Protocolo Homologado de Búsqueda de Personas, vigente al momento del hallazgo de los restos de **Natali Carmona Hernández (mujer víctima directa 1)**, a través de sus ejes rectores operativos, instrumentos que marcan las pautas para las diligencias de búsqueda, localización e identificación de mujeres, niñas, niños y adolescentes en la Ciudad de México.

260. Para un mejor abordaje, se desarrollan aquellos aspectos específicos relacionados con el derecho a la búsqueda de personas desaparecidas, que guardan relación directa con las omisiones y violaciones a derechos humanos, acreditadas por esta Comisión en el presente instrumento recomendatorio, siendo estas las obligaciones vinculadas a: ***(i)*** acciones de búsqueda inmediata, estratégica y coordinada ante la desaparición; ***(ii)*** el procesamiento del contexto de hallazgo, y la ***(iii)*** gestión forense, la identificación y entrega.

261. En materia de *(i)* las acciones de búsqueda inmediata que deben realizar en la búsqueda de una mujer desaparecida, las autoridades tienen la obligación de iniciar las acciones de búsqueda de forma inmediata, sin ninguna demora y de manera expedita. Asimismo, deben garantizar que el inicio de las actividades de búsqueda y localización de las personas desaparecidas no esté condicionado a plazo alguno, ni siquiera de horas, de manera que dichas actividades se emprendan de forma

---

[395] Ley General en Materia de Desaparición Forzada de Personas, Desaparición Cometida por Particulares y del Sistema Nacional de Búsqueda de Personas, artículo 138, fracción I, el cual reconoce que: *"Los Familiares de las Víctimas de los delitos de desaparición forzada de personas y desaparición por particulares tendrán, además de los derechos contenidos en otros ordenamientos legales, los siguientes derechos: I. Participar dando acompañamiento y ser informados de manera oportuna de aquellas acciones de búsqueda que las autoridades* competentes realicen tendientes a la localización de la Persona Desaparecida".

[396] Ley General en Materia de Desaparición Forzada de Personas, Desaparición Cometida por Particulares y del Sistema Nacional de Búsqueda de Personas, artículo 138, fracción II, en donde se reconoce que las familiares de las víctimas tendrán derecho a *"Proponer diligencias que deban ser llevadas a cabo por la autoridad competente en los programas y acciones de búsqueda, así como brindar opiniones sobre aquellas que las autoridades competentes sugieran o planeen. Las opiniones de los Familiares podrán ser consideradas por las autoridades competentes en la toma de decisiones. La negativa de la autoridad a atender las diligencias sugeridas por los Familiares deberá ser fundada y motivada por escrito"*.

[397] Protocolo Alba para la Ciudad de México, Fase Uno, numeral 1.5.6, en el que se establece: *"Agotados los actos de investigación de la primera fase, sin que se tenga certeza de la ubicación de la víctima directa, se decretará la activación de la Fase Dos, informando a los familiares tal circunstancia"*; asimismo, Fase Dos, numeral 2.1.8, en el que se precisa: *"Agotados los actos de investigación de la segunda fase, el personal ministerial deberá comunicarse con los familiares de la víctima directa, para informarles acerca de las acciones realizadas"*.

inmediata. Bajo esta perspectiva, la ausencia de información por parte de las y los familiares no puede ser invocada para no dar inicio de manera inmediata a las actividades de búsqueda y localización de la persona desaparecida.[398]

262. La búsqueda inmediata se encuentra definida en la legislación de la Ciudad de México,[399] así como la LGMDFPyDP, vigente al momento del reporte de desaparición.[400] Estas disposiciones deben interpretarse de manera conjunta con lo establecido en el Protocolo Alba de la Ciudad de México, que contempla, entre otras acciones, la búsqueda material inmediata en los lugares, en donde se encontró la víctima de desaparición, que le sean referidos por la persona denunciante,[401] el acceso inmediato la información de telefónica móvil de la víctima[402] y, a la luz del deber de debida diligencia reforzado aplicable en los casos de desaparición de mujeres, es necesario recabar información relacionada con los posibles contextos de violencia de género y delitos vinculados que pudo haber sufrido la víctima.[403]

263. A ello debe sumarse el Protocolo Homologado de Investigación para los Delitos de Desaparición Forzada y Desaparición Cometida por Particulares (PHI), que destaca la necesidad de incorporar un enfoque diferenciado en las acciones de búsqueda e investigación en la desaparición de mujeres.[404]

---

[398] Principios Rectores para la Búsqueda de Personas Desaparecidas, principio 6, párr. 3.

[399] Ley de Búsqueda de Personas de la Ciudad de México, en su artículo 4.II se establece: *"El inicio de las acciones de búsqueda de oficio, sin dilación y con celeridad de la persona desaparecida por parte de las autoridades de la Ciudad de México luego que han tomado conciencia de los hechos, mediante la denuncia, el reporte o la noticia"*. Publicada el 31 de diciembre de 2019 y entrando en vigor al día siguiente, fecha a partir de la cual, era exigible su cumplimiento.

[400] Ley General en Materia de Desaparición Forzada de Personas, Desaparición Cometida por Particulares y del Sistema Nacional de Búsqueda de Personas, en su artículo 72, establece que: *"Sin perjuicio de lo dispuesto en los artículos 170 y 171, la Procuraduría, las Procuradurías Locales y las Instituciones de Seguridad Pública deben capacitar a todo el personal policial respecto de los protocolos de actuación inmediata y las acciones específicas que deben realizar cuando tengan conocimiento, por cualquier medio, de la desaparición o no localización de una persona"*; y artículo 5, fracción I, que contempla el principio de efectividad y exhaustividad, conforme al cual: *"todas las diligencias que se realicen para la búsqueda de la Persona Desaparecida o No Localizada se harán de manera inmediata, oportuna, transparente, con base en información útil y científica, encaminadas a la localización y, en su caso, identificación, atendiendo a todas las posibles líneas de investigación. Bajo ninguna circunstancia se podrán invocar condiciones particulares de la Persona Desaparecida o No Localizada, o la actividad que realizaba previa o al momento de la desaparición para no ser buscada de manera inmediata"*.

[401] Protocolo Alba para la Ciudad de México, numeral 1.2.13, en el que se establece: *"Solicitar sin demora, por cualquier medio, la intervención de la Célula de Búsqueda que corresponda, para efectos de que inicien la búsqueda y localización material inmediata de la víctima directa"*.

[402] *Ibidem*, numeral 1.2.6, que establece lo siguiente: *"Solicitar, en caso de que la víctima directa cuente con servicio de telefonía móvil, que la persona denunciante o titular del mismo, mantenga en servicio la línea telefónica"*

[403] *Ibidem*, Anexo 2, *"Informe de análisis de los datos recabados durante la Fase Uno"*.

[404] Protocolo Homologado de Investigación para los Delitos de Desaparición Forzada de Personas y Desaparición Cometida por Particulares, sección B, "Investigación específica y diferenciada por sujeto pasivo", numeral 2, *"Investigación específica y diferenciada cuando el sujeto pasivo sea una mujer o mujer embarazada"*, apartado "Acciones por realizar", en el que se prevé el *"[a]nálisis para determinar si la condición de género de la víctima tiene relación con el móvil de la desaparición"*; y apartado *"Diligencias básicas"*, que contempla *"[e]ntrevistas a familiares, pareja sentimental, compañero o compañera de trabajo y círculos de amistades más cercanas"*, p. 94

264. Además, la búsqueda debe ser planificada y estratégica, si bien la LGMDFPyDP atribuye a las Comisiones de Búsqueda directamente la labor de coordinación para efectos de las acciones de búsqueda, las autoridades ministeriales tienen entre sus obligaciones la realización de acciones encaminadas a recabar las denuncias por la probable comisión de los delitos contemplados en la LGMDFPyDP, así como emprender las acciones de investigación desde el ámbito de su competencia[405] e implementar el Protocolo Homologado de Investigación desde el momento en que se tiene conocimiento de una desaparición de persona.[406] En línea con lo anterior, los Principios Rectores para la Búsqueda de Personas Desaparecidas del Comité CED establecen que las autoridades deben realizar las acciones de búsqueda *bajo una estrategia integral.*[407]

265. En ese sentido, esta Comisión recuerda que la investigación penal y las acciones de búsqueda son dos momentos que deben correr de manera paralela, pero coordinada.[408] Por tanto, la planificación de la investigación a través del análisis de la información recopilada durante las primeras diligencias trasciende en la efectividad de las acciones de búsqueda.[409] Lo anterior coincide con la *Fase Uno* del Protocolo Alba, que contempla la obligación de las autoridades ministeriales de planificar la investigación desde que se tiene conocimiento del hecho.[410]

266. En materia de acciones de colaboración, la LGMDFPyDP, en sus artículos 162 y 163, prevé que las Fiscalías especializadas deben adoptar mecanismos de colaboración que permitan el intercambio de información para favorecer a la investigación y el cumplimiento de los fines de dicha Ley,[411] particularmente cuando

---

[405] *Ibidem*, artículo 70, fracción I, en el que se establece como atribución de las Fiscalías Especializadas: *"Recibir las Denuncias relacionadas con la probable comisión de hechos constitutivos de los delitos materia de esta Ley, iniciar la carpeta de investigación correspondiente y ordenar las diligencias o actos de investigación que correspondan en el ámbito de su competencia"*.

[406] Ley General en Materia de Desaparición Forzada de Personas, Desaparición Cometida por Particulares y del Sistema Nacional de Búsqueda de Personas, artículo 88, en el que se establece: *"En el caso de la presentación de una Denuncia, el agente del Ministerio Público que la reciba debe proceder sin dilación a aplicar el Protocolo Homologado de Investigación y remitir la información a la Fiscalía Especializada competente, así como a la Comisión Nacional de Búsqueda"*.

[407] Principios Rectores para la búsqueda de personas desaparecidas, principios 8 y 10.

[408] Ley General en Materia de Desaparición Forzada de Personas, Desaparición Cometida por Particulares y del Sistema Nacional de Búsqueda de Personas, artículo 70, fracción II, en el que se establece como atribución de las Fiscalías Especializadas: *"Mantener coordinación con la Comisión Nacional de Búsqueda para realizar todas las acciones relativas a la investigación y persecución de los delitos materia de esta Ley, conforme al Protocolo Homologado de Investigación y esta Ley"*.

[409] Comité para la Eliminación de la Discriminación contra la Mujer de las Naciones Unidas, *Ramón Jaimes vs. México*, Comunicación núm. 153/2020, Dictamen aprobado en virtud del artículo 7, párr. 3, del Protocolo Facultativo, Doc. ONU CEDAW/C/83/D/153/2020, párrs. 7.5–7.6 (22 de noviembre de 2022).

[410] Protocolo Alba para la Ciudad de México, numeral 1.2, *"De las acciones de búsqueda coordinadas por el Ministerio Público"*, en el que se establece que *"[e]l personal ministerial, iniciada la carpeta de investigación especial, realizará las acciones siguientes"*; numeral 1.2.1: *"Elaborar e implementar el Plan de Investigación correspondiente"*.

[411] Ley General en Materia de Desaparición Forzada de Personas, Desaparición Cometida por Particulares y del Sistema Nacional de Búsqueda de Personas, artículo 162, en el que se establece: *"Las Fiscalías Especializadas deben intercambiar la información que favorezca la investigación de los delitos previstos en esta Ley y que permita la*

de la información con la que cuente la autoridad se desprenda que la desaparición pudo ocurrir en dos o más Entidades Federativas.[412] En ese sentido, con la entrada en vigor de la Ley de Búsqueda de la Ciudad de México en diciembre de 2019, la obligación plasmada en el artículo 162 de la LGMDFPyDP se reforzó.[413]

267. Al respecto, la entonces Primera Sala de la SCJN destacó la obligación de la cooperación y colaboración entre instituciones del Estado en el marco de la política integral sobre la desaparición de personas.[414] Por su parte, la Corte IDH ha destacado que la fragmentación de las investigaciones y falta de articulación entre autoridades responsables son, entre otras circunstancias, causales de responsabilidad internacional del estado.[415]

268. El Protocolo Homologado de Búsqueda, por su parte, señala que la coordinación debe ser constante, complementaria *"e impulsando la obtención de resultados de forma eficiente"*, además de precisar que cualquier proceso dentro del Protocolo debe realizarse de manera eficiente, sin apego a formalismos que obstaculicen los procesos de búsqueda, localización e identificación.[416] Disposiciones que serían exigibles a partir de octubre de 2020.

269. Con relación ***(ii)*** al procesamiento del contexto de hallazgo, la Primera Sala de la SCJN enfatizó la importancia de dar seguimiento a los estándares y parámetros del

---

identificación y sanción de los responsables"; y artículo 163, que dispone: *"La Fiscalía, así como las Fiscalías y Procuradurías Locales deben diseñar los mecanismos de colaboración que correspondan con la finalidad de dar cumplimiento a lo previsto en esta Ley"*.

[412] Ley General en Materia de Desaparición Forzada de Personas, Desaparición Cometida por Particulares y del Sistema Nacional de Búsqueda de Personas, artículo 70, fracción X.

[413] Ley de Búsqueda de la Ciudad de México, publicada en la Gaceta Oficial de la Ciudad de México el 31 de diciembre de 2019, artículo 98, que establece: *"La Fiscalía Especializada debe intercambiar con las fiscalías especializadas de otras entidades y la Fiscalía General de la República la información que favorezca la investigación de los delitos previstos en la Ley General y que permita la identificación y sanción de los responsables"*.

[414] Suprema Corte de Justicia de la Nación, Primera Sala, *Amparo en revisión 51/2020*, 10 de agosto de 2022, ponente: Ana Margarita Ríos Farjat, párr. 105.

[415] Corte IDH. Caso Alvarado Espinoza y otros Vs. México. Fondo, Reparaciones y Costas. Sentencia de 28 de noviembre de 2018. Serie C No. 370. Párr. 252-253; Corte IDH. Caso Flores Bedregal y otras Vs. Bolivia. Excepciones Preliminares, Fondo, Reparaciones y Costas. Sentencia de 17 de octubre de 2022. Serie C No. 467. párr. 109-111; Corte IDH. Caso Alvarado Espinoza y otros Vs. México. Fondo, Reparaciones y Costas. Sentencia de 28 de noviembre de 2018. Serie C No. 370. Párr. 213-227.

[416] Protocolo Homologado para la Búsqueda de Personas Desaparecidas y No Localizadas, apartado *"Ejes Operativos"*, numeral 6, en el que se establece: *"Todas las personas e instituciones involucradas con los procesos de búsqueda deben realizar sus funciones en comunicación constante (formal e informal), actuando complementariamente e impulsando así la obtención de resultados de forma eficiente. Debe evitarse que las personas reportantes, denunciantes y, en general, familiares de la persona desaparecida o no localizada sean enviados simultánea o sucesivamente a diferentes autoridades, y prevenirse que la información que pueda ser útil para la búsqueda y para la investigación de hechos delictivos sea segmentada. Lo anterior requiere el establecimiento de mecanismos y canales de comunicación intrainstitucionales e interinstitucionales, así como la disponibilidad y gestión adecuada de la información. La duplicidad de procesos y acciones debe evitarse"*; y numeral 7, que dispone: *"Los procesos que sean ejecutados para la búsqueda, localización e identificación de personas desaparecidas y no localizadas deberán desarrollarse de manera eficiente, sin apego a rigurosidades formales que puedan entorpecer, suspender o paralizar el proceso. Se debe eliminar cualquier obstáculo legal o fáctico que reduzca la efectividad de la búsqueda o evite que se inicie en forma oportuna"*.

Protocolo de Minnesota, como parámetro internacional para el adecuado manejo científico de la escena de hallazgo de cuerpos o restos en casos de ejecuciones extrajudiciales o muertes violentas.[417]

270. A la luz de las disposiciones establecidas en el Protocolo Minnesota, la Corte IDH ha interpretado la necesidad de llevar a cabo la preservación, procesamiento y recolección de restos de cuerpos en la escena del hallazgo a través de la participación de profesionales capacitados, evitando la contaminación de la escena y/o la manipulación del cuerpo o restos ajena al personal capacitado.[418] En ese sentido, el numeral 1.2.15 del Protocolo Alba establece que debe intervenir personal pericial o policial con capacidades técnicas para procesar indicios, cuando sea procedente, a fin de localizar, levantar y analizar evidencia útil para fortalecer la búsqueda.

271. En el ámbito normativo nacional se ha transitado de esquemas iniciales de actuación, tales como el Protocolo Alba (concebido primordialmente para la búsqueda y localización de mujeres y niñas), hacia un estándar de mayor especialización y rigor científico, derivando en la aprobación del Protocolo Homologado para la Búsqueda de Personas Desaparecidas y No Localizadas en 2020.

272. Al respecto, el Protocolo Homologado de Búsqueda establece que toda autoridad que tenga conocimiento de la localización de cuerpos o restos humanos deberá notificarlo inmediatamente a la Comisión Local de Búsqueda y a la fiscalía especializada correspondiente, así como evitar cualquier actividad que pueda alterar o destruir el lugar del hallazgo hasta su debido procesamiento.[419]

273. De manera general, el Protocolo Homologado de Búsqueda, que ya estaba vigente al momento del hallazgo de los restos de **Natali Carmona Hernández (mujer víctima directa 1)**, contempla obligaciones específicas para el procesamiento de los contextos o zonas de hallazgo, con el propósito de garantizar su adecuada documentación y el tratamiento científico, sistemático y metodológico de los indicios y restos recuperados, incluida la preservación de la cadena de custodia y el registro de las actuaciones realizadas. También, exige que las autoridades que participan

[417] Suprema Corte de Justicia de la Nación, Primera Sala, sentencia emitida en el Amparo Directo en Revisión 13/2021, resuelto el 7 de diciembre de 202, proyecto a cargo de la ponencia del Ministerio Juan Luis González Alcántara Carrancá, párr. 78-88.
[418] Corte IDH. Caso Véliz Franco y otros Vs. Guatemala. Excepciones Preliminares, Fondo, Reparaciones y Costas. Sentencia de 19 de mayo de 2014. Serie C No. 277. Párr. 192; Caso González y otras ("Campo Algodonero") Vs. México. Excepción Preliminar, Fondo, Reparaciones y Costas. Sentencia de 16 de noviembre de 2009. Serie C No. 205, párr. 301.
[419] Protocolo Homologado para la Búsqueda de Personas Desaparecidas y No Localizadas, párr. 381.

en el procesamiento incorporen la perspectiva de género durante dicho procesamiento, a fin de identificar posibles indicios de violencia por razones de género y orientar adecuadamente la investigación de los hechos, incluso bajo la hipótesis de feminicidio cuando corresponda.[420]

274. En materia forense, conforme a los estándares aplicables a la prueba pericial, los dictámenes forenses deben estar dotados de rigor científico y transparencia metodológica para garantizar el debido proceso.[421] Siendo así, la Guía sobre el contenido de los informes periciales y su impacto en el debido proceso ha señalado que, desde las mejores prácticas para la realización de informes, estos deben contener:[422]

a) la descripción del objeto del peritaje y de la información relevante del caso para determinar hipótesis a corroborar.
b) Los elementos que acrediten la idoneidad y el carácter de experto del perito.
c) El desglose de las personas expertas y las tareas específicas realizadas.
d) Una descripción clara y comprensible de los métodos, técnicas, teorías, etc., empleadas junto con la evidencia sobre su validez y fiabilidad.
e) La referencia detallada del origen de los datos, muestras, registros y razonamientos efectuados durante el análisis.
f) Conclusiones fundamentadas que deriven directamente del método y del análisis riguroso de los datos.

275. Por lo que se refiere a la *(iii)* gestión forense, la identificación y restitución, debe destacarse que, después procesamiento y preservación de la escena de hallazgo, es importante que las autoridades inicien, sin dilación, los procesos científicos de identificación de los cuerpos o restos debidamente recolectados para, en su caso, proceder a la restitución de los mismos siempre y cuando existan condiciones para asegurar la identidad de la víctima directa.[423]

276. Conforme a los estándares internacionales del Comité Internacional de la Cruz Roja, el Estado tiene la obligación inexcusable de emplear métodos científicos rigurosos y objetivos –como el análisis de perfiles genéticos– en los procesos de identificación para reducir al mínimo el margen de error, evitando métodos

---

[420] Protocolo Homologado para la Búsqueda de Personas Desaparecidas y No Localizadas, párrs. 392-393.
[421] Carmen Vázquez, *Guía sobre el contenido de los informes periciales y su impacto en el debido proceso*, México, Escuela Federal de Formación Judicial, 2023, pp. 6-7.
[422] *Ibidem*, pp. 27-28.
[423] Comité Internacional de la Cruz Roja, *Personas desaparecidas, análisis forense de ADN e identificación de restos humanos. Guía sobre prácticas idóneas en caso de conflicto armado y de otras situaciones de violencia armada*, Ginebra, CICR, 2009, pp. 10, 12-13; Procuraduría General de la República, *Protocolo para el Tratamiento e Identificación Forense*, México, PGR, 2015, disponible en: https://www.gob.mx/fgr/documentos/protocolo-para-el-tratamiento-e-identificacion-forense, en el que se establece que el tratamiento de restos óseos en estado de descomposición requiere de una intervención multidisciplinaria y estructurada, a fin de garantizar un proceso de identificación forense confiable.

tradicionales o indiciarios que vulneran los derechos de las víctimas y conllevan riesgos de identificación errónea.[424]

277. Es necesario que exista una articulación funcional de bases de datos centralizadas de perfiles genéticos y la gestión estricta de registros de información *ante mortem* y *post mortem*. Asimismo, constituye una buena práctica internacional la recolección oportuna y simultánea de muestras biológicas de referencia de las y los familiares con apego a protocolos rigurosos de cadena de custodia, garantizando la validez jurídica de los cotejos y la viabilidad de las identificaciones masivas.[425]

278. Por otro lado, es importante destacar que el análisis forense de cuerpos o restos también debería tener el objetivo de contribuir a generar hipótesis o líneas de investigación relacionadas con la causa de la muerte, es decir, debe tener un impacto directo en el esclarecimiento de los hechos.[426]

279. En los casos de localización sin vida, el Protocolo Homologado de Búsqueda establece que:

> Las autoridades que ejecutan oficiosamente la Búsqueda Individualizada de la persona (...) son las responsables de la notificación de localización sin vida a su familia. Si la notificación emana de la identificación del cuerpo o restos, pero no fueron ellas las que ejecutaron los procesos de identificación, deben solicitar a la institución que los realizó que autorice la participación de sus peritos en el equipo interdisciplinario, o, en su defecto, que familiarice a su propio personal técnico o pericial con el caso para que esté en condiciones de explicar a la familia los procedimientos seguidos y aclarar las dudas. Si en la identificación participaron personas expertas o peritos independientes, estos deberán integrarse al equipo interdisciplinario. Si la notificación se efectúa a partir de una Búsqueda de Familia, las autoridades que realizaron la identificación son las responsables de realizar la notificación.[427]

280. Estos puntos son retomados de manera general, en el marco internacional de protección del derecho a la búsqueda inmediata,[428] en donde se reconoce que la notificación y entrega o restitución del cuerpo o restos mortales debe realizarse en

---

[424] Comité Internacional de la Cruz Roja, *Personas desaparecidas, análisis forense de ADN e identificación de restos humanos. Guía sobre prácticas idóneas en caso de conflicto armado y de otras situaciones de violencia armada*, *doc. cit.*, pp. 10, 12 y 13. *Protocolo para el Tratamiento e Identificación Forense*, *doc. cit.*

[425] Comité Internacional de la Cruz Roja, *Personas desaparecidas, análisis forense de ADN e identificación de restos humanos. Guía sobre prácticas idóneas en caso de conflicto armado y de otras situaciones de violencia armada*, *doc. cit.*, pp. 19-25 y 31-35.

[426] Luis Fondebrider, *Guía forense para la investigación, recuperación y análisis de restos óseos*, Equipo Argentino de Antropología Forense (EAAF), pp. 25-26.

[427] Protocolo Homologado para la Búsqueda de Personas Desaparecidas y No Localizadas, numeral 516.

[428] Convención Internacional para la protección de todas las personas contra las desapariciones forzadas, artículos 24.3, 24.4 y 24.5; Principios Rectores para la búsqueda de personas desaparecidas, principio 2.

condiciones dignas, bajo las normas y costumbres culturales de las familias, adoptando el enfoque diferenciado necesario para casos donde las personas desaparecidas y/o sus familiares pertenezcan a grupos de atención prioritaria. Las autoridades deben tener la sensibilidad y empatía para entender que se trata de la entrega de restos mortales de una persona y no de objetos.

281. Aunado a ello, las autoridades deben estar en posibilidades de realizar la restitución del cuerpo o restos en la brevedad posible. No obstante, en caso de ser imposible tienen la obligación de informar y comprometerse a plazos realistas para la restitución del cuerpo o restos durante los procesos de notificación para ayudar al manejo de expectativas y angustia de las familias. La excesiva burocracia institucional o la ausencia de una efectiva coordinación entre autoridades tendría un impacto nocivo en la integridad de las familias si no se informa de manera diligente cualquier retraso en la restitución.[429]

282. Así, los estándares desarrollados permiten advertir que la localización sin vida de una persona desaparecida no extingue por sí misma las obligaciones estatales de búsqueda e investigación, sino que da lugar a una serie de deberes reforzados relacionados con la preservación y procesamiento científico del lugar de hallazgo, la recuperación adecuada de cuerpos o restos, su identificación mediante métodos científicos confiables y la restitución digna a sus familiares. Estas actuaciones deben desarrollarse de manera inmediata, coordinada y multidisciplinaria, con la intervención articulada del Ministerio Público, la Policía de Investigación y personal pericial especializado, garantizando la preservación de los indicios y la trazabilidad y fiabilidad de los resultados obtenidos.

283. Asimismo, la actividad forense no debe limitarse a establecer la identidad de la persona, sino que debe contribuir al esclarecimiento de las circunstancias y causas de su muerte y, con ello, a la generación o fortalecimiento de líneas de investigación. En este sentido, las deficiencias, dilaciones o falta de rigor científico en cualquiera de estas etapas pueden comprometer no sólo la adecuada identificación y restitución de los restos, sino también el esclarecimiento de los hechos y, consecuentemente, los derechos de las víctimas a ser buscadas y sus familiares a la verdad y al acceso a la justicia.

[429] Espacio Psicosocial por los Derechos Humanos, *Protocolo interdisciplinario de notificación de la identificación de personas desaparecidas y restitución digna*, Ciudad de México, EPDH, pp. 60-61.

3.2 Motivación respecto al Derecho de toda persona desaparecida a ser buscada

284. A la luz de los estándares y obligaciones previamente desarrollados, esta Comisión analizará las violaciones al derecho a ser buscada de **Natali Carmona Hernández (mujer víctima directa 1)**, atribuibles a autoridades de la FGJ CDMX, durante el periodo comprendido entre el 28 de enero de 2019 y el 21 de abril de 2022.

285. Este análisis considera particularmente que, desde las primeras etapas de la investigación, la FGJ CDMX contó con información que permitía presumir que la desaparición y/o el posible paradero de **Natali Carmona Hernández (mujer víctima directa 1)** podían estar vinculados con dos o más entidades federativas, circunstancia que actualizaba un deber específico de coordinación y colaboración interestatal para el desarrollo oportuno, articulado y efectivo de las labores de búsqueda. Sumado a la forma en que se condujo la autoridad, primero ante el hallazgo del cuerpo de **P1 (pareja de Natali Carmona Hernández)** y posteriormente, al correspondiente a **Natali Carmona Hernández (mujer víctima directa 1)**, incluyendo la entrega a su familia.

286. En este contexto, para el desarrollo del presente apartado de motivación, relativo al derecho a ser buscada, el análisis se estructurará en los siguientes apartados: ***(i)*** las omisiones relacionadas con la búsqueda inmediata y estratégica ante la denuncia de desaparición de **Natali Carmona Hernández (mujer víctima directa 1),** así como las omisiones en la coordinación y colaboración interestatal con la FGE Puebla; ***(ii)*** las omisiones en el procesamiento de la zona de hallazgo, y ***(iii)*** las omisiones en la gestión forense, identificación y entrega.

287. Es importante señalar que, en virtud de la vinculación entre la investigación y búsqueda, los primeros dos apartados se relacionan estrechamente con lo ya referido *supra* respecto a las omisiones relacionadas con la investigación, poniendo el énfasis el impacto que dichas omisiones tuvieron en relación con el derecho a ser buscada.

3.2.1. Omisiones relacionadas con la búsqueda inmediata, estratégica y coordinada ante la denuncia de desaparición de Natali Carmona Hernández (mujer víctima directa 1)

288. Esta Comisión acreditó que el actuar del personal adscrito a la FGJ CDMX constituyó una vulneración al derecho de toda persona a ser buscada de forma inmediata y con debida diligencia y enfoque diferencial en agravio de **Natali Carmona Hernández (mujer víctima directa 1),** así como de **Aidee Hernández Ávila (mujer víctima directa 2) y Aurelio Carmona Cruz (víctima directa 3),**

madre y padre, respecto a la búsqueda de su hija **Natali Carmona Hernández (mujer víctima directa 1)**, en virtud de las omisiones atribuibles al personal adscrito a la FGJ CDMX desde las primeras horas de tener conocimiento de su desaparición.

289. Por lo que respecta al análisis de la garantía del derecho a ser buscada durante las primeras horas posteriores al conocimiento de la desaparición, ante la solicitud formulada por esta Comisión, la FGJ CDMX manifestó haber realizado los actos de investigación que consideró pertinentes para la localización de **Natali Carmona Hernández (mujer víctima directa 1)** y **P1 (pareja de Natali Carmona Hernández).**[430] No obstante, a la luz de las obligaciones específicas que rigen la actuación de las autoridades durante las primeras horas posteriores al reporte, esta Comisión acreditó que no se observaron integralmente las obligaciones previstas en la normativa previamente expuesta, necesarias para garantizar el derecho a ser buscada conforme al estándar de debida diligencia aplicable.

290. Durante las primeras horas de ocurrida la desaparición, existieron omisiones relacionadas con la falta de debida diligencia en la investigación, las cuales tuvieron también un impacto directo en el derecho a ser buscada. Por ejemplo, la omisión de diligencias necesarias previstas en la Fase Uno del Protocolo Alba, la omisión de recabar, desde las primeras entrevistas, información indispensable para orientar la búsqueda, incluyendo los números telefónicos y del celular de la víctima, la ausencia de acciones efectivas para localizar y resguardar oportunamente videograbaciones de cámaras de videovigilancia que permitieran reconstruir la ruta seguida por **Natali Carmona Hernández (mujer víctima directa 1) y P1 (pareja de Natali Carmona Hernández)** hacia el estado de Puebla, entre otras.[431]

291. Además, como se abordó de manera pormenorizada en el apartado anterior, no existió una adecuada colaboración y coordinación entre la FGJ CDMX y la FGE Puebla. A pesar de conocerse desde los primeros momentos que se dirigía a Puebla con su pareja,[432] no se formularon solicitudes inmediatas de colaboración, antes del hallazgo de **P1 (pareja de Natali Carmona Hernández)**. Posteriormente, tras el hallazgo del cuerpo de la pareja de **Natali Carmona Hernández (mujer víctima directa 1),**[433] la autoridad ministerial instó a sus familiares a trasladarse por su cuenta a Puebla para realizar acciones de búsqueda.[434] A ello se sumó la

[430] Véanse Anexo, evidencias 40, 43 y 78. La evidencia (40) se refiere al oficio número de 23 de septiembre de 2019, suscrito por la Dirección General de Derechos Humanos de la PGJ CDMX.
[431] Véase Anexo, evidencias 4, 5, 40, 81 y 118.
[432] Véanse Anexo, evidencias 2, 6 y 7.
[433] Véase Anexo, evidencia 17.
[434] Véanse Anexo, evidencias 23 y 25.

posterior declinación de competencia a favor de la FGE Puebla[435] y que luego dicha autoridad remitiera nuevamente la carpeta de investigación a la Ciudad de México, ocasionando la pérdida de tiempo relevante para la investigación y búsqueda de **Natali Carmona Hernández (mujer víctima directa 1)**. Así como las omisiones referidas *supra*, relacionadas con la deficiente coordinación de acciones de búsqueda considerando las referencias a la existencia de grupos criminales de ambas entidades operando en la zona.[436]

292. Estas omisiones fueron abordadas previamente en relación con el derecho de acceso a la verdad y la justicia, sin embargo, la actuación de la autoridad no solamente tenía como objeto conocer lo que sucedió y deslindar responsables, sino que también debía orientar la búsqueda. Por lo tanto, dichas omisiones tuvieron un impacto en el derecho a ser buscada, pues no permitieron que la conducción de la investigación y posterior colaboración estuviera encaminada de manera inmediata y estratégica a obtener información y dar seguimiento a líneas para dar con el paradero de **Natali Carmona Hernández (mujer víctima directa 1)**.

293. Además, de los testimonios recabados por esta Comisión, se advierte que, si bien la FGJ CDMX realizó diversas diligencias, las y los familiares de **Natali Carmona Hernández (mujer víctima directa 1)** tuvieron un papel central en el impulso de diversas acciones, entre ellas, la primera identificación de cámaras de vigilancia, el traslado, por sus propios medios y en diversas ocasiones, al estado de Puebla para la búsqueda de su hija, y la solicitud a la autoridad ministerial para que a **Aidee Hernández Ávila (mujer víctima directa 2)** le realizaran la toma de muestras destinadas al análisis de genética forense.[437]

294. Adicionalmente a dichas omisiones iniciales, esta Comisión advierte que la FIPEDE no solicitó, de manera inmediata, el consentimiento y autorización para la práctica de las periciales en materia de genética a la familia de **Natali Carmona Hernández (mujer víctima directa 1)** en los términos establecidos por el Protocolo Alba, ni tampoco recolectó huellas digitales.[438] En efecto, se advierte de las constancias de la carpeta de investigación que es **Aidee Hernández Ávila (mujer víctima directa 2)** quien a través de entrevista del 7 de febrero de 2019 a las 11:00 horas, que solicitó que se le realice un perfil genético *"para ayudar a la búsqueda y localización*

---

[435] Véase Anexo, evidencia 38.
[436] Véanse Anexo, evidencias 19, 52 y 85.
[437] Véase Anexo, evidencia 34.
[438] Protocolo Alba para la Ciudad de México, numeral 1.2.7: *"Recabar el consentimiento informado de los familiares o persona con interés legítimo para la obtención de muestras genéticas y huellas dactilares, la extracción de información de aparatos de telefonía celular o de cómputo y para el ingreso a las redes sociales de la víctima directa, de conformidad con el Anexo 4".*

de su hija".[439] Posteriormente, FIPEDE requirió intervención a la Coordinación de Servicios Periciales de la FGJ CDMX el mismo 7 de febrero de 2019,[440] teniendo como resultado el Dictamen en genética forense entregado al AMP de la FIPEDE en marzo de 2019.[441]

295. Si bien en el marco de la investigación, este Organismo verificó que, hacia 2020, a más de un año del primer reporte de desaparición,[442] cuando FGJ CDMX no mantenía la conducción de la carpeta de investigación pero continuaba desplegando acciones de investigación algunas en vías de colaboración con FGE Puebla y otras paralelas, se informó a las y los familiares de **Natali Carmona Hernández (mujer víctima directa 1)** sobre la realización de diligencias de búsqueda, no deja de señalarse que las mismas podían desprenderse razonablemente del análisis de la información recabada desde las primeras actuaciones practicadas en la carpeta de investigación iniciada por la FIPEDE[443] y por lo tanto, bajo un actuar diligente y planificado, habrían implicado acciones prontas previas.

296. Es importante destacar que la planeación de una investigación debe incorporar el análisis de contexto como guía para la identificación de líneas de investigación. A pesar de que el Protocolo Homologado de Investigación señala la integración de analistas de contexto para construir el Plan de Investigación,[444] aunado a que las comisiones de búsqueda (CNB y CBP CDMX) ya se encontraban en funciones desde 2018 y 2019, respectivamente, esta Comisión destaca que la FIPEDE requirió la elaboración de un plan de búsqueda hasta el 24 de agosto de 2021[445] es decir más de dos años, después de haberse iniciado la carpeta de investigación por el caso de **Natali Carmona Hernández (mujer víctima directa 1)**, cuando tenía nuevamente bajo su mando y conducción la carpeta de investigación.

297. Esta Comisión concluye que, tanto por las acciones de búsqueda inmediata que se desarrollaron tardíamente, así como por la inadecuada declinación de competencia

---

[439] Véase Anexo, evidencia 12.
[440] Véase Anexo, evidencia 13. Oficio de 7 de febrero de 2019, suscrito por el Agente del Ministerio Público adscrito a la FIPEDE, dirigido al Coordinador General de Servicios Periciales.
[441] Anexo, evidencia 34.
[442] Anexo, evidencia 67.
[443] Como se ha expuesto, de haberse analizado la información obtenida durante las primeras diligencias practicadas en la desaparición de Mujer Víctima Directa, la FIPEDE hubiese ordenado: ***a)*** el allegarse de números de interés para ser solicitados los datos reservados a la concesionarias previo control judicial de los mismos; ***b)*** analizar el perfil de Mujer Víctima Directa, así como su teléfono celular y, en su caso, allegarse de personas que tengan mayor conocimiento de su contexto personal; y ***c)*** ordenar la diligencia coordinación interestatal con el estado de Puebla, al tratarse de un sitio de interés en relación con la búsqueda.
[444] Protocolo Homologado de Investigación para los delitos de Desaparición Forzada y Desaparición cometida por particulares, p. 26.
[445] Véase Anexo, evidencia 77. Oficio de fecha 24 de agosto de 2021, suscrito por el Agente del Ministerio Público adscrito a la FIPEDE, dirigido a la Titular de la CBPCDMX.

en abril de 2019 y la ausencia de mecanismos de colaboración efectivos cuando estuvo a su cargo nuevamente la carpeta de investigación, la FIPEDE no planificó la búsqueda de **Natali Carmona Hernández (mujer víctima directa 1)**, ya que no existía una claridad en las líneas de búsqueda que debieron agotarse, mucho menos consta el procesamiento de la información obtenida por las familias para establecer líneas de búsqueda pertinentes, desde el deber de la debida diligencia reforzada.

298. En ese sentido, conforme a las omisiones previamente expuestas, que fueron ampliamente desarrolladas en el apartado relativo a los derechos de acceso a la verdad y a la justicia, así como aquellas adicionales que adquieren particularidades en derecho a la búsqueda inmediata, esta Comisión tiene por acreditado que la FGJ CDMX incumplió la inmediatez, exhaustividad, oportunidad y debida diligencia reforzada en la búsqueda de **Natali Carmona Hernández (mujer víctima directa 1)**.

3.2.2. Omisiones en el procesamiento de la zona de hallazgo

299. A lo largo del presente instrumento recomendatorio, este Organismo ha señalado que las omisiones de la FGJ CDMX, durante los primeros momentos posteriores al reporte de desaparición, incidieron desfavorablemente en las acciones de búsqueda e investigación. Ello incidió en el transcurso, de más de tres años, para lograr la identificación de **Natali Carmona Hernández (mujer víctima directa 1)** y el procesamiento de la escena de su hallazgo, ubicada en la misma zona geográfica donde, desde febrero de 2019, había sido localizado el cadáver de su pareja.

300. Una vez que ocurrió el hallazgo del cadáver de la pareja de **Natali Carmona Hernández (mujer víctima directa 1)**, la FIPEDE no emprendió acciones de búsqueda inmediata en los terrenos de cultivo ubicados en Huejotzingo, Puebla, ni consta que personal de la policía de investigación, agentes del ministerio público o personal forense de la FGJ CDMX se hubieran trasladado al lugar del hallazgo de la pareja de **Natali Carmona Hernández (mujer víctima directa 1)**, o al Instituto de Ciencias Forenses de Puebla para colaborar en la identificación de **P1 (pareja de Natali Carmona Hernández)** y desplegar acciones dirigidas a su búsqueda, pese a que la investigación se encontraba a cargo de la FGJ CDMX al momento del hallazgo y posterior identificación de **P1 (pareja de Natali Carmona Hernández).**[446]

[446] Véanse Anexo, evidencias 17, 18, 19, 24 y 25.

301. La omisión de desplegar acciones de búsqueda inmediata, aunada a la falta de articulación entre las autoridades intervinientes, se tradujo en acciones de búsqueda en campo carentes de una planificación y metodología claras, que aseguraran su continuidad y permitieran aprovechar de manera exhaustiva la información disponible. Desde la primera diligencia, se contó con la participación de personas servidoras públicas de la FGJ CDMX, incluyendo una antropóloga, policía de investigación y un agente del ministerio público adscrito a FIPEDE.[447] Si bien en ese momento la FGJ CDMX no tenía a su cargo el mando y conducción de la carpeta de investigación, su participación respondió a una solicitud de colaboración a efectos de presenciar y brindar el apoyo que resulte necesario.

302. Por lo anterior, la intervención del personal de la FGJ CDMX debe analizarse conforme al alcance que tenía, mientras mantenían el trámite del expediente de colaboración entre abril de 2019 y febrero de 2021, a partir de las acciones de colaboración solicitadas y las funciones que desempeñaron las personas servidoras públicas en la diligencia. En particular, la presencia de personal especializado de FGJ CDMX constituyó una oportunidad para documentar y comunicar las necesidades técnicas de la búsqueda, particularmente respecto de la delimitación y exploración del área. En dicha intervención no se realizó una ampliación progresiva del polígono a partir del lugar de hallazgo de la pareja de **Natali Carmona Hernández (mujer víctima directa 1)**, pese a que existía información que vinculaba a ambas personas y hacía necesario explorar de manera exhaustiva la zona.

303. Las diligencias posteriores tampoco muestran una estrategia progresiva que retomara los resultados de las intervenciones anteriores, previamente documentadas por la participación de las personas servidoras públicas de FIPEDE, y que ello justificara técnicamente la selección o modificación de las áreas exploradas, por ejemplo, mediante la ampliación progresiva del polígono. En particular, una vez que la FGJ CDMX retomó el mando y conducción de la investigación, no se advierte que hubiera recuperado la experiencia de las búsquedas previas para revisar la delimitación del polígono y orientar las siguientes intervenciones. Así, las deficiencias en la planificación y continuidad de la búsqueda persistieron, y en este caso resultan atribuibles a la FGJ CDMX una vez que tuvo el mando y conducción de la carpeta de investigación a partir de febrero de 2021, lo que ocasionó que fuera hasta febrero de 2022 cuando se localizaron los restos de **Natali Carmona Hernández (mujer víctima directa 1)**.

[447] Véase Anexo, evidencias 53, 54

304. En ese sentido, de acuerdo con la opinión del Equipo Mexicano de Antropología Forense,[448] existían elementos y previsiones técnicas del predio que debieron ser considerados prioritariamente y de forma exhaustiva en las acciones de búsqueda posteriores al hallazgo de la pareja de **Natali Carmona Hernández (mujer víctima directa 1)**; lo que al menos desde febrero de 2021 (fecha en que se abrió nuevamente carpeta de investigación en FIPEDE), permitía que la FGJ CDMX impulsara la coordinación de acciones prioritarias de búsqueda conforme a los antecedes del hallazgo; sin embargo la búsqueda en campo que permitió el hallazgo de Natali en el mismo sitio que su pareja, ocurrió un año después de la nueva apertura de carpeta en FGJ CDMX (y tres después del hallazgo de su pareja).

305. En conclusión, esta Comisión advierte que las primeras acciones de búsqueda de **Natali Carmona Hernández (mujer víctima directa 1)** realizadas en los terrenos de cultivo en Puebla no se desarrollaron a partir de una estrategia suficientemente articulada, progresiva y exhaustiva, que retomara la información disponible y los resultados de cada intervención para orientar las diligencias subsecuentes. En lo que corresponde a la FGJ CDMX, estas deficiencias se vinculan con la falta de una coordinación interestatal efectiva y sostenida que asegurara la continuidad de las acciones de búsqueda y el aprovechamiento de la información relevante obtenida durante la investigación, en los momentos en que tuvo a su cargo la conducción de la investigación. Si bien su posterior hallazgo e identificación constituyeron un resultado relevante en el caso, ello no subsana las deficiencias previamente advertidas, las cuales incidieron en la oportunidad y efectividad de las acciones desplegadas para su localización y, con ello, en su derecho a ser buscada de forma inmediata. A ello se sumaron las irregularidades advertidas en el tratamiento forense de la osamenta y del material genético, que incidieron posteriormente en su identificación y en que la restitución de sus restos a sus familiares, **Aidee Hernández Ávila (mujer víctima directa 2) y Aurelio Carmona Cruz (víctima directa 3),** madre y padre de **Natali Carmona Hernández (mujer víctima directa 1)**, no se realizara de manera oportuna y en condiciones dignas.

3.2.3. Omisiones en la gestión forense, identificación y entrega

306. Esta Comisión acreditó que la FGJ CDMX no realizó gestiones exhaustivas, oportunas y que acataran los protocolos forenses y buenas prácticas para la identificación de **Natali Carmona Hernández (mujer víctima directa 1)**. En particular respecto al procesamiento e identificación y entrega de las muestras de ADN.

[448] Anexo, evidencia 117.

307. Respecto al primer punto, en este caso, se advierte que la FGJ CDMX omitió gestionar el electroferograma de las muestras de ADN recogidas a **Aidee Hernández Ávila (mujer víctima directa 2)** para efectos de realizar la confronta en las bases de datos de diversos estados, incluido el Estado de Puebla. Esta información es verificable en el expediente a partir de las solicitudes de la CBP CDMX, que en 3 ocasiones solicitó este estudio a la FIPEDE, sin que la autoridad ministerial realizara las gestiones necesarias para llevar a cabo dicho estudio.[449]

308. A ello se suma que, durante el segundo período en el que la FGJ CDMX asumió nuevamente el mando y conducción de la carpeta de investigación por la desaparición de **Natali Carmona Hernández (mujer víctima directa 1),** a partir del el 23 de febrero de 2021, no se advierte que se haya conformado un grupo de trabajo interinstitucional y multidisciplinario con participación de elementos de la FGJ Puebla, para coordinar las acciones de investigación y búsqueda, a pesar de que existían elementos que permitían considerar que los hechos investigados pudieron haber ocurrido en dos o más entidades federativas, en términos de lo establecido en la LGMDFPyDP.[450] Esta omisión adquiere especial relevancia en lo relacionado al procesamiento, identificación forense de los restos y notificación de resultados a la familia de **Natali Carmona Hernández (mujer víctima directa 1),** con motivo de la diligencia de búsqueda practicada el 15 de febrero de 2022 en los terrenos de cultivo ubicados en el Fraccionamiento cerca de Boulevard Aeropuerto de Huejotzingo, Puebla.

309. Con relación a ello, el Protocolo Homologado de Identificación Forense contempla, entre sus objetivos, fortalecer la coordinación entre los grupos de especialistas encargados del tratamiento y la identificación forense, así como el intercambio de información sobre técnicas, métodos, procedimientos científicos y resultados, con la finalidad de estandarizar la actuación pericial mediante herramientas de investigación criminalística que permitan identificar científicamente los cadáveres y determinar las causas, la forma y las circunstancias de la muerte.[451]

310. Para la consecución de estos objetivos el Protocolo de Identificación Forense destaca que, en el levantamiento y análisis de cadáver esqueletados como en el

---

[449] Véase, Anexo, evidencias 74, 75 y 80. Se refiere a (74) Informe de acción de búsqueda de fechas 14 de abril de 2021; (75) Informe de acción de búsqueda de 4 de junio de 2021, relacionado al acompañamiento al área de Identificación del Servicio Médico Forense de lo Ciudad de Puebla, Puebla. (80) Informe emitido el 10 de septiembre de 2021 por la Comisión de Búsqueda de Personas de la Ciudad de México, en el cual se detallan las acciones de búsqueda en campo realizadas el 29 de julio de 2021.

[450] Ley General en Materia de Desaparición Forzada de Personas, Desaparición Cometida por Particulares y del Sistema Nacional de Búsqueda de Personas, artículo 70, fracción X.

[451] Protocolo Homologado para el Tratamiento e Identificación forense, p.10.

caso que nos ocupa, el abordaje debe hacerse de forma multidisciplinaria incluyendo si es posible, la intervención de un arqueólogo, antropólogo, médico, odontólogo, radiólogo, y otros.[452] En particular, en estos casos, el papel de la persona experta en antropología se destaca ya que, por su naturaleza y complejidad, los cadáveres esqueletizados requieren de la participación de antropológico forense especializado en el levantamiento y análisis,[453] pues dicho análisis "conducirá a definir el perfil biológico y contribuir a precisar la causa y circunstancia de la muerte"[454].

311. Si bien también el Protocolo de Identificación Forense reconoce que, cuando no sea posible que la persona experta en antropología asista el levantamiento, se le debe proporcionar a dicha persona experta todos los antecedentes del caso, particularmente, toda la información del levantamiento inclusive, fotos, mapas, esbozos y descripciones.[455] Posteriormente, en el apartado relativo a la identificación humana mediante la toma de muestras biológicas en cadáveres para el análisis de ADN, el mismo instrumento destaca lo siguiente:

> En caso de que se requiera un proceso de identificación, siempre será necesario que el médico forense y/o antropólogo forense, tomen las muestras biológicas más adecuadas, para posibilitar un análisis posterior por ADN, en caso de que otros métodos de identificación no hayan sido posibles.
>
> Estas muestras serán procesadas para obtener su perfil genético y compararlas con el respectivo grupo familiar al que hipotéticamente corresponde el cadáver. Siempre que se trate de cadáveres fragmentados, descompuestos, calcinados o esqueletizados se deben dejar al menos tres muestras en reserva. Una parte del éxito de la identificación a través del análisis de ADN, dependerá de las condiciones de preservación dadas a las evidencias, desde el momento de la obtención, traslado y almacenamiento, hasta el ingreso al laboratorio de ADN.[456]

312. Lo expuesto permite advertir que, en la medida en que se garantice el cumplimiento de estas directrices de actuación pericial, será más probable que la identificación se realice con éxito, garantizando con ello el derecho a la búsqueda hasta la restitución, por parte de las autoridades que intervienen en este proceso. En el caso concreto, el Equipo Mexicano de Antropología Forense, A.C., destacó diversas omisiones en la actuación de las autoridades intervinientes en el proceso de identificación de los restos localizados en la zona de hallazgo de **Natali Carmona Hernández (mujer víctima directa 1).**[457] Si bien estas omisiones no

[452] Protocolo Homologado para el Tratamiento e Identificación forense, p. 36
[453] *Ibidem*, p. 35.
[454] *Ibidem*, p. 35.
[455] *Ibidem*, p. 36.
[456] Protocolo Homologado para el Tratamiento e Identificación forense, p.48.
[457] Véase Anexo, evidencia 117.

comprometieron el éxito de la identificación, en opinión de las personas expertas, las falencias advertidas, analizadas en su conjunto, también representaron afectaciones al derecho a la búsqueda, como se explica a continuación.

313. En la opinión pericial del Equipo Mexicano de Antropología Forense, A.C., se destacó el impacto negativo que tuvo la falta de articulación entre las autoridades intervinientes en el proceso de identificación de los restos localizados en la zona de hallazgo de **Natali Carmona Hernández (mujer víctima directa 1)**. En particular, se señaló que, contrario a lo previsto en el Protocolo para el Tratamiento e Identificación Forense[458] *"los análisis antropológicos forenses de los restos localizados y después identificados como pertenecientes a* **[Natali Carmona Hernández (mujer víctima directa 1)]**,[459] *se realizaron con posterioridad a la toma de muestras de genética"*. Por lo anterior, se advirtió que se tomaron muestras, por la perita genetista, de un número excesivo de elementos óseos, algunos distintos de los sugeridos por el propio Protocolo, en incumplimiento proceso adecuado de identificación. Incluso, de **algunos de estos elementos no fue posible obtener un perfil genético y su muestreo implicó su destrucción innecesaria**.[460]

314. Asimismo, el Equipo Mexicano de Antropología Forense, A.C. puntualizó que existió una fragmentación en la recuperación de los restos de **Natali Carmona Hernández (mujer víctima directa 1)**, debido a que ésta se llevó a cabo en dos días distintos. Lo anterior ocasionó que los restos recuperados el 15 y 16 de febrero de 2022 fueran evaluados de manera separada y no de forma integral, lo que impidió realizar una adecuada asociación entre los elementos óseos localizados en ambas fechas.[461]

315. A ello se suma una falta de claridad documental respecto de las autoridades responsables del resguardo y procesamiento de los restos óseos y de la continuidad de su cadena de custodia. En ambos casos se destaca que, aunque el hallazgo y procesamiento se realizaron en el estado de Puebla, la FGJ CDMX mantenía a su cargo la carpeta de investigación iniciada por la desaparición de **Natali Carmona Hernández (mujer víctima directa 1),**[462] iniciada en febrero de 2021 por la denuncia presentada por **Aidee Hernández Ávila (mujer víctima directa 2),**[463] por lo que le correspondía mantener una coordinación efectiva con las autoridades de

[458] Protocolo Homologado para el Tratamiento e Identificación forense, en su página 35, establece que: *"Los cadáveres esqueletizados, por su naturaleza y complejidad, requieren de un análisis antropológico forense especializado, el cual debe ser realizado por expertos en el área. Dicho análisis nos conducirá a definir el perfil biológico y contribuir a precisar la causa y circunstancia de la muerte"*.
[458] Anexo, evidencia 117.
[460] Véase Anexo, evidencia 117.
[461] Véanse Anexo, evidencia 117.
[462] Véanse Anexo, evidencias 78 y104.
[463] Véase Anexo, evidencia 72.

esa entidad que permitiera dar seguimiento al procesamiento forense de los indicios e incorporar sus resultados a la investigación, y con ello garantizar una identificación y restitución digna.

316. Ahora bien, también se documentó una falta de coordinación en el proceso de notificación y restitución de los restos mortales de Natali Carmona Hernández (mujer víctima directa 1), en el que la FGJ CDMX y la FGE Puebla intervinieron en distintos momentos. En un primer momento, el 25 de febrero de 2022, la FGJ CDMX notificó a la familia que, de acuerdo con las pruebas periciales practicadas, los restos correspondían a **Natali Carmona Hernández (mujer víctima directa 1)**.[464]

317. Acto seguido, la FGJ CDMX, los días 1 y 2 de marzo de 2022, la FGJ CDMX, a través de oficios de colaboración, solicitó a la FGE Puebla la restitución a sus familiares de los restos óseos de **Natali Carmona Hernández (mujer víctima directa 1)**.[465] Posteriormente, esta Comisión verificó que fue hasta el 11 de marzo de 2022, que la FGE Puebla realizó una diligencia de notificación de resultados de identificación forense a la familia de **Natali Carmona Hernández (mujer víctima directa 1)**, una vez realizados los peritajes en genética y antropología forense.[466]

318. En ese sentido, esta Comisión advierte que las actuaciones dirigidas a la identificación forense y a la notificación de sus resultados se desarrollaron de manera fragmentada entre ambas fiscalías. En un primer momento, la FGJ CDMX comunicó a la familia un resultado de identificación sustentado en la confronta genética realizada a las muestras recabadas. Posteriormente, la FGE Puebla notificó los resultados de la identificación realizada a partir de los estudios en genética y antropología forense.

319. Esta falta de articulación entre ambas autoridades, en lo que corresponde al ámbito de actuación de la FGJ CDMX, se tradujo en que la familia recibiera, en un breve periodo, dos comunicaciones relacionadas con la identificación de los restos, provenientes de autoridades distintas y sustentadas en actuaciones periciales desarrolladas de manera separada. La fragmentación del proceso de identificación y de la comunicación de sus resultados generó condiciones que incrementaron la incertidumbre y el sufrimiento de las y los familiares de **Natali Carmona Hernández (mujer víctima directa 1)**, ante una actuación que, por su naturaleza, exigía especial cuidado y coordinación entre las autoridades intervinientes.

[464] Véanse Anexo, evidencias 100, 104 y 108
[465] Véanse Anexo, evidencias 98 y 99.
[466] Véase Anexo, evidencia 103.

320. Para esta Comisión es importante señalar que los procesos de identificación deben realizarse conforme a los procedimientos y métodos previstos en los protocolos forenses vigentes en la época de los hechos, además de garantizar un abordaje multidisciplinario que permita brindar a las familias el mayor grado de certeza posible sobre la identificación de su ser querido. En este sentido, las autoridades ministeriales deben mantener informadas a las familias sobre el desarrollo de los procesos de identificación, así como explicar los métodos empleados y las diligencias periciales necesarias para dotar de certeza a sus resultados.

321. Si bien la duplicidad de las diligencias de identificación forense y notificación de resultados no se encontraba prevista de manera específica en los **Protocolos de Tratamiento Forense,** ni en el PHB, ya vigente al momento del hallazgo de **Natali Carmona Hernández (mujer víctima directa 1)**, lo cierto es que la falta de articulación entre dichas actuaciones comprometió el tratamiento integral del proceso de identificación y restitución de sus restos y resultó contraria a los estándares de debida diligencia que debían orientar la actuación de las autoridades. Estas deficiencias incidieron en el derecho de **Natali Carmona Hernández (mujer víctima directa 1)** a ser buscada, particularmente en su dimensión relativa a la identificación y restitución digna de sus restos, así como en la integridad psíquica y moral de **Aidee Hernández Ávila (mujer víctima directa 2) y Aurelio Carmona Cruz (víctima directa 3),** madre y padre de **Natali Carmona Hernández (mujer víctima directa 1)**, como se desarrolla en el apartado subsecuente.[467]

VIII.4 El derecho a la integridad psicológica de los familiares de las personas desaparecidas frente al trato institucional recibido, vinculado con el derecho a la memoria de las personas fallecidas

4.1 Fundamentación

322. El derecho a la integridad personal se encuentra intrínsecamente vinculado con la dignidad humana,[468] y es reconocido, en el ámbito regional, en el artículo 5.º de la Convención Americana sobre Derechos Humanos,[469] y, en el plano universal, en los artículos 7.º y 10 del Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos.[470]

---

[467] Corte IDH. Caso Masacres de El Mozote y lugares aledaños Vs. El Salvador. Fondo, Reparaciones y Costas. Sentencia de 25 de octubre de 2012. párr. 172.
[468] Corte IDH. *Caso Castillo Páez vs. Perú. Fondo.* Sentencia de 3 de noviembre de 1997. Serie C, núm. 34, párr. 66.
[469] *"[t]oda persona tiene derecho a que se respete su integridad física, psíquica y moral".*
[470] *"Toda persona privada de libertad será tratada humanamente y con el respeto debido a la dignidad inherente al ser humano".* y *"Nadie será sometido a torturas ni a penas o tratos crueles, inhumanos o degradantes. En particular, nadie será sometido sin su libre consentimiento a experimentos médicos o científicos".*

323. En la Constitución el derecho a la integridad personal, así como las obligaciones que de éste derivan para todas las autoridades mexicanas, se encuentran previstas en los artículos 1.º,[471] 16,[472] y 22.[473] En el mismo sentido, la Constitución Política de la Ciudad de México reconoce expresamente este derecho en su artículo 6.º, apartado B, al establecer que: *"[t]oda persona tiene derecho a que se respete su integridad física y psicológica, así como a una vida libre de violencia"*. También, la Ley Constitucional de Derechos Humanos y sus Garantías de la Ciudad de México, en su artículo 27, establece el contenido y alcances de este derecho.[474]

324. De acuerdo con lo establecido por la Corte IDH es posible considerar a las y los familiares de las víctimas de violaciones de los derechos humanos, a su vez, víctimas, toda vez que se puede presumir un daño en su integridad personal en función del vínculo estrecho que puede existir entre las partes, mismo que puede estar relacionado con los hechos del caso, con las posteriores actuaciones u omisiones de las autoridades estatales frente a los hechos.[475]

325. En el caso de las personas desaparecidas la violación al derecho a la integridad personal de las y los familiares de las víctimas se materializa debido al *"[…] impacto generado en ellos y en el seno familiar la desaparición de sus seres queridos, por la falta de esclarecimiento de las circunstancias de su desaparición y al desconocimiento de su paradero final"*.[476] De ahí que la falta de debida diligencia en las investigaciones que permitan conocer la verdad de los hechos y sancionar a los responsables a través de información suficiente y adecuada y que las

---

[471] *"En los Estados Unidos Mexicanos todas las personas gozarán de los derechos humanos reconocidos en esta Constitución y en los tratados internacionales de los que el Estado Mexicano sea parte, así como de las garantías para su protección, cuyo ejercicio no podrá restringirse ni suspenderse, salvo en los casos y bajo las condiciones que esta Constitución establece".*

[472] *"Nadie puede ser molestado en su persona, familia, domicilio, papeles o posesiones, sino en virtud de mandamiento escrito de la autoridad competente, que funde y motive la causa legal del procedimiento. En los juicios y procedimientos seguidos en forma de juicio en los que se establezca como regla la oralidad, bastará con que quede constancia de ellos en cualquier medio que dé certeza de su contenido y del cumplimiento de lo previsto en este párrafo".*

[473] *"Quedan prohibidas las penas de muerte, de mutilación, de infamia, la marca, los azotes, los palos, el tormento de cualquier especie, la multa excesiva, la confiscación de bienes y cualesquiera otras penas inusitadas y trascendentales. Toda pena deberá ser proporcional al delito que sancione y al bien jurídico afectado".*

[474] *"Artículo 27. El derecho a la integridad personal implica la protección contra cualquier tipo de violencia física, psicológica, sexual, y económica la privación arbitraria de la vida y la libertad, la trata de personas en todas sus formas, las desapariciones forzadas, desplazamientos forzados, los crímenes de odio, los feminicidios, la tortura, las penas y tratos crueles, inhumanos y degradantes. Toda persona privada de su libertad será tratada humanamente y con el respeto debido a la dignidad inherente al ser humano. Las autoridades garantizarán a las personas víctimas de algún tipo de violencia una protección inmediata y efectiva, proporcionando, entre otros, alojamiento, alimentación adecuada y acceso a los servicios en condiciones de seguridad, dignidad, calidad e higiene, cuando se encuentren en situación de vulnerabilidad, de amenaza, o en situación de desplazamiento forzado interno, así como el acceso a procedimientos expeditos y accesibles de atención a víctimas, procuración y administración de justicia, de conformidad con lo previsto en las leyes de la materia".*

[475] Corte IDH. Caso Familia Barrios Vs. Venezuela. Fondo, Reparaciones y Costas. Sentencia de 24 de noviembre de 2011. Serie C No. 237, Párrafo 302; Caso Gomes Lund y otros ("Guerrilha do Araguaia") Vs. Brasil. Excepciones Preliminares, Fondo, Reparaciones y Costas. 24 de noviembre de 2010. Serie C No. 219, párr. 235.

[476] Corte IDH. Caso Gomes Lund y otros ("Guerrilha do Araguaia") Vs. Brasil. Excepciones Preliminares, Fondo, Reparaciones y Costas. 24 de noviembre de 2010. Serie C No. 219, párr. 240.

investigaciones sin importar su sede no queden impunes puede generarles sentimientos de frustración, impotencia y angustia[477], que *"[...] agrava la experiencia de impotencia, desamparo e indefensión de los integrantes de las familias".*[478]

326. También la Corte IDH ha sostenido que el tratamiento inadecuado de los restos mortales de una persona *"atenta contra los valores culturales (...) en cuanto al respeto debido a los muertos"* lo cual intensifica el sufrimiento de las y los familiares y constituye una violación a la integridad personal de éstos.[479] Por su parte, el Comité CED, en las Observaciones finales dirigidas al Estado mexicano[480] señaló su preocupación por las barreras que enfrentan las víctimas para acceder al apoyo psicológico entre otros aspectos, por lo que recomendó al Estado mexicano flexibilizar los criterios de apoyo establecidos en la Ley de Víctimas, diversificar el tipo de apoyo ofrecido y asegurar su plena adaptación a las necesidades de las víctimas con enfoque diferencial.

327. Esta interpretación es consistente con lo determinado por esta Comisión en la Recomendación 10/2025, en la que se acreditó la vulneración al derecho a la integridad personal derivada, entre otros aspectos, de la falta de una búsqueda inmediata de una mujer joven víctima directa por parte de personal de la FGJ CDMX. Ante la insuficiente actuación de las autoridades, las labores de búsqueda recayeron de manera significativa en su madre, quien se vio obligada a realizar de forma constante acciones encaminadas a su búsqueda y localización, asumiendo cargas que correspondían a las autoridades y enfrentándose, además, a situaciones de riesgo en cuyo contexto fue objeto de amenazas.[481]

328. En este sentido, la protección de la integridad personal de las y los familiares materializa la obligación de las autoridades estatales de actuar con una debida diligencia, en todo el proceso de búsqueda de las personas desaparecidas, el cual no concluye con la localización de la persona desaparecida, sino que comprende las actuaciones posteriores, especialmente cuando es localizada sin vida. Por ello, la notificación, identificación y restitución de los restos deben realizarse de manera digna, sensible y con acompañamiento adecuado, evitando profundizar el sufrimiento y las afectaciones generadas por la desaparición.

---

[477] Corte IDH. Caso Gomes Lund y otros ("Guerrilha do Araguaia") Vs. Brasil. Excepciones Preliminares, Fondo, Reparaciones y Costas. 24 de noviembre de 2010. Serie C No. 219, párr. 241.
[478] *Ibidem.*
[479] Corte IDH. Caso Blake Vs. Guatemala. Fondo. Sentencia de 24 de enero de 1998. Serie C No. 36. párrs. 115-116
[480] Comité contra la Desaparición Forzada de las Naciones Unidas, *Observaciones finales sobre la información complementaria presentada por México con arreglo al artículo 29, párrafo 4, de la Convención*, doc. cit. párrs. 39 y 40. Comisión de Derechos Humanos de la Ciudad de México, Recomendación 10/2025, *doc. cit.*
[481] Comisión de Derechos Humanos de la Ciudad de México, Recomendación 10/2025, *doc. cit.*

329. Estas medidas de protección también han sido reafirmadas por tribunales regionales, especialmente la Corte IDH. Por ejemplo, en el caso Blake Vs. Guatemala, la Corte dictaminó que la ocultación del paradero del Sr. Blake y de sus restos humanos violaba la prohibición de la tortura y los malos tratos.[482] Además, en el caso Guzmán Medina y otros Vs. Colombia, un caso de desaparición forzada perpetrada por el Estado,[483] la Corte IDH sostuvo que es parte del derecho a la verdad el derecho de las y los familiares de la víctima de conocer cuál fue el destino de ésta y, en su caso, dónde se encuentran sus restos, y que los funcionarios del Estado deben agotar todos los esfuerzos para establecer el paradero de la víctima.[484]

330. Por otra parte, el Relator Especial sobre las ejecuciones extrajudiciales, sumarias o arbitrarias ha reconocido que la protección contra la desaparición forzada, así como la cultura, los derechos a la privacidad, y la religión también entrañan la obligación de proteger a las personas fallecidas y sus restos humanos.[485] En particular, destaca que la protección más detallada se encuentra reconocida en la Convención Internacional para la Protección de Todas las Personas contra las Desapariciones Forzadas, en donde se establecen *"las medidas apropiadas para la búsqueda, el respeto y la restitución de los restos de las víctimas de desaparición".*[486]

331. En el mismo informe, el Relator Especial plantea que algunos países reconocen los derechos residuales de las personas fallecidas, mientras que otros al menos reconocen los de las familias de las personas fallecidas.[487] Ante este análisis, se destaca como premisa que *"si bien una persona fallecida no conserva su personalidad, su cadáver sí es merecedor de protección y regulación, en parte por la dignidad que transmite haber sido una persona".*[488]

---

[482] Corte IDH. Caso Blake Vs. Guatemala. Fondo. Sentencia de 24 de enero de 1998. Serie C No. 36. párrs., párrs. 112 a 116.
[483] Corte IDH. Caso Guzmán Medina y otros Vs. Colombia. Fondo, Reparaciones y Costas. Sentencia de 23 de agosto de 2023. Serie C No. 495, párrs. 83 a 85.
[484] *Ibidem*, párrs. 92 y 93.
[485] Consejo de Derechos Humanos, *Protección de los muertos. Informe del Relator Especial sobre las ejecuciones extrajudiciales, sumarias o arbitrarias, Morris Tidball-Binz*, A/HRC/56/56, 25 de abril de 2024, párr. 9.
[486] *Ibidem*, párr. 11; Convención Internacional para la protección de todas las personas contra las desapariciones forzadas, artículos15 y 24.
[487] *Ibidem*, párrs. 59 y 60.
[488] Por ejemplo, el precedente Díaz c. Servicio de Salud de Antofagasta, causa núm. 2845-2020, sentencia, 14 de julio de 2020, págs. 11 y 12. Puede consultarse en https://www.pucv.cl/uuaa/site/docs/20200901/20200901215302/scs_rol_n__2846_2020_exhumaci__n.pdf, Citado en Naciones Unidas, Consejo de Derechos Humanos, *Protección de los muertos. Informe del Relator Especial sobre las ejecuciones extrajudiciales, sumarias o arbitrarias, Morris Tidball-Binz, doc. cit.*, párr. 18.

332. En línea con lo anterior, este organismo reconoce el derecho a la memoria de las personas fallecidas, el cual se define como el trato que las autoridades deben dar a la persona fallecida para evitar la revictimización de sus familiares y el consecuente sufrimiento, en razón de que existe una estrecha relación entre los derechos de las y los familiares de las víctimas de delito y el tratamiento que las autoridades han de brindarle,[489] el cual también se encuentra reconocido en la Convención Internacional para la Protección de Todas las Personas contra las Desapariciones Forzadas,[490] así como la Constitución de la Ciudad de México.[491]

333. Ahora bien, el despliegue de estas acciones vinculadas a la notificación de la localización sin vida de una persona desaparecida, así como la restitución sin vida, se encuentra reglamentado en el Protocolo Homologado, el cual establece que este se realice con extrema sensibilidad mediante un equipo interdisciplinario (con personal de psicología, asesoría jurídica y peritos que intervinieron en el caso), garantizando la entrega de documentación a la familia y cubriendo los costos de exhumación y restitución a través de las autoridades de atención victimal cuando existan omisiones institucionales. De igual forma dispone que, la restitución de restos atenderá a las especificidades culturales y religiosas de las prácticas, creencias y rituales mortuorios y funerarios de las familias.[492]

334. Los procesos de notificación deben ser espacios adecuados a las necesidades de las familias, contando con la participación de las autoridades y, preferentemente, de las personas que participaron en el proceso de identificación forense. El objetivo de la notificación es transmitir y explicar en un lenguaje no científico los resultados de los análisis forenses, permitiendo la posibilidad de resolver dudas de las familias sobre la identificación.[493] Este proceso puede estar acompañado o no de apoyo psicoemocional, debiendo ser previamente acordado con la familia.

335. Así, el proceso de restitución debe realizarse en condiciones dignas considerando los valores y sistemas culturales de las familias, en lugares adecuados y solemnes

---

[489] Comisión de Derechos Humanos de la Ciudad de México, Catálogo para la calificación de violaciones a derechos humanos. Edición 2025, México, CDHCM, 2025, *op. cit.*, p. 84; Ley General de Salud, publicada en el *Diario Oficial de la Federación* el 7 de febrero de 1984; última reforma publicada el 15 de enero de 2026, artículo 346; Consejo de Derechos Humanos, Protección de los muertos. Informe del Relator Especial sobre las ejecuciones extrajudiciales, sumarias o arbitrarias, Morris Tidball-Binz, A/HRC/56/56, 25 de abril de 2024, párr. 11.

[490] Convención Internacional para la protección de todas las Personas contra las Desapariciones Forzadas, en su artículo. 24, párrafo 3 establece que *"Cada Estado Parte adoptará todas las medidas apropiadas para la búsqueda, localización y liberación de las personas desaparecidas y, en caso de fallecimiento, para la búsqueda, el respeto y la restitución de sus restos"*.

[491] Constitución Política de la Ciudad de México, artículo 5.C.2 *"Toda persona tiene derecho a la memoria, a conocer y preservar su historia, a la verdad y a la justicia por hechos del pasado"*.

[492] Protocolo Homologado para la Búsqueda de Personas Desaparecidas y No localizadas, numerales. 438-441.

[493] Luis Fondebrider, *Guía forense para la investigación, recuperación y análisis de restos óseos*, *op. cit.*, p. 26.

"para evitar que los familiares sientan que su ser querido ha sido tratado como una cosa o un desecho, y que este momento tenga un efecto reparador".[494]

336. El Comité Internacional de la Cruz Roja ha establecido que la búsqueda, recuperación e identificación de restos humanos no constituyen meros trámites burocráticos o administrativos, sino un componente fundamental del derecho a la verdad y un pilar insustituible de la reparación integral para las víctimas indirectas. Las investigaciones forenses de restos humanos persiguen dos objetivos inseparables y de igual jerarquía que no deben contraponerse, el primero es investigar la causa y la manera del deceso y aunado a esto identificar los restos y devolverlos a las y los familiares. La práctica internacional establece que el único cauce para mitigar el sufrimiento continuo de las y los familiares es la confirmación fidedigna del paradero o el deceso del ser querido.[495]

337. En cuanto al proceso de identificación, el Equipo Argentino de Antropología Forense ha establecido que los análisis genéticos pueden tener un alto grado de fiabilidad, sin embargo, no escapan de la posibilidad de tener alcances limitados dado el estado del cuerpo o los restos. Por tanto, el Equipo Argentino precisa que es necesaria la intervención de un equipo multidisciplinario que permita una identificación robusta a través de comités de identificación.[496]

338. Sobre este punto es importante precisar que el Espacio Psicosocial por los Derechos Humanos ha identificado una diferencia en cómo se *experimentan* los procesos forenses de identificación*: "[para las familias] se trata de dignificar a la persona a la que le fue arrebatada la vida de manera indigna, aliviar a los deudos de la incertidumbre y restablecer el derecho de la familia y la comunidad a enterrar a los muertos y al duelo. Desde la perspectiva ministerial y forense, los restos forman parte de las evidencias que se deben recabar, resguardar y procesar de acuerdo a procedimientos técnicos a fin de ser utilizados en el desarrollo de una investigación criminal o un juicio penal".*[497]

339. Entender la dualidad de estos procesos debería permitir que las autoridades anticipen la necesidad de contar con las condiciones necesarias para que los

---

[494] Corte IDH. Caso Cley Mendes y otros (Chacina do Tapanã) Vs. Brasil. Excepciones Preliminares, Fondo, Reparaciones y Costas. Sentencia de 25 de noviembre de 2025. Serie C No. 578; Espacio Psicosocial por los Derechos Humanos, *Protocolo interdisciplinario de notificación de la identificación de personas desaparecidas y restitución digna*, Ciudad de México, *op. cit.*, pp. 60-61.

[495]. Comité Internacional de la Cruz Roja, *Personas desaparecidas, análisis forense de ADN e identificación de restos humanos. Guía sobre prácticas idóneas en caso de conflicto armado y de otras situaciones de violencia armada, doc. cit.*, p. 3.

[496] Luis Fondebrider, *Guía forense para la investigación, recuperación y análisis de restos óseos, op. cit.*, p. 25.

[497] Espacio Psicosocial por los Derechos Humanos, *Protocolo interdisciplinario de notificación de la identificación de personas desaparecidas y restitución digna, op. cit.*, p. 50.

procesos de notificación de la identificación de las víctimas directas y su posterior restitución a sus familiares se realicen en condiciones dignas, confiables y respetuosas, abriendo la posibilidad de lleva a cabo *"prácticas rituales que favorezcan el inicio del proceso de duelo".*[498]

340. En conclusión, el derecho a la integridad personal de las y los familiares de una persona desaparecida impone a las autoridades obligaciones dirigidas a evitar que la incertidumbre sobre su suerte o paradero, la insuficiente respuesta institucional o el traslado de cargas que corresponden al Estado generen o profundicen afectaciones a su integridad psíquica y moral. Estas obligaciones adquieren especial relevancia cuando la persona es localizada sin vida, pues los procesos de identificación, notificación y restitución de restos no constituyen actuaciones exclusivamente técnicas, ministeriales o forenses, sino que poseen una dimensión humana y reparadora.

341. Por ello, las autoridades deben desarrollarlos de manera diligente, sensible y respetuosa de la dignidad de la persona fallecida y de sus familiares, garantizando información suficiente y comprensible sobre la identificación, condiciones adecuadas para resolver las dudas de la familia y una restitución digna que atienda sus necesidades y prácticas culturales y funerarias. En este contexto, las actuaciones u omisiones de las autoridades que prolonguen o generen nuevas incertidumbres, trasladen cargas indebidas a las familias o dificulten el inicio de su proceso de duelo pueden constituirse, por sí mismas, en una fuente adicional de sufrimiento y, consecuentemente, en una afectación a su derecho a la integridad personal.

342. Al respecto, la Corte IDH ha sido enfática en que pueden actualizarse violaciones graves a los derechos de las víctimas y sus familiares, como se aborda en el apartado subsecuente sobre las vulneraciones a al derecho a la integridad y a la memoria de las personas fallecidas, si previo a la *restitución* se demuestra la negligencia de las autoridades en el procesamiento científico de los restos y la identificación de la víctima directa.[499] Por tanto, la transmisión de los resultados forenses debe ser un momento que precede del análisis exhaustivo de los cuerpos o restos de las víctimas con las consideraciones adecuadas en los en el proceso de notificación y restitución. En relación a ello, la CIDH recomendó al Estado

---

[498] Espacio Psicosocial por los Derechos Humanos, *Protocolo interdisciplinario de notificación de la identificación de personas desaparecidas y restitución digna*, *op. cit.*, p. 53.

[499] Corte IDH. Caso González y otras ("Campo Algodonero") Vs. México. Excepción Preliminar, Fondo, Reparaciones y Costas. Sentencia de 16 de noviembre de 2009. Serie C No. 205., párr. 318-332; Comisión de Derechos Humanos de la Ciudad de México, *Búsqueda de personas desaparecidas en la Ciudad de México. Estándares, hallazgos y pautas operativas para fortalecer la búsqueda de personas*, *doc. cit.*, p. 62.

Mexicano: *"adoptar las medidas necesarias para que las personas funcionarias encargadas de la restitución, la notificación, las diligencias y las entregas de cuerpos a sus familias respeten su dolor, ritos y costumbres".*[500]

1.2 Motivación respecto al derecho a la integridad psicológica de las y los familiares y a la memoria de las personas fallecidas

343. La desaparición de personas conlleva un sufrimiento por el hecho mismo, que puede materializar una vulneración a la integridad psicológica con motivo de la actuación indebida de las autoridades que intervienen en la investigación y la búsqueda.[501] La vulneración a la integridad es una consecuencia directa de la zozobra y la angustia que la desaparición genera, que en este caso, al ser una desaparición cometida por particulares, no es atribuible a la autoridad en primer momento; sin embargo, la zozobra se acrecienta o profundiza, entre otras cuestiones, con motivo de las omisiones de las autoridades ministeriales en la realización de una investigación eficaz que permita esclarecer lo sucedido,[502] lo que conduce al involucramiento de las familias en las acciones de búsqueda e impulso de las investigaciones.[503]

344. En general, entre los elementos que deben considerarse[504] para determinar las circunstancias en las que se materializó la afectación a la integridad psíquica y moral de las y los familiares de personas desaparecidas, destacan la existencia de un estrecho vínculo familiar y la forma en que éstos se involucraron en la búsqueda de justicia.[505] Tales circunstancias permiten valorar el sufrimiento y la angustia adicionales derivados de las acciones u omisiones posteriores de las autoridades estatales frente a la desaparición.[506]

---

[500] Comisión Interamericana de Derechos Humanos, *Informe sobre desapariciones en México, doc. cit.*, párr. 32.
[501] Corte IDH. Caso Cuéllar Sandoval y otros Vs. El Salvador. Fondo, Reparaciones y Costas. Sentencia de 18 de marzo de 2024. Serie C, No. 521, párr. 102.
[502] Corte IDH. Caso González Méndez y otros Vs. México. Excepción Preliminar, Fondo, Reparaciones y Costas. Sentencia de 22 de agosto de 2024. Serie C, No. 532, párr. 206.
[503] Corte IDH. Caso Osorio Rivera y Familiares Vs. Perú. Excepciones Preliminares, Fondo, Reparaciones y Costas. Sentencia de 26 de noviembre de 2013. Serie C, No. 274, párr. 231.
[504] En específico se destaca 1) la existencia de un estrecho vínculo familiar; 2) las circunstancias particulares de la relación con la víctima; 3) la forma en que el familiar se involucró en la búsqueda de justicia; 4) la respuesta ofrecida por el Estado a las gestiones realizadas, y 5) la permanente incertidumbre en la que se vieron envueltos los familiares de la víctima.
[505] Corte IDH. Caso Heliodoro Portugal Vs. Panamá. Excepciones Preliminares, Fondo, Reparaciones y Costas. Sentencia de 12 de agosto de 2008. Serie C No. 186, párr. 63; Corte IDH. Caso Bámaca Velásquez Vs. Guatemala. Reparaciones y Costas. Sentencia de 22 de febrero de 2002. Serie C No. 91, párr. 163; Corte IDH. Caso del Penal Miguel Castro Castro Vs. Perú. Interpretación de la Sentencia de Fondo, Reparaciones y Costas. Sentencia de 2 de agosto de 2008. Serie C No. 181, párr. 335. Caso Masacres de El Mozote y lugares aledaños Vs. El Salvador. Fondo, Reparaciones y Costas. Sentencia de 25 de octubre de 2012 Serie C No. 252, párr. 197
[506] Corte IDH. Caso Masacres de El Mozote y lugares aledaños Vs. El Salvador. Fondo, Reparaciones y Costas. Sentencia de 25 de octubre de 2012. Serie C, No. 252, párr.197

345. En ese sentido, para esta Comisión, la presunción de afectación derivada del vínculo familiar constituye el punto de partida para analizar la vulneración al derecho a la integridad personal. Sin embargo, las circunstancias particulares de cada familiar permiten analizar la forma en que dicha afectación se materializó y, en su caso, identificar factores que pudieron agravar el sufrimiento ocasionado por la desaparición. Entre ellos cobra especial relevancia el papel que las y los familiares tienen que asumir ante la desaparición, particularmente cuando, frente a las omisiones en la respuesta de las autoridades estatales, se involucraron directamente en las labores de búsqueda o impulsaron diligencias de investigación.

346. En el caso de **Aidee Hernández Ávila (mujer víctima directa 2) y Aurelio Carmona Cruz (víctima directa 3),** madre y padre de **Natali Carmona Hernández (mujer víctima directa 1),** esta Comisión constató que la afectación a su integridad psíquica y moral, no deriva únicamente del vínculo familiar que mantenían con su hija y de la incertidumbre provocada por su desaparición. Como se desarrolló en el apartado relativo al acceso a la justicia, ambos asumieron un papel central y sostenido en las acciones encaminadas a su búsqueda y al esclarecimiento de los hechos, realizando búsquedas por sus propios medios, trasladándose a distintos lugares, aportando información y elementos a la investigación e impulsando ante las autoridades la práctica de diligencias que consideraban necesarias.[507] De esta manera, la insuficiente respuesta institucional los colocó en una situación en la que tuvieron que asumir activamente labores dirigidas a la búsqueda de su hija y a la obtención de verdad y justicia, circunstancia que agravó la afectación derivada de la desaparición.

347. Precisamente, la falta de colaboración y valoración de elementos que podían contribuir al esclarecimiento de los hechos y la ausencia de avances durante aproximadamente un año después de la remisión de la investigación a Puebla, llevaron a las y los familiares a realizar por cuenta propia acciones de investigación y búsqueda, así como a mantener una interlocución constante con las autoridades para impulsar diligencias pendientes, incluida la búsqueda en el lugar donde finalmente fue localizado el cuerpo de **Natali Carmona Hernández (mujer víctima directa 1).**[508] Además, como se señaló *supra*, la remisión de la carpeta de investigación a la FGE Puebla, sin mantener esquemas de coordinación claros, así como la posterior reapertura de carpeta por la FGJ CDMX, dan cuenta de la falta de certeza que tenía la familia respecto de la autoridad encargada de la

---

[507] Véase, Anexo, evidencias

[508] Véase, Anexo, evidencias 41, 42, 45, 63, 73, 109. Entrevista ministerial rendida a las 14:00 horas del 19 de mayo de 2022, por **Aidee Hernández Ávila (mujer víctima directa 2)**, ante el Agente del Ministerio Público adscrito a FIPEDE.

investigación y la colaboración que el caso requería, lo que aumentó la zozobra en que se encontraban.

348. Estas acciones y omisiones **generaron impactos adicionales a mujer víctima directa 2 y víctima directa 3 (Aidee Hernández Ávila y Aurelio Carmona Cruz)**, más allá de aquellos derivados de la propia desaparición y posterior pérdida. De acuerdo con la Nota Psicosocial elaborada por personal de esta Comisión,[509] **se advierte que la madre y el padre de Natali Carmona Hernández (mujer víctima directa 1)** experimentaron afectaciones asociadas con la modificación de sus roles familiares y con la prolongada búsqueda de verdad y justicia, así como consecuencias económicas relacionadas con la pérdida de ingresos y el endeudamiento.[510] Tales afectaciones se vieron agravadas porque, pese a que la desaparición ocurrió en enero de 2019, fue hasta 2021 cuando comenzaron a recibir apoyos económicos en su calidad de víctimas, después del otorgamiento de la calidad de víctima por la FGJ CDMX,[511] el cual no se realizó de manera oportuna de acuerdo al Consejo de Asuntos Internos de la autoridad responsable.[512]

349. En conjunto, las deficiencias advertidas durante la investigación generaron en la familia sentimientos de inconformidad y frustración, al considerar que durante aproximadamente tres años tuvieron que impulsar activamente las actuaciones de las autoridades para obtener avances en la búsqueda y el esclarecimiento de los hechos, incluida la constante solicitud para que los hechos se continuaran investigando por la FGJ-CDMX.[513] Estos hechos agravaron el sentimiento de zozobra y angustia que el solo hecho de la desaparición de un familiar conlleva.

350. Por otro lado, respecto de **mujeres víctimas indirectas 1, 3, así como víctimas indirectas 2 y 4,**[514] hermana, hermano, hija e hijo, respectivamente, de **Natali Carmona Hernández (mujer víctima directa 1)**, esta Comisión reconoce que las acciones y omisiones de la FGJ CDMX, en la investigación y búsqueda de **Natali Carmona Hernández (mujer víctima directa 1)**, produjo afectaciones que ocasionaron la alteración de la dinámica del núcleo familiar. Reconocer esa circunstancia, sumado al vínculo que tenían con **Natali Carmona Hernández (mujer víctima directa 1)**, permite reconocerles como víctimas indirectas. Circunstancia que es distinta a la de **mujer víctima directa 2 y víctima directa 3, madre y padre de Natali Carmona Hernández (mujer víctima directa 1),** pues

[509] Véase Anexo, evidencia 110.
[510] Véase Anexo, evidencia 110.
[511] Véase Anexo, evidencia 69.
[512] Véase Anexo, evidencia 118.
[513] Véase Anexo, evidencia 110.
[514] Nancy Carmona Hernández, Shared Sánchez Carmona, Miguel Ángel Carmona Hernández y Joshua Sánchez Carmona.

como se refirió, en el caso de estos últimos, la afectación a su integridad psíquica y moral se vio además agravada por el papel activo y sostenido que asumieron en la búsqueda de su hija y en las acciones encaminadas al esclarecimiento de los hechos y a la obtención de verdad y justicia.

351. Dicha distinción no supone desconocer las afectaciones particulares experimentadas por las demás personas integrantes del núcleo familiar. En específico, respecto de la hija e hijo de **Natali Carmona Hernández (mujer víctima directa 1),**[515] pues como víctimas indirectas, deberán considerarse dentro de las medidas de reparación, desarrolladas *infra*, los impactos diferenciados que produjo la desaparición de su madre cuando aún no habían alcanzado la mayoría de edad, así como las consecuencias que su ausencia generó en su desarrollo personal, familiar y proyecto de vida. Precisamente, la Corte IDH ha reconocido expresamente que la desaparición de un progenitor puede producir impactos diferenciados en sus hijas e hijos cuando ocurre desde edades tempranas, atendiendo a las consecuencias de esa ausencia en su desarrollo personal y proyecto de vida.[516]

***

352. Por otro lado, esta Comisión tiene por acreditado que el personal de la FGJ CDMX vulneró el derecho a la integridad personal de **Aidee Hernández Ávila (mujer víctima directa 2)** y **Aurelio Carmona Cruz (víctima directa 3)**, madre y padre de **Natali Carmona Hernández (mujer víctima directa 1)**, con motivo de su actuación el 21 de abril de 2022, durante la ceremonia de inhumación de **Natali Carmona Hernández (mujer víctima directa 1)**. En ese momento, personal de dicha Fiscalía se presentó para entregar restos que, según manifestó, habían omitido entregar previamente y que eran transportados en sobres de papel color cartón. Al arribar al lugar, dicho personal se acercó inicialmente a **Aurelio Carmona Cruz (víctima directa 3)** y, de acuerdo con lo referido por la familia, señaló que "*por parte de la Fiscalía General de Justicia de la Ciudad de México habían olvidado hacer entrega de algunos restos*", solicitando que fueran recibidos e introducidos en el ataúd de **Natali Carmona Hernández (mujer víctima directa 1)**. Ante esta situación, **Aurelio Carmona Cruz (víctima directa 3)** manifestó su inconformidad; no obstante, pese a la negativa expresada por familiares, personal de los servicios funerarios ingresó los restos al ataúd.[517]

---

[515] Véase Anexo, evidencia 110.

[516] Corte IDH. Caso González Méndez y otros Vs. México. Excepción Preliminar, Fondo, Reparaciones y Costas. Sentencia de 22 de agosto de 2024. Serie C, No. 532, párr. 217.

[517] Véanse Anexo, evidencias 115 y 124. (115) se refiere a Acta circunstanciada de 19 de febrero de 2024, suscrita por un visitador adjunto de la CDHCM; (124) se refiere a escrito remitido a través de correo electrónico firmado por **Aidee Hernández Ávila (mujer víctima directa 2)**, el cual consta en la carpeta CDHDF/IV/122/IZTP/19/D700.

353. Estas circunstancias resultaron contrarias al deber de la autoridad de garantizar que la notificación y restitución de una persona desaparecida localizada sin vida se realicen en condiciones dignas, con la debida sensibilidad y conforme a los procedimientos previstos para actos de alto impacto emocional. En particular, la entrega intempestiva de restos durante la ceremonia de inhumación y teniendo conocimiento dos días antes de que dicha ceremonia tendría lugar, se apartó del deber de procurar una restitución respetuosa de la dignidad de la persona fallecida y de sus familiares, así como de garantizar los medios y procedimientos necesarios para una sepultura acorde con sus deseos, prácticas y costumbres.[518]

354. A ello, se suma que el apoyo institucional proporcionado por la FGJ CDMX no garantizó la perspectiva psicosocial ni el apoyo correspondiente, establecido en el Protocolo Homologado de Búsqueda,[519] pues de acuerdo con la información solicitada por este Organismo, la Dirección de Apoyo Socio jurídico a Víctimas de Delito Violento manifestó:

> [E]ste Centro de Apoyo se le solicito que únicamente se brindara el servicio funerario por lo que atendiendo a esta petición desde unas semanas antes se acordó con la C. [**Aidee Hernández Ávila (mujer víctima directa 2)**] que ella avisaría a esta unidad la fecha para el traslado y entrega, por lo que el 19 de abril del presenta año aproximadamente a las 12 horas con 35 minutos **[Aidee Hernández Ávila (mujer víctima directa 2)]** entablo comunicación con la que suscribe a fin de informar que se encontraba en el Estado de Puebla y que le serían entregados los restos de su hija por lo que solicitó se enviara el servicio funerario que se le había comentado, por lo que se giraron las instrucciones pertinentes a fin de cumplir con su petición, alrededor de las 18 horas con 30 minutos y hasta las 00 horas con 10 minutos del 20 de abril la que suscribe sostuvo comunicación constante con la **[Aidee Hernández Ávila (mujer víctima directa 2)]** a fin de resolverle dudas y contenerla en su estado emocional toda vez que esta unidad estaba en el entendido que sólo se brindaría el servicio funeraria, desconociendo si personal de diversa área realizaría el acompañamiento emocional que se necesita en estos casos. [...]
>
> Me permito reiterarle que el apoyo que se solicitó a este centro a mi cargo solamente fue el de proporcionar el servicio funerario, por lo que al momento de la entrega no hubo ninguna intervención de ninguna otra índole.
>
> Los días 20 y 21 de abril de 2022 se llevaron a cabo las gestiones pertinentes y necesarias por parte de la funeraria contratada para que se recibieran,

[518] Véase Anexo, evidencias 110, 116 y 117.

[519] Protocolo Homologado para la Búsqueda de Personas Desaparecidas y No Localizadas, párr. 84, en el que se define la *"restitución digna"* como la *"[e]ntrega de un cuerpo humano, segmentos corporales y/o fragmentos óseos plenamente identificados por métodos científicos, y por familiares de la persona a la que pertenecieron. Este proceso debe realizarse bajo los principios de la LGD de Debida diligencia; Enfoque diferencial y especializado; Gratuidad; Igualdad y no discriminación; Máxima protección; y los Ejes Rectores Operativos de Enfoque Diferenciado, Enfoque Humanitario, Perspectiva Psicosocial y Verdad y Memoria"*.

preparan, trasladaran y resguardaran los restos óseos de [**Natali Carmona Hernández (mujer víctima directa 1)**] hasta el momento de su inhumación, comprimiendo así con lo peticionado a este Centro a mi cargo[520].

355. El informe citado permite advertir que la autoridad señalada como responsable en el presente instrumento recomendatorio tuvo conocimiento previo de la fecha en que se llevaría a cabo la inhumación de **Natali Carmona Hernández (mujer víctima directa 1)**. Esta circunstancia acredita que contó con tiempo suficiente para prever, coordinar y adoptar las medidas necesarias para garantizar una restitución digna, conforme a las obligaciones que le imponía la normativa aplicable. No obstante, pese a encontrarse en posibilidad de planificar adecuadamente dicha actuación, la FGJ CDMX omitió garantizar que la entrega de los restos se realizara en condiciones compatibles con la dignidad de **Natali Carmona Hernández (mujer víctima directa 1)** y de sus familiares.

356. Aunado a ello, las autoridades ministeriales tenían conocimiento de la intervención de la Oficina en México del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos, que mediante nota OACNUDH/REP021/2022[521], de 21 de febrero de 2022, alentó expresamente a las autoridades estatales a garantizar que los restos de **Natali Carmona Hernández (mujer víctima directa 1)** fueran tratados con respeto y dignidad, de conformidad con lo establecido en la LGMDFPyDP. Pese a este señalamiento previo y a las obligaciones normativas que resultaban exigibles, tales condiciones no fueron garantizadas, como se desprende de la actuación atribuible a la FGJ CDMX acreditada en el presente instrumento recomendatorio.

357. Aunado a ello, en la nota de impacto psicosocial elaborada por esta Comisión, se documentaron las diversas afectaciones que sufrieron las y los familiares de **Natali Carmona Hernández (mujer víctima directa 1)**, ante el trato institucional, en las diversas acciones de búsqueda e investigación que, en demasiadas ocasiones tuvieron que desplegar por sus propios medios. En específico, esta Comisión documentó que, a partir de la desaparición de **Natali Carmona Hernández (mujer víctima directa 1)**, el hallazgo de su cuerpo y de los procesos para obtener verdad, justicia y reparación, **Aidee Hernández Ávila (mujer víctima directa 2)** y **Aurelio Carmona Cruz (víctima directa 3)** han experimentado diversas afectaciones en su salud física y mental, particularmente en su tejido familiar, su sistema de creencias y mecanismos para afrontar situaciones de estrés y angustia. **Aidee Hernández Ávila (mujer víctima directa 2)** ha experimentado desgaste físico y emocional

[520] Anexo, evidencia 107.
[521] Véase Anexo, evidencia 95.

intenso, con un estado anímico de tristeza prevaleciente el cual oculta a sus nietas para verse fuerte; también tiene sentimientos de dolor, enojo y frustración ante las circunstancias que dieron origen a la desaparición de **Natali Carmona Hernández (mujer víctima directa 1)**. En cuanto a **Aurelio Carmona Cruz (víctima directa 3)**, ha identificado deseos de pasar más tiempo solo para llorar y pensar en su hija; ha tenido prevalencia de sentimientos de injusticia y coraje derivado que *"[**Natali Carmona Hernández (mujer víctima directa 1)**] no… merecía" vivir los hechos por los que atravesó.*[522]

358. Tales actuaciones y omisiones no pueden entenderse únicamente como irregularidades de carácter administrativo, pues incidieron directamente en el derecho a la integridad personal de las y los familiares de **Natali Carmona Hernández (mujer víctima directa 1),** así como el derecho a la memoria de las personas fallecidas. A la afectación generada por su desaparición, la incertidumbre sobre su paradero y las cargas asumidas por la familia durante su búsqueda e investigación, se sumó una actuación irregular en un momento de especial vulnerabilidad, como lo fue su inhumación.

359. La entrega de restos en esas condiciones, además de apartarse de las obligaciones previstas en el Protocolo Homologado y la normativa aplicable, profundizó el sufrimiento asociado a la pérdida y sometió nuevamente a sus familiares a circunstancias susceptibles de generar angustia, impotencia y afectaciones emocionales adicionales. De esta manera, la falta de una restitución digna constituyó una afectación adicional al derecho a la integridad personal de **Aidee Hernández Ávila (mujer víctima directa 2)** y **Aurelio Carmona Cruz (víctima directa 3)**, madre y padre de **Natali Carmona Hernández (mujer víctima directa 1)**, al materializar sobre la propia familia las consecuencias de una actuación deficiente institucional precisamente en el momento destinado a la inhumación de **Natali Carmona Hernández (mujer víctima directa 1)**.

IX. Posicionamiento de la Comisión sobre la violación de derechos humanos

360. Para esta Comisión de Derechos Humanos de la Ciudad de México, la desaparición de personas constituye una de las problemáticas más graves en materia de derechos humanos que enfrenta el país y que también se encuentra presente en la capital. Las desapariciones ocurridas en la Ciudad De México revelan la persistencia de entornos que mantienen vigente este delito, y aun cuando, muchas de ellas son cometidas por particulares, muestran las dificultades persistentes para llevar a cabo búsquedas inmediatas y diligentes que atiendan las circunstancias

[522] Véase Anexo, evidencia 110.

particulares de cada caso, que analicen el contexto en el que ocurren los hechos y que orienten las acciones hacia la localización prioritaria de las personas desaparecidas y, de manera articulada, hacía la investigación de los hechos y la determinación de las responsabilidades correspondientes.

361. De manera particular, preocupa a esta Comisión la desaparición de mujeres, por su impacto agravado en una población que enfrenta condiciones estructurales de desigualdad de género, y por su asociación con patrones delictivos diferenciados respecto de los que enfrentan los hombres en la Ciudad de México. Ello exige medidas reforzadas orientadas a su localización inmediata, a la atención de los delitos que suelen relacionarse con la desaparición de mujeres y a investigaciones que consideren, desde el primer momento, los elementos vinculados al género, las violencias contextuales y aquellas propias del caso concreto, incluidos los posibles sesgos institucionales. En este sentido el desarrollo oportuno, documentado y exhaustivo de estas líneas de investigación, integradas en planes que permitan la participación y el acompañamiento de las familias desarrollándose de manera coordinada, permite valorar fundadamente las hipótesis vinculadas con la violencia de género. No se trata, por tanto, de actuaciones meramente formales, sino de una exigencia derivada del contexto de violencia y desigualdad que enfrentan las mujeres en la Ciudad de México y en el país.

362. Esta Comisión reconoce que los hechos materia de la presente Recomendación ocurrieron en un periodo en el que el marco jurídico especializado en materia de desaparición comenzaba a desarrollarse en la Ciudad, y los organismos y mecanismos impulsados por el esfuerzo de las familias, las organizaciones de la sociedad civil y otras instancias aún se encontraban en una etapa incipiente. Su consolidación ha sido progresiva y, si bien actualmente se cuenta con mayores herramientas jurídicas y capacidades de actuación, resulta indispensable seguir fortaleciendo el cumplimiento de los deberes reforzados que corresponden a las autoridades, entre ellos la coordinación intrainstitucional e interinstitucional de las distintas autoridades de los tres órdenes de gobierno, la actuación inmediata con perspectiva de género y la elaboración de planes de investigación que orienten de manera efectiva las líneas de trabajo.

363. En este contexto, esta Comisión reitera que las autoridades conservan un papel central e insustituible en la búsqueda de personas desaparecidas y la investigación de los hechos. Las omisiones de las autoridades frente a las desapariciones no solo pueden vulnerar los derechos de las personas desaparecidas y sus familias a la búsqueda, la verdad y la justicia, sino que, en determinados supuestos, pueden

generar responsabilidad estatal por el incumplimiento de sus obligaciones, conforme a las circunstancias de cada caso.

364. En el caso documentado en esta Recomendación, si bien se advierte en determinados momentos la realización de las diligencias encaminadas a la búsqueda e investigación, entre ellas las actuaciones en el expediente ante la Comisión de Búsqueda de la Ciudad de México y la realización de un análisis de contexto, estas resultaron insuficientes por no haberse realizado de manera inmediata, coordinada y exhaustiva, conforme lo exige la normatividad aplicable a los hechos acreditados. Incluso, la amonestación impuesta a los servidores públicos de la FGJ CDMX que incurrieron en diversas omisiones no sustituye la responsabilidad objetiva de la institución por las violaciones a derechos humanos acreditadas. La efectiva impelementación del marco normativo existente, por lo tanto, exige acciones institucionales sostenidas, articuladas mediante una política pública que priorice la coordinación y la exhaustividad de las investigaciones y que, tratándose de desapariciones de mujeres, garantice medidas concretas para investigar las posibles formas de violencia de género vinculadas con los hechos.

365. Uno de los puntos que esta Recomendación pone de relieve con especial urgencia, y que sigue reflejándose en quejas recibidas por esta Comisión, es la falta de coordinación entre entidades federativas frente a hechos que, como la desaparición de personas, no se limitan a una sola demarcación territorial. Es indispensable reconocer que las conductas asociadas a la desaparición pueden originarse en una entidad y continuar en otra, además de vincularse con redes que operan en distintos territorios, al tiempo que las familias de las víctimas pueden residir en un estado diverso al de los hechos. La coordinación entre autoridades debe garantizar a las familias una respuesta institucional articulada, con responsabilidades claramente definidas y mecanismos que aseguren la continuidad y la efectividad de las investigaciones, evitando trasladarles las cargas derivadas de la distribución de competencias. Por ello, esta Comisión insiste en la necesidad de fortalecer esquemas de coordinación eficaces, que se consoliden como parte de una política pública prioritaria, a través de instancias como el Gabinete Metropolitano,[523] entre otras. Así como de lineamientos específicos que permitan traducir en acciones concretas la colaboración entre la Ciudad de México y las entidades federativas. En este sentido, la distribución de competencias y la autonomía de las entidades federativas deben acompañarse de mecanismos de colaboración que aseguren la continuidad de la búsqueda y la investigación, definan con claridad las

[523] Secretaría de Gobierno de la Ciudad de México, Boletín de prensa SECGOB/054-2025, Instalan en Ciudad de México el Gabinete Metropolitano para la Búsqueda de Personas Desaparecidas, 25 de agosto de 2025.

responsabilidades de cada autoridad y eviten que los criterios propios del federalismo se conviertan en un obstáculo para atender esta realidad.

366. En particular, resulta necesario contar con lineamientos claros para los casos en que una autoridad ministerial considere que carece de competencia para continuar con una investigación por desaparición, que establezcan las actuaciones que deben realizarse antes de determinar la incompetencia, los mecanismos de coordinación con la autoridad que se estime competente y las medidas necesarias para garantizar la continuidad de la investigación y la búsqueda durante la remisión y recepción de las actuaciones. La determinación de competencia debe garantizar la continuidad de la investigación y de las diligencias en curso, así como la realización oportuna de aquellas actuaciones que correspondan a la autoridad que conoció inicialmente del caso y que resulten necesarias para preservar información y asegurar las oportunidades de búsqueda e investigación.

367. En el caso concreto, esta Comisión advierte que la coordinación entre la Fiscalía General de Justicia de la Ciudad de México y la Fiscalía General del Estado de Puebla debió activarse desde el primer momento en que se tuvo conocimiento de que el destino del viaje de **Natali Carmona Hernández (mujer víctima directa 1)** se ubicaba en aquella entidad, sin que dicha colaboración quedara supeditada a nuevos hallazgos o a los avances y resultados posteriores de la investigación. La debida diligencia reforzada que exige la investigación de la desaparición de una mujer requiere que la coordinación interestatal y que el intercambio oportuno de información entre fiscalías se desarrolle mediante la aplicación efectiva de los protocolos homologados de búsqueda y los mecanismos institucionales correspondiente, como obligaciones exigibles a las autoridades competentes.

368. Esta Comisión destaca, además, que la entrega digna forma parte de un continuo de obligaciones que inicia desde el momento en que se tiene conocimiento de la desaparición y que se mantiene vigente hasta la localización de la persona, su identificación, el esclarecimiento de los hechos y la restitución de sus restos en condiciones que respeten la dignidad de las familias. Contar con certeza sobre los mecanismos de identificación empleados y comunicar a las familias, con claridad, la forma y las razones de la entrega, abona al derecho a la verdad, a la dignidad y a la memoria, tanto de las familias como de la propia persona desaparecida. Si bien ninguna actuación institucional puede revertir los hechos ni borrar el sufrimiento ocasionado por la desaparición de una persona, la actuación diligente, clara, transparente y humana de las autoridades durante los procesos de localización, identificación y restitución de sus restos puede contribuir a la construcción de la verdad, la memoria y la dignidad. En el presente caso, esta obligación no se

satisfizo en los términos exigibles, lo que profundizó el sufrimiento de la familia de **Natali Carmona Hernández (mujer víctima directa 1)** en un momento de por sí doloroso, y refuerza la necesidad de que las autoridades cuenten con protocolos claros, sensibles y respetuosos para la restitución digna de personas fallecidas a sus familias.

369. Finalmente, esta Comisión reconoce el actuar de la familia de **Natali Carmona Hernández (mujer víctima directa 1)**, cuya búsqueda permitió documentar los hechos que dan lugar a la presente Recomendación. Son, una vez más, muestra de cómo las familias de personas desaparecidas, agrupadas en colectivos o de manera individual, transforman el dolor en exigencia e impulso frente a las instituciones para encontrar a sus seres queridos y exigir respuestas que contribuyan al esclarecimiento de los hechos, el acceso a la justicia y las garantías de no repetición. A ellas y ellos les reiteramos el profundo reconocimiento de esta Comisión. Esta Recomendación busca constituirse también como un instrumento de satisfacción, que acerque el reconocimiento a las familias y visibilice las omisiones y responsabilidad de la autoridad, colocando en el centro el reconocimiento de las violaciones acreditadas, la responsabilidad institucional y la adopción de medidas de reparación integral que contribuyan a garantizar los derechos de las víctimas y prevenir su repetición. Además, ante la persistencia de esta problemática, es fundamental que las medidas derivadas del presente instrumento trasciendan el caso concreto y contribuyan a impulsar acciones estructurales orientadas a fortalecer las capacidades de búsqueda e investigación, mejorar la coordinación entre autoridades y transformar las prácticas institucionales que favorecen la repetición de violaciones a derechos humanos, frente a las desapariciones ocurridas en la Ciudad de México.

370. Para esta Comisión, la aceptación de la presente Recomendación y la disposición a su cumplimiento constituyen también un mensaje de apertura institucional, de reconocimiento de responsabilidad y disposición a sujetar su actuar a la mirada externa y a los cauces que imponen los derechos humanos. Ello representa, asimismo, una oportunidad para que las autoridades responsables fortalezcan sus capacidades de coordinación, búsqueda e investigación con enfoque de género, y contribuyan con ello a la construcción de condiciones reales de acceso a la justicia para las familias de personas desaparecidas en la Ciudad de México.

X. Estándares sobre la reparación integral del daño

X.1 Fundamento jurídico sobre la obligación de reparar a las víctimas de violaciones a derechos humanos

371. La reparación integral del daño es un derecho de las víctimas que se encuentra reconocido en el derecho internacional de los derechos humanos,[524] en la Ley General de Víctimas (LGV),[525] y en la Ley de Víctimas para la Ciudad de México (LVCDMX).[526] Debe garantizarse de manera oportuna, plena, diferenciada, transformadora, integral y efectiva por los daños sufridos como consecuencia de delitos o violaciones a los derechos humanos, y comprende medidas de restitución, rehabilitación, compensación, satisfacción y garantías de no repetición.

372. La Declaración sobre los principios fundamentales de justicia para las víctimas de delitos y del abuso de poder refiere que las víctimas *"tendrán derecho al acceso a los mecanismos de la justicia y a una pronta reparación del daño que hayan sufrido, según lo dispuesto en la legislación nacional";* asimismo, debe tenerse como referente los criterios emitidos por la Corte IDH en diversos precedentes.[527]

373. La reparación del daño debe plantearse en una doble dimensión por tratarse de un recurso de protección efectivo reconocido en el derecho internacional de los derechos humanos y un derecho fundamental contemplado en el derecho positivo, cuyo ejercicio permite acceder a los otros derechos que fueron conculcados, ya sea en las esferas individual y/o colectiva, material, moral y simbólica.

374. En el derecho positivo mexicano, la reparación es reconocida como un derecho fundamental,[528] del cual se desprende la obligación de todas las autoridades, conforme a su ámbito de competencia, de garantizar los derechos de las víctimas, entre ellos, este derecho a ser reparadas de manera integral, plena, diferenciada, trasformadora y efectiva. Este derecho también contempla que las víctimas sean

---

[524] Concretamente en los artículos 2.º del Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos (PIDCP), 63.1 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos (CADH) y en el párrafo 20 de los Principios y Directrices Básicos sobre el Derecho de las Víctimas de Violaciones Manifiestas de las Normas Internacionales de Derechos Humanos y de Violaciones Graves del Derecho Internacional Humanitario a Interponer Recursos y Obtener Reparaciones, entre otros tratados e instrumentos internacionales. Asimismo, el párrafo 15 de este instrumento señala que una reparación adecuada, efectiva y rápida promueve la justicia y debe ser proporcional a la gravedad de las violaciones y al daño sufrido.

[525] Ley General de Víctimas, publicada en el *Diario Oficial de la Federación* el 9 de enero de 2013; última reforma publicada el 1º de abril de 2024, artículo 26.

[526] Ley de Víctimas para la Ciudad de México publicada en la Gaceta Oficial de la Ciudad de México el 19 de febrero de 2018; última reforma publicada el 13 de julio de 2026, artículo 8º.

[527] Entre los precedentes de la Corte IDH que han desarrollado estándares relevantes en la materia destacan, entre otros, los casos Godínez Cruz vs. Honduras, Bámaca Velásquez vs. Guatemala, Loayza Tamayo vs. Perú y González y otras ("Campo Algodonero") vs. México.

[528] Reconocido en los artículos 1.º, párrafo tercero de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 1.º, 7.º, 26 y 27 de la Ley General de Víctimas (LGV); 4.º, inciso a), numeral 5; y 5.º, inciso c, numeral 1, de la Constitución Política de la Ciudad de México; 3.º, fracción XXVI, 56 y 57 de la Ley de Víctimas para la Ciudad de México (LVCDMX) y 86 de la Ley Constitucional de Derechos Humanos y sus Garantías en la Ciudad de México.

reparadas también en sus dimensiones colectiva y simbólica por el daño o menoscabo que han sufrido como consecuencia de violaciones a derechos humanos y por los daños que esas vulneraciones les causaron conforme a las circunstancias y características del hecho victimizante.

375. Para que un plan de reparación integral cumpla con los estándares mínimos que señala el marco normativo, en su elaboración deben considerarse los aspectos contenidos en la normativa vigente,[529] teniendo siempre como referencia los principios y criterios que la Corte IDH ha otorgado a través de su jurisprudencia en materia de reparaciones. Dichas medidas deberán determinarse atendiendo a los principios rectores como integralidad, máxima protección, progresividad y no regresividad, debida diligencia, dignidad, así como la aplicación del enfoque diferencial y especializado, todos ellos contenidos en los artículos 5.º de la Ley General de Víctimas y 5.º de la Ley de Víctimas para la Ciudad de México.

376. En términos de lo dispuesto en el artículo 1.º constitucional, la LGV en sus artículos 1.º y 7.º, fracción II, las personas víctimas tienen, entre otros derechos, el de ser reparadas de manera integral, adecuada, diferenciada, transformadora y efectiva por el daño o menoscabo que han sufrido como consecuencia de violaciones a derechos humanos y por los daños que esas vulneraciones les causaron en sus dimensiones individual, colectiva, material, moral y simbólica; asimismo, que cada una de esas medidas sea implementada a favor de la víctima, teniendo en cuenta la gravedad y magnitud de la violación de sus derechos, así como las circunstancias y características del hecho victimizante.

377. La Constitución Política de la Ciudad de México (CPCM) mandata que las autoridades adopten las medidas necesarias para la atención integral de las víctimas en los términos de la legislación aplicable. Específicamente en sus artículos 5.º, apartado C, numeral 1, reconoce las dimensiones colectiva y simbólica de este derecho como grupo o comunidad a ser reparado; y en el apartado J se protege el derecho a la reparación integral por violaciones a derechos humanos, los derechos de las víctimas y los derechos a la memoria, a la verdad y a la justicia.

378. Adicionalmente, la Ley Constitucional de Derechos Humanos y sus Garantías en la Ciudad de México, en su artículo 86 establece que los derechos de las víctimas son: asistencia, protección, atención, verdad, justicia, reparación integral, debida diligencia y los señalados en las demás leyes aplicables; de igual manera, en ese mismo artículo y en el 103, establece que las autoridades locales deberán actuar conforme a los principios de asesoría jurídica adecuada, buena fe, complementariedad, confidencialidad, consentimiento informado, cultura jurídica,

[529] Artículos 1.º, 5.º, 7.º, 27, 61, 62,63 y 64 de la Ley General de Víctimas; 56, 57, 58, 59, 60, 61, 71, 72, 74 y 75 de la Ley de Víctimas para la Ciudad de México; y 86, 103, 105 y 106 de la Ley Constitucional de Derechos Humanos y sus Garantías en la Ciudad de México.

debida diligencia, debido proceso, desvictimización, dignidad, gratuidad, principio pro víctima, interés superior de la niñez, máxima protección, no criminalización, no victimización secundaria, participación conjunta y los demás señalados en las leyes aplicables.

379. En ese mismo tenor, los artículos 105 y 106 de esta norma retoman los conceptos esenciales de la LGV antes citados en cuanto a que la reparación integral contempla medidas de restitución, indemnización, rehabilitación, satisfacción y garantías de no repetición, en sus dimensiones individual, colectiva, material, moral y simbólica y que cada una de estas medidas será implementada a favor de la víctima teniendo en cuenta la gravedad y magnitud del hecho victimizante; además, las autoridades de la Ciudad de México que se encuentren obligadas a reparar el daño de manera integral deberán observar lo establecido en las leyes generales y locales en materia de derechos de las víctimas.

X.2 Competencia para la emisión del Plan de Reparación Integral

380. La Comisión Ejecutiva de Atención a Víctimas de la Ciudad de México (CEAVI)[530] es la autoridad competente para determinar y ordenar la implementación de las medidas de reparación a través de los planes de reparación integral dirigidos a las autoridades responsables de las violaciones a derechos humanos acreditadas, en este caso, por este Organismo; además, en su calidad de Secretaría Técnica, es el órgano a cargo de coordinar y gestionar los servicios de las autoridades que integran el Sistema de Atención Integral a Víctimas de la Ciudad de México que deban intervenir para el cumplimiento de la implementación de medidas de ayuda, atención, asistencia, protección, de acceso a la verdad y a la justicia, así como a la reparación integral, a través de las acciones establecidas en los Planes Individuales o Colectivos de Reparación Integral.[531]

381. En ese orden, el Comité Interdisciplinario Evaluador es la unidad administrativa facultada[532] para que emita los proyectos de plan de reparación individual que deberán ser propuestos a la persona titular de esa Comisión, a fin de que sea quien emita la resolución definitiva. En su elaboración deberán establecerse las medidas necesarias y suficientes para garantizar este derecho conforme a los parámetros dispuestos en los artículos 56 y 57 de la Ley de Víctimas local respecto de los aspectos materiales e inmateriales.

---

[530] De acuerdo a lo establecido en la LVCDMX en sus artículos 56 al 58 y 28 al 47 de su Reglamento.
[531] Tal como lo disponen los artículos 78 al 81 de esta LVCDMX y 1, 2, 5º y 10 de su Reglamento.
[532] De conformidad a lo establecido por los artículos 28, 29, 36 y 37 del Reglamento de la LVCDMX.

X.3 Determinación de los Planes de Reparación Integral

382. De acuerdo con los hechos narrados y las pruebas analizadas a lo largo del desarrollo del presente instrumento recomendatorio, este organismo protector de derechos humanos acreditó que la FGJ CDMX vulneró los derechos los derechos a la igualdad y no discriminación y derecho de las mujeres a una vida libre de violencia y al derecho de toda persona desaparecida a ser buscada de **Natali Carmona Hernández (mujer víctima directa 1).** Por otra parte, conforme a las afectaciones específicas desarrolladas *supra*, se reconoce el carácter de víctimas directas a los padres de **Natali Carmona Hernández (mujer víctima directa 1) (mujer víctima directa 2** y **víctima directa 3)**[533] por violaciones al derecho de acceso a la verdad y a la justicia y deber de investigación con debida diligencia y perspectiva de género, derecho de toda persona desaparecida a la búsqueda y derecho a la integridad psicológica de las y los familiares de las personas desaparecidas frente al trato institucional recibido, vinculado con el derecho a la memoria de las personas fallecidas.

383. También, atendiendo a las a afectaciones previamente desarrolladas *supra* que, por sí misma, genera la desaparición de un familiar directo, así como a las afectaciones específicas identificadas en cada caso, se reconoce el carácter de víctimas indirectas a la hermana y hermano de **Natali Carmona Hernández (mujer víctima directa 1)**, así como a su hija e hijo (**víctimas indirectas 1, 2, 3 y 4**).[534]

384. Para la elaboración del plan de reparación, deberán aplicarse los enfoques diferencial y especializado contenidos en los artículos 5.º de la LGV y 5.º de la citada LVCDMX, lo cual remite a tener presentes las características particulares de las víctimas directas e indirectas de manera diferenciada, con el fin de identificar las condiciones que generan vulnerabilidad desde la interseccionalidad, por ejemplo, ser mujer, tener alguna discapacidad física o psicosocial, ser niño, niña, adolescente, persona adulta mayor, población LGBTTTI+, padecer alguna enfermedad grave o encontrarse en situación de pobreza, entre otras, sin dejar de observar el tiempo que hubiese transcurrido desde que ocurrieron los hechos victimizantes hasta que se concrete la reparación. Asimismo, el artículo 58 de la LVCDMX prevé que, en los casos en que, a partir de una valoración psicosocial y/o psicoemocional se desprenda una afectación agravada, se realizará un ajuste porcentual en el cálculo de la compensación económica, la cual forma parte de las medidas que conforman la reparación integral.

385. Es importante resaltar que, de acuerdo con los hechos y violaciones que motivan el presente instrumento recomendatorio, se identifican impactos diferenciados

[533] Se refiere a Aidee Hernández Ávila (mujer víctima directa 2) y Aurelio Carmona Cruz (víctima directa 3).
[534] Se refiere a Nancy Carmona Hernández (mujer víctima indirecta 1); Miguel Ángel Carmona Hernández (víctima indirecta 2), Shared Sánchez Carmona (mujer víctima indirecta 3), y Joshua Sánchez Carmona (víctima indirecta 4).

también sobre las víctimas, en atención a que entre ellas se encuentran mujeres, y que, al momento de la desaparición de **Natali Carmona Hernández (mujer víctima directa 1)**, sus hijos aún no habían alcanzado la mayoría de edad.

386. Esta Comisión ha destacado que la desaparición de una persona genera en sus hijas e hijos, particularmente cuando son niñas, niños o adolescentes, sentimientos de pérdida, abandono, miedo, incertidumbre, angustia y dolor, cuyos efectos pueden agravarse en función de su edad,[535] las circunstancias particulares y la persistencia de la impunidad. Esta experiencia ha sido descrita como una *"pérdida ambigua"*, concepto que explica la crisis que enfrenta la familia al desaparecer uno de sus miembros: un alto estrés, depresión y ansiedad ya que se desconoce si es algo temporal o definitivo.[536] Algunos estudios han demostrado que niñas y niños presentan cambios en el comportamiento y estado de ánimo, disminución del rendimiento escolar, problemas de concentración y una preocupación constante por las personas adultas encargadas de la búsqueda,[537] al grado de anteponer las necesidades de éstas a las propias.[538]

387. El Grupo de Trabajo sobre las Desapariciones Forzadas o Involuntarias considera que el hecho de que se separe a niñas, niños y adolescentes de sus familias surte efectos específicos y especialmente graves sobre su integridad personal que tienen repercusiones duraderas y causan gran daño físico y mental.[539] Por ello, ha señalado la necesidad de adoptar medidas adicionales de protección y apoyo psicosocial medidas, las cuales dependen de la gravedad del trauma psicológico y físico sufrido y del estigma asociado a los múltiples tipos de abusos que hayan podido tener lugar, incluida la violencia de género. Es preciso incorporar una perspectiva de género y enfoque diferenciado en la protección de testigos y la valoración de riesgos para propiciar un entorno seguro que además evite una victimización secundaria.[540]

388. Por ello, el reconocimiento de las condiciones específicas de vulnerabilidad que enfrentaron las víctimas de los hechos que motivan el presente instrumento recomendatorio debe ser considerado en la determinación de los Planes de reparación del daño, asegurando un enfoque diferencial y especializado.

---

[535] Comisión de Derechos Humanos de la Ciudad de México, Recomendación 2/2020, *doc. cit.*, párrs. 712-718.
[536] María Teresa Cervantes Loredo, "La participación social en familias víctimas de desaparición involuntaria", RICSH *Revista Iberoamericana de las Ciencias Sociales y Humanísticas*, vol. 4, núm. 8, julio-diciembre de 2015, Centro de Estudios e Investigaciones para el Desarrollo Docente, A. C.
[537] Ximena Antillón Najlis (coord.), *Yo solo quería que amaneciera. Impactos psicosociales del caso Ayotzinapa*, México, Fundar, Centro de Análisis e Investigación, A. C., 2018, p. 247.
[538] Elena Gómez Castro, *Trauma relacional temprano. Hijos de personas afectadas por traumatización de origen político*, Santiago de Chile, Ediciones Universidad Alberto Hurtado, 2013.
[539] Grupo de Trabajo sobre las Desapariciones Forzadas o Involuntarias de las Naciones Unidas, *Observación general sobre los niños y las desapariciones forzadas*, Doc. ONU A/HRC/WGEID/98/1, párrs. 5–6 (14 de febrero de 2013).
[540] Grupo de Trabajo sobre las Desapariciones Forzadas o Involuntarias de las Naciones Unidas, *Observación general sobre las mujeres afectadas por las desapariciones forzadas*, Doc. ONU A/HRC/WGEID/98/2, párr. 32 (14 de febrero de 2013).

XI. Recomendación

De conformidad con los estándares internacionales y nacionales en materia de reparación colectiva emanados del derecho internacional de los derechos humanos, la LGV y la Ley de Víctimas para la Ciudad de México; y tomando como referencia sus principios y criterios para el desarrollo del apartado IX. "*Estándares sobre la reparación integral*", **LA FISCALÍA GENERAL DE JUSTICIA DE LA CIUDAD DE MÉXICO** adoptarán, a través del presente instrumento recomendatorio, los criterios, principios y medidas anteriormente descritas en los apartados mencionados para la atención de los puntos recomendatorios que a continuación se exponen y cuya lectura e interpretación deberá realizarse conforme a los principios pro persona, pro víctima, máxima protección, progresividad y no regresividad:

Incorporación al registro de víctimas de la ciudad de México

Primero. En un plazo no mayor a 180 días naturales, contados a partir de la aceptación de la presente Recomendación, dará seguimiento con la CEAVI a las gestiones necesarias para que las personas víctimas directas e indirectas reconocidas en el presente instrumento sean inscritas en el Registro de Víctimas de la Ciudad de México, de conformidad con los procedimientos y requisitos previstos en la Ley de Víctimas para la Ciudad de México y su Reglamento.

Reparación integral del daño

Segundo. Dará seguimiento con la CEAVI, a la integración de los expedientes de las personas víctimas directas e indirectas reconocidas en el presente instrumento, así como a la determinación y emisión del Plan de Reparación Integral que corresponda, a fin de que éste contemple las medidas de restitución, rehabilitación, compensación, satisfacción y garantías de no repetición que resulten procedentes, de conformidad con las violaciones a derechos humanos acreditadas en la presente Recomendación y con lo establecido en la Ley de Víctimas para la Ciudad de México y su Reglamento.

Medidas de satisfacción

Tercero. En un plazo no mayor a 120 días naturales, contados a partir de la aceptación de la presente Recomendación, llevará a cabo un acto público de reconocimiento de responsabilidad y ofrecerá una disculpa pública a la familia de la **Natali Carmona Hernández (mujer víctima directa 1)**, en el que se reconozcan las violaciones a derechos humanos acreditadas en el presente instrumento, particularmente aquellas derivadas de las omisiones y deficiencias en la búsqueda e investigación de su desaparición, así como en la identificación y restitución de sus restos.

Dicho acto deberá ser ofrecida por persona servidora pública con nivel no inferior a Coordinador o Coordinadora General. Para tal efecto, la propuesta deberá ser aprobada por **Aidee Hernández Ávila (mujer víctima directa 2) y Aurelio Carmona Cruz (víctima directa 3)** con acompañamiento de esta Comisión

CUARTO. En un plazo no mayor a 180 días naturales, contados a partir de la aceptación de la presente Recomendación, y previa consulta y participación de las víctimas directas 2 y 3 señaladas en este instrumento, instalará una placa conmemorativa en memoria de **Natali Carmona Hernández (mujer víctima directa 1),** en un espacio idóneo del domicilio de su familia y/u otro lugar que permita su instalación.

MEDIDAS DE NO REPETICIÓN

QUINTO. En un plazo no mayor a 30 días naturales, contados a partir de la aceptación de la presente Recomendación, aportará el presente instrumento recomendatorio y su anexo a la carpeta de investigación en trámite en la Fiscalía General de la República, vinculada con el presente caso, a fin de que la autoridad ministerial valore las evidencias documentadas por este Organismo como elementos que contribuyan a su integración y perfeccionamiento.

SEXTO. En un plazo no mayor a 180 días naturales, se deberá emitir un Protocolo y/o Lineamientos que establezca un mecanismo de actuación que contenga los procedimientos, requisitos y autoridades responsables de la notificación, restitución y entrega digna de los cuerpos o restos mortales de personas fallecidas a sus familiares, y que establezca, de manera enunciativa y no limitativa, como ejes rectores perspectiva de género, enfoque diferenciado, y el derecho a la memoria de las personas fallecidas.

SÉPTIMO. En un plazo no mayor a 120 días naturales, contados a partir de la aceptación de esta Recomendación, deberá emitir y difundir una circular dirigida al personal ministerial y de investigación que intervenga en la búsqueda e investigación de niñas, adolescentes y mujeres desaparecidas o no localizadas, mediante la cual se instruya que, desde el conocimiento de un reporte de desaparición, se actúe de manera inmediata, exhaustiva y coordinada, de conformidad con las disposiciones aplicables, y que las diligencias y líneas de investigación que resulten pertinentes sean documentadas y objeto de seguimiento. Realizando oportunamente las gestiones de colaboración necesarias cuando intervengan autoridades de otra entidad federativa.

OCTAVO. En un plazo no mayor a 180 días naturales, contados a partir de la aceptación de la presente Recomendación, presentará un documento de propuesta, ya sea de manera directa, o en vías de colaboración con la Jefatura de Gobierno en la Ciudad de

México en el ámbito de su competencia y facultades, en el marco del Gabinete Metropolitano para la Búsqueda de Personas Desaparecidas o a través de otro espacio de coordinación interinstitucional como la Conferencia Nacional de Procuración de Justicia u otro mecanismo de coordinación idóneo, que de manera enunciativa más no limitativa deberá referirse a: (1) mecanismos de intercambio de información con las fiscalías de las otras entidades federativas, que garanticen el cruce adecuado y oportuno de información relacionada con personas desaparecidas o no localizadas y con personas fallecidas, víctimas de delito, cuya identidad se desconozca; (2) estrategias que garanticen el intercambio inmediato de información y estrategias con las autoridades competentes en materia de búsqueda, investigación e identificación de personas; así como que garanticen la trazabilidad de las actuaciones de las Fiscalías intervinientes; (3) propuestas de criterios y buenas prácticas en el establecimiento de lineamientos sobre el ámbito de competencia de las Fiscalías Especializadas en la investigación de los delitos previstos en la LGMDFPyDP y, (4) mecanismos de supervisión de las determinaciones mediante las cuales las personas agentes del Ministerio Público declinen competencia en casos de desaparición, a fin de evitar que dichas determinaciones interrumpan o retrasen las acciones de búsqueda e investigación.

Para la adecuada verificación del cumplimiento de este punto recomendatorio deberá remitirse, a este Organismo, las constancias de presentación de esta propuesta, mediante las minutas correspondientes u otros documentos idóneos para ello, pudiendo incluso solicitar la asistencia técnica y/o el acompañamiento de este Organismo para la implementación de la propuesta de coordinación interinstitucional.

Así lo determina y firma,

María Dolores González Saravia Calderón



Presidenta de la Comisión de Derechos Humanos de la Ciudad de México

C.c.p. Lic. Clara Marina Brugada Molina, Jefa de Gobierno de la Ciudad de México. Para su conocimiento.
Dip. Olivia Garza de los Santos, presidenta de la Mesa Directiva del Congreso de la Ciudad de México. Para su conocimiento.
Dip. Xóchitl Bravo Espinosa, presidenta de la Junta de Coordinación Política del Congreso de la Ciudad de México. Para su conocimiento.
Dip. Jannete Elizabeth Guerrero Maya, presidenta de la Comisión de Derechos Humanos del Congreso de la Ciudad de México. Para su conocimiento.
Lic. Ernesto Alvarado Ruiz, comisionado ejecutivo de Atención a Víctimas de la Ciudad de México. Para su conocimiento.